



RED POLÍTICAS PÚBLICAS  
Y DESARROLLO RURAL EN  
AMÉRICA LATINA

## Políticas Públicas a favor de la Agroecología en América Latina y el Caribe



Red Políticas Públicas en América  
Latina y el Caribe (PP-AL)  
Brasilia Mayo 2017

## Índice

<b>CAPÍTULO 1. CONCEPTOS DE AGROECOLOGÍA Y MARCO ANALÍTICO.....</b>	<b>7</b>
<b>CAPÍTULO 2. POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO DE LA AGROECOLOGÍA EN ARGENTINA</b>	<b>20</b>
<b>CAPÍTULO 3. A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM FAVOR DA AGROECOLOGIA.....</b>	<b>44</b>
<b>CAPÍTULO 4. LAS POLÍTICAS DE FOMENTO A LA AGROECOLOGÍA EN CHILE .....</b>	<b>70</b>
<b>CAPÍTULO 5. POLÍTICAS DE APOYO A LA AGROECOLOGÍA EN COSTA RICA .....</b>	<b>91</b>
<b>CAPÍTULO 6. POLÍTICAS PÚBLICAS Y TRANSICIÓN HACIA LA AGRICULTURA SOSTENIBLE SOBRE BASES AGROECOLÓGICAS EN CUBA .....</b>	<b>108</b>
<b>CAPÍTULO 7. POLÍTICAS A FAVOR DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA Y AGROECOLOGÍA EN EL SALVADOR.....</b>	<b>132</b>
<b>CAPÍTULO 8. AGROECOLOGÍA EN MÉXICO. MARCO DE POLÍTICAS PÚBLICAS .....</b>	<b>147</b>
<b>CAPÍTULO 9. AGROECOLOGÍA Y AGRICULTURA ORGÁNICA EN NICARAGUA. GÉNESIS, INSTITUCIONALIZACIÓN Y DESAFÍOS .....</b>	<b>174</b>
<b>CAPÍTULO 10. ANÁLISIS COMPARATIVO EN ESCALA REGIONAL .....</b>	<b>196</b>



## Red Políticas Públicas y Desarrollo Territorial en América Latina- PP-AL

La Red PP-AL es un dispositivo de investigación colaborativa creado en el año 2012, por iniciativa y apoyo del CIRAD. Esta red analiza y acompaña las dinámicas de las políticas públicas para el desarrollo rural en América Latina y el Caribe. Reúne 110 investigadores, docentes y doctorandos de más de treinta equipos y laboratorios de 10 países de América Latina. La red PP-AL tiene un triple mandato de investigación, formación-enseñanza superior de apoyo a formulación y evaluación de políticas públicas de desarrollo rural.

Los socios de la red PP-AL se reúnen regularmente para estudiar la elaboración e implementación de políticas agrícolas, ambientales y de desarrollo rural con el fin de entender sus mecanismos y sus efectos, en particular en términos de transformaciones del mundo rural y de lucha contra las desigualdades.

Los temas de trabajo de la Red PP-AL son motivados por una pregunta central de investigación: ¿Cuáles son las transformaciones de la acción pública y de las políticas agrícolas, ambientales y de desarrollo rural en América Latina y cuáles son sus consecuencias?

Esta pregunta de investigación se desarrolla bajo tres objetos de investigación: 1. Recomposición del papel del Estado y actores privados; 2. Territorios de acción pública y emergencia del desarrollo territorial; 3. Internacionalización de políticas: rol de los mediadores y empíricamente aplicada a diversas políticas.

### **Comité de coordinación de la Red PP-AL:**

Doris Sayago (Universidade de Brasília)

Mina Namdar Irani (INDAP, Chile)

Hermes Morales (IPA, Uruguay)

Catia Grisa (UFRGS, Brasil)

Fernando Sáenz-Segura (CINPE-UNA, Costa Rica)

Héctor Ávila (CRIM-UNAM, México)

Byron Miranda (IICA, Costa Rica)

Jean François Le Coq (Cirad, Colombia)

**Secretario:** Eric Sabourin, (Cirad, Brasil)

**Correspondiente:** Marie Gabrielle Piketty (Cirad, Francia)

<http://www.pp-al.org/es>

## Lista des los y las autores

**Claudia Job Schmitt**, socióloga, profesora del Programa de Postgrado de Ciencias Sociales en Desarrollo, Agricultura y Sociedad de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro (CPDA/UFRRJ), integrante del Observatorio de Políticas Públicas para la Agricultura (OPPA), [claudia.js21@gmail.com](mailto:claudia.js21@gmail.com)

**Constanza Saa**, Médico Veterinaria, Jefa del Departamento de Estudios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) de Chile, integrante de Qualitas AgroConsultores.

**Eduardo Cittadini**. Ingeniero Agrónomo, Lic. en Ciencia Política y Ph.D. en Ecología de la Producción y Conservación de Recursos. Coordinador del Programa Nacional para el Desarrollo y la Sustentabilidad de los Territorios (INTA), Estación Experimental Agropecuaria Chubut. Docente en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. E-mail: [cittadini.eduardo@inta.gob.ar](mailto:cittadini.eduardo@inta.gob.ar)

**Eric Sabourin**, sociólogo y antropólogo, Investigador del CIRAD (Umr ART-Dev) y profesor visitante en la Universidad de Brasilia, Centro de Desarrollo Sostenible y Programa MADER. Coordinador de la Red PP-AL, [eric.sabourin@cirad.fr](mailto:eric.sabourin@cirad.fr)

**Erwan Sachet**, estudiante de doctorado en geografía humana, Universidad de Copenhague, asistente de investigación en el Centro de International de Agricultura Tropical (CIAT), Departamento Decisión and Policy Analysis (DAPA), Grupo Ecosystem Services, Cali, Colombia. [e.sachet@cgiar.org](mailto:e.sachet@cgiar.org)

**Fernando Sáenz-Segura** (PhD), Investigador y docente en el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE), de la Universidad Nacional (UNA), Costa Rica. Sus temas de investigación son el neo institucionalismo económico, la economía agrícola, las cadenas de valor, las políticas públicas y el desarrollo de territorios rurales. [fernando.saenz.segura@una.cr](mailto:fernando.saenz.segura@una.cr)

**Gabriel Bianconi Fernandes**, Ingeniero agrónomo, asesor técnico de AS-PTA y miembro de la Comisión Nacional de Agroecología y Producción Orgánica de Brasil (CNAPO). Doctorando en Historia de las Ciencias Técnicas e Epistemología en la UFRJ. [gabriel@aspta.org.br](mailto:gabriel@aspta.org.br)

**Gonzalo Chapela y Mendoza**. agrónomo, maestro en Desarrollo Rural, Doctor en Antropología y Asociado del Programa de Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Profesor en la maestría en Ciencias en desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Chapingo, coordinador de Políticas Públicas en la Red Mexicana contra la Desertificación y de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales. [gchapela@gmail.com](mailto:gchapela@gmail.com)

**Hugo Martínez**, Ingeniero Agrónomo, Asesor del Ministerio de Agricultura de Chile, integrante de Qualitas AgroConsultores. [hmartinez@minagri.cl](mailto:hmartinez@minagri.cl)

**Jacques Marzin**. Ing. Agronomo, doctor en economía, Investigador titular del CIRAR Umr ART-dev, Montpellier, Francia. [jacques.marzin@cirad.fr](mailto:jacques.marzin@cirad.fr)

**Jean-Francois Le Coq**, agro-economista. Investigador en CIRAD (Umr ART-Dev) e investigador asociado al Centre International de Agronomía Tropical (CIAT), departamento Análisis de Decisiones y políticas (DAPA). [jflecoq@cirad.fr](mailto:jflecoq@cirad.fr) ; [jf.lecoq@cgiar.org](mailto:jf.lecoq@cgiar.org)

**Juan Pulido Secundino** Ingeniero agrónomo, Centro Regional Universitario de Centro Occidente (CRUCO), Universidad Autónoma Chapingo, Morelia, Michoacán. [juanpulidos@yahoo.com.mx](mailto:juanpulidos@yahoo.com.mx)

**Lisandro E. Martínez**, antropólogo. Investigador del Instituto de Prospectiva y Políticas Públicas (CICPES-INTA). [martinez.lisandroe@inta.gob.ar](mailto:martinez.lisandroe@inta.gob.ar)

Juliano Luis Palm, doctorando del Programa de Postgrado de Ciencias Sociales en Desarrollo, Agricultura y Sociedad de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro, Brasil (CPDA/UFRRJ) [julianoluispalm@gmail.com](mailto:julianoluispalm@gmail.com)

**Luciano Marçal da Silveira** es Ingeniero Agronomo, asesor de AS-PTA - Agricultura Familiar e Agroecología, Coordinador del proyecto Paraiba, Miembro de la directoria de la Articulacion del Semi-Arido Brasil (ASA) [luciano@aspta.org.br](mailto:luciano@aspta.org.br)

**Luis L. Vazquez Moreno**. Ingeniero agrónomo, PhD. Agroecologo. Investigador Titular retirado del Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal. La Habana. Cuba. EMail:[lvazquezmoreno@yahoo.es](mailto:lvazquezmoreno@yahoo.es)

**María Mercedes Patrouilleau**, socióloga y Magíster en Investigación en Ciencias Sociales. Investigadora del Instituto de Prospectiva y Políticas Públicas (CICPES-INTA). Coordinadora del proyecto de investigación Políticas Públicas, Modelos de desarrollo y Gobernabilidad en los Territorios, Programan Nacional para el Desarrollo y la Sustentabilidad de los Territorios, INTA. [patrouilleau.mm@inta.gob.ar](mailto:patrouilleau.mm@inta.gob.ar)

**Mário Avila**, Doctor en el desarrollo sostenible y profesor de la Universidad de Brasilia, Programa de posgrado en Medio Ambiente y Desarrollo Rural (MADR) y programa de Gestión Pública [unbavila@gmail.com](mailto:unbavila@gmail.com)

**Mina Namdar-Irani**, Ingeniera Agrónoma, Asesora del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) de Chile, Socia de Qualitas AgroConsultores.

**Muriel Bonin**, geógrafa, Investigadora en CIRAD (Umr TETIS), [muriel.bonin@cirad.fr](mailto:muriel.bonin@cirad.fr)

**Niurlys Rodríguez González** Ingeniera Agrónoma, Måster en Gestìon Ambiental. Universidad de Holguín. Cuba. Docente en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. E-mail: [niurlys@fca.uho.edu.cu](mailto:niurlys@fca.uho.edu.cu)

**Paulo F. Petersen** Ing. agrónomo, coordinador-ejecutivo de AS-PTA - Agricultura Familiar e Agroecología, vice-presidente de la Associação Brasileira de Agroecologia y miembro del Núcleo Executivo da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) y de la Comision Nacional de Agroecología e Producción Orgánica. [paulo@aspta.org.br](mailto:paulo@aspta.org.br)

**Paulo Niederle**, Ingeniero agrónomo y cientista social, profesor de los Programas de Posgrado en Sociología y en Desarrollo Rural de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil. [pauloniederle@gmail.com](mailto:pauloniederle@gmail.com)

**Roberto Cittadini**. Lic. en Sociología y Doctor en Desarrollo Rural. Investigador senior en el LABINTEX (INTA), UMR Innovation, Agropolis International, Montpellier (Francia). Docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata. E-mail: [cittadini.roberto@inta.gob.ar](mailto:cittadini.roberto@inta.gob.ar)

**Sandrine Fréguin-Gresh**, Ingeniera agronoma, Doctora en Economia agraria, Investigadora titular del CIRAD, Umr ART-Dev, Montpellier, Francia. [sandrine.freguin@cirad.fr](mailto:sandrine.freguin@cirad.fr)

**Wilfredo Morán**, agrónomo y educador, investigador y facilitador de procesos territoriales en el Programa Regional de Investigación en Medio Ambiente y Desarrollo, colaborador de la Red PP-AL, [w.moran@prisma.org.sv](mailto:w.moran@prisma.org.sv)

**William Santos de Assis** Doctor en Desarrollo, Agricultura y Sociedad. Profesor e investigador del Curso de Posgrado en Agriculturas Amazónicas (PPGAA), Núcleo de Ciencias Agrarias e Desarrollo Rural de la Universidad Federal del Pará (UFPA). [williamassis@ufpa.br](mailto:williamassis@ufpa.br)

## Presentación

Este documento presenta los resultados de un estudio de la Red PP-AL sobre las políticas públicas a favor de la agroecología en América Latina y El Caribe. El objetivo era realizar un estudio regional latinoamericano, transversal y comparativo sobre la contribución de diversos instrumentos de políticas públicas, para apoyar la transición a estilos de producción agroecológica en una selección de países de la región. La pregunta al origen del estudio fue verificar en qué medida, las políticas e iniciativas gubernamentales referenciadas o no en la noción de agroecología, apoyan las dinámicas de desarrollo rural fundamentadas en la revalorización del capital socio-ecológico de los territorios rurales, y la transición agroecológica de las unidades productivas.

El estudio sobre políticas públicas y agricultura familiar en América Latina, realizado por le Red PP-AL en 2014 (Sabourin et al, 2014 y 2015), identificó algunas de estas tendencias mencionadas anteriormente. En particular se llegó a la conclusión que para promover la sustentabilidad de la agricultura (preservación de la biodiversidad, del medio ambiente, de las bases sociales agropecuarias, de la calidad de los productos y para resistir a la globalización de los mercados, así como el desafío del cambio climático), los gobiernos negociaban con la sociedad civil un conjunto de instrumentos de aplicación territorial y de dimensión transversal, bajo la forma de “policy-mix”. El estudio mostró los límites de las políticas “*top down*” limitadas a la búsqueda del incremento de la producción, como de las políticas focalizadas en un determinado segmento de la agricultura familiar.

Sin duda existen así instrumentos de política pública que aunque no hacen referencia explícita a la agroecología, si están contribuyendo para una agricultura más sostenible, alimentos más sanos, agroecosistemas más preservados, mayor producción y mejor distribución de valor agregado, mercados más justos, más y mejores oportunidades de trabajo, mayor capital institucional a nivel de territorios, conocimientos más socializados, dinámicas de innovación técnica y socio-organizativa basadas en recursos locales, y territorios más multifuncionales.

El presente estudio fue realizado en ocho países por equipos miembros de la Red PP-AL, a quienes agradecemos su esfuerzo y contribución colectiva.

Por el comité de coordinación de la Red PP-AL

Eric Sabourin





## Capítulo 1. Conceptos de agroecología y marco analítico

Jean-François Le Coq, Eric Sabourin, Erwan Sachet, Luis Vazquez, Claudia Schmitt

Para analizar las políticas de agroecología y de producción orgánica en América Latina y el Caribe (ALC) nos preocupamos primero de caracterizar los antecedentes de la agroecología en la literatura, en particular al nivel regional. Luego, presentamos el marco analítico que movilizamos y la metodología para analizar las políticas e instrumentos en cada país y producir un análisis transversal.

### Antecedentes

El concepto de agroecología suscita un gran interés y está siendo movilizado de manera creciente por académicos, representantes de movimientos sociales rurales, empresas y actores de la cooperación internacional. Así, muchas definiciones han sido propuestas desde la perspectiva de cada tipo de actores. La noción de agroecología es polisémica y sus usos múltiples. Sin pretender hacer una revisión exhaustiva de las definiciones propuestas y de los debates que generan, ni una genealogía del concepto, como otros autores hicieron (por ejemplo ver Wezel et al., 2009; Wezel & Soldat, 2009), el objetivo de esta sección es de dar una visión tanto de la diversidad de entendimientos como de los principios comunes y de los antecedentes históricos entre los cuales se ha generado el concepto.

- El concepto de agroecología se menciona desde los años 1930 y su espectro ha evolucionado para abarcar niveles más integrales (Wezel & Soldat, 2009).
- El trabajo de (Wezel et al., 2009) y de (Wezel & Soldat, 2009) con base a revisión de literatura científica rescata diferentes dimensiones actuales de la agroecología.

Identificaron dos niveles de diferenciación. Primero, evidenciaron 3 tipos de sentido en el uso de la noción de agroecología, diferenciando la literatura que considera la agro-ecología como una *disciplina científica*, como *un movimiento social* o como un *conjunto de prácticas agrícolas* (en Wezel et al., 2009). Segundo, identificaron 3 grandes tipos de usos del concepto de agroecologías basado sobre una escala de enfoque: a nivel de la parcela, a nivel del agro ecosistema y a nivel del sistema alimentario (en Wezel & Soldat, 2009)

Estas variadas dimensiones y entendimientos de la agroecología están presentes en ALC y proponemos a continuación de rescatar los antecedentes socio-políticos o técnicos que influyeron en la ciencia, las prácticas agrícolas y el movimiento de agroecología en ALC.

### La agroecología, un movimiento social frente a la revolución verde

Para entender el desarrollo de la agroecología en ALC es necesario considerar el desarrollo de la revolución verde que inicia en los países de América Latina en los años 60 y las consecuencias y reacciones que ha provocado. En general una visión simplificada de la revolución verde nos dice el siguiente: es una transferencia de conocimiento y de tecnología agrícola de los países dichos desarrollados a los países dichos en desarrollo, para mejorar la producción de alimentos y reducir las hambrunas, vía altos rendimientos de mono-cultivos (Patel, 2013).

Esta visión se focaliza en un mejoramiento de las cosechas y de la productividad (en t/ha)<sup>1</sup> gracias a paquetes tecnológicos que consisten en variedades mejoradas, fertilizantes, productos fitosanitarios y

---

<sup>1</sup> Es importante de bien notar los tipos de indicadores los promotores (de cualquier cosa) usan. En nuestro caso, la t/ha es un indicador que indica la cantidad producida por una superficie, pero en ningún caso este indicador representa el número de variedad por hectárea, la porción de producción al autoconsumo, la energía producida/consumida [para producir] etc...

tecnologías de irrigación (Patel, 2013; Shiva, 2016). Sin embargo, más allá de estos indicadores técnicos, la revolución verde tenía múltiples consecuencias y repercusiones, dando así una respuesta alternativa de producción desde lo que comenzó a llamarse agroecología. Por ejemplo según Patel (2013) y Shiva (2016), la revolución verde es también la evolución desde un modelo de agricultura tradicional de pequeña escala hacia una agricultura de contratación de gran escala. Para esto, era necesaria una “transferencia” de semillas de variedades modificadas para monocultivo, una agricultura de irrigación intensiva (la variedades modificadas tienen alta demanda de agua) y un complejo ciencia-gobierno(s) promoviendo una ciencia agronómica uniformizada y centralizada (Coolsaet, 2016; Shiva, 2016). De hecho, esta forma de producir demanda inversiones importantes en material y espacio, lo que ha fomentado el control de grandes propietarios sobre la tierra, la dependencia a los productos agroquímicos y por consecuencia la dependencia de los productores a los servicios y mercados financieros (bancos, seguros, remates).

En paralelo con el ascenso del agro-negocio internacional (relacionado con la revolución verde) se formó el actual régimen alimentario global: un “libre” mercado del ciclo de vida de la producción alimentaria - desde los insumos hasta la mercantilización de la alimentación (McMichael, 2009; Millman et al., 1990; Shiva, 2016). Como lo sugiere Vanhaute (2011, p. 53): “*la liberalización del comercio agrícola y el dumping masivo de excedentes de alimentos aumentaron dramáticamente la dependencia alimentaria en el Sur*”. Esta liberalización ha provocado importantes cambios de políticas agrícolas en diferentes países, aumentando los programas de liberalización de los mercados en relación con las producciones agrícolas (entre otros mercados), y la desatención política de los pequeños productores provocando (o aumentando) su debilidad (Akram-Lodhi & Kay, 2010a, 2010b; citado por Vanhaute, 2011, p. 53).

A pesar de que muchos estudios demostraron los problemas (socio-políticos, económicos, ambientales tomando los ámbitos del desarrollo sostenible) en relación con el sistema de producción promovido por la revolución verde (para una “lista” de los diferentes estudios demostrando los impactos de la revolución verde, ver Patel, 2013), sus defensores quisieran promover una “nueva” revolución verde usando casi la misma dialéctica [luchar contra las hambrunas] (Holt-Giménez, Altieri, & Rosset, 2006; Patel, 2013). Es en este contexto que la agroecología se puso en oposición de la revolución verde y al modelo agro-industrial (véase Figura 1) (Toledo, 2012).

**Figura 1 : Contrastes entre modelo agro-ecológico y modelo agroindustrial**

<b>MODELO AGROECOLÓGICO</b>	<b>MODELO AGROINDUSTRIAL</b>
Ciencia de la complejidad, multi- y/o interdisciplinaria y holística	Ciencia especializada, analítica, reduccionista
Autosuficiencia tecnológica	Dependencia tecnológica
Diálogo de saberes	Dominio epistemológico
Pequeña escala	Grandes propiedades
Uso Diversificado	Uso especializado
Basada en energía solar directa o indirecta (hidráulica, eólica, animal y humana)	Basada en energía fósil (petróleo y gas)
Recíprocamente con los procesos naturales	Control o dominio de los procesos naturales

Fuente: (Toledo, 2012)

### Antecedentes técnico-culturales de la agroecología y diferencias con la agricultura orgánica

De hecho, la agroecología tiene obviamente una historia política que necesita ser analizada para comprender cómo y dónde se incluye este tema entre los sistemas socio-políticos así que las influencias de diferentes sectores y del contexto regional (Wezel et al., 2009; Wezel & Soldat, 2009). Sin embargo, para

tener una imagen más completa es crucial no olvidar los diferentes aportes técnico-culturales de la agroecología.

La oposición de la agroecología al agro-negocio se enfoca en particular en las formas de producción del conocimiento: sacar de la centralización y legitimización del conocimiento agronómico moderno (Coolsaet, 2016; Sousa Santos, 2016), con el fin de promover una coproducción de conocimientos locales (campesino-a-campesino, científico-a-campesino-a-científico) y contextuales (Altieri & Toledo, 2011; Coolsaet, 2016). Así, el aporte de los conocimientos tradicionales en la agroecología es un tema clave. Según FAO (2016, p. 46 citando Olinto, Beegle, Sobrado, and Uemats, 2013) existen aproximadamente 750 millones de pequeños agricultores, los cuales representan también una masa de conocimiento tradicional<sup>2</sup> con el cual la agroecología se propone de trabajar.

Según Altieri (2004), en América Latina, el conocimiento tradicional de los campesinos establece una relación compleja con el ambiente, la parcela agrícola, y, también, entre los propios campesinos: lo que proporciona una definición de un sistema socio-ecológico completo. Por lo tanto, los científicos deben estudiar y completar este gran conocimiento para elaborar una ciencia agroecológica, que no es universal, pero contextual. Por eso, van der Ploeg (2012) considera los campesinos como los actores lo más importantes para construir una transición agroecológica. Esta transición o revolución se construye sobre la base de una mezcla de diferentes fuentes de conocimiento, aportando beneficios tanto socio-culturales, políticos y económicos, que epistemológicos (Altieri & Toledo, 2011). La investigación acción participativa parece ser un proceso clave para fomentar una mezcla de conocimiento favorable a la transición agroecológica (Guzmán, López, Román, & Alonso, 2013; Putnam et al., 2013). Holt-Giménez (2002) muestra como en Nicaragua, el movimiento campesino-a-campesino está realmente interconectado con los procesos de educación popular e investigación acción. Esta posición epistemológica, pone una gran diferencia entre las alternativas a la agricultura convencional, en particular la agricultura orgánica.

La visión de la agroecología se puede leer en paralelo al surgimiento de la agricultura orgánica en los años 70 (Silva & Moore, 2017). Sin embargo, la agroecología propone otra visión basada en un sistema técnico de agricultura orgánica, que puede operar con la sustitución de insumos convencionales por insumos orgánicos. Según los defensores de la agroecología, la agricultura orgánica, en este sentido, usa el mismo paradigma que la agricultura convencional, es decir: principalmente una mono cultura dependiente de insumos certificados y mercantilizados (ver van der Ploeg, 2012). Según Altieri and Toledo (2011, p. 588) la agricultura orgánica “no cuestiona la naturaleza de las plantaciones de monocultivos y depende de insumos externos, así como de sellos de certificación extranjeros y caros, o de sistemas de comercio justo destinados sólo a la agro-exportación, ofrece poco a los pequeños agricultores que a su vez dependen de insumos externos y de mercados volátiles.” Sin embargo, como lo demostraran Silva and Moore (2017), hay un relación paralela entre la agroecología y la agricultura orgánica: la agricultura orgánica en sus raíces promovió también una visión compleja entre el sistema “natural”, en particular la preservación de los suelos, y la producción agrícola: una visión más próxima de la filosofía actual de la agroecología. Además, los dos sistemas responden también a las preguntas sobre la producción (industrial) alimentaria y su contaminación en toda la cadena.

Si bien la agricultura orgánica se beneficia, en general, de más estándares oficiales que la agroecología, la agricultura orgánica también puede encontrar diferentes definiciones en diferentes lugares y contextos. Aunque el concepto “original” de la agricultura orgánica se podía aproximar a la visión de la agroecología, la realidad de sus prácticas les aleja uno del otro. Los defensores de la agroecológica subrayan los riesgos

---

<sup>2</sup> El término tradicional es en general paralelo a los términos indígena y local en la literatura académica. Existe una diferencia (epistemológica y semiótica) entre estos términos, sin embargo, este documento se referirá a estos términos con solamente la palabra tradicional.

de la dependencia de los campesinos hacia los mercados de insumos, semillas, y del mercado de la certificación que ocurren en los sistemas de agricultura orgánica (van der Ploeg (2012)).

También, se oponen a la “agricultura contractual”. Aunque, no parece que trabajar con sistemas orgánicos elimine la relación de agricultura contractual (Caceres, 2006; término extraído por Watts, 1990). Por ende, si la agricultura orgánica tiende a ser asimilada a la “simple” adopción de prácticas y uso de productos en cumplimiento de normativas. Por otro lado, la agroecología, que no tiene todavía un reconocimiento tan institucional como la agricultura orgánica, se caracteriza por una multiplicidad de temas asociados: conocimiento local/tradicional/indígena; género; soberanía alimentaria; servicios ecosistémicos; economía solidaria...etc. Esta multiplicidad de temas asociados tiende a considerar la agroecología, al contrario de la agricultura orgánica, no como solamente un conjunto de prácticas y de productos, si no como una perspectiva local de cambio del uso de tierra, o para parafrasear Wezel et al. (2016): como una transición del sistema alimentario en la escala de un territorio.

### Objetivos del estudio

Frente a los grandes desafíos de los sectores agropecuarios en América Latina para producir alimentos para el crecimiento de la población, satisfacer la demanda social de productos más sanos y procesos de producción menos dañinos para el medioambiente y los productores, se subraya la necesidad de buscar modelos de producción alternativos (o complementarios) al modelo agropecuario actual. En este contexto, la agroecología y las formas alternativas de agricultura (agricultura orgánica, medidas agro-ambientales, etc...) han ganado interés por representar vías concretas para enfrentar estos desafíos. Sin embargo, aunque estas formas de agricultura son analizadas de manera creciente en la literatura académica, y las experiencias locales se multiplican bajo el impulso de la sociedad civil y de los movimientos sociales, y con el interés creciente de las organizaciones internacionales de cooperación, no se conoce el estado actual de las políticas nacionales que buscan el fomento de estas formas de agricultura.

Entonces, para llenar este vacío de conocimiento, el presente estudio busca hacer un análisis de las políticas de agro-ecología y de agricultura orgánica en los países de América Latina y el Caribe. Este objetivo global, se declina en tres objetivos específicos:

1) Partiendo del hecho que la noción de agroecología es polisémica, se busca caracterizar los entendimientos de la agroecología en las políticas nacionales y por los actores sociales que influyen, implementan, e son afectados por dichas políticas en los países de América latina y el Caribe; 2) se pretende caracterizar y analizar las políticas o conjuntos de herramientas que influyen en el desarrollo de la agroecología, entender sus orígenes y sus características; 3) finalmente rescatar en la medida de lo posible, los efectos de dichas políticas, en cuanto a su capacidad de fomentar o mantener una agricultura más ecológica.

### Marco analítico

Para estudiar las políticas de agroecología y de agricultura orgánica en América latina, desarrollamos un **marco analítico integrador vinculando** 5 elementos: los conceptos, los procesos de política, los contenidos de política, los efectos de las políticas, y las dinámicas de la agro-ecología y agricultura orgánica (Figura 2).

El estudio ha sido realizado esencialmente a partir de fuentes bibliográficas y de datos secundarios (documentos oficiales, leyes, proyectos, informes). En algunos de los países, una actualización ha sido realizada mediante entrevistas de gestores de políticas públicas o líderes de los movimientos sociales. La matriz de análisis común y la guía de entrevistas complementares aparecen en el anexo de ese capítulo.

**Figura 2: Marco analítico integrador para el análisis de las políticas para el fomento de la agro-ecología en América Latina**



Fuente: elaboración propia

Para poder caracterizar cada elemento de nuestro marco analítico en los diferentes países y poder comparar los resultados entre países, se definieron para cada elemento, diferentes variables de la manera siguiente.

### Conceptualizaciones/visiones de la agro-ecología

Aunque existen diferentes definiciones de la agroecología, el primer elemento analítico de nuestro marco consiste en caracterizar los entendimientos del concepto de agroecología movilizado en los países estudiados. Para eso, apoyándonos sobre las análisis de la diversidad de sentido dado a la agroecología (Dumont, Vanloqueren, Stassart, & Baret, 2015; Wezel et al., 2009; Wezel & Soldat, 2009) y sobre los principios generales considerados por la agroecología, proponemos usar 4 dimensiones complementarias, con el fin de comprender las visiones y conceptualizaciones que se manejan sobre la agroecología, e identificar convergencias y divergencias entre países y entre actores que se refieren a esta(s) noción(es).

Esta caracterización en 4 dimensiones complementarias integra dos dimensiones relativas a “prácticas agroecológicas”, y dos dimensiones de índole socio-económico: uno a nivel del perfil del productor y otro a nivel del “sistema alimentario”. Para cada dimensión, definimos criterios específicos a fin de captar las diferentes visiones (Figura 3).

Figura 3: Características de las conceptualización/visiones sobre la agro-ecología y otro modelo alternativa de agricultura

Dimensiones	Sistema técnica en la parcela	Sistema de Manejo del ecosistema	Perfil e/o identidad de los productores	Visión de la sociedad
-------------	-------------------------------	----------------------------------	---	-----------------------

<p>Crterios</p>	<p>Tipo de semilla Gestión de la fertilidad Lucha contra las plagas Control de “malezas” Fuente de energía</p>	<p>Nivel de diversificación de cultivos (en parcela, o en finca) o de agro-biodiversidad, Manejo de suelo Integración de la componente animal Manejo de agua</p>	<p>Tipo de sistema de actividad / o grado de pluri-actividad (integrando actividad no agrícola) Tipos de productores : focalización sobre un tipo de productores [agricultura familiar, indígena, jóvenes, genero] o no focaliza (indiferenciado) Gestión individual o colectiva Hacia el productor “emprendedor” o “tradicional”</p>	<p>Tipo de sistema de comercialización (autoconsumo, circuito corto, cadenas internacionales...) Gestión de recursos naturales (acceso distribución, uso sostenible) Gestión de reciclaje/flujos al nivel de territorios (reciclaje entre zona urbana y campo – desechos urbanos,) Forma de gestión y coordinación: colectiva, comunitaria, o individual / mercado Visión de desarrollo armónico con la naturaleza</p>
-----------------	--	--	---	--

Fuente: elaboración propia

De manera complementaria a estas 4 dimensiones analíticas para abordar el entendimiento y uso de la noción de agroecología (y contrastarla entre agricultura orgánica, sostenible, “convencional”), es necesario agregar una dimensión adicional para entender el uso de los conceptos. Se trata del **registro de justificación** del uso del concepto de agroecología por parte de los proponentes o documentos de políticas. Esta dimensión adicional, se refiere **a objetivos-meta a los cuales la agro-ecología contribuye**. Estos registros de justificación y argumentación pueden variar según los países y los proponentes. Partiendo de una lista de 10 problemas a los cuales la agroecología puede aportar opciones (Toledo, 2012), proponemos caracterizar estos registros en función de grandes metas tal como: 1) Seguridad y/o soberanía alimentaria; 2) Reducción de los efectos ambientales (poluciones); 3) Salud (humana, productor, animal...); 4) Cambio climático ; 5) Pobreza, lucha contra inequidades.

### *Caracterización de los procesos de políticas*

Para caracterizar los procesos de políticas quien conllevan (o no) a la integración de políticas para el fomento de la agroecología, usamos dos dimensiones analíticas. La **primera dimensión** trata de **caracterizar el proceso de construcción de la política** a partir de descriptores como:

1. el modo de construcción de la política: *entre bottom-up* (a partir de movilización social) o/y *top-down* (a partir de ejercicio de planificación);
2. el grado de movilización de espacios de participación, de concertación, de dialogo existentes (y si son funcional, abiertos,...);
3. el tipo de institución gubernamental movilizadora que impulso las políticas (múltiples sectores vs un sector o un ministerio específico);
4. la escala de construcción de la política (piloto, escalamiento o nacional).

La segunda dimensión trata de identificar los factores explicativos de los procesos observados de construcción de las políticas a favor de la agroecología, o de la transición agroecológica. Varios modelos de descripción y análisis de los procesos de políticas existen desde enfoques de ciencia política o de economía política. Para este estudio no definimos para los equipos nacionales marcos específicos de trabajo, si no

que se establecieron una serie de criterios que intervienen de manera recurrente en los principales marcos teóricos de análisis de políticas, o de cambio de políticas. Estos criterios son los siguientes:

- Eventos llamativos tal como eventos climáticos, crisis política, económica, social, ecológicas,... que son elementos puntuales que influyen los procesos de políticas creando una “coyuntura que cambio”. Estos eventos según los marcos teóricos pueden crear bifurcaciones (Mahoney & Thelen, 2009; Thelen, 1999), crear ventana de política (Kingdon, 1995), modificar el balance entre actores de coaliciones (Sabatier & Weible, 2007, 2014);
- Emergencia de una demanda o problemática social que moviliza (“problema de política pública) que se quiere atacar;
- Roles y pesos relativos de grupos de interés (movimiento social, sindicatos, academia, empresas privadas, etc..), integrando la creación de “Alianzas de grupos” / “coaliciones de causas” (Sabatier & Weible, 2007, 2014);
- Influencia internacional (cooperación, acuerdos internacionales...);
- Influencia de la opinión pública;
- influencia de los consumidores (y de los actores de mercado).

### *Caracterización de los contenidos de políticas*

Las políticas para el fomento de la agroecología son difíciles de definir, ya que dependen primero de la integración explícita o no de la palabra agroecología en los marcos de política existentes. Por lo tanto, para definir los alcances de las políticas y sus herramientas a considerar en el marco del estudio, tomamos en cuenta las políticas y herramientas en general que tratan de fomentar modelos de agricultura “más ecológicos”, alternativo al modelo “convencional” heredado de la revolución verde. Por lo tanto, se considera el conjunto de las políticas agrícolas, ambientales, alimentarias y de desarrollo territorial en sus contenidos, para identificar los elementos que pueden ser vinculados con las diferentes dimensiones (o no) de la agroecología.

Para el análisis de los contenidos de políticas, diferenciamos dos niveles. **El primer nivel** consiste en un **análisis global del conjunto de política**. Este análisis consiste a mapear las políticas que pueden contribuir al fomento de la agroecología en los países. Varios criterios permiten de caracterizar **este mapeo global**<sup>3</sup>. A continuación, se lista unas preguntas orientadoras que usamos para este mapeo:

- ¿Existe una política explícita (o no) a favor del fomento de la agroecología?
- ¿A cuáles elementos de visión de la agroecología se refiere?
- ¿Esta política es fragmentado o integrada?
- ¿Existen instituciones específica (o no) que la implementan, de cuáles sectores?
- ¿Cómo es manejado esta política (cogestión con movimiento, manejo estatal, ...)?
- ¿De qué forma ¿(Descentralizada / centralizada)?
- ¿Cuál es el rol del estado (facilitador, implementador,...)?

**El segundo nivel** corresponde al **análisis de las herramientas específicas** que conforman el conjunto de políticas. Para caracterizar esas herramientas se movilizaron los siguientes criterios:

- Uso explícito o no de la agroecología, y tipo de agricultura en el cual se enfoca (agro-ecología, agricultura orgánica, sostenible,);

---

<sup>3</sup> Este mapeo se basa sobre una revisión de los marcos de políticas existentes (documentos de estrategias, documentos marcos, planes, leyes) (Cf metodología).



- Objetivos específicos de la herramienta (reducción de pobreza, fomento de las ventas de productos, ingresos de los productores, desarrollo de la producción, reducción de los danos ambientales, en línea con los argumentos principales de la agro-ecología);
- A cual elementos de visiones / concepto de ecología toca (cf criterios de indicadores: **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**);
- Tipo de herramienta / mecanismos (Regulatorios tal como prohibiciones de usos de agro-químicos; Incentivos, tal como crédito, subsidios, compras públicas, pagos por resultados; o Cognitivos como normas, transferencia de conocimientos, investigación,);
- Tipo de modalidad de coordinación de la herramienta (Mercado / acción colectiva / jerarquía),
- Alcances incluyendo la definición de metas en termino espaciales (territorios, agro-ecosistema, sistema de producción) o socio-económicos (población meta);
- Forma de manejo (abierto, apoyo a proceso, o normativa),
- Medios dedicados en términos financiero (presupuestos) y de recursos humanos dedicados (número de funcionarios y otros).

### *Caracterización del marco político y regulatorio general*

En los procesos políticos que conlleva a las políticas de agro-ecología, o en los efectos que pueden tener, el marco político y regulatorio general juega un papel importante. Esta contextualización es diferente según los países, y representan variables bastantes estables en el tiempo (variables estructurales). Los criterios propuestos para describir estos contextos generales de los países son los siguientes:

- Elementos históricos nacionales referente a los procesos democráticos (tipos de gobierno, y funcionamiento democrático), a las crisis políticas o institucionales, o a crisis alimentaria o ambiental,
- Elementos derivados de acuerdos internacional (Embargo, libre comercio, restricciones de importaciones, tratado ambientales,);
- Estado de la agricultura tal como el nivel de intensificación y de productividad de la agricultura, importancia del agro negocio, concentración y distribución de la tenencia de las tierras, tipos de agricultura dominante, ...;
- Demanda social y del mercado interior por productos agro-ecológicos, orgánico

### *Caracterización de la implementación y efectos de las políticas y conjunto de herramientas*

Para evaluar las políticas diferenciamos dos elementos: la implementación de la política y los efectos en término de resultados. En termino de implementación de la política (y herramientas), se buscó identificar los logros y los limitantes (cuellos de botella para la implementación) de índole económica (falta de recursos financieros), institucional (falta de coordinación, oposición de ciertos grupos), política (cambio de gobierno, cambio de intereses de los actores), capacidades (falta de recursos humanos...).

En termino de resultados, basándose sobre los diferentes dimensiones de la agroecología (ver Wezel & Soldat, 2009), se puede considerar 2 criterios principales<sup>4</sup>: 1) el desarrollo de adopción de **prácticas agroecológicas**, o aumento de la **producción** agroecológica (ver criterio de dinámica agro-ecológicas en la sección siguiente); 2) el desarrollo / consolidación de **movimientos sociales** vinculada a agro-ecología, o de capacidades (académicas, de los productores ; forma de extensión agrícola...) afines con la agroecología.

---

<sup>4</sup> Debido al método adoptado y la falta de informaciones preexistente, no se trata de analizar los efectos finales en termino de contribución a grandes objetivos como seguridad/soberanía alimentaria, reducción de poluciones, incrementos de ingreso, ...

Para la adopción de prácticas, se podrá considerar como las políticas afectan diferentes factores que facilitan/habilitan la adopción de prácticas “agroecológicas” tal como el acceso a información, el acceso a capital financiero, el acceso a mercado, el interés económico comparado entre agroecología y agricultura convencional (motivaciones económicas), el interés o barreras culturales o ideológicas (motivaciones no económicas).

### *Caracterización de las dinámicas de la agro-ecología*

Para evaluar los efectos de las políticas a favor de la agroecología, se trató de caracterizar las dinámicas de la agroecología en los países de estudios. Debido a la diversidad de definición y de cobertura estadística resulta difícil de poder comparar entre los países. Sin embargo se buscó tener elementos de caracterización de la dinámica de agroecología según los criterios siguientes<sup>5</sup>:

- Área de producción agro-ecológica / orgánica total y/o por tipos de cultivos (Ha),
- Número de productores con prácticas (o ciertas prácticas) agro-ecológicas o porcentajes de los productores practicando estas formas alternativas de producción (%);
- producción agroecológica y/o orgánica (toneladas) y/o porcentajes de producción total que representa (%);
- productividad (rendimientos) de las prácticas de agro-ecología(s);
- localización del desarrollo de la(s) agro-ecología(s) (urbana/rural);
- sector en el cual se desarrolla (cultivo alimenticio – maíz, frijol, arroz- u otro cultivo –café, caña de azúcar, sector de mercado nacional o de exportación).

### **Metodología**

---

La metodología comprende dos niveles y etapas de análisis. El primer nivel y etapa consiste en la realización de estudios países según una guía común que retoma los diferentes elementos del marco analítico presentado (ver anexo del capítulo). La segunda etapa consiste en un análisis transversal de los estudios países según los ejes de preguntas.

Para la realización de los estudios países, cada eje analítico descrito en el marco se apoya sobre fuentes de informaciones y herramienta de análisis como resumido la tabla siguiente (Figura 4).

---

<sup>5</sup> Estos criterios son en muchos casos no disponibles, se trata de una lista la más completa posible de lo deseable pero que tendrá que ser revisada según la disponibilidad de datos en los países.

Figura 4 : Ejes analítico, fuentes de información, y metodología de análisis

Ejes analíticos	Fuente y metodología	Productos
<b>Uso del concepto Agro-ecología</b>	Análisis discursos de actores nacionales (con base a entrevistas actores claves) Análisis de textos de políticas	Aclaración de la diversidad de visiones sobre agro-ecología(s) Identificación de la(s) forma(s) institucionalizada(s) Identificaciones de los convergencias / divergencias dentro de cada país y entre países
<b>Procesos de políticas</b>	Línea de tiempo Entrevistas a actores (visiones y estrategias de actores)	Identificación de los factores explicativos de la inserción (o no) del conceptos de agro-ecología
<b>Contenidos de políticas</b>	Documentos de política Mapeo de política	Caracterización del contenido de las políticas Análisis de interacciones (coherencia, sinergias tensiones) Pertinencia
<b>Dinámicas de la(s) agroecología(s)</b>	Revisión de las estadísticas disponibles Revisión de estudios de casos locales	Figura y tablas de estadísticas Narrativa de estudios de casos
<b>Implementación y efectos de las políticas</b>	Revisión de datos secundarios, informes de evaluación de las políticas	Identificación de los logros y limitantes en la implementación de las políticas

Fuente: Elaboración propia

Para la segunda fase, correspondiendo al análisis comparativo entre caso, se usaron matrices de comparación entre países, por los diferentes ejes analíticos para identificar divergencias y convergencias entre procesos observados (dinámica de política, contenido de política), e identificar factores explicativos comunes a los procesos política y de impacto (factores debidos a los procesos, peso de los factores del entorno general). Este trabajo de comparación se hizo en dos etapas, una primera etapa consistió en una revisión de los resultados intermediarios de los estudios de casos nacionales durante un taller presencial agrupando a los responsables de los estudios de casos de cada país en octubre 2016 en Brasilia. La segunda etapa consistió en un análisis a profundidad de los estudios de casos finalizadas en marzo 2017 por un comité específico compuesto algunos investigadores a cargo de estudios nacionales lo cual lleno las matrices de comparación entre países y realizo el borrador de análisis comparativa que fue validado y enriquecido por las lecturas de los responsables de cada estudio países.

### Referencias bibliograficas

- Akram-Lodhi, A. H., & Kay, C. (2010a). Surveying the agrarian question (part 1): unearthing foundations, exploring diversity. *Journal of Peasant Studies*, 37(1), 177-202. doi:10.1080/03066150903498838
- Akram-Lodhi, A. H., & Kay, C. (2010b). Surveying the agrarian question (part 2): current debates and beyond. *Journal of Peasant Studies*, 37(2), 255-284. doi:10.1080/03066151003594906
- Altieri, M. A. (2004). Linking Ecologists and Traditional Farmers in the Search for Sustainable Agriculture *Frontiers in Ecology and the Environment*, 2(1), 35-42.
- Altieri, M. A., & Toledo, V. M. (2011). The agroecological revolution in Latin America: rescuing nature, ensuring food sovereignty and empowering peasants. *Journal of Peasant Studies*, 38(3), 587-612. doi:10.1080/03066150.2011.582947
- Caceres, D. M. (2006). Agrobiodiversity and technology in resource-poor farms. *Interciencia*, 31(6), 403-410.
- Coolsaet, B. (2016). Towards an agroecology of knowledges: Recognition, cognitive justice and farmers' autonomy in France. *Journal of Rural Studies*, 47, 165-171. doi:10.1016/j.jrurstud.2016.07.012
- de Molina, M. G., & Guzmán Casado, G. I. (2017). Agroecology and ecological intensification. A discussion from a metabolic point of view. *Sustainability (Switzerland)*, 9(1). doi:10.3390/su9010086

- Dumont, A. M., Vanloqueren, G., Stassart, P. M., & Baret, P. V. (2015). Clarifying the socioeconomic dimensions of agroecology: between principles and practices. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 40(1), 24-47. doi:10.1080/21683565.2015.1089967
- FAO. (2016). *Climate Change, Agriculture and Food Security* (978-92-5-109374-0). Retrieved from Rome: <http://www.fao.org/publications/sofa/2016/en/>
- Guzmán, G. I., López, D., Román, L., & Alonso, A. M. (2013). Participatory Action Research in Agroecology: Building Local Organic Food Networks in Spain. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 37(1), 127-146. doi:10.1080/10440046.2012.718997
- Holt-Giménez, E. (2002). *Movimiento Campesino a Campesino: the Political Ecology of a Farmers' Movement for Sustainable Agriculture in Mesoamérica*. (PhD. Dissertation), University of California Santa Cruz, Ann Arbor. Available from ProQuest (UMI Number: 3057708)
- Holt-Giménez, E., Altieri, M. A., & Rosset, P. (2006). Ten Reasons Why the Rockefeller and the Bill and Melinda Gates Foundations' Alliance for Another Green Revolution Will Not Solve the Problems of Poverty and Hunger in Sub-Saharan Africa. *Food First, Institute for Food and Development Policy*, 12, 1-12.
- Kingdon, J. W. (1995). *Agendas, Alternatives and Public Policies* (2 ed.). New York: Longman.
- Mahoney, J., & Thelen, K. (2009). A Theory of Gradual Institutional Change. In J. Mahoney & K. Thelen (Eds.), *Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power* (pp. 1-37). Cambridge: Cambridge University Press.
- McMichael, P. (2009). A food regime genealogy. *Journal of Peasant Studies*, 36(1), 139-169. doi:10.1080/03066150902820354
- Millman, S., Aronson, S., Fruzzetti, L., Hollos, M., Okello, R., & Whiting Jr, V. (1990). Organization, information, and entitlement in the emerging global food system. *Hunger in history: Food shortage, poverty and deprivation*, 307-330.
- Olinto, P., Beegle, K., Sobrado, C., & Uematsu, H. (2013). The State of the Poor: Where Are The Poor, Where Is Extreme Poverty Harder to End, and What Is the Current Profile of the World's Poor? Retrieved from Patel, R. (2013). The Long Green Revolution. *Journal of Peasant Studies*, 40(1), 1-63. doi:10.1080/03066150.2012.719224
- Putnam, H., Godek, W., Kissmann, S., Pierre, J. L., Alvarado Dzul, S. H., Calix de Dios, H., & Gliessman, S. R. (2013). Coupling Agroecology and PAR to Identify Appropriate Food Security and Sovereignty Strategies in Indigenous Communities. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 38(2), 165-198. doi:10.1080/21683565.2013.837422
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (2007). The advocacy coalition framework: innovations and clarifications. In P. A. Sabatier (Ed.), *Theories of the policy process* (pp. 189-220). Boulder, Colorado: Westview Press.
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (2014). *Theories of the Policy Process*. Boulder, USA: Westview Press.
- Shiva, V. (2016). *The Violence of the Green Revolution. Third World Agriculture, Ecology, and Politics*: University Press of Kentucky.
- Silva, E. M., & Moore, V. M. (2017). Cover Crops as an Agroecological Practice on Organic Vegetable Farms in Wisconsin, USA. *Sustainability (Switzerland)*, 9(1). doi:10.3390/su9010055
- Sousa Santos, B. d. (2016). *Epistemologies of the South, justice against epistemicide*. London: Routledge.
- Thelen, K. (1999). Historical Institutionalism in Comparative Politics. *Annual review of political science*, 2(1), 369-404.
- Toledo, V. M. (2012). La Agroecología En Latinoamérica: Tres Revoluciones, Una Misma Transformación. *Agroecología*, 6, 37-46.
- van der Ploeg, J. D. (2012). The drivers of change: the role of peasants in the creation of an agro-ecological agriculture. *Agroecología*, 6, 47-54.
- Vanhaute, E. (2011). From famine to food crisis: what history can teach us about local and global subsistence crises. *J Peasant Stud*, 38(1), 47-65. doi:10.1080/03066150.2010.538580
- Watts, M. (1990). Peasants under contract: agro-food complexes in the Third World (pp. 149-162). London: Earthscan.

- Wezel, A., Bellon, S., Dore, T., Francis, C., Vallod, D., & David, C. (2009). Agroecology as a science, a movement and a practice. A review. *Agronomy for Sustainable Development*, 29(4), 503-515. doi:10.1051/agro/2009004
- Wezel, A., Brives, H., Casagrande, M., Clement, C., Dufour, A., & Vandenbroucke, P. (2016). Agroecology territories: places for sustainable agricultural and food systems and biodiversity conservation. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 40(2), 132-144. doi:10.1080/21683565.2015.1115799
- Wezel, A., & Soldat, V. (2009). A quantitative and qualitative historical analysis of the scientific discipline of agroecology. *International Journal of Agricultural Sustainability*, 7(1), 3-18. doi:10.3763/ijas.2009.0400

**1. Trayectoria de los instrumentos y políticas**

1.1 Contexto productivo, político e histórico en el país

1.2 Estado de la agro-ecología y agricultura orgánica (Números de productores, producción)

1.3. Trayectoria de un conjunto de políticas a favor de la agricultura familiar, del medio ambiente, de la sustentabilidad de la agricultura (marcos decisivos, inflexiones y tendencias)

1.4. Orígenes y actores de las políticas consideradas

**2. Proceso de construcción de la política /herramienta**

2.1. Espacios y formas de participación y de dialogo entre Estado y sociedad civil

2.2. Los actores de la elaboración de la política (movimiento social, gobierno, otros)

**3. Caracterización de políticas o instrumentos**

3.1. Objetivos

3.2. Documentos de referencia

3.3. Contenidos y su evolución

**4.-Gobernanza e implementación de cada política considerada**  
**4.1. Instancias de decisión, administración y ejecución**

4.1. Instituciones y fuente de financiamiento

4.2. Grado de descentralización o territorialización

**5. Primeros resultados y efectos**

5.1. Principales avances y logros

5.2. Efectos en los territorios (cuando existen fuentes)

5.3. Factores facilitadores / obstáculos y limitaciones

**6. Lecciones, desafíos y perspectivas**

## Capítulo 2. Políticas públicas y desarrollo de la agroecología en Argentina

*María M. Patrouilleau, Lisandro E. Martínez, Eduardo Cittadini y Roberto Cittadini*

### Introducción

Este trabajo pone el foco en los procesos institucionales de Argentina que han aportado en las últimas décadas al desarrollo de visiones y prácticas vinculadas a la agroecología.

Si hablamos de “políticas” (en plural) nos referimos a instrumentos y estrategias institucionales que desde el Estado se diseñan e implementan con distintos grados de participación de actores de la sociedad civil y de organismos internacionales, con el fin de orientar la ejecución de las acciones de gobierno. Las políticas a favor de la agroecología específicamente se enmarcan en un contexto complejo, ya que en general el sistema institucional está orientado a facilitar el desarrollo de la agricultura competitiva, con inserción en el mercado internacional y con alto nivel de uso de insumos. Este contexto resulta una limitante para el desarrollo de una política integral de agroecología.

El estudio presenta un análisis de las políticas que incluyeron entre sus acciones principales la promoción de enfoques agroecológicos en los últimos 25 años (desde 1990 a 2016), observando los conceptos de agroecología que han promovido, los actores con los que han interactuado y algunas innovaciones sociales e institucionales que se dieron en sus procesos de implementación. Nos concentramos en:

- Los aportes que ha hecho el Programa ProHuerta a la Agroecología, implementado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (en adelante INTA) y el Ministerio de Desarrollo social;
- La consolidación de la agroecología como línea de investigación en INTA y
- El impulso a la producción orgánica, en general destinada a mercados de exportación, por parte del Ministerio de Agroindustria.
- Otro conjunto de instrumentos de política nacional, provincial y local que contemplan desarrollos productivos agroecológicos.

Las tres primeras políticas que son las principales identificadas, si bien presentan elementos en común (promueven modelos productivos que evitan incorporar insumos químicos, incorporan formas de manejo atentas al cuidado del ambiente), incorporan la visión agroecológica de manera muy diferente y se asumen como “agroecológicas” desde distintas interpretaciones y en vinculación con diferentes actores. Su análisis conjunto permite identificar el público ante el cual el Estado argentino ha promocionado la visión agroecológica.

La investigación se basó en una revisión bibliográfica, en el análisis de fuentes secundarias (documentos institucionales, material de divulgación) y en entrevistas y observaciones realizadas por el equipo durante el año 2016.<sup>6</sup> Tanto la indagación documental e historiográfica como el trabajo de campo permitieron dar cierta perspectiva al análisis de las políticas a favor de la agroecología, contribuyendo a comprender sus alcances y sus dificultades en el contexto institucional argentino.

El trabajo se estructura de la siguiente manera: en la primera sección se presenta una breve caracterización histórica del desarrollo agrícola en Argentina; en la segunda sección se reconstruye el proceso de introducción y de difusión de las visiones agroecológicas desde fines de los años ochenta; en la tercera sección se plantean algunos aspectos críticos de la institucionalidad agropecuaria del país que sirven como

---

<sup>6</sup> Se realizaron trece (13) entrevistas a informantes clave y observaciones durante el año 2016 en distintos espacios institucionales de implementación, diseño y promoción de la agroecología.

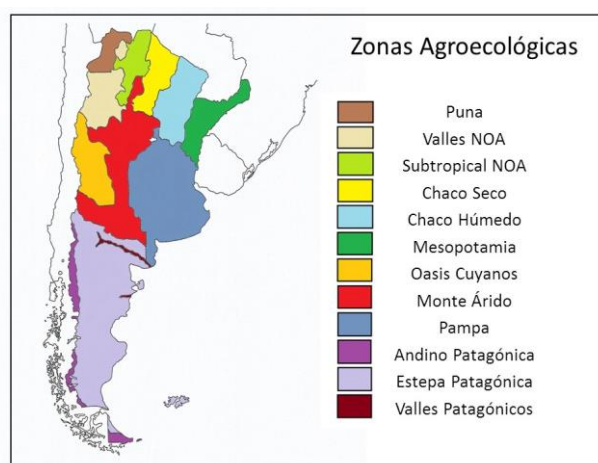
marco para el análisis de las políticas; las tres secciones siguientes se detienen en el análisis de las principales políticas antes mencionadas; una sección complementaria presenta otras formulaciones de políticas que contemplan de algún modo la visión agroecológica, aunque no lo hacen centralmente (en algunos casos no están aún implementadas); sobre el final las conclusiones recogen los principales resultados de la investigación.

### Características históricas y productivas del desarrollo agrícola en Argentina

Lo que hoy definimos como el territorio de la República Argentina tiene una historia tanto colonial como prehispánica de cientos y miles de años. Algunos de los pueblos originarios que lo habitaban eran cazadores-recolectores, otros practicaban la agricultura de forma muy desarrollada (como los vinculados a los sistemas de cultivos andinos, con utilización de sistemas de riego en terrazas y rotaciones de cultivos) (Altieri, 1996). Sus tradiciones culturales brindaron al mundo, a partir del proceso de colonización, muchos de los cultivos que se transformaron en parte importante de la dieta global (papa, maíz, tomate, calabaza, maní, cacao, etc.). Sobre esta larga tradición etnoecológica y agroecológica se desarrolló una nueva inserción de estos territorios a la dinámica del mercantilismo y capitalismo globales. Dicha inserción se caracterizó por incorporar las amplias planicies fértiles de la región pampeana (la zona central del país).

Aunque ocupando un lugar más bien marginal durante el periodo colonial, limitándose a ser región de paso para los metales preciosos que bajaban del Alto Perú, la República Argentina cambia su rol durante el siglo XIX bajo la influencia de la revolución industrial y la conformación de un sistema global de producción de alimentos y mercancías, insertándose como productora y exportadora de productos primarios alimentarios. Desde la segunda mitad del siglo XIX bajo el *modelo agroexportador*, Argentina hizo de la región pampeana la principal región en términos de desarrollo productivo primario, así como en términos de desarrollo urbano y de infraestructura (Barsky y Gelman, 2009). Las excelentes propiedades edáficas y climáticas sumadas a la salida al mar de las vías fluviales de la misma, fueron la base de dicho modelo.

Figura 5: Zonas Agroecológicas Homogéneas de la República Argentina



*Fuente: En base a Obschatko (2007) con adaptaciones propias. Esta zonificación responde a criterios tanto climáticos, edáficos y de división política, como a criterios socio-demográficos en relación a la distribución de la Agricultura Familiar*

La inserción al mercado mundial bajo el modelo agroexportador se asentó primero en la producción ganadera. Posteriormente se dio una buena adaptación de cultivos alimenticios como el trigo, el maíz, la avena, el lino, la cebada y el centeno, los cuales impulsaron una agriculturización temprana desde fines del



siglo XIX. Esta expansión de los cereales ligada a la exportación se basó en la incorporación de mano de obra inmigrante, principalmente europea, de la cual una pequeña parte pudo acceder a la tierra en forma de arrendamiento y sentó las bases para dar lugar a la conformación de una especie de “clase media rural” (Sili y Soumoulou, 2011). Al mismo tiempo, estos procesos históricos y productivos coexistieron con una mayor presencia histórica de pequeños productores y agricultores familiares, que se remontaba a tiempos coloniales y precolombinos, en las zonas extra-pampeanas, los cuales fueron asociándose a los ciclos económicos y sociales de cultivos intensivos e industriales (tabaco, algodón, yerba mate, caña de azúcar, hortalizas, frutales, vid y forestales) y a ganadería tanto bovina como caprina y ovina (preponderante en Patagonia). Este tipo de producciones es característica hasta nuestros días en todo el arco de zonas agroecológicas que rodean a la zona centro pampeana (véase Mapa 1).

Mientras en la Región Pampeana se produjo un predominio de formas capitalistas avanzadas, en las regiones extra-pampeanas se acentuó una coexistencia entre formas netamente capitalistas con formas tradicionales (Manzanal y Rofman, 1989). Las economías regionales se caracterizan por un proceso de concentración del sector agroindustrial en sus producciones típicas (yerba, tabaco, caña, vid, algodón, frutihorticultura), proceso que coexiste con un sector minifundista mayoritario que, aunque tienda a ser desplazado, persiste aún en condiciones de pobreza rural.

La estructura agraria a nivel país presenta una marcada concentración de la tierra, aunque el tamaño medio de las explotaciones varía considerablemente de una región a otra. En términos generales, mientras un 2% de las empresas agropecuarias concentra el 50% de las tierras, el 57% de las explotaciones más pequeñas concentra apenas el 3% de la misma (Sili y Soumoulou, 2011). La Región Pampeana presenta una distribución más equilibrada, mientras que las grandes regiones del Noroeste, Noreste y Cuyo cuentan con mayor presencia de pequeños productores y agricultores familiares.<sup>7</sup>

Un nuevo proceso de agriculturización se desarrolló con la revolución verde en los años sesenta y setenta, y luego con la difusión del monocultivo de soja, que se expande desde la región pampeana hacia zonas también extra-pampeanas, de la mano de un paquete tecnológico y de un modelo de concentración gerencial y de redes de servicios asociados. El cultivo de soja pasó a transformarse en el principal cultivo exportable de la Argentina, tanto en forma de grano como en forma procesada en aceites y derivados.<sup>8</sup> Si el 56% de las exportaciones totales del país corresponden al sector agropecuario, las cinco principales cadenas de granos oleaginosos y cereales generan el 74% de estas exportaciones del sector y las de la cadena de la soja explican un 49% de las mismas (promedio 2011-2013) (Regúnega y Tejeda Rodríguez, 2015).

Este proceso ha generado ventajas productivas, de rentabilidad y fiscales, pero también una serie de cuestionamientos y problemas. Entre los cuales pueden señalarse: la pérdida de establecimientos productivos a causa de la concentración de la actividad al aumentar la escala, y vinculado a ello, el éxodo rural-urbano por disminución de necesidad de mano de obra rural (Rodríguez, 2010; Sili y Soumoulou, 2011); la simplificación de los sistemas de producción de modelos mixtos a agricultura permanente, muchas veces sin rotaciones –monocultivo–; aumento de plagas resistentes a distintos principios activos (Vila-Aiub et al., 2007; Vigna et al., 2008; Yannicari et al., 2012); pérdida de nutrientes que se exportan sin reposición (Cordone, 2012; Cruzate y Casas, 2012); pérdida de materia orgánica de suelos (Restovich, et al, 2011; Trossero, et al, 2012); pérdida de biodiversidad, problemas de contaminación de suelo, aire y recursos hídricos por utilización de insumos químicos (Aparicio et al, 2008, 2013 y 2015; García et al., 2013;

---

<sup>7</sup> Al respecto no existen datos censales actualizados, ya que la última referencia válida es la del Censo Nacional Agropecuario del 2002. En esta fuente se basa la bibliografía citada.

<sup>8</sup> Paso así de ser un cultivo con algo más de dos millones de hectáreas a comienzos de la década de los ochenta, a ocupar un área de alrededor de veinte millones de hectáreas, lo que representa aproximadamente el sesenta por ciento de la superficie cultivada de la Argentina (Strada y Vila, 2015).

González, et al., 2015); conflictos en contextos periurbanos por uso de agroquímicos (González, et al, 2016); problemas de compactación de suelos y subida de la napa freática que aumentan los riesgos de inundación (Sasal et al., 2006; Bertram y Chiacchiera, 2016); pérdida de bosques nativos por expansión de la frontera agrícola y, con ello, el desplazamiento de comunidades y pueblos originarios (Schmidt y Langbehn, 2016); entre otras problemáticas.

Es en el contexto de este nuevo proceso de agriculturización que desde fines del siglo pasado el enfoque agroecológico comienza a mostrarse como una respuesta alternativa y crítica del paradigma dominante.

### El proceso de difusión de la agroecología

---

Ya desde la década de los ochenta, la preocupación por el uso de agroquímicos y la capacidad de brindar modelos alternativos de producción comienzan a generar desde la sociedad civil instancias de socialización de estas alternativas, básicamente desde organizaciones no gubernamentales. Este tipo de propuestas se basaban en fomentar la “huerta orgánica” y estaban ligadas a grupos ecologistas de ámbitos metropolitanos y pampeanos. Surgen ONGs que se preocupan por modelos de producción orgánica como el *Centro de Estudios de Cultivos Orgánicos* (CENECOS), o el *Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropriadadas de la Argentina* (CETAAR), creados en 1985 y 1986, respectivamente, ambos vinculados al área metropolitana de Buenos Aires pero que intentaban expandir asociativamente el movimiento orgánico en el país (Souza Casadinho, 2014).

Así también los casos del *Centro de Producciones Agroecológicas Rosario* (CEPAR), ONG de esa ciudad, que desde fines de los años ochenta impulsaba la conformación de huertas comunitarias para hacer frente a los problemas de pobreza estructural de sectores marginales (Ottmann, 2009)<sup>9</sup>. En la mayoría de los casos estos grupos tejieron alianzas territoriales con el Programa ProHuerta. Ejercieron también su influencia grupos del interior del país, como son el *Instituto de Cultura Popular* (INCUPO), organización civil que desde la década de los sesenta realiza en la región chaqueña acciones de empoderamiento para la agricultura familiar y las comunidades indígenas; como así también el *Instituto de Desarrollo Social* (INDES), ONG que desde la década de los setenta impulsa el fortalecimiento de organizaciones de base comunitaria y que priorizó su accionar en pequeños productores minifundistas de la región Noreste. Estas organizaciones venían trabajando desde hacía varias décadas en aspectos relacionados con la agroecología, aunque los abordajes no eran llamados de esta forma.

Luego surge el *Consortio Latinoamericano de Agroecología y Desarrollo* (CLADES), fundado entre otros por Miguel Altieri y con una mirada holística sobre la producción y la alimentación, y el *Movimiento Agroecológico de América latina y el Caribe* (MAELA). Estas redes aportan a nivel local una mirada atenta a los aspectos sociales, que trasciende la cuestión de la huerta orgánica y de la pequeña escala. Y comienzan a dar sentido a la categoría *agroecología*. En 1990 se creó incluso una Red Argentina de Agroecología (RADA) (Souza Casadinho, 2014), incluyendo a las ONGs antes mencionadas, pero que sin embargo no logró perdurar en el tiempo.

Por otro lado, el desarrollo del régimen para la producción orgánica por la entonces Secretaría de Agricultura fue un impulso para el desarrollo de este tipo de producción. La producción orgánica comenzó así a asociarse con este esquema que comprendía la certificación de la calidad de lo producido por parte de las empresas certificadoras (privadas), y con una producción para exportar a mercados de orgánicos internacionales (primero el mercado europeo, luego Estados Unidos y otros países) (entrevista). Algunas redes internacionales y locales colaboraron también en este sentido, como IFOAM (International Foundation for Organic Agriculture) que tuvo su reunión internacional en la ciudad de Mar del Plata en el

---

<sup>9</sup>Más adelante junto con INTA y el Programa ProHuerta desarrollan el Programa de Agricultura Urbana de esa ciudad.

año 1998, y que produjo la Declaración de Mar del Plata: “No a la ingeniería genética”.<sup>10</sup> Más adelante juega un papel importante la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO), creada en 2008 con apoyo de IICA. A nivel local los productores orgánicos se nuclearon en el *Movimiento Argentino para la Producción Orgánica* (MAPO).

Otra política que impulsó la producción orgánica fue las tarifas diferenciales de impuesto a la exportación especialmente de cereales y oleaginosas que tuvieron estos productos entre los años 2002 y 2006 (entrevista), en un contexto de altos impuestos a las exportaciones.

Con el tiempo los conceptos de *producción orgánica* y *agroecología* se fueron diferenciando en Argentina, uno más anclado en un esquema normativo y otro en un campo disciplinar y de la experiencia social y comunitaria, aunque no quita que ciertos actores los usen aún de manera indiferenciada. La *producción orgánica* se va a asociar con el esquema de certificación desarrollado para garantizar las propiedades del producto destinado a la exportación, y con los objetivos de obtener mediante la misma un acceso a un mercado específico y un agregado de valor para la producción. En cambio, el concepto de *agroecología* se apoyó en el enfoque holístico y de paradigma de la complejidad legado por M. Altieri y desarrollado también por otros referentes locales, con prácticas productivas y asociativas orientadas a mercados locales o regionales y sin el énfasis en la certificación, o a lo sumo proponiendo formas de certificación participativa, priorizando las relaciones de confianza y de proximidad, y con apoyo en las tradiciones de la educación popular. Los planteos agroecológicos también fueron incorporados como parte de las reivindicaciones y las propuestas de alternativas de distintos movimientos sociales, como organizaciones campesinas (como el Movimiento Nacional Campesino Indígena –MNCI-, que agrupa un gran número de organizaciones campesinas e indígenas de la Argentina), grupos ambientalistas, y más recientemente ha llegado a nucleares municipios en favor de la agroecología.

En la difusión local fue importante el rol jugado tanto por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) como por la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde ya desde la década de los noventa comienzan a incorporarse al debate académico los planteos del enfoque agroecológico. En la Carrera de Agronomía de la UNLP, el trabajo de institucionalización del ingeniero agrónomo Santiago Sarandón logró a comienzos del nuevo milenio hacer de la formación en agroecología una materia obligatoria, en un programa de formación con fuerte orientación productivista y así formar una generación de agrónomos con desempeño tanto en el mundo académico como en el trabajo profesional y en el ámbito público y privado.<sup>11</sup> Más adelante surgieron también: una especialización en agroecología en la Universidad Nacional de la Matanza (en conjunto con INTA), un curso de extensión en la Universidad Nacional del Centro (ambas en la provincia de Buenos Aires) y una Licenciatura en Agroecología en la Universidad Nacional de Río Negro. A su vez, así como en la UNLP, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, ubicada en el partido de Florencia Varela en el Gran Buenos Aires, dicta desde 2013 la materia obligatoria “Agroecología” (tanto para la licenciatura en Ciencias Agrarias como para la Tecnicatura en producción vegetal intensiva) y la materia “Agroecología periurbana”, (obligatoria sólo para la licenciatura). El crecimiento de las opciones de formación en agroecología en los últimos años, junto con el desarrollo de distintas jornadas y seminarios tanto de nivel internacional, como nacional en distintas regiones del país, permite hablar en estos tiempos de una “primavera de base agroecológica” (Ulle, 2016).

---

<sup>10</sup> Un fragmento de la declaración afirma: “Nosotros, los abajo firmantes, más de 600 delegados de 60 países, participantes de la 12ª Conferencia Científica de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM) en Mar del Plata, Argentina, hacemos un llamamiento a los gobiernos y organismos reguladores de todo el mundo para que prohíban inmediatamente el uso de la ingeniería genética en la agricultura y la producción de alimentos” (<http://www.documentacion.edex.es/docs/0604LERnoa.pdf>)

<sup>11</sup> Los trabajos en este ámbito se han publicado en dos obras principales: Sarandón (2002) y Sarandón y Flores (2014).

Dentro del conjunto diverso de formas de producir y de crear agroecología, a la hora de hacer una síntesis puede decirse que se diferencian tres tipos principales de formas de concebir y practicar la agroecología en Argentina, destacados por su difusión en el país.<sup>12</sup> Cada una se apoya en distintas organizaciones y se vincula con distintas políticas, redes de expertos y academia (los agentes motivadores). Las mismas se detallan en la tabla a continuación:

Figura 6: Tipos de producciones agroecológicas en Argentina

Tipos de agroecología	Destino de la producción	Tipo y tamaño unidades productivas	Ubicación	Agentes motivadores	Conceptos, visiones
Agroecología extensiva* (o “a gran escala”)	Mercado externo e interno	Unidades de producción mixta (cultivos y ganadería), entre 50 y 600 (depende la región)	Región pampeana, zona no núcleo (sudoeste y sudeste de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, periurbanos)	Profesionales vinculados a las redes académicas de agroecología, redes de municipios, INTA	Alternativas a los “paquetes tecnológicos” Complejidad. Principios biológicos y ecológicos. Estabilizar costos y rendimientos. Vivir bien.
Agroecología de la agricultura familiar	Autoconsumo, venta directa en mercados locales y/o en redes de la economía social	Huertas familiares, comunitarias y en instituciones. Formas de producción tradicionales	En todo el país. Las propias del Prohuerta: el 30% se ubica en zonas rurales y el 70% en zonas urbanas y periurbanas	ProHuerta, ONGs Redes de la economía social, MAELA, MNCI INTA (CIPAF)	Seguridad y alimentaria. Soberanía tecnológica. Educación popular. Certificación participativa. Buen vivir.
Producción orgánica (datos de SENASA para el año 2015)	Principalmente mercado externo (de orgánicos): Estados Unidos 53% de la producción, Unión Europea 30%, Otros: 17%	Diversidad de unidades, tamaños y producciones. Grandes extensiones en Patagonia para ovinos (2,8 millones de ha).	En todo el país: Provincias de Misiones (208), Río Negro (151), Mendoza (147) y Buenos Aires (144), tienen mayor N° de orgánicos.	Redes internacionales (INFOAM, CIAO). Ministerio de Agroindustria, MAPO (ONG de productores orgánicos)	Mercados orgánicos como oportunidad para agregar valor. Certificación de la producción (normas y control de calidad)

Fuente: Elaboración propia.

\*refiere a producciones que utilizan relativamente un bajo nivel de insumo por unidad de superficie. Si bien esto en la práctica es difícil de cuantificar, porque por ejemplo la biotecnología o la agroecología misma pueden pensarse como formas de intensificación, el término sigue siendo utilizado por los propios actores.

Antes de comenzar a analizar la forma en que las políticas han contribuido al desarrollo de estas formas de producción agroecológicas, es necesario considerar ciertos aspectos críticos de la institucionalidad agropecuaria en Argentina que condicionan el desarrollo de políticas.

<sup>12</sup> Los nombres de cada uno de los tipos recogen los principales conceptos que dan identidad a dichas prácticas: *agricultura familiar*, *agroecología extensiva* o *producción orgánica*. Luego algunos elementos pueden coincidir en distintos tipos (si hay una producción de base familiar o no, la identificación con la noción de buen vivir, aunque con distinto énfasis, por ejemplo).

## Algunos aspectos críticos sobre la institucionalidad agropecuaria en Argentina

Forma parte casi de una especie de sentido común nacional considerar que Argentina es un país que acarrea problemas de debilidad institucional.<sup>13</sup> Ejemplo de ello son los recurrentes golpes de Estado que se han dado a lo largo del siglo XX, o también las frecuentes crisis económicas y políticas que se han desarrollado especialmente en el período de estabilización de la democracia (las más importantes la hiperinflacionaria de los años 1988/89 y la crisis económica e institucional de 2001).

Cuando se aborda el nivel específico de la política agropecuaria, se observan también carencias en las facultades y capacidades institucionales. Las dificultades de las instituciones estatales encargadas de desarrollar las políticas agropecuarias pueden observarse en los siguientes aspectos, que más adelante se detallan:

- Cierta rigidez para la entrada en agenda de nuevos temas o enfoques en la cartera de asuntos agropecuarios, organizada tradicionalmente por actividades productivas, antes que por objetivos o problemáticas.
- La carencia de instrumentos de integración de las políticas agropecuarias.
- Insuficiencias en los sistemas de información para conocer en profundidad la situación social agraria del país.

El Ministerio de Agroindustria, organismo a cargo de los asuntos agrarios, se crea en 1898 como Ministerio de Agricultura, y tuvo durante muchos años un rango menor, de Secretaría, hasta el año 2009.<sup>14</sup> Al observar su estructura institucional a lo largo de los años, se nota que son pocos los cambios que se dan para atender el complejo de problemas y de enfoques que van surgiendo sobre la cuestión agraria y la producción, dentro de una estructura organizada por las actividades productivas principales.

Si bien durante el siglo XX, con el desarrollo del modelo de sustitución de importaciones, las cuestiones agropecuarias reforzaron su institucionalidad con normativas y organismos de regulación, siempre permanecieron dificultades para integrar institucionalmente demandas vinculadas a la *cuestión agraria*, tales como acceso a la tierra o la regulación de los arrendamientos (Balsa, 2012; Lázzaro, 2012; 2015). Y además muchos de los organismos creados fueron disueltos durante el modelo neoliberal, en los años setenta y noventa.

La estructura interna de la Secretaría/Ministerio de Agricultura tuvo en general una forma simple en su interior, ordenada por las dos actividades principales: agricultura y ganadería, adquiriendo mayor complejidad en las últimas décadas.<sup>15</sup> Como lo han señalado otros autores, esto dificulta el desarrollo de

---

<sup>13</sup> Una larga lista de investigaciones académicas con distintos enfoques conceptuales y trayectorias han abonado esta tesis de la debilidad institucional argentina, algunas haciendo énfasis en el sistema político y puntualmente en el sistema de partidos (O'Donnell, 1972; Smulovitz, 1986), otras en el funcionamiento de la burocracia estatal (Oszlak, 2006), en el peso relativo de ciertos actores corporativos (Rouquié, 1986) o en el fallido intento de consensuar un modelo de desarrollo entre los principales actores y sectores productivos (Pucciarelli, 1999).

<sup>14</sup> Excepto por un período durante el gobierno dictatorial de Levingston y Lanusse (entre 1970 y 1973). El gobierno desarrollista de Frondizi le bajó el rango ministerial en 1958 y a excepción del período mencionado se mantuvo en ese rango hasta 2009, cuando luego del conflicto desatado en 2008 con el sector agropecuario, la Presidenta Cristina F. de Kirchner decidió elevar su rango a Ministerio.

<sup>15</sup> Algunas variaciones de esta forma simple pueden destacarse: una subsecretaría de Economía Agraria tiene vigencia durante algunos períodos (1973-1981 y 1986), y una subsecretaría de Recursos renovables y ecología (1976-1981). En 1985 se crea la Subsecretaría de pesca. Durante la década de 1990, de la mano de las nuevas exigencias de los mercados internacionales aparecen en la estructura las áreas de Alimentos y Mercados. En 2008 se crea una Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar y una de Agroindustria y Mercados (la primera dependencia que se ordena por un sujeto y no por una actividad o recurso). Hacia el final del gobierno de Cristina F. de Kirchner (en 2014) se crea la Secretaría de Agricultura Familiar.

estrategias integrales como las que requieren el agregado de valor (Oszlak, 2005; Nogueira), el desarrollo rural (Ramos y Cuervo, 2008), o en el caso que nos compete, las prácticas agroecológicas. Este tipo de enfoques requieren abordajes holísticos y que incluye una bajada territorial, no sólo vinculada con promoción o regulación sobre ciertos segmentos de las cadenas productivas.

Del Ministerio depende -entre otros organismos descentralizados- el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). El INTA, creado en 1956, es además autárquico y tiene cobertura territorial en todo el país, con 15 Centros Regionales. La estructura del INTA fue históricamente y en comparación más compleja, ya que desde su origen reconoció distintos públicos y cuestiones agrarias, porque convergen en su interior las actividades de investigación, promoción agropecuaria y extensión, y es ejecutor de muchas políticas a cargo del Ministerio (especialmente políticas de desarrollo rural, pero también ambientales y sociales, entre otras).

Desde el año 1996 con un primer convenio con el BID también se institucionaliza dentro de la Secretaría de Agricultura el PROSAP (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales), que luego en 2009 se integra a una Unidad para el Cambio Rural (UCAR). Dicha unidad gestiona los programas y proyectos con financiamiento internacional para infraestructura y desarrollo rural. U cuenta con un alto grado de autonomía en su funcionamiento (es una órbita donde las agencias de crédito tienen protagonismo en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas). La existencia de dicha institución con sus lógicas propias, hace también a la fragmentación entre las políticas para el desarrollo rural ejecutados por este organismo, las del propio Ministerio y las que implementa el INTA.

En términos de formulación de la agenda política, dada la inserción internacional de la producción agropecuaria argentina, y en base a las diferencias estructurales entre la producción pampeana y las extrapampeanas, la agenda de la política agropecuaria de las producciones pampeanas -considerando aun su expansión a otras regiones en las últimas décadas- está estrechamente ligada a las condiciones macroeconómicas (el tipo de cambio, el nivel de los impuestos a las exportaciones, también la apertura para la importación de insumos). En cambio, para la producción de las economías regionales, si bien las condiciones macroeconómicas también impactan, se suelen negociar políticas por producto, ligadas a la fijación de precios, créditos, subsidios, formas de comercialización o sistemas de protección arancelarios, y suelen intervenir en las negociaciones los gobiernos provinciales y otros entes provinciales específicos ligados a dichas producciones (Barsky y Dávila, 2008). Los asuntos que no entran en estos dos carriles de negociación tienen dificultades para institucionalizarse.

Uno de los escollos para esta entrada en agenda de nuevos temas y preocupaciones en el ámbito del Ministerio es que se carece de instrumentos legales que integren el conjunto de los instrumentos destinados a promover la producción agropecuaria y para atender problemas agrarios y rurales. A diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que cuenta con una Ley Agraria nacional, sancionada cada 4 o 5 años y que regula el complejo sistema de subsidios, estímulos, seguros y créditos; de la Política Agraria Común Europea, o también de Brasil cuya Constitución indica la sanción de la Ley Agrícola, promulgada en 1991 y que reconoció entre otros una diversidad en el público para las cuestiones agrarias y agropecuarias (expresada en la existencia de dos ministerios distintos desde 1999 hasta 2016) (Mielitz Netto, 2011), Argentina no tiene una forma institucionalizada para la integración de políticas del sector.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Algunos autores ponderan como un avance la formulación del Plan Estratégico Agroalimentario en 2011 (Lattuada y Nogueira, 2011). Se trató de una iniciativa del Ministerio (posterior al gran conflicto entre el gobierno y el sector agropecuario) que buscó generar consensos y una visión común dentro del sector entre distintos tipos de productores, cadenas, empresarios, instituciones, que tuvo una amplia convocatoria. Dichos autores rescatan el proceso participativo en su formulación, pero aclarando que dicho plan podría tener mayor garantía de impacto si fuera discutido en el marco del Congreso Nacional y aprobado en forma de Ley.

A esto ha contribuido la dificultad histórica para concertar políticas agropecuarias y agrarias entre los distintos proyectos de gobierno y los principales actores del sector, el alto poder corporativo presente incluso en los diferentes organismos institucionales (en las Juntas que regulaban la producción anteriormente, o en distintas áreas o secretarías del Ministerio) y las reformas del neoliberalismo (privatización de infraestructura y juntas reguladoras, provincialización de los recursos naturales) que redujeron el ámbito de incidencia de las políticas, entre otros factores.

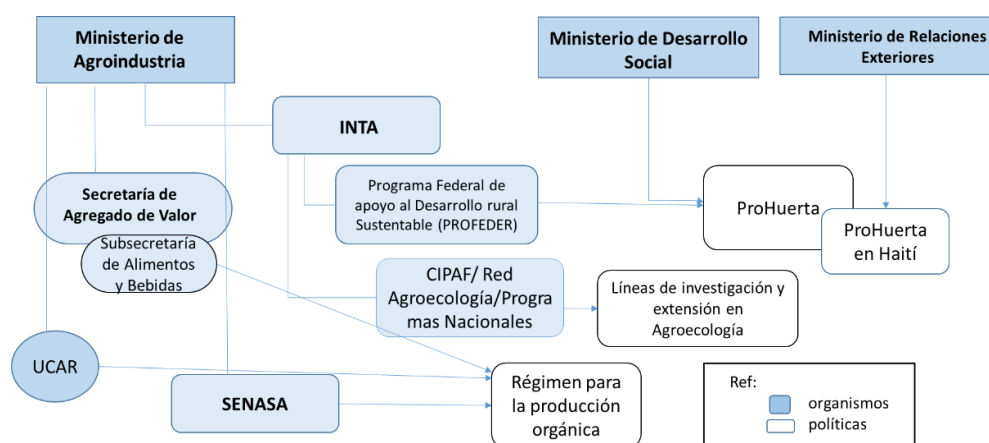
Derivado de estas debilidades institucionales es que no se cuenta con información actualizada sobre la situación social y productiva del sector. El último Censo Nacional Agropecuario de validez es de 2002.

En este contexto no existe en Argentina una política integral a favor de la agroecología (en tanto conjunto más o menos coherente de acciones y decisiones estatales para el desarrollo de formas de producción y de consumo vinculadas a los conceptos agroecológicos). Pero sí hay algunos programas e instrumentos que favorecieron el desarrollo de la agroecología en el país y que brindan experiencias interesantes.

En cuanto a los organismos que contienen estas políticas identificadas:

- El Programa ProHuerta es implementado por INTA y el Ministerio de Desarrollo Social. Su presupuesto operativo es aportado por el Ministerio, pero INTA aporta su estructura para la implementación y afecta personal. La experiencia de ProHuerta fue también llevada al ámbito de la cooperación internacional, destacándose el desarrollo del ProHuerta en Haití, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
- De INTA también dependen otras líneas de investigación y extensión en agroecología, articuladas en la Red de Agroecología, e integradas por otros instrumentos programáticos e institucionales.
- El régimen de producción orgánica es implementado por el Ministerio de Agroindustria a través de un área específica (la Secretaría de Agregado de Valor, Subsecretaría de Alimentos y Bebidas). El SENASA fiscaliza y actualiza las normativas y un conjunto de cuatro empresas certificadoras son las encargadas del control directo de las producciones. La promoción de reconversiones productivas se fue financiando con aporte externo del BID, gestionados por UCAR, a través de diferentes proyectos<sup>17</sup> (el Proyecto de Desarrollo de la Agricultura Orgánica Argentina – PRODAO- y el Programa de Gestión de Calidad y Diferenciación de Alimentos, I y II –PROCAL-).

Figura 7: Ubicación de las políticas que fomentan la agroecología en el organigrama institucional (año 2016)



Fuente: Elaboración propia

<sup>17</sup> Proyecto de Desarrollo de la Agricultura Orgánica Argentina (PRODAO) y el Programa de Gestión de Calidad y Diferenciación de Alimentos (PROCAL I y II –PROCAL-).

## El Programa ProHuerta y su anclaje en el enfoque agroecológico<sup>18</sup>

El Programa ProHuerta constituyó y aún constituye un canal de difusión de la agroecología entre los sectores populares urbanos, periurbanos y rurales y también en los ámbitos institucionales, en INTA mismo y en la red de instituciones con las que opera (Díaz, 2002; Cittadini, 2014). El mismo surgió para contribuir a la seguridad alimentaria de la población en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, en el marco de otras iniciativas organizadas desde el Estado que buscaban paliar la crisis alimentaria que se evidenciaba hacia fines de la década de 1980 (en un contexto de hiperinflación).

En sus inicios fue un proyecto integrado de INTA<sup>19</sup> de tres años de duración, destinado a promover la autoproducción de alimentos. En dicho contexto, la opción por la autoproducción de alimentos en pequeña escala no estaba exenta de controversias: su impacto en la alimentación se consideraba marginal y las experiencias previas adolecían de falta de escala, de continuidad y de ausencia de resultados evaluables (Díaz, 1999). En 1992 se sumó la entonces Secretaría de Desarrollo Social (luego Ministerio de Desarrollo Social) aportando fondos para su implementación. El proyecto comenzó a tener alcance nacional y se constituye en un programa interinstitucional, con su propio equipo de técnicos en cada región y construyendo una red de articulaciones con otras entidades y organizaciones de la sociedad (Areco, et al, 1995).

Desde su origen el Programa se propone promover “la autoproducción de alimentos, como alternativa para mejorar el acceso de los sectores de menores ingresos al consumo de hortalizas y otros alimentos” (Documento Base de ProHuerta, 1990). Se definió como destinatarios del proyecto a los sectores de la población que tanto en áreas urbanas, periurbanas o rurales enfrentan carencias alimentarias, así como diversas entidades u organismos que, trabajando en forma permanente con dicha población, desarrollan actividades de autoproducción de alimentos, apoyándolas en función de los componentes previstos en el proyecto.

A lo largo del tiempo fue desarrollando diferentes estrategias para abordar la problemática de la seguridad alimentaria. El enfoque agroecológico fue una pieza clave, así como el abordaje pedagógico que implementó desde los inicios, y la estrategia de integrar a los referentes comunitarios (los promotores de ProHuerta) (entrevista).

### Las bases operativas y el enfoque agroecológico

En su Documento Base, ya se establecían como componentes: la promoción, capacitación, asistencia técnica y aporte de insumos (fundamentalmente semillas), y se consideraban como elementos clave de su operatoria la participación de promotores voluntarios locales capacitados y motivados, los ajustes a las condiciones locales, el “aprender haciendo” y una dinámica de capacitación que incorporara los saberes de las comunidades junto a los contenidos técnicos. Además, tomando en cuenta el perfil de los destinatarios, se planteaba la promoción de una “alimentación saludable” prescindente del uso de agroquímicos” (Díaz, 2002a y Documento Base de ProHuerta).<sup>20</sup>

<sup>18</sup> La versión original de esta sección fue mejorada con los aportes de Daniel Díaz, Andrea Goldberg y Rosa Fernández.

<sup>19</sup> Se trataba de proyectos en los cuales participaban más de un Centro Regional de INTA.

<sup>20</sup> A medida que se desarrolla el programa se van incorporando y redefiniendo componentes. Por ejemplo, en 1995 los componentes que se mencionan ya son 6 en vez de 3: 1. Promoción y difusión, 2. Capacitación, 3. Asistencia técnica, 4. Generación y validación de tecnologías alternativas, 5. Articulación institucional y 6. Provisión de semillas (Areco, et al, 1995); paulatinamente fue dándose el proceso de diversificación de las huertas, incorporando otras producciones de granja: gallinas ponedoras (1994), pollos camperos y conejos (1996), frutales (1997) (entrevista e Informe ProHuerta 20 Años, 2011).



Fueron varios los motivos que orientaron la elección de la propuesta técnica, de producción orgánico/agroecológica (Díaz, 2002b):

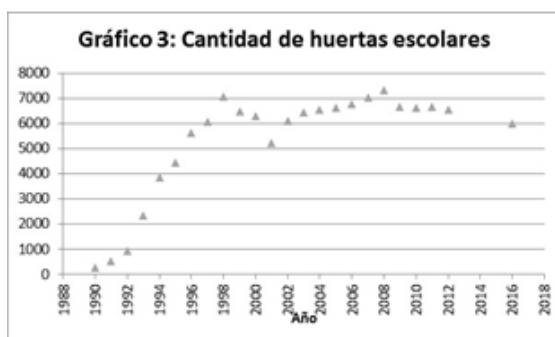
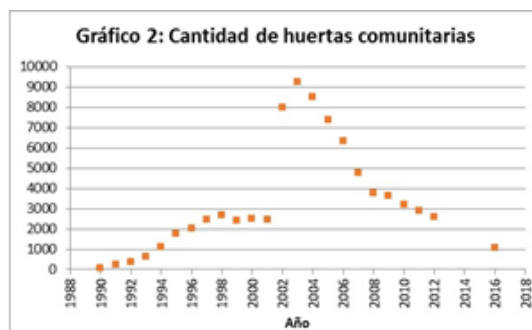
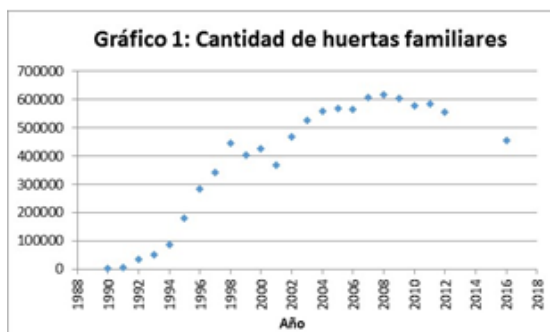
- La ubicación de las huertas en zonas urbanas y periurbanas.
- La imposibilidad de controlar el uso de productos agroquímicos
- Los limitados recursos monetarios de la población para costear insumos.
- La baja calidad productiva de los suelos y su necesidad de mejora.

Propiciando la seguridad y la soberanía alimentaria por medio de esta iniciativa de autoproducción de alimentos, se buscó lograr el mayor nivel posible de autonomía de los huerteros respecto de insumos externos. La propuesta orgánica (así catalogada en ese momento) preveía el uso de rotaciones, la asociación de cultivos y la incorporación de abonos para mejorar la calidad de los suelos (entrevista). Cronológicamente, en el marco del proyecto, el concepto que aparece primero es el de la huerta orgánica.

Éste luego se homologa a *agroecológica* en la medida que este segundo concepto va ganando terreno e instituciones académicas y fundamentalmente en las organizaciones sociales.

En la entrevista al fundador del ProHuerta, Daniel Díaz, nos comentaba sobre el origen de las concepciones agroecológicas puestas en práctica:

“Partiendo de distintas fuentes sobre agricultura orgánica en distintas partes del mundo tratamos de adaptarla a la realidad argentina. En tal adaptación, se incorporó como ejemplo de policultivo el sistema de chacra o milpa<sup>21</sup>, que incluía rotación y asociación de cultivos. El modelo de asociación de cultivos, posibilitó que en superficies muy chicas la huerta tuviera una gran diversidad de especies. Se promovían entre 14 y 20 especies, que aportaban a la estabilidad productiva y al control biológico de plagas y enfermedades en las huertas”.



Fuente: Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión (INTA) y D. Díaz.

<sup>21</sup> En México, se denomina milpa al sistema agrícola tradicional conformado por un policultivo, que constituye un espacio dinámico de recursos genéticos. Véase también el capítulo sobre México en esta misma obra.

Estos conceptos se plasmaron en una cartilla de capacitación del primer año del Programa: “En una huerta orgánica trabajamos con procesos que buscan imitar el funcionamiento de la naturaleza” (Díaz, 1990). La cartilla también se refiere a la producción de nutrientes como el “trabajo” de distintos organismos vivos, a la asociación de diferentes cultivos, su rotación y el uso de abono compuesto, entre otras precisiones para el cultivo de una huerta familiar, escolar o comunitaria.

Con el tiempo, el enfoque agroecológico llega a ser una marca del Programa. Así lo reconoce una investigación que indaga en la circulación de conocimientos en INTA:

“La comunidad de práctica que conforma Pro-Huerta posee una identidad definida y diferenciada de los otros grupos [de INTA] que realizan extensión e investigación. Ésta se expresa en las prácticas que realizan, en la visión agroecológica, en la población con la que trabaja y en los objetivos que persiguen” (Speranza, 2013: 33).

### Alcance territorial y estrategias para la seguridad alimentaria

Rápidamente el Programa logró una difusión en todo el país. Los Gráficos 1, 2, 3 y 4 muestran la evolución de la cantidad de huertas familiares, comunitarias, escolares y el total de huertas desde la creación del Programa.

Los datos muestran que la modalidad de la huerta familiar es la más difundida. La huerta comunitaria tuvo un crecimiento exponencial en torno a la crisis del año 2001. Sobre la situación actual, en 2016 el programa ejecutó alrededor de 103 millones de pesos (alrededor de 6,5 millones de USD), además de los recursos institucionales que involucra de INTA. En 2016 se contabilizaron 464.527 huertas en funcionamiento y se participó en 676 ferias en todo el país, con 8562 productores (Coord. Nacional de Transferencia y Extensión, INTA).

Más allá de los componentes principales del Programa, a lo largo de su evolución también se desarrollaron proyectos específicos para atender a distintas problemáticas vinculadas a la seguridad alimentaria (la autoproducción de semillas y la generación de bancos comunitarios rotatorios, la integración de la cuestión de la comercialización, proyectos de acceso al agua, entre otros).<sup>22</sup>

Los impactos obtenidos por ProHuerta en Argentina despertaron el interés internacional dando lugar a procesos de cooperación técnica, a través de la Cancillería Argentina en la región con Bolivia, Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras, Haití, etc. y en África con Mozambique y Angola. Desde 2005 la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) apoya la organización en Argentina de cursos anuales para disseminar esta propuesta en terceros países (Díaz, en prensa).

#### ProHuerta en Haití

De dichos procesos, quizás el más relevante sea el que se lleva a cabo en Haití desde hace once años. La cooperación argentina se conformó con el INTA, el Ministerio de Desarrollo Social y la Cancillería Argentina. Aquí el proyecto se transformó en ejemplo de cooperación sur-sur y triangular, a partir de las alianzas establecidas entre Haití, Argentina y distintos socios internacionales (ACDI, AECID, IICA, UNASUR, IICA, NDI, FIDA, PMA y PNUD, etc.). (Díaz, en prensa).

---

<sup>22</sup> Algunos de estos proyectos especiales que pueden mencionarse son: proyecto “Semillas de Vida” en Tucumán (2002) que dio lugar a la Red Orgánica de Semillas de Tucumán (ROST), un proyecto INTA sobre Rescate de especies (Cultivos Locales, 2011), o proyectos del Programa Territorios para favorecer el acceso al agua y la tierra en ciertas comunidades (Barreda y Ledesma, 2009; Godoy Garraza y Manzoni 2012).

Al finalizar el proyecto conjunto con Canadá (en 2013), la evaluación final del mismo realizada por organismos del Estado haitiano<sup>23</sup> dio cuenta de una mejora en la seguridad alimentaria del 92% de la población participante, al diversificar y mejorar la calidad de su dieta, incorporar mayor variedad de alimentos, incrementar la frecuencia de consumo y reducir significativamente el gasto destinado a los alimentos, que pasó de representar el 67% del presupuesto familiar antes del proyecto a un 33% al finalizar el mismo. Otras investigaciones revelaron que el proyecto presentó una relación Beneficio/Costo de 4 (por cada dólar invertido se obtenían 4 en hortalizas producidas por las familias participantes), aportando en términos nutricionales cerca de la mitad de los requerimientos familiares de Vitamina C, un tercio de los de Vitamina B6 y un cuarto de los de Vitamina A y Folatos (Díaz, 2015).

### La consolidación de la agroecología como línea de investigación y extensión en INTA

---

Antes de la consolidación de las nociones agroecológicas como tales, además de la experiencia de ProHuerta, otros desarrollos dentro de INTA vinculados al uso sustentable de recursos, a la sostenibilidad social y ambiental de los proyectos productivos desarrollaban conocimientos y tecnologías que hoy podrían vincularse a las nociones agroecológicas: tales como los desarrollos dentro de la agricultura conservacionista, el conocimiento específico sobre el tema suelos, sobre gestión ambiental (Zaccagnini, 2014) o servicios ecosistémicos, entre otros (entrevista). Pero en la última década algunos hitos institucionales ayudaron a una institucionalización de los enfoques agroecológicos en el sistema de investigación y extensión de INTA.

### Hitos de la institucionalización de la agroecología en INTA

---

La consolidación del trabajo de ciertos grupos de investigación vinculados a estas problemáticas en las últimas décadas y el propio proceso de la institucionalización del enfoque agroecológico como tal en la institución puede reconstruirse en base a ciertos hitos. Se trató de un proceso dinámico, que siguió el ritmo de ciertas decisiones, de otros procesos externos a la Institución y de la propia integración del enfoque agroecológico en la cartera de proyectos de INTA. A continuación, se detallan algunos hitos de este proceso, reconstruido en base a la revisión de las publicaciones de los grupos de trabajo y a entrevistas a algunos de sus protagonistas. Seguidamente se detalla un listado de factores que intervinieron en dicho proceso:

- Creación del Centro de Investigación para la Agricultura Familiar (CIPAF) en 2005 y sus Institutos por regiones.<sup>24</sup> Sus temas de trabajo iniciales se centraron en la caracterización socioeconómica de la agricultura de la familiar, en el desarrollo de tecnologías apropiables, en la comercialización para este segmento de productores, en el acceso a recursos básicos como tierra y agua y en la metodología de investigación acción participativa. La agroecología fue ingresando de la mano del trabajo pionero de algunos institutos, como un enfoque que les permitía potenciar los abordajes sobre estas temáticas (IPAF Región Pampeana, 2012). Las investigaciones comienzan a vincular la categoría agricultura familiar con el enfoque de la agroecología. Se desarrollan incluso seminarios con la presencia de los referentes M. Altieri y S. Sarandón (en 2007). Y se desarrollan experiencias de extensión con cursos de formación de formadores en agroecología y de apoyo a los procesos de transición agroecológica de los periurbanos (Marasas, 2012; Pérez, et al, 2013).

---

<sup>23</sup> Coordinadora Nacional de Seguridad Alimentaria (CNSA) de Haití.

<sup>24</sup> Se crean cinco institutos de investigación con cobertura macro regional en base a grandes agro-ecorregiones. Los de las regiones NEA, NOA y Pampeana se crean en 2005, los de Cuyo y Patagonia en 2010 y 2011 respectivamente). En la decisión de creación de los institutos, y no por ejemplo un nuevo programa de investigación, primó la idea de instalarlos con cierta autonomía en relación a las estructuras existentes a efectos de no correr el riesgo de que se tergiversen sus objetivos y que sea una institucionalización perdurable, con un desarrollo de su propia infraestructura (entrevista).

- Entre 2008 y 2011, algunos proyectos del Programa Nacional de Apoyo al Desarrollo de los Territorios recogen y sistematizan experiencias del Programa ProHuerta, apoyando también en ciertos aspectos a su desarrollo.<sup>25</sup>
- En la cartera de proyectos 2009-2012 se desarrolló un Proyecto Propios de Red de Agroecológica y de Producción Orgánica y el Proyecto Específico Acción Participativa de los procesos de transición hacia sistemas de producción agroecológicos.
- En 2013 se crea la Red Nacional en Agroecología (REDAE). Su creación buscó articular las iniciativas que desde distintas herramientas institucionales estaban desarrollando agroecología (los programas nacionales y sus proyectos, CIPAF, los Proyectos Regionales con Enfoque Territorial y el sistema de extensión). El objetivo general de la REDAE es articular la generación de conocimientos y capacidades institucionales y extra institucionales en agroecología a través de la creación de *Nodos de investigación* y de la formación de recursos humanos. Esta matriz programática cuenta con financiamiento para investigación, no así para promover emprendimientos agroecológicos.
- En 2014, como producto de Laboratorio AGRITERRIS<sup>26</sup> se edita el libro: *Agroecología en Argentina y Francia. Miradas Cruzadas* (Hernández, et al, 2014).
- En 2016 se realiza la Primera Reunión Científica del Programa de Recursos Naturales, Gestión Ambiental y Ecorregiones: "Aportes a la agroecología desde la gestión ambiental, la biodiversidad, el estudio del clima y el ordenamiento territorial".

Para el desarrollo de estos hitos colaboraron ciertos procesos, internos y externos a la institución:

- La experiencia acumulada de los programas de extensión como ProHuerta, Minifundio, Cambio Rural.
- El proceso de reivindicación y de visualización de la agricultura familiar a nivel nacional y regional, dado por la apertura a nuevas demandas de los agricultores familiares en el ciclo post crisis del 2001, por la experiencia que se venía desarrollando en Brasil y por el trabajo de organismos regionales e internacionales (MERCOSUR, FAO, UNASUR).
- El trazado de un plan Estratégico Institucional 2005-2015 en donde "se adecúa la misión institucional ampliando el sujeto de la acción al conjunto del Sistema Agroalimentario, estableciendo como ámbito de intervención las cadenas de valor, los sistemas productivos/agroecosistemas predominantes y los territorios" (INTA, 2004: 7), entre otras definiciones que revalorizan el rol de la agricultura familiar y el enfoque territorial.
- La recuperación de la autarquía financiera de INTA en 2002: que permitió la recuperación del planeamiento estratégico, el financiamiento para la investigación con las carteras de proyectos de 2004, 2006, 2009 y 2013 y la recuperación de la inversión en infraestructura.
- La priorización de las autoridades de INTA de la visión agroecológica, visible en algunas decisiones, como la progresiva valorización del tema en la cartera de proyectos y la creación de la Red de Agroecología.
- La creación de la Secretaría de la Agricultura Familiar en la órbita del Ministerio de Agricultura en 2014, nucleando a un conjunto de referentes en la temática que anteriormente habían estado vinculados a un programa social implementado por el Ministerio: el Programa Social Agropecuario.

---

<sup>25</sup> El Proyecto *Producción agroecológica para la inclusión social*, buscaba sistematizar la experiencia generada en ProHuerta, seleccionando 29 Sistemas Agroecológicos de Referencia distribuidos en diferentes regiones.

<sup>26</sup> Laboratorio virtual orientado a estudios relacionados con el desarrollo rural e integrado actualmente por instituciones de Argentina (INTA, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de La Plata y Universidad Nacional del Sur), Francia (INRA, IRD, CIRAD, Universidad de Toulouse, Montpellier SupAgro) y Brasil (Universidad Federal de Pará).

- La conformación dentro del Programa Cambio Rural II<sup>27</sup>, de grupos de productores que buscan viabilizar modelos productivos agroecológicos.

El conjunto de estas acciones va institucionalizando el enfoque agroecológico en INTA.

Actualmente, la Red de Agroecología articula las iniciativas institucionales sobre el tema, además de que seis de quince (6 de 15) Programas Nacionales de investigación de INTA cuentan con líneas explícitas en agroecología. Y comienzan a recogerse resultados que permiten contrastar estos desarrollos, como el caso que se detalla a continuación.

### La validación científica de las producciones agroecológicas. El caso del Módulo Barrow

Uno de los casos que integran la Red de Agroecología es un módulo agroecológico desarrollado en la Estación Experimental Agropecuaria Barrow (Centro Regional Buenos Aires Sur). En este módulo se practican ensayos con distintas secuencias de cultivos y prácticas asociadas.<sup>28</sup> El mismo es el resultado de una demanda desde el consejo local asesor de la experimental de generación de modelos productivos alternativos que atiendan los problemas de sustentabilidad, los que comenzaban a hacerse notorios desde mediados de la década pasada (entrevista), y se encuentra vinculado a la vez con una experiencia muy reconocida en la zona como modelo de producción agroecológica en agricultura de gran escala.<sup>29</sup>

En este módulo se planteó un modelo de trabajo de mayor diversidad y en donde la producción mixta sea la clave. Así en un periodo de cinco años implementaron rotaciones y cultivos consociados tanto para cosecha como para forraje<sup>30</sup>. Este esquema logró demostrar cómo un planteo agroecológico puede regenerar los procesos bióticos del suelo, disminuir fuertemente la dependencia de insumos externos y bajar los costos, con niveles de productividad similares a los medias de la zona y aumentando los márgenes brutos para el productor (Zamora y Barbera, 2016).<sup>31</sup> A pesar de los resultados positivos, esta experiencia es más aplicable en ciertas regiones, como las que propician un esquema de producción mixto con incorporación de ganadería. Aun así, tiene potencialidades para atraer la atención de una diversidad de productores.

---

<sup>27</sup>Éste es la continuación y relanzamiento del programa del mismo nombre desarrollado por el ministerio, pero implementado por el sistema de extensión de INTA, cuyo objetivo es lograr que las pymes agroalimentarias y agroindustriales, el sector cooperativo y los agricultores familiares capitalizados y/o con posibilidades de capitalizarse innoven, se asocien y se fortalezcan y, además, generen y gestionen proyectos que posibiliten el agregado de valor (INTA, 2014).

<sup>28</sup> El de Barrow no es el único, también hay módulos agroecológicos en la Estación Experimental Pergamino, en la Estación Experimental Marco Juárez, en la Estación Experimental Reconquista, en la Estación Experimental Bordenave, en el Centro de Inv. en Ciencias Veterinarias y Agronómicas de Castelar, Buenos Aires, en la Estación Experimental Don Domingo, en la Experimental María Barnetche, en la Estación Experimental Valle Inferior del Río Negro, entre otros. Y también existen módulos agroecológicos trabajados con toras instituciones por fuera de las unidades INTA.

<sup>29</sup>El módulo toma como inspiración el modelo de agroecología extensiva llevado a la práctica en la Estancia La Aurora por el productor Juan Kiehr. Este productor, con el asesoramiento del ingeniero agrónomo y uno de los principales referentes locales en agroecología Eduardo Cerdá, vienen implementando un modelo de agroecología extensiva en un campo de 650 ha desde hace veinticinco años, y fue reconocido por FAO como una de las 52 experiencias exitosas en agroecología en el mundo para 2016.

<sup>30</sup> Se produjo sobre cultivos en rotación y consociados (Avena-Vicia, Sorgo-Soja, y Sorgo como forrajeras, más Trigo Candeal-Trébol Rojo para cosecha) en forma mixta con ganadería vacuna.

<sup>31</sup> Los datos brindados por la experiencia del Módulo Barrow muestran que en el desarrollo de siete cultivos a lo largo de cinco años las prácticas agroecológicas pueden significar una disminución del 60% del costo directo de producción y un 244% de crecimiento del margen bruto (Zamora y Barbera, 2016).

Desde el Ministerio de Agroindustria se desarrolló una política que buscó regular la producción con procedimientos de la agricultura orgánica y agroecológica en los mercados internacionales. Esto ingresó en la agenda del organismo mediante un proceso de adecuación de la normativa nacional a las normas privadas europeas que promovían la producción orgánica a principios de los años noventa. En 1992 se dictaron las primeras resoluciones argentinas en respuesta a la oportunidad de nichos de mercado europeo. Europa había institucionalizado la normativa privada sobre orgánicos un año antes, por impulso del movimiento ambientalista.<sup>32</sup>

Sobre el origen de esta acción pública en Argentina, se destaca el impulso desde las propias entidades europeas, en vinculación con productores argentinos que exportaban y que ya habían comenzado a producir con estándares orgánicos. Ambos motivaron el desarrollo de las adecuaciones normativas en el país (entrevistas).

El régimen para la producción de orgánicos fue implementado a partir de los organismos descentralizados de control de la entonces Secretaría de Agricultura: SENASA e IASCAB<sup>33</sup>. Las acciones de gestión, control y desarrollo de normativa de estos organismos se complementan con las tareas de capacitación y promoción desarrolladas por el área de Alimentos de la Secretaría. Estas actividades de promoción se desarrollan recursos del BID a través de proyectos gestionados por la Unidad de Cambio Rural del Ministerio (PRODAO y PROCAL).

El concepto sobre agricultura orgánica que maneja el régimen de producción de orgánicos se enmarca también en el Codex Alimentario (Organización Mundial de la Salud y FAO). Según esta definición del Codex que se cita en un documento específico realizado por el IICA sobre Argentina: "...La agricultura orgánica es un *sistema holístico de gestión* de la producción que fomenta y realza la salud de los agroecosistemas, inclusive la diversidad, los ciclos y la actividad biológica del suelo. Esto se consigue aplicando, siempre que es posible, métodos agronómicos, biológicos y mecánicos, en contraposición a la utilización de materiales sintéticos, para desempeñar cualquier función específica dentro del sistema. [...] Los sistemas de producción orgánica se basan en normas de producción específicas y precisas cuya finalidad es lograr agroecosistemas óptimos, que sean sostenibles desde el punto de vista social, ecológico y económico" (IICA, 2009: 13).

Dentro de este concepto de la agricultura orgánica como un "sistema de gestión", SENASA es quien tiene a cargo la función de controlar y desarrollar la normativa. Pero es característico de este régimen que el SENASA delega a empresas certificadoras privadas el control directo de la calidad de la producción. EL SENASA controla con supervisiones cruzadas (a los productores y a las certificadoras) (entrevista) De este modo, son en primer lugar las certificadoras las que emiten la garantía de los estándares orgánicos de la producción.<sup>34</sup> En el origen del sistema se reglamenta que las certificadoras tienen que ser de capital nacional. Actualmente existen cuatro certificadoras habilitadas.<sup>35</sup> Desde 1992 a la fecha SENASA trabaja sobre la normativa adecuándola a los nuevos requerimientos internacionales y nuevos mercados que se

---

<sup>32</sup> En 1991, el consejo de Ministros de Agricultura de la UE adopta la regulación EEC Nro2092/91. La regulación da luz verde a la importación de productos orgánicos provenientes de otros países que no forman parte de la UE. [https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-legislation/historical-background/index\\_en.htm](https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-legislation/historical-background/index_en.htm)

<sup>33</sup> IASCAB (Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal), hoy incorporado al S Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). En 1996 se logra el reconocimiento de la UE del sistema de control y de la normativa argentina para la producción vegetal. En el año 2000 es también reconocida para los productos de origen animal. En 1997 es reconocida también por Suiza.

<sup>34</sup> El objetivo principal de las certificaciones es distinguir el producto con fines comerciales.

<sup>35</sup> Los funcionarios entrevistados reconocen que esto tuvo el valor de no encarecer las certificaciones con costos internacionales (entrevistas).

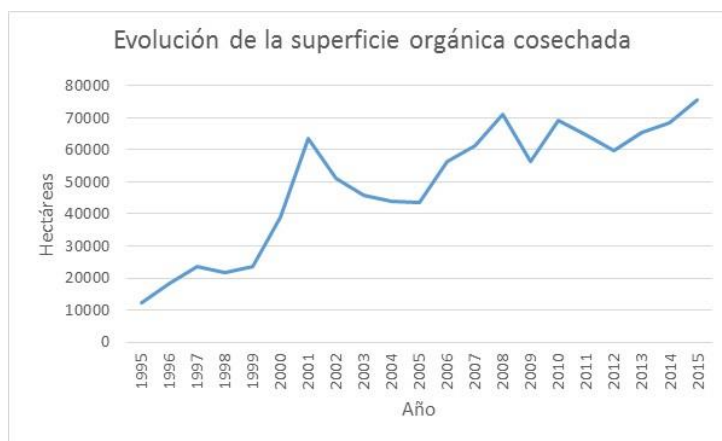
busca abastecer y también a las particularidades de nuevas actividades que se van incorporando a la producción orgánica (entrevista). En 1999 las normativas (resoluciones) adquirieron carácter de Ley,<sup>36</sup> normando qué es la producción orgánica en Argentina.

A diferencia de las orientaciones que adoptan centralmente el término “agroecología”, la práctica de la producción orgánica certificada ha estado más orientada a la sustitución de insumos (sintéticos por orgánicos aprobados) que hacia el rediseño de los agroecosistemas. Por eso la palabra “orgánica”, a medida se desarrolla este régimen, se va a relacionar con una producción destinada al mercado externo y con el sello de la certificación privada.

La producción orgánica Argentina se posiciona muy bien internacionalmente. Se destaca por el desarrollo del sistema normativo, va ganando mercados y alimenta las estadísticas sobre la producción orgánica en el mundo, ya que al integrar la producción de lana orgánica de ovinos patagónicos en las estadísticas oficiales, el país pasa a ocupar el segundo lugar en superficie de tierra dedicada a la producción orgánica, luego de Australia. Algunos datos de 2015 permiten dimensionar el alcance de esta producción. A continuación se presenta un gráfico con la evolución de la superficie cosechada desde 1995:<sup>37</sup>

- La superficie bajo seguimiento orgánico para producción ganadera es de 2,8 millones de ha.
- La superficie agrícola bajo seguimiento orgánico fue de 234.000 ha.
- La superficie cosechada en 2015 fue de 75.472 ha.
- El destino de la producción tuvo la siguiente composición: 53% a Estados Unidos, 30% a países de la Unión Europea (los principales destinos europeos son Países Bajos, Alemania, Dinamarca y Reino Unido). Dentro del 17% restante se exporta a Canadá, Ecuador, Rusia, Brasil, Bolivia, entre otros.

Figura 8 - Evolución de la superficie orgánica cosechada.



Fuente: SENASA en base a datos de las certificadoras privadas.

El gráfico de evolución de la superficie cosechada muestra la tendencia creciente de producción de orgánicos con algunos vaivenes relacionados con el comportamiento del mercado internacional. La recuperación que comienza a darse en el año 2006 está vinculada con el crecimiento de la importación de productos orgánicos argentinos por parte de Estados Unidos, que en el año 2011 comienza a liderar estas importaciones.

<sup>36</sup>Ley 25.127 y Decretos Reglamentario 97/00 y 206/00 (para producción vegetal y animal).

<sup>37</sup> Datos de SENASA, 2015, en base a la información brindada por las empresas certificadoras.

El régimen de orgánicos no maneja un presupuesto específico para ampliar la promoción de las reconversiones productivas hacia lo orgánico. La política tiene buena gobernanza en términos de la participación en la misma de las asociaciones de productores orgánicos, pero hay dificultades para seguir ampliándose a más productores, y a diferentes tipos de productores, a pesar de las oportunidades dadas por el mercado (entrevista).

El área de Orgánicos dentro del Ministerio ha elaborado un Plan Estratégico dentro de lo que fue el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal (PEA 2010-2020) (Ministerio de Agroindustria, 2016). En ese marco se realizó un diagnóstico con las organizaciones y las cámaras empresariales en el que se identificaron como desafíos el incremento del volumen y la diversidad de la producción orgánica, para alcanzar a un mayor número de productores, al productor asociado, al productor periurbano y el desarrollo del mercado interno de orgánicos.

Tanto desde SENASA como desde el Área de Alimentos del Ministerio de Agroindustria se impulsa actualmente un Proyecto de Ley para la promoción de la producción orgánica, que contempla el desarrollo de un sistema de ventajas económicas e impositivas a grupos de productores que busquen hacer la transición hacia la producción orgánica. El proyecto tiene media sanción del Congreso Nacional, y tiene dificultades para terminar de concretarse. Iniciativas como esta, que promueven la producción alternativa no se negocian en el marco de los dos carriles de negociación tradicionales, ya que no son productos típicos de la producción exportable pampeana ni tampoco de las economías regionales. Se trata más bien de una estrategia de diferenciación diversificada, posible de implementar en un gran número de producciones pero que en volumen no es significativa de una región en particular. La falta de instrumentos de integración de políticas que puedan valorar el aporte de este conjunto de producciones dificulta su institucionalización.

#### Otras formulaciones de políticas que contemplan enfoques agroecológicos

Otro conjunto de políticas incluye en sus formulaciones planteos agroecológicos en distinta medida: algunas explícitamente pero no han sido aún implementadas, otras lo hacen desde la preocupación por la sustentabilidad. Existen también otros procesos a nivel municipal o provincial de formulación de políticas de promoción de la agroecología.

#### Ley de Reparación histórica de la Agricultura Familiar

La Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar fue sancionada a fines de 2014 y promulgada a comienzos de 2015. Declara de interés público a la “Agricultura Familiar, Campesina e Indígena”, y subraya su aporte en términos de seguridad y soberanía alimentaria y como especial destinataria para promover procesos sostenibles de producción. En su artículo 21 establece respecto a la conservación y el mejoramiento de suelos: “Se instrumentarán para tal fin políticas activas y participativas, con métodos sustentables, priorizando las *prácticas agroecológicas*<sup>38</sup> a fin de preservar, recuperar y/o mejorar las condiciones de la tierra, especialmente de la productiva”. Aunque el enfoque agroecológico sólo aparece explícitamente allí, gran parte del texto de la ley retoma los planteos de sustentabilidad tanto en su dimensión económica, como ambiental y social que caracterizan a la agroecología.

Varias provincias han adherido a esta ley: Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Jujuy y Neuquén; mientras que Chaco, Río Negro, Salta, San Juan y Misiones cuentan con leyes propias. El cambio de gobierno a nivel nacional en diciembre de 2015 supuso rever el proceso de reglamentación, lo cual devino en una dilación y al momento la ley aún no cuenta con un presupuesto propio, lo que demora a la vez la posibilidad de avanzar en la implementación de la misma.

---

<sup>38</sup> La cursiva es nuestra.



## Ley de Bosques Nativos como estímulos a planteos agroecológicos

La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, sancionada en 2007 y reglamentada en 2009, persigue la conservación, restauración y/o manejo sostenible de los bosques nativos de la República Argentina, para lo cual establece un régimen de fomento con fondos públicos. Tiene como objetivo regular el proceso de desmonte producto del avance de la frontera agrícola, o de otras actividades sobre los bosques nativos. La ley fue producto de fuertes debates en el Congreso Nacional y su sanción fue vista como una política pública ambiental ambiciosa que, en principio, lograría controlar los cambios en el uso del suelo. Sin embargo, su implementación y la forma en que cada provincia adhirió a la misma se encuentran lejos de ser a-problemáticas.<sup>39</sup>

La ley establece pautas para el ordenamiento territorial de bosques nativos a través de la zonificación de los mismos, de acuerdo a tres categorías: categoría I (roja) para áreas de conservación que no deben transformarse (sólo para uso de comunidades indígenas e investigaciones científicas); categoría II (amarillo) para áreas de mediano valor de conservación que pueden tener usos sostenibles; y categoría III (verde) para áreas de bajo nivel de conservación que puede transformarse total o parcialmente. En relación a los usos sostenibles de la categoría II, si bien la ley no hace mención explícita a planteos agroecológicos, representa una alternativa cierta para la presentación de proyectos de esta índole. A mayo de 2014 se habían presentado 874 Planes de Gestión Sostenible de Bosques Nativos, como parte de la implementación de la ley (Haro Herrera, 2015). Estos dan lugar a manejos de tipo silvopastoriles, agroforestería o manejo de bosques con ganadería integrada (MBGI), que pueden enmarcarse dentro de las concepciones agroecológicas.

## Leyes provinciales de agroecología y proyectos de ley en discusión en el Congreso Nacional

Existen también leyes provinciales de promoción de la agroecología, como la *Ley de Fomento a la Producción Agroecológica* de la provincia de Misiones, sancionada en 2014. La misma es el único instrumento legislativo provincial vigente que busca fomentar la producción agroecológica de forma concreta, con asignación de fondos para la entrega de créditos y la creación de un sistema de certificación participativa. Pero esta Ley no ha sido aún reglamentada, por lo tanto, no tiene vigencia y no ejecuta presupuesto (Segesso, 2015).

El cuerpo del texto de esta ley sirvió de base para la elaboración de un proyecto de ley a nivel nacional, con el título de *Régimen de Fomento a la Producción Agroecológica Rural y Urbana*. Como la ley provincial de Misiones, el proyecto nacional establece un sistema de certificación participativa, un mecanismo de incentivos fiscales y herramientas financieras para promover transiciones agroecológicas, dando especial participación a INTA tanto en asistencia técnica como en la generación de tecnologías apropiadas. También da especial atención a la agricultura urbana como forma de producción de alimentos saludables, de cercanía y con rol estratégico para la seguridad y soberanía alimentarias.

## Regulaciones para el uso de agroquímicos

Sumado a la discusión y promulgación de leyes y proyectos explícitamente agroecológicos, otra serie de normativas pueden tener gran potencialidad para este tipo de modelos productivos. Es el caso de las ordenanzas que regulan y controlan el uso de productos fitosanitarios (a los que se suele aludirse también como agroquímicos o agrotóxicos, según la valoración de los mismos). En los últimos años ha comenzado

---

<sup>39</sup> La zonificación es realizada por las Provincias de acuerdo a criterios específicos de cada una de ellas. Ya que, a partir de la reforma constitucional de 1994, los recursos naturales -entre ellos los bosques nativos- son de las Provincias, por lo cual la Ley Nacional requiere de leyes provinciales para su implementación. Como resultado, los límites provinciales separan el territorio que forman parte de un mismo ambiente con diferentes categorías.

a manifestarse un cuestionamiento al tipo de uso de estos productos, desatándose conflictos en áreas periurbanas que se ven afectadas por las fumigaciones. A raíz de esto, varias normas y proyectos legislativos a nivel provincial y municipal buscan poner límites a la fumigación en estas áreas.

La discusión discurre centralmente sobre los radios de prohibición para las aplicaciones y sobre el tipo de productos permitidos según su peligrosidad toxicológica. En estos proyectos aparece con fuerza la idea de promover planteos agroecológicos para las zonas que quedan comprendidas en las franjas de no fumigación (Martínez y Aranguren, 2015). En general, la promoción de planteos agroecológicos no se encuentra pormenorizada, por lo que estas áreas, y los productores comprendidos en ellas, no encuentran un panorama claro sobre cómo transitar la reconversión productiva, pero la imposibilidad de utilizar agroquímicos es un estímulo a la exploración de enfoques agroecológicos como alternativa.

## Conclusiones

Para finalizar, puede concluirse que ha habido ciertas políticas que en las últimas décadas han impulsado el desarrollo de visiones y prácticas agroecológicas en Argentina, pero que esto se ha dado en el marco de un sistema institucional que carece de herramientas de integración de políticas, y que por lo tanto insta al desarrollo dual de políticas: por un lado las políticas de promoción de la producción convencional (incluyendo el monocultivo a gran escala, el uso de agroquímicos y el uso de OGM) y por otro lado algunas experiencias alternativas como el caso de las políticas a favor de la agroecología, no planteándose estas últimas como estrategias para la reconversión productiva del sistema en su conjunto. Es lógico que esto suceda en un sistema productivo fuertemente orientado a la exportación de productos de base agropecuaria. Sin embargo, las tendencias actuales y posibles de los mercados, así como los impactos que la producción intensiva en insumos en grandes extensiones de tierra está produciendo, pueden llevar a una reconsideración sobre la necesidad de políticas de mayor incentivo a la producción agroecológica.

Puntualmente desde las políticas que promovieron y promueven en el país la agroecología, éstas se han focalizado: (1) en el campo de la economía social (ProHuerta) promoviendo la autoproducción de alimentos y el apoyo a los productores familiares y comunitarios; (2) en el sector de la producción orgánica certificada, destinada a la exportación y (3) complementariamente en el fortalecimiento de líneas de investigación y extensión de INTA en agroecología. Desde estas políticas se aportó a un proceso de difusión de la agroecología que ya estaba en marcha a través de distintas redes, fortaleciendo el mismo, colaborando con la instalación de las preocupaciones y las alternativas que promueve la agroecología. Esto ha permitido ganar terreno en lo discursivo, en el desarrollo de herramientas dentro de los sistemas científico-tecnológicos, en ensayos de estrategias de cooperación internacional, pero en un campo institucional refractario a la integración de políticas.

La efectiva expansión de las formas de producción agroecológicas dependerá de varios factores. En principio de la propia evolución de los procesos productivos y sus limitaciones (los procesos ya señalados de degradación de recursos, contaminación de napas freáticas, compactación de suelos, entre otros y de las dificultades para adaptarse a los crecientes estándares internacionales de calidad e inocuidad). También de la propia fuerza de las experiencias que hemos relatado, que en la medida que converge en procesos más amplios pueden acelerar su generalización. Particularmente relevante será la forma en que evolucione el reconocimiento y la puesta en marcha de dispositivos favorables a la agroecología en el seno del INTA, la generación y difusión de información científica que respalde las propuestas y la posibilidad de pensar articulaciones entre los instrumentos. Así también el trazado de alianzas para posicionar el tema en la agenda pública, de la mano de la concientización ciudadana y la evolución de la opinión pública, ligada al aumento de las preocupaciones sobre el cambio climático, la seguridad alimentaria y la calidad de nuestra alimentación, así como la forma en que las organizaciones sectoriales puedan recoger estas problemáticas. La acción del conjunto de actores de la sociedad y particularmente del mundo científico no será neutra en esta posible evolución.

## Referencias Bibliográficas

- Altieri, M. A. Un Enfoque Agroecológico para el Desarrollo de Sistemas de Producción Sostenibles para los Pequeños Agricultores Andinos, San José de Costa Rica, IICA Biblioteca Venezuela, 1996.
- Aparicio, V. C.; De Gerónimo, E.; Hernández Guijarro, K.; Pérez, D.; Portocarrero, R. y Vidal, C., Los plaguicidas agregados al suelo y su destino en el ambiente, Buenos Aires: Ediciones INTA, 2015.
- Aparicio, V. C.; De Gerónimo, E.; Marino, D.; Primost, J.; Carriquiriborde, P.; Costa, J. L. Environmental fate of glyphosate and aminomethylphosphonic acid in surface waters and soil of agricultural basins, en *Chemosphere*, Vol. 93, N°. 9, p. 1866-1873, 2013.
- Aparicio, V.; Costa, J. L. y Zamora, M. Nitrate leaching assessment in a long-term experiment under supplementary irrigation in humid Argentina, en *Agricultural Water Management*, Vol. 95, p. 1361-1372. 2008.
- Areco, P.; Bordelois, G.; Catalano, J. Diagnóstico de la pobreza rural en Argentina, en Sagredo, G. (Comp.), *Estrategias, Programas y Actividades para el Combate de la Pobreza Rural en los países del Cono Sur y las instituciones del PROCODER*, IICA, Santiago de Chile, 1995.
- Balsa, J. Discursos y políticas agrarias en Argentina, 1920-1955, en *América Latina en la Historia Económica. Revista de Investigación*, vol. 19, núm. 3, p. 98-128. 2012.
- Barreda M.; Ledesma S. Acceder al agua: relatos y reflexiones desde algunas experiencias de organización en los territorios, Buenos Aires: INTA, 2009.
- Barsky, O.; Gelman, J. Historia del Agro Argentino: desde la conquista hasta comienzos del siglo XXI, Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 3ra. Ed., 2009.
- Bertram, N. y Chiacchiera, S. Ascenso de napas en la Región Pampeana: ¿Consecuencia de los cambios en el uso de la tierra?, Informe INTA EEA Marcos Juárez, 2016.
- Cittadini R. Límites y potencialidades de la agroecología. Lecciones de una experiencia a gran escala: el programa ProHuerta en Argentina. en: Hernandez V., Goulet, F., Magda, D., Girard, N., Sarandon, S., (Eds.), *Enfoques cruzados de la agroecología en Argentina y en Francia*, Buenos Aires: Ediciones INTA. 2014. p. 117-133.
- Cordone, G. Costos ocultos del deterioro del suelo, en Congreso Mundo Soja Maíz, Buenos Aires, 3 y 4 de julio, 2012.
- Cruzate G. A.; Casas, R. R. Extracción y balance de nutrientes en los suelos agrícolas de la Argentina, *Informaciones Agronómicas en Hispanoamérica*, núm. 6, p. 7-14. 2012.
- Cultivos Locales. Construyendo Soberanía Alimentaria desde la Agricultura Familiar, INTA, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ministerio de Desarrollo social, Profeder, ProHuerta: Buenos Aires, 2011.
- Díaz, D. (en prensa), "ProHuerta. Su historia", INTA 60 años, Buenos Aires: Ediciones INTA.
- Díaz, D. Ejemplos de Experiencias educativas orgánicas: Programa Pro-Huerta. En Pais, M. (Comp) *La producción Orgánica en Argentina: historia, evolución y perspectivas*, MAPO: Buenos Aires, 2002<sup>a</sup>, P. 533-540.
- Díaz, D. Seguridad Alimentaria y autoproducción orgánica de alimentos frescos. En Pais, M. (Comp) *La producción Orgánica en Argentina: historia, evolución y perspectivas*, MAPO: Buenos Aires, 2002<sup>b</sup>, P. 573-576.
- Díaz, D. El ProHuerta en Haití. Cooperación Sur Sur y Triangular en Seguridad y Soberanía Alimentaria, Buenos Aires: Ediciones INTA, 2015.
- Díaz, D. (1999), *Con Poco y Desde lo Pequeño (la experiencia del Pro-Huerta)*, en *Revista Observatorio Social*, Núm. 4, octubre. 1999.
- Díaz, D. (Coord.) *La huerta orgánica familiar (manuales de capacitación, editados como fascículos al inicio del Programa)*, re-editada como publicación INTA en 1998 y actualizada en 2008.
- Documentos Base de ProHuerta, INTA, Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación y Secretaría de Desarrollo Social (Presidencia de la Nación). Unidad de coordinación del Proyecto (Versión original) Marzo/Abril, 1990.
- El INTA que queremos: Plan Estratégico Institucional (2005-2015). Buenos Aires: Ediciones INTA, 2004.

Esperanza, M. ¿Cómo circulan los conocimientos en las organizaciones? El caso de una organización de ciencia y tecnología, Tesis de Maestría en Estudios Organizacionales, Universidad de San Andrés, Argentina, 2013.

García, F. O.; Taboada, M. A.; González San Juan, M. F. y Picone, L. El nitrógeno en la agricultura argentina: alternativas para incrementar la eficiencia de uso en los cultivos de grano y mitigar las emisiones de óxido nitroso, en IPNI LASC, 2013. Disponible en <http://lacs.ipni.net/article/LACS-1210>.

Godoy Garraza G. y Manzoni M. Agricultura familiar y acceso a la tierra urbana y periurbana, Buenos Aires: Ediciones INTA, 2012.

González, D. V.; Tamagno, L.; Sánchez, N. Sistema agroproductivo y conflicto ambiental en la región pampeana, en VI Congreso Argentino y Latinoamericano de Antropología Rural, Ciudad de Salta, 17 al 20 de mayo de 2016.

González, C.; Alarcón, P.; Castellano, G.; Echegaray, A.; Luliano, R. y Lara, I. (Coords.) Relevamiento de la utilización de agroquímicos en la Provincia de Buenos Aires. Mapa de situación e incidencia sobre la salud. La Plata: Defensor del Pueblo y Universidad de La Plata, 2015.

Haro Herrera, E. Analyse cartographique et socio-économique de la répartition des plans de la loi de protection des forêts d'Argentine n°26.331. París: Universidad París 1 Panteón-Sorbona, 2015.

Hernández, V; Goulet, F.; Magda, D. y Girard, N. (Comps.) La Agroecología en argentina y Francia. Miradas cruzadas, Buenos Aires: Ediciones INTA, 2014.

INFOAM (International Foundation for Organic Agriculture), Declaración de Mar del Plata. 1998. Disponible en: <http://www.documentacion.edex.es/docs/0604LERnoa.pdf>

Informe Pro Huerta 20 Años: Plan Operativo Anual 2011 y Resultados 2010. Buenos Aires: INTA/Ministerio de Desarrollo social, 2011.

Instituto Interamericano para la Cooperación en Agricultura (IICA), La producción orgánica en la Argentina: compilación de experiencias institucionales y productivas, Buenos aires: IICA, SENASA, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2009.

IPAF Región Pampeana, Los procesos participativos para la construcción de líneas de investigación, Buenos Aires: Ediciones INTA, 2012.

Lattuada, M. y Nogueira, M. E. Capacidades estatales y políticas públicas. Una propuesta para el abordaje de las políticas agropecuarias en la Argentina contemporánea (1991-2011), en Estudios Rurales, Vol. 1, Núm. 1, Universidad Nacional de Quilmes, 2011, p. 30-54.

Lázzaro, S. La política agraria del peronismo. El acceso a la propiedad de la tierra: arrendamientos y colonización, en Balsa, J. y Lázzaro, S. (Coords.), Agro y política en Argentina, Tomo II: Actores sociales, partidos políticos e intervención estatal durante el peronismo, 1943-1955, 1930-1943, Buenos Aires: CICCUS, 2015, p. 115-196.

Lázzaro, S. Políticas públicas en torno a la propiedad de la tierra. Procesos de arrendamiento y colonización, en Balsa, J. y Lázzaro, S. (coords.) Agro y política en Argentina, Tomo I: El modelo agrario en cuestión, 1930-1943, Buenos Aires: CICCUS, 2012, p. 203-262.

Manzanal, M. y Rofman, A. B. Las economías regionales de la Argentina: crisis y políticas de desarrollo, Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1989.

Marasas, M. (Comp.) El camino de la transición agroecológica, Buenos Aires: Ediciones INTA, 2012.

Martínez, L. E. y Aranguren, C. I. Espacios periurbanos en la región pampeana: una aproximación al análisis de los conflictos socio-ambientales y las políticas públicas, en IX Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Buenos Aires, 3 al 6 de noviembre de 2015.

Mieitz Netto, C.G.A. A política agrícola brasileira, sua adequação e sua funcionalidade nos vários momentos do desenvolvimento nacional, en Bonnal, P. y Pereira Leite, S. (Orgs.), Análise Comparada de Políticas Agrícolas. Uma agenda em transformação, Río de Janeiro: CIRAD/Mauad, 2011, p. 221-252.

Ministerio de Agroindustria, Complejo de Producción Orgánica. Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal PEA2 2010-2020. 2016.

Nogueira, R. M.; Ramos A. y Cuervo, M. Propuesta de institucionalidad para una estrategia de desarrollo rural de la Argentina, en Schejtman, A. y Barsky, O. (Comps.) El desarrollo rural en la Argentina, Buenos Aires: Siglo XXI, 2008, p. 527-542.

O' Donnell, G. Un juego imposible: competición y coaliciones entre partidos políticos en Argentina entre 1955 y 1966, en Modernización y autoritarismo, Buenos Aires: Paidós, 1972.

Obschatko, E. La importancia de la Agricultura Familiar en la República Argentina, en Barril García, A. y Almada, F. (ed.) La Agricultura Familiar en los Países del Cono Sur, Asunción: IICA, 2007, p. 7-34.

Oszlak, O. Políticas sectoriales, transformación estatal y gobernabilidad en la Argentina: de Menem a Kirchner, en X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública, Santiago de Chile, 18 al 21 de octubre de 2005.

Oszlak, O. Burocracia estatal: política y políticas públicas, en POSTData Revista de Reflexión y Análisis Político. Vol. XI, Buenos Aires. 2006.

Ottmann, G. Reflexiones desde la Agroecología sobre la experiencia de Agricultura urbana. Rosario, Argentina, en XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología y VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, ALAS, Buenos Aires, 31 de agosto al 4 de septiembre de 2009.

Pérez, M., González, E. G., Pérez, R. A., De Luca, L. C., Tito, G. M., Propersi, P. y Albaneci, R. Protocolo recomendatorio para el desarrollo de producciones agroecológicas en zonas periurbanas de localidades pampeanas con restricciones para las pulverizaciones con agroquímicos, Buenos Aires: Ediciones INTA, 2013.

Proyecto de Ley de Fomento a la Producción Agroecológica Rural y Urbana, Cámara de Diputados de la Nación. Autora: Dip. Alicia Ciciliani. Diputada por Santa Fe del Partido Socialista, en nombre del interbloque Progresistas. Estado parlamentario: en comisiones en Cámara de Diputados.

Proyecto de Ley de Promoción de la Agricultura Orgánica, Cámara de Diputados de la Nación.

Pucciarelli, A. R. Dilemas irresueltos de la historia reciente de la sociedad argentina, en Pucciarelli, A. (Ed), La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN, Buenos Aires: Eudeba, 1999, p. 23-56.

Regúneaga, M. y Tejada R., A. La política de comercio agrícola de Argentina y el Desarrollo sustentable, Documento de Fondo, Nro 55, International Centre for Trade and Sustainable Development, 2015.

Restovich, S. B., Andriulo, A. E. y Améndola, C. Introducción de cultivos de cobertura en la rotación soja-maíz: efecto sobre algunas propiedades del suelo”, en Revista Ciencia del Suelo (Argentina), Núm. 29 (1): p. 61-73, 2011.

Rodríguez, J. L. Consecuencias económicas de la difusión de la soja genéticamente modificada en Argentina, 1996-2006, en VV.AA., Los señores de la soja: la agricultura transgénica en América Latina, Buenos Aires: Ciccus, 2010, p. 155-259.

Rouquié, A. Poder militar y sociedad política en Argentina, 2 Tomos, Buenos Aires: Emecé, 1986.

Sarandón, Santiago Javier y Flores, C. C. (Eds.) Agroecología: bases teóricas para el diseño y manejo de agroecosistemas sustentables. La Plata: UNLP, 2014.

Sarandón, S. J. (Ed.) Agroecología. El camino hacia una agricultura sustentable, La Plata: Ediciones Científicas Americanas. 2002.

Sasal, M. C., Andriulo, A. E. y Taboada, M. A. Soil porosity characteristics and water movement under zero tillage in silty soils in Argentinian Pampas, en Soil Till, 87: 9-18, 2006.

Schmidt, M. A.; Langbehn, L. La “Ley de Bosques” en Argentina, entre la regulación de la deforestación y la continuidad de los conflictos territoriales, en VI Congreso Argentino y Latinoamericano de Antropología Rural, Ciudad de Salta, 17 al 20 de mayo de 2016.

Segesso, F. Agricultura ecológica: Caso Misiones. La cuna de la yerba mate, Greenpeace Argentina, 2015. Disponible: <http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/graphics/2015/agricultura/Agricultura%20Ecologica%20Caso%20Misiones.pdf>

Sili, M.; Soumoulou, L. La problemática de la tierra en Argentina: Conflictos y dinámicas de uso, tenencia y concentración. Roma: FIDA, 2011.

Smulovitz, C. El sistema de partidos en Argentina: Modelo para armar, en *Desarrollo Económico*, Núm. 101, Vol. 26, 1986.

Souza Casadinho, J. La agroecología: bases científicas, historia local y estrategias productivas en la construcción de un espacio de desarrollo integral, ético y humano, en Hernández, V. (op. cit.), p. 13-29.

Strada, J.; Vila, I. A. La producción de soja en Argentina: causas e impactos de su expansión, en *La revista del CCC* [en línea]. Julio / Diciembre 2015, n° 23. Buenos Aires. Disponible en: <http://www.centrocultural.coop/revista/articulo/550/>

Trossero, M. E.; Cordone, G. E.; Donnet, L. ¿Cuánto vale la pérdida de carbono orgánico del suelo?, en XIX Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo, Mar del Plata, 16 al 20 de abril de 2012.

Ulle, J. Una primavera de base agroecológica, publicación online, 2016. <http://inta.gob.ar/noticias/una-primavera-de-base-agroecologica>

Vigna, M.; López, R. y Gigón, R. Efecto de glifosato sobre cultivares de raigrás en el SO de Buenos Aires, en XVII Congreso Latinoamericano De Malezas, Ouro Preto, MG, Brasil, 2008.

Vila-Aiub, M. M.; Balbi, M. C.; Gundel, P. E.; Ghersa, C. M.; Powles, S. B., Evolution of glyphosate-resistant Johnsongrass (*Sorghum halepense*) in glyphosate-resistant soybean, *Weed Science*, n° 55: p. 566-571. 2007.

Yanniccari, M.; Vila-Ayub, M.; Istilart C.; Acciaresi, H. Glyphosate resistance in perennial ryegrass (*Lolium perenne* L.) from Argentina, en *Crop Protection*, 32, p. 12-16, 2012.

Zaccagnini, M. e. (Ed.) Manejo de biodiversidad en agroecosistemas. 22 Años de aportes del INTA en Investigación, Extensión y Capacitación (1990-2011), Buenos Aires: Ediciones INTA, 2014.

Zamora, M.; Barbera, A. Resultados de 5 años de experiencias en sistemas extensivos agroecológicos, en 1ra. Reunión Científica del Programa Nacional Recursos Naturales, Gestión Ambiental y Ecorregiones, Buenos Aires, 30 de agosto al 1 de septiembre de 2016.

### Capítulo 3. A experiência brasileira de construção de políticas públicas em favor da agroecologia

*Claudia Schmitt, Paulo Niederle, Mario Ávila, Eric Sabourin, Paulo Petersen, Luciano Silveira, William Assis, Juliano Palm, Gabriel B. Fernandes*

#### Introdução

No decorrer das duas últimas décadas, o Brasil experimentou a formulação e implantação de um amplo conjunto de políticas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e à promoção do desenvolvimento rural. Ao longo desta trajetória, estabeleceu-se um debate público em torno das possibilidades, mas também dos limites e obstáculos, à construção de políticas de promoção da agroecologia. Esse processo culminou com a criação, em 2012, da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO), instrumentalizada, em 2013, pelo I Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (I PLANAPO), atualizado e revisado em 2016 (II PLANAPO).

O percurso que ensejou a construção desta política nacional encontra suas raízes em um conjunto diferenciado de iniciativas de base local, desenvolvidas nas diferentes regiões do Brasil, sobretudo a partir do final dos anos 1970, por um universo heterogêneo de organizações não governamentais, em parceria com movimentos sociais e organizações de agricultores familiares. A partir disso, já no decorrer da década de 1990, houve uma multiplicação de redes locais, regionais ou territoriais de gestão do conhecimento agroecológico, fundadas na capacitação de agricultores e técnicos, bem como na experimentação mútua ou compartilhada. Ampliam-se, simultaneamente, os esforços de diálogo entre sociedade civil e governos em diversas escalas (União, Estado federado, Município, Território), dando origem a uma pluralidade de dinâmicas de institucionalização da agroecologia.

Os avanços conquistados pelas políticas de fortalecimento da agricultura familiar no ambiente político e institucional propiciado pelos governos de coalizão liderados pelo Partido dos Trabalhadores (PT) na esfera federal, possibilitaram que a ação de diferentes setores mobilizados em torno da agroecologia adquirisse maior densidade política e coesão. Essa rede de atores passou a influenciar a construção e articulação de diferentes instrumentos de políticas públicas, processo este que foi impulsionado, também, pela centralidade assumida pela temática da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) na agenda governamental, a partir do lançamento, no primeiro governo Lula, do Programa Fome Zero.

O texto a seguir toma como objeto a experiência brasileira de construção de políticas públicas em favor da agroecologia. Primeiramente, contempla uma análise do contexto político-institucional e dos processos de organização social que possibilitaram a institucionalização da agroecologia como um enfoque de política pública. São apresentados e discutidos, posteriormente, os instrumentos de intervenção governamental mobilizados em favor da agroecologia, considerando seu conteúdo, desenho institucional, mecanismos de articulação e efeitos potenciais.

O trabalho foi organizado em cinco partes, sendo a primeira delas esta introdução. A próxima seção discute o contexto econômico, político e institucional que engendrou a construção das políticas de fortalecimento da agricultura familiar e, de forma mais específica, de instrumentos de intervenção governamental passíveis de ser mobilizados na promoção da agroecologia. Chama-se atenção para o fato de que, apesar da capacidade inovadora evidenciada pelo país na implementação de políticas para a agricultura familiar, o agronegócio manteve-se amplamente dominante, criando importantes bloqueios a avanços mais estruturais no que diz respeito à construção de um modelo alternativo de desenvolvimento rural. Segue-se a isso, na seção 3, uma breve reconstituição da trajetória das redes de promoção da agroecologia existentes, narrada, fundamentalmente, a partir da perspectiva dos movimentos e organizações da sociedade civil. A quarta parte retoma a trajetória de incorporação de um enfoque agroecológico aos instrumentos de intervenção governamental, considerando as distintas visões de agroecologia assimiladas pelas políticas públicas, os formatos de implementação dos diferentes programas e suas possibilidades de articulação e coordenação.



Segue-se a isso um estudo de caso contextualizado no semiárido brasileiro, na região Agreste da Borborema, estado da Paraíba, em que são analisadas as interfaces estabelecidas entre as políticas voltadas à promoção da agroecologia e redes de organizações da sociedade civil com atuação em escala territorial. Destacam-se os efeitos produzidos pela articulação, com forte protagonismo das organizações sociais, de um leque diferenciado de instrumentos de políticas públicas e dispositivos de organização social que passaram a contribuir, de forma expressiva, para o fortalecimento de modos de vida sustentáveis no âmbito da agricultura familiar neste território. Ao final, apresentamos uma cronologia da experiência brasileira de construção de políticas em favor da agroecologia, considerando tanto as dinâmicas organizativas e de articulação desenvolvidas no âmbito da sociedade civil, como os processos relacionados à institucionalização do enfoque agroecológico no espaço governamental.

O trabalho buscou analisar a experiência brasileira de construção de políticas em favor da agroecologia em um horizonte de tempo que vai de suas origens, nas décadas de 1980 e 1990, até o fim do segundo mandato da Presidenta Dilma Rousseff, encerrado em 2016. Não trataremos aqui, portanto, das profundas transformações políticas e institucionais ocorridas no Brasil em virtude do impeachment da presidenta eleita e de seu afastamento definitivo do cargo, em agosto de 2016, o que resultou, entre outras mudanças, na extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)<sup>40</sup>. Este percurso, longo e conflituoso, implicou em uma ruptura da ordem democrática, afetando de forma muito significativa a trajetória de construção das políticas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e da agroecologia no Brasil.

### Desafios da construção da agroecologia na 'sociedade e economia do agronegócio'

Se o Brasil foi um dos países onde a institucionalização de políticas em favor da agroecologia mais avançou, também foi um dos mais atacados pelas novas estratégias agroindustriais de “acumulação por espoliação” (Harvey, 2004; Almeida, 2010). Ao longo das duas últimas décadas, por um lado, o país criou uma das mais exitosas experiências globais de combate à fome e à insegurança alimentar e nutricional, enquanto, por outro, tornou-se o maior consumidor global de agrotóxicos. Ao mesmo tempo em que avançou, em alguma medida, no reconhecimento e demarcação de territórios quilombolas e indígenas, presenciou a expansão dos processos de acaparamento de terras, água e biodiversidade. Mesmo tendo conseguido manter 4,3 milhões de pequenas e médias unidades produtivas familiares (85% do total), permitiu que 0,91% dos estabelecimentos rurais concentrassem 45% de toda a área agrícola (Oxfam – Brasil, 2016). Não é em vão que o mais recente relatório da Oxfam (novembro de 2016) sobre o rural brasileiro intitula-se “terrenos da desigualdade”. Como foi possível conviver com esse nível de contradição?

As dinâmicas associadas à institucionalização da agroecologia no âmbito das políticas públicas encontram-se inscritas em um campo mais abrangente de relações que se consolida, notadamente a partir dos anos 1990, tendo como eixo estruturador a dualidade *agronegócio/agricultura familiar*. Ambos os conceitos emergem como resultado de disputas políticas e processos de legitimação social, instaurando modos de organização que irão se traduzir não apenas no campo discursivo, mas, também, em dispositivos jurídicos, políticos e institucionais, influenciando também as dinâmicas de ação coletiva das organizações sociais com atuação no meio rural.

Vale mencionar que o Brasil se tornou, a partir do início dos anos 2000, um dos poucos países a contar com dois Ministérios com atribuições relacionadas ao desenvolvimento agrícola e agrário. Foi mantido o já tradicional Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), dotado de uma estrutura em boa medida consolidada, tanto do ponto de vista técnico como em termos orçamentários, verificando-se, ao mesmo tempo, a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), um organismo novo, porém significativamente mais frágil do ponto de vista institucional e organizativo.

---

<sup>40</sup> As competências do antigo MDA, instituição responsável pelas políticas de reforma agrária, titulação de terras quilombolas e fortalecimento da agricultura familiar, foram transferidas para a Casa Civil da Presidência da República, órgão que concentra um amplo conjunto de atribuições vinculadas à assessoria da Presidência da República. Com essa medida, temas relacionados à agricultura familiar e ao desenvolvimento agrário perdem espaço na agenda governamental. Como um desdobramento desse processo foi criada, no âmbito da Casa Civil, a Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD).



O reconhecimento destas duas agriculturas, que irão se identificar no debate público como portadoras de projetos distintos de desenvolvimento rural, não significou, no entanto, uma superação das assimetrias existentes entre estes dois segmentos, tanto no que diz respeito ao acesso à terra, como na distribuição do poder político. O processo de modernização da agricultura ocorrido no país nas décadas de 1960 e 1970 não foi acompanhado de alterações substantivas na estrutura da propriedade da terra. Com o advento da ditadura civil-militar, a demanda das organizações de trabalhadores do campo pela realização de uma reforma agrária foi sepultada, ressurgindo a partir do final dos anos 1970, com a retomada das lutas sociais no campo e a redemocratização política e institucional do país.

As transformações que incidiram sobre a base técnica da produção agrícola concentraram-se, sobretudo, nas culturas voltadas à exportação (soja, café, cana-de-açúcar, entre outras) e em alguns cultivos específicos dirigidos ao mercado interno. Do ponto de vista geográfico, o processo de modernização aprofundou-se, em um primeiro momento, nas regiões Sul e Sudeste do país, com alguns polos de irradiação em outras regiões. A partir dos anos 1980, as grandes monoculturas de grãos irão se expandir no Cerrado brasileiro, ampliando significativamente sua área ao longo das décadas subsequentes e chegando, também, à Amazônia.

De modo geral, o processo de modernização da agricultura no Brasil esteve associado à grande propriedade. Mas é importante ter em mente que estas transformações possibilitaram, também, a incorporação do pacote tecnológico da Revolução Verde por pequenos proprietários de terra vinculados a uma agricultura de base familiar, principalmente nas regiões Sul e Sudeste do país. Estes passaram a adotar “tecnologias modernas” e a se vincular às grandes cadeias de *commodities*, na produção de grãos, de fumo, de frangos, de suínos, de leite, entre outros produtos. Historicamente, as demandas deste segmento social irão se expressar em torno da previdência social e da implantação de uma política agrícola adaptada às suas especificidades (Picolotto e Medeiros, 2017). Mas as críticas ao modelo tecnológico implantado pela modernização conservadora, presentes no debate público a partir dos anos 1980, tiveram, historicamente, pouca penetração junto a estes pequenos proprietários modernizados. As demandas em torno da realização de uma reforma agrária, eixo central na luta dos sindicatos de trabalhadores rurais, não chegaram, também, a figurar como uma reivindicação de central importância para este segmento. Os pequenos proprietários situados, principalmente, na Região Sul do país, assumiram, no entanto, um papel de grande relevância na construção do “agricultor familiar” como um ator político e como uma categoria social no âmbito das políticas públicas (Picolotto, 2014).

O reconhecimento por parte do Estado da agricultura familiar como um segmento específico da agricultura brasileira foi resultado de um intenso trabalho de articulação e mobilização que possibilitou que uma coalizão diversificada de atores, com forte protagonismo dos movimentos sociais, particularmente do movimento sindical de trabalhadores rurais, alcançasse crescente visibilidade pública e legitimidade social. A crise econômica, o endividamento dos produtores familiares ligados às grandes cadeias de *commodities* junto aos bancos e as ameaças associadas ao processo de liberalização dos mercados de produtos agrícolas, sobretudo com o advento do Mercosul, concorreram para a construção de uma agenda voltada ao reconhecimento da agricultura familiar. Este processo envolveu diferentes vertentes do movimento sindical rural, mobilizando contribuições teóricas advindas do campo acadêmico, o esforço de parlamentares, gestores públicos e toda uma rede de atores. Esse processo fortaleceu junto à sociedade brasileira a ideia de que o apoio à agricultura familiar constituía-se como uma resposta viável para problemas que inquietavam o conjunto da população: o acirramento dos conflitos agrários, o desemprego, o êxodo rural e o abastecimento do mercado interno. Em 1996, como resultado deste processo foi criado o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)<sup>41</sup>.

A estruturação do PRONAF ocorreu em um contexto marcado pela intensificação dos conflitos de terra e por uma série de retrocessos no que diz respeito à implantação das políticas de reforma agrária. O I Plano Nacional de Reforma Agrária, publicado em 1985, em pleno processo de redemocratização do país, sofreu derrotas importantes na Assembleia Nacional Constituinte. Foi preservado, no entanto, no texto constitucional, o princípio da *função social da propriedade da terra*, cuja utilização precisaria forçosamente atender ao seu “aproveitamento racional e adequado” e à “utilização racional e

---

<sup>41</sup> O PRONAF foi constituído, originalmente, como um programa de crédito de custeio e investimento, com taxas de juro e condições de pagamento diferenciadas para agricultores familiares. Abarca, hoje, uma multiplicidade de linhas de financiamento.

adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente”, devendo observar, além disso, as disposições que regulam as relações de trabalho, abrigando formas de exploração capazes de favorecer o bem-estar dos proprietários e trabalhadores (BRASIL, 1988)<sup>42</sup>. Estes dispositivos, inscritos na Constituição de 1988, poderiam ter se constituído como base de sustentação de todo um processo de mudança envolvendo não apenas a democratização da propriedade da terra, mas também a implantação nas áreas reformadas de práticas de manejo do solo, da água e da biodiversidade orientadas por princípios de sustentabilidade. Esta possibilidade histórica foi, no entanto, obstaculizada, entre outros fatores, pela correlação de forças sociais existente na sociedade brasileira<sup>43</sup>.

A maior parte dos assentamentos foi implantada como resultado de lutas sociais protagonizadas por diferentes movimentos sociais. Frequentemente situados em terras degradadas e carentes de infraestrutura, os assentamentos enfrentaram inúmeros desafios em seu processo de consolidação. Em muitos lugares as famílias assentadas chegaram a se constituir como protagonistas importantes no desenvolvimento de iniciativas locais voltadas à promoção da agroecologia. Mas é preciso destacar que as políticas públicas direcionadas às áreas de reforma agrária não incorporaram, de modo geral, uma perspectiva socioambientalista (Santilli, 2005; Lisboa, 2009), capaz de combinar a garantia do direito à terra e o manejo sustentável dos recursos naturais nas áreas de assentamento.

O Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária, criado em 1985, tinha como objetivo aumentar a produção e a produtividade agrícola nos assentamentos, visando sua inserção nos mercados e, na medida do possível, sua emancipação progressiva da tutela governamental. Posteriormente, as linhas de crédito direcionadas à reforma agrária foram incorporadas ao PRONAF, mantendo, no entanto, uma orientação bastante semelhante. Importante reconhecer, no entanto, os esforços investidos na estruturação dos chamados assentamentos diferenciados, a exemplo dos Projetos de Assentamento Extrativistas (PAEs), instituídos em 1987 e dos Projetos de Desenvolvimento Sustentável (PDS), criados em 1999. Estes formatos foram adotados, no entanto, em um conjunto mais restrito de áreas, apresentando, em muitos casos, deficiências importantes no que diz respeito à implantação de equipamentos de infraestrutura (tanto social como produtiva) e no acesso à uma assistência técnica capaz de contribuir, de forma mais efetiva, para o manejo sustentável destas áreas.

Na segunda metade da década de 1990, em uma conjuntura marcada pelo acirramento da luta social pela terra, marcada por conflitos que alcançaram forte repercussão internacional, o governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) lançou, em março de 1999, o programa denominado “Novo Mundo Rural”, que tinha como objetivo propor um novo modelo de desenvolvimento rural para o país, baseado no fortalecimento da agricultura familiar, no acesso a ativos educacionais, na redistribuição de terras a serem adquiridas no mercado<sup>44</sup> e no reforço a atividades não agrícolas geradoras de renda no meio rural (Ferreira et al., 2009; Monte, 2013). É neste contexto que se verifica a criação do MDA, inscrita no bojo de uma estratégia de gerenciamento de conflitos fundiários e de reconhecimento, ainda que parcial, das demandas dos movimentos sociais. Foram reforçadas nesse processo as interfaces estabelecidas com os chamados “pequenos proprietários”, representados principalmente pelo sindicalismo de trabalhadores rurais, que passam a ser percebidos, crescentemente, não como um símbolo do atraso, mas como atores modernos, de um rural contemporâneo, ainda que perpassado por inúmeras contradições.

O conceito de agricultura familiar incorporado pelo PRONAF em 1996, e atualizado na chamada Lei da Agricultura Familiar (Lei 11.326/2006)<sup>45</sup>, abarca uma grande diversidade de formas de agricultura, contextos e identidades sociais (Niederle et al., 2014). A institucionalização da categoria agricultura familiar possibilitou, para um universo heterogêneo de agricultores

---

<sup>42</sup>Disponível em :[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicaocompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm). Acesso em : 25/04/2017.

<sup>43</sup> Importante, também, considerar que as possibilidades de construção de uma «outra agricultura », capaz de articular, sob um mesmo enfoque, justiça social, viabilidade econômica e sustentabilidade ambiental, foram sendo amadurecidas ao longo do tempo, recebendo sustentação, inicialmente, por parte de um grupo muito reduzido de atores sociais.

<sup>44</sup> Ficando secundarizada, portanto, a obtenção de terras através de mecanismos de desapropriação social.

<sup>45</sup> O conceito de agricultura familiar inscrito neste regulamento tem como base um limite de área, a utilização de mão de obra familiar e um percentual mínimo da renda familiar a ser obtido por meio de atividades desenvolvidas no estabelecimento agrícola. Lei 11.326/2006. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato\\_2004-2006/2006/lei/111326.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato_2004-2006/2006/lei/111326.htm). Acesso em: 04/04/2017.

e agriculturas de base familiar, bem como para um conjunto diferenciado de organizações sociais e governos municipais<sup>46</sup>, a criação de um “nicho institucional”, onde suas demandas poderiam alcançar algum nível de repercussão. É preciso considerar, no entanto, que nesse período, as políticas de fortalecimento da agricultura familiar, centradas principalmente no crédito, tinham como objetivo central garantir o acesso a financiamento, em condições diferenciadas, fomentando as conexões com os mercados e a incorporação de tecnologias modernas. Encontravam-se, além disso, em um estágio bastante inicial de implantação.

Entre o final da década de 1990 e o início dos anos 2000, as ideias agroecológicas encontraram um terreno mais fértil sobretudo no Ministério do Meio Ambiente (MMA). A afirmação do desenvolvimento sustentável como uma referência na construção de políticas públicas, em combinação com uma série de lutas de inspiração socioambientalista, permitiram que o MMA se tornasse um espaço permeável à implementação de políticas inovadoras, como ocorreu com a criação das Reservas Extrativistas (RESEX)<sup>47</sup> e a implantação do Subprograma Projetos Demonstrativos (PDA), responsável pelo financiamento de um amplo conjunto de iniciativas locais de promoção da agroecologia, como veremos mais adiante. A articulação entre o movimento ambientalista e a luta pela terra na Amazônia, que ganha força nessa região em função, entre outros fatores, da expansão da fronteira agrícola, trouxe à cena política um conjunto diferenciado de populações, incluindo seringueiros, posseiros, ribeirinhos, pescadores, quebradeiras de coco babaçu, que passam a reivindicar não apenas o direito à terra, mas o respeito aos seus modos de vida tradicionais, baseados em formas de apropriação dos recursos naturais capazes de preservar o meio ambiente. Este processo possibilitou, através de uma série de mediações, envolvendo tanto a cooperação internacional como entidades ambientalistas, exercícios importantes de “construção social da política ambiental” (Alegretti, 2002).

Inúmeros elementos presentes na abordagem proposta pelo socioambientalismo dialogam de forma muito estreita com a concepção de agroecologia construída no Brasil: a aliança estratégica entre “a questão social” e a “questão ambiental”; uma visão de agroecologia voltada não somente para o manejo ecológico dos sistemas produtivos, mas que busca vincular esta dimensão às lutas por direitos, particularmente pelo direito à terra; a ideia de que as políticas ambientais “deveriam incluir e envolver as comunidades, detentoras de conhecimentos e de práticas de manejo ambiental” (Santilli, 2005, p. 34) (Lisboa, 2009).

Para além da esfera federal, registra-se a construção nos níveis estadual e municipal de uma série de interfaces entre as iniciativas locais de promoção da agroecologia e o poder público, com o apoio de administrações sensíveis aos apelos de uma agricultura orgânica, ecológica, agroecológica ou simplesmente sustentável. Cabe mencionar, por exemplo, os convênios estabelecidos por Prefeituras Municipais com Organizações Não Governamentais (ONGs) de assessoria no campo da agroecologia, ou com diferentes instituições com atuação no campo da agricultura orgânica, assim como a implantação de feiras “orgânicas”, “agroecológicas” ou de comercialização de “produtos sem agrotóxicos” em diferentes municípios.

Merece destaque a incorporação, no Rio Grande do Sul, durante o Governo Olívio Dutra (1999-2002), liderado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), de um enfoque agroecológico voltado às políticas públicas de desenvolvimento rural, o que representou uma experiência importante de institucionalização da agroecologia como um enfoque de política pública. Cabe observar, a título de exemplo, que a missão da empresa de assistência técnica e extensão rural (EMATER-RS), vinculada ao Governo do Estado, foi alterada naquele período (Silliprandi, 2002), assumindo uma orientação voltada “à construção do desenvolvimento rural sustentável com base nos princípios da agroecologia”. De acordo com esta definição, as ações de assistência técnica e extensão rural (ATER) deveriam ser desenvolvidas “mediante processos educativos e

---

<sup>46</sup> Estamos falando, aqui, daqueles municípios onde a agricultura familiar tem um peso significativo.

<sup>47</sup>Uma reserva extrativista (RESEX) é legalmente definida como « uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade ». Ver: Lei 9.985/2000. Disponível em :[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L9985.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm). Acesso em 24/04/2017. Em sua inspiração original as RESEX buscavam promover um casamento entre conservação ambiental e reforma agrária. (Santilli, 2005, p. 33).

participativos, objetivando o desenvolvimento da agricultura familiar e suas organizações, de modo a incentivar o pleno exercício da cidadania e a melhoria da qualidade de vida” (Deponti, 2010, p. 155).

É possível identificar nesta experiência uma série de elementos que, posteriormente, influenciaram a visão de agroecologia incorporada pelas políticas públicas na esfera federal, particularmente no âmbito da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER): a valorização do saber científico e do saber popular, as metodologias participativas, uma visão holística dos processos econômicos e da sua relação com o ambiente, o estímulo ao associativismo, o compromisso com a reforma agrária e com o fortalecimento da agricultura familiar, o respeito às diferenças culturais, de gênero e geração, entre outros elementos. A agroecologia é percebida dentro desta visão como uma abordagem teórica e operativa, que busca se contrapor ao paradigma voltado à transferência de tecnologias adotado pela Revolução Verde, devendo orientar não apenas a construção de um novo modelo tecnológico para a agricultura, mas um conjunto mais amplo de estratégias de desenvolvimento rural (Caporal e Costabeber, 2000). Diversos gestores que participaram das experiências de construção de políticas públicas desenvolvidas pelo Governo Olívio Dutra estiveram diretamente envolvidos na construção de políticas em favor da agroecologia na esfera federal a partir do primeiro Governo Lula.

É interessante observar que estes esforços iniciais de institucionalização da agroecologia como um enfoque de política pública na esfera estadual e municipal, caminharam *pari passu* com o processo de normatização, por parte do poder público, dos sistemas orgânicos de produção agropecuária. Na prática, a legislação que regulamenta a agricultura orgânica no Brasil, construída a partir da segunda metade da década de 1990 e sancionada em 2003, antecedeu a própria incorporação do conceito de agroecologia pelas políticas públicas do Governo Federal, processo que irá ocorrer, a partir de 2003, com o lançamento do Primeiro Plano Safra da Agricultura Familiar e, posteriormente, da Política Nacional de ATER (PNATER), cujo documento base foi lançado em 2004. Também chama atenção o fato de que este processo foi conduzido sob a coordenação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). O MDA procurou, na medida de suas possibilidades, influenciar a construção da nova legislação, preocupado, não apenas, com a conquista de espaço para agricultura familiar no mercado de produtos orgânicos, mas, também, com o fato de que a nova normatização poderia vir a se constituir, para muitos destes agricultores, como uma barreira à entrada neste mercado.

O envolvimento do MAPA na regulamentação da agricultura orgânica no Brasil esteve associado, ao que tudo indica, ao acompanhamento que vinha sendo feito pelo órgão das primeiras iniciativas de exportação de produtos orgânicos, sobretudo para a Europa, desde o final dos anos 1980. Vale mencionar, no entanto, que desde o início da década de 1990 a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada a este Ministério, já desenvolvia ações específicas no campo da agroecologia e da agricultura orgânica. Em 1993, foi implantado no Rio de Janeiro o Sistema Integrado de Produção Agroecológica (SIPA), ocupando uma área de aproximadamente 70 ha, próximo à sede da Embrapa Agrobiologia em Seropédica-RJ. Em 1999 foi promovido, na Embrapa Agrobiologia, o I Encontro Nacional de Pesquisa em Agroecologia (Embrapa, 2006). Em 2002, a Embrapa incorporou ao seu planejamento institucional uma linha de pesquisa dedicada à agricultura orgânica.

Entretanto, os estímulos que levaram o MAPA a se envolver de forma mais direta no processo de normatização da agricultura orgânica não vieram propriamente do mundo da pesquisa. Fonseca (2005) menciona as pressões exercidas pelos organismos de certificação, europeus e nacionais, em favor da formalização de uma legislação referente aos produtos orgânicos no Brasil. A promulgação, em 1991, no âmbito da União Europeia, de uma diretiva envolvendo a produção, rotulagem e certificação de produtos orgânicos entre os países membros, tornou ainda mais premente algum tipo de intervenção por parte do Ministério em relação a este tema. Em agosto 1994 o MAPA lançou uma portaria criando uma Comissão Especial que ficaria responsável por propor normas para a certificação de produtos orgânicos, dando início a uma longa trajetória que iria desaguar na construção de uma legislação específica sobre o tema.

Mas é preciso ter presente que, naquele momento, a grande maioria das organizações envolvidas na produção e comercialização de produtos orgânicos mantinha relações estreitas com grupos de agricultores familiares. Várias delas comercializavam seus produtos através de feiras ou de outros circuitos de comercialização direta, ainda que os produtos orgânicos já estivessem chegando às prateleiras dos supermercados. A necessidade de normatizar o mercado de produtos orgânicos através de uma legislação nacional foi, inclusive, questionada, desde a primeira reunião da Comissão Especial,

sobretudo pelas organizações vinculadas às redes de agroecologia que vinham construindo seus mercados com base em convenções estabelecidas localmente, inspiradas em diretrizes acordadas internacionalmente pelos movimentos de agricultura orgânica<sup>48</sup>, ou vigentes em outros países, mas adaptadas às características e possibilidades locais. A ideia de que o produto orgânico deveria necessariamente “custar mais caro” era rejeitada, inclusive, por muitas destas organizações. Argumentava-se, além disso, que a certificação implicaria em novos custos e numa perda de autonomia por parte dos agricultores, sendo que a exportação de produtos orgânicos não deveria ser vista como uma prioridade, considerando que abastecer o mercado interno já seria, no caso brasileiro, um grande desafio (Meirelles, 1994)

Mas o universo de atores envolvidos na comercialização e certificação de produtos orgânicos era, naquele momento, bastante heterogêneo. Abarcava organizações como o Instituto Biodinâmico<sup>49</sup> e a Fundação Mokiti Okada, que desenvolviam seu trabalho no campo da agricultura orgânica com forte articulação internacional, associações de agricultores orgânicos ou biológicos existentes em alguns estados, as já mencionadas ONGs vinculadas às redes de agroecologia, cooperativas de consumidores de alimentos orgânicos/ecológicos e, em alguma medida, as próprias instituições de pesquisa que buscavam, naquele momento, avançar na incorporação da temática da agricultura orgânica em suas agendas de trabalho.

Não cabe aqui descrever todo o processo que conduziu, ao longo de nove anos de debates e controvérsias, à aprovação da Lei 10.831/2003, que hoje se constitui como o eixo norteador do marco regulatório da agricultura orgânica no Brasil. Mas é importante registrar que a nova legislação incorporou uma série de elementos inovadores, que procuraram ampliar as margens de manobra, sobretudo dos agricultores familiares, mas também dos consumidores, nas suas relações com o mercado de orgânicos. De modo geral, os dispositivos incorporados à nova legislação reconhecem a ampla diversidade de sistemas produtivos enquadrados pela lei como “sistemas orgânicos de produção agropecuária e industrial”, incluindo aí os sistemas denominados “ecológico, biodinâmico, natural, regenerativo, biológico, agroecológicos, permacultura e outros que atendam os princípios estabelecidos por esta Lei”<sup>50</sup>. Incluiu, também, em seu escopo, os produtos extrativistas, desde que produzidos através de processos sustentáveis. Contemplou, ademais, além da tradicional certificação por auditoria (feita por terceiros), os Sistemas Participativos de Garantia da Qualidade Orgânica (SPGs), definidos como um mecanismo participativo de certificação, estruturado em rede, em que o reconhecimento da qualidade orgânica encontra-se baseado na responsabilidade coletiva e solidária dos integrantes do sistema (produtores, técnicos, processadores, transportadores, consumidores, entre outros). O regulamento aprovado também dispensou os agricultores familiares que comercializam seus produtos diretamente ao consumidor de aderir a um dispositivo de certificação, devendo, neste caso, estar vinculados à uma Organização de Controle Social (OCS) cadastrada no MAPA ou em algum outro órgão fiscalizador federal, estadual ou distrital conveniado.

O apoio institucional propiciado pelo MDA, e que viabilizou a participação das organizações mais diretamente ligadas à agricultura familiar em todo o debate relacionado à normatização da agricultura orgânica, foi de fundamental importância para que esses resultados fossem alcançados. O diálogo estabelecido entre organizações ligadas ao universo da agricultura orgânica e organizações imersas nas redes de agroecologia, com atuação na esfera da comercialização, contribuiu para criar um ambiente mais favorável à futura construção de uma política nacional capaz de envolver, em um mesmo escopo, tanto a agroecologia como a produção orgânica.

Em um plano mais geral é importante destacar que nos anos 2000 aprofunda-se o “pacto social” em torno das políticas de fortalecimento da agricultura familiar, ganhando força a visão dualista ancorada na existência de duas agriculturas: o agronegócio e a agricultura familiar. Mas este pacto nunca se constituiu como uma configuração completamente estável.

---

<sup>48</sup> As normas estabelecidas pela International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) constituíram-se, em maior ou menor medida, como uma referência importante no Brasil. Mas é preciso considerar algumas das organizações que tiveram um papel ativo no debate público sobre a certificação possuíam, no âmbito latino-americano, uma forte identificação com o Movimento Agroecológico da América Latina e do Caribe (MAELA), mantendo, portanto, uma posição bastante crítica ao processo de convencionalização vivenciado pela agricultura orgânica.

<sup>49</sup> O Instituto Biodinâmico constituiu-se, inclusive, como uma organização pioneira na exportação de produtos orgânicos.

<sup>50</sup> Lei 10.831/2003. Disponível em :[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/2003/L10.831.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.831.htm). Acesso em : 27/04/2016.

Pelo contrário, ele era o resultado de um ininterrupto processo de lutas sociais, sustentado pela capacidade de mobilização dos movimentos sociais, em diferentes níveis, em um contexto de permeabilidade e colaboração com atores estatais vinculados, sobretudo, mas não exclusivamente, ao MDA. Muitos gestores que passaram a atuar em espaços de decisão, sobretudo no caso dos chamados cargos comissionados<sup>51</sup>, possuíam uma trajetória ligada a organizações não governamentais (ONGs), aos movimentos sociais e às redes de agroecologia. Na esfera governamental, eles empenharam-se em mobilizar recursos buscando inovar na construção de políticas públicas, avançando em áreas onde se encontrava legitimidade social e brechas institucionais, mas sem conseguir criar fissuras mais profundas no aparato normativo do Estado a ponto de reverter a condição subalterna dos atores ligados à agricultura familiar.

Na análise das assimetrias presentes na configuração *agronegócio-agricultura familiar* merece destaque a posição conquistada pela agricultura empresarial e pelo setor agroindustrial, em seu sentido mais amplo, como um componente estratégico da política macroeconômica, fundamental para o equilíbrio da balança de pagamentos e para a estabilização da economia. Esta posição foi reforçada, como observa Delgado (2012), a partir do segundo mandato do Governo FHC. Nas últimas três décadas a produção agrícola dobrou de volume em comparação com os níveis alcançados em 1990, ancorada, principalmente, numa agricultura de larga escala, sendo que a produção animal triplicou nesse mesmo período. Favorecido por um ciclo internacional de alta dos preços das *commodities*, o Brasil alcançou a posição de segundo maior produtor global de produtos agrícolas e agroindustriais e, ao mesmo tempo, despontou no plano internacional como um dos principais consumidores de insumos agrícolas (OECD-FAO, 2015).

Mas este desempenho positivo do agronegócio não pode ser visto, simplesmente, como resultado das transformações tecnológicas ocorridas no setor e de sua inserção competitiva nos mercados internacionais. O crescente reconhecimento da agricultura familiar como uma categoria específica no contexto das políticas públicas não comprometeu o acesso da agropecuária empresarial aos subsídios agrícolas e espaços de definição de políticas. No que se refere especificamente ao crédito rural, foi mantido o apoio do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) às culturas de grande escala, voltadas à exportação, acompanhado de sucessivas recomposições das dívidas dos produtores para com os bancos e de uma retomada, em novas bases, das políticas de garantia de preços mínimos (Delgado, 2012; Acselrad, 2012). Seguindo uma tendência já perceptível desde o final dos anos 1990, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tornou-se um agente financiador de grande relevância para o setor agropecuário (Medeiros, 2015).

Em contrapartida, não foram observadas mudanças substantivas no que diz respeito aos padrões de utilização dos recursos naturais incorporados pela agricultura empresarial ao longo das últimas décadas. O tímido desempenho do Programa Agricultura de Baixo Carbono (Plano ABC), principal linha de crédito ao produtor rural voltada ao financiamento de tecnologias classificadas como redutoras das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEEs) na agricultura<sup>52</sup>, pode ser considerado como um demonstrativo do frágil desempenho dos instrumentos de políticas públicas voltados à promoção de práticas sustentáveis no âmbito da agricultura empresarial.

Diferentes formas de pressão foram exercidas pelos representantes políticos do setor agroindustrial junto aos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, no sentido de “liberar as terras tanto de condicionantes jurídico-formais e político-administrativos, quanto de limitações associadas à presença de grupos étnicos ou de determinadas modalidades de uso das terras tradicionalmente ocupadas” (Almeida, 2010, p. 116). Cabe mencionar aqui, a título de exemplo: (i) a não atualização dos índices de produtividade da terra, que não foram revistos desde a década de 1970 e que são utilizados como critério para a desapropriação de terras para fins de reforma agrária; (ii) os diversos dispositivos introduzidos no

---

<sup>51</sup> No Brasil os cargos *comissionados* distinguem-se dos cargos efetivos por serem de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente, independentemente de serem servidores públicos de carreira. Podem ser compreendidos, em alguma medida, como cargos de natureza política.

<sup>52</sup> Informações acerca das práticas tecnológicas definidas como promotoras de uma “economia de baixa emissão de carbono na agricultura” pode ser encontradas em: Plano Setorial de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura (Brasil-MAPA, 2012). O Plano inclui ações como a expansão das florestas plantadas e o financiamento de sistemas de plantio direto – cuja disseminação no país tem sido fortemente associada ao uso de herbicidas e sementes transgênicas. Informações detalhadas sobre a execução do Plano ABC podem ser encontradas em Monzoni (2016).

âmbito do novo Código Florestal, aprovado em 2012, que possibilitaram, entre outras medidas, que áreas desmatadas até julho de 2008 não precisassem mais ter sua cobertura vegetal recuperada, sendo que o proprietário, ao se inscrever no Cadastro Ambiental Rural (CAR), não poderia mais ser autuado e nem cobrado por multas penderas (Packer, 2016) (Cunha, 2013b); (iii) os limites estabelecidos à atuação dos órgãos ambientais no licenciamento de pesquisas e produtos envolvendo Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) (Lisboa, 2011); (iv) as restrições impostas à utilização de sementes próprias (cultivadas no próprio estabelecimento agrícola) pela Lei de Sementes aprovada em 2003 (Cunha, 2013a).

Neste cenário, alguns dilemas se impuseram à coexistência entre duas agriculturas. A crescente legitimidade social da agricultura familiar permitiu ampliar o acesso a investimentos públicos e potencializou a crítica aos efeitos produzidos pelo modelo do agronegócio, cujas organizações representativas se viram impelidas a reagir. Enquanto no interior do Estado acirrava-se a disputa entre MAPA e MDA, no mundo social o conflito pela base sindical deu-se, sobretudo, entre as representações sindicais da agricultura familiar<sup>53</sup> e dos agricultores patronais (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA). Em termos espaciais, os avanços na promoção da agroecologia esbarravam na concentração da propriedade da terra e no avanço territorial do agronegócio, que, em alguns territórios, tornava as experiências de produção agroecológica pequenas ilhas rodeadas por monocultivos de sementes transgênicas e agrotóxicos, gerando situações em que não existem barreiras físicas suficientes para impedir a contaminação de produtos orgânicos. Mesmo assim, à medida que se legitimavam socialmente, os atores da agricultura familiar inovavam na construção de políticas públicas conseguindo impor, em algumas situações, algum nível de restrição ao avanço do agronegócio. Por mais tímidas que fossem estas iniciativas, geraram reações muito fortes no campo político.

### **Movimentos sociais, organizações não governamentais e pesquisadores, na construção das redes de agroecologia**

A construção de políticas públicas em favor da agroecologia envolveu, como já foi destacado anteriormente, uma ampla rede de atores estatais e não estatais. A formação dessa rede ocorreu, principalmente, a partir dos anos 1980, junto às lutas por reabertura democrática, mudança dos referenciais de ação do Estado e ampliação do protagonismo da sociedade civil. Principalmente, a aproximação das lutas dos movimentos sociais e da ação pastoral, vinculada tanto à Igreja Católica como à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), às ações das ONGs e sindicatos de trabalhadores rurais (STRs), permitiu articular o trabalho de capacitação “tecnológica” com o estímulo ao associativismo e um esforço permanente de educação popular.

Portanto, assim como em outros países latinoamericanos, a promoção da agroecologia no Brasil esteve diretamente vinculada à ação dos movimentos sociais ligados à pequena agricultura familiar e camponesa. Isso fez com que o termo assumisse uma conotação não apenas técnica, mas eminentemente política, mantendo níveis diferenciados de articulação com modelos de “agricultura alternativa”, ou, para usar um termo mais contemporâneo, “agriculturas de base ecológica” – aí compreendidas quase todas as formas de produção que adotam uma perspectiva crítica aos preceitos da modernização conservadora que orientaram a ação do Estado brasileiro desde, pelo menos, meados dos anos 1960.

Um dos principais marcos originários deste processo foram os Encontros Brasileiros de Agricultura Alternativa (EBAA), realizados nos anos 1980 (1981, 1984, 1987 e 1989). Inicialmente caracterizados como espaços técnicos (em pleno regime militar), e protagonizados por agrônomos vinculados à Federação de Associações dos Engenheiros Agrônomos do Brasil (FAEAB), ao longo do processo de democratização eles foram sendo crescentemente ocupados pelos movimentos estudantis e sindicais (Weid, 1988; Luzzi, 2007). A partir deles, atores vinculados a iniciativas inicialmente pontuais e desarticuladas, começaram a tecer uma rede cada vez mais ampla, em escala nacional, o que potencializou reflexões, críticas e ações coletivas (Petersen et al., 2013). Esse processo de articulação, envolvendo diferentes atores e iniciativas no campo da chamada agricultura alternativa, possibilitou um importante ganho em escala para experiências localizadas, com trajetórias e desdobramentos distintos nas várias regiões do país. Ensejou, também, um processo de mobilização

<sup>53</sup>Com destaque para a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e a Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (FETRAF).

importante, que resultou na construção de uma legislação que buscava regular um amplo conjunto de práticas relacionadas ao uso dos agrotóxicos no Brasil.

Na região Nordeste a questão tecnológica já se fazia presente desde final dos anos 1970 como uma problemática a ser enfrentada pelos camponeses do semiárido, repercutindo na atuação de ONGs como a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE), o Movimento de Organização Comunitária (MOC-BA) e o Programa de Aplicação de Tecnologias Apropriadas às Comunidades (PATAC), bem como no trabalho desenvolvido pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) junto às comunidades rurais (Dias, 2004; Leroy e Abramovay, 1998).

No Sul e Sudeste do Brasil, onde o processo de modernização havia sido mais intenso, verifica-se, desde os anos 1970, a emergência de iniciativas locais que buscavam se contrapor à narrativa predominante por meio da experimentação de práticas inovadoras de produção, conservação dos solos, controle biológico, entre outras. No Estado de São Paulo, em 1973-1974 organizou-se, em Botucatu, a Estância Demétria, inspirada pelos princípios da agricultura biodinâmica. Esta experiência teve como desdobramento uma série de ações relacionadas à disseminação da agricultura biodinâmica no Brasil, incluindo aí a criação da Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica, em 1995, e da Associação de Certificação Instituto Biodinâmico, em 1999.

No caso da Amazônia, a crítica ao processo de modernização da agricultura e seus impactos na região esteve fortemente associada às lutas dos camponeses e povos e comunidades tradicionais em defesa de seus territórios, guardando também relação com o trabalho desenvolvido por setores progressistas da Igreja Católica inspirados pela Teologia da Libertação, no apoio a estes processos de organização social. Ademais, como já foi observado anteriormente, a partir da década de 1980 as lutas dos seringueiros, povos indígenas e camponeses da Amazônia possibilitaram um novo tipo de articulação entre luta social e luta ambiental. No que se refere especificamente à produção agrícola, verifica-se o surgimento de programas de extensão rural e entidades não governamentais de assessoria voltados ao desenvolvimento e disseminação de práticas agrícolas alternativas, vide a experiência do Centro Agroambiental do Tocantins (CAT).

No Centro Oeste, as lutas pela terra desempenharam um papel importante na trajetória das organizações engajadas na promoção da agroecologia. Em 1992, por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Eco-92), foi constituída a Rede Cerrado, composta atualmente por cerca de 600 organizações envolvendo ambientalistas, ONGs com atuação no campo da agroecologia e organizações representativas de povos e comunidades tradicionais. Entre as atividades da rede destaca-se a organização, a partir de 2002, das diversas edições do evento denominado “Encontro e Feira dos Povos do Cerrado” (Farranha e Santos, 2015).

No plano nacional destaca-se a criação, em 1983, do Projeto PTA, vinculado à FASE e desenvolvido com o apoio da cooperação internacional, tendo como objetivo resgatar tecnologias alternativas e divulgá-las aos pequenos produtores (Leroy e Abramovay, 1998). O Seminário de Campinas-SP, promovido pelo Projeto no final deste mesmo ano, chegou a congregiar mais de 40 organizações, incluindo entidades de apoio e assessoria, STRs, uma federação sindical, representantes de órgãos públicos e entidades profissionais. Tratava-se, naquele momento, de “discutir a situação da pequena produção no campo, a necessidade de buscar alternativas tecnológicas e a criação de uma articulação nacional ao redor dessa questão” (Leroy e Abramovay, 1998, p. 5). A rede de organizações que se constituiu a partir do seminário conseguiu agregar, inicialmente, experiências situadas em dez estados brasileiros, nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do país, fomentando, em muitos locais, a criação de Centros de Tecnologias Alternativas (CTAs) (Dias, 2004; Luzzi, 2007; Leroy e Abramovay, 1998). No final da década de 1980, em um contexto de reestruturação do Projeto PTA, que deixou de operar como uma estrutura organizativa administrativamente vinculada à FASE, verifica-se a criação de diferentes ONGs autônomas com atuação no campo da agroecologia. Entre elas cabe mencionar a Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa (AS-PTA), que se manteve, historicamente, como um ator-chave na estruturação da rede em nível nacional.

As organizações vinculadas ao Projeto PTA e demais entidades voltadas à promoção de uma agricultura alternativa abrigavam jovens profissionais de ciências agrárias, muitos dos quais egressos dos movimentos estudantis e dos Grupos de Agricultura Ecológica (GAEs), que haviam se formado nas universidades ao longo dos anos 1980. Estes jovens



profissionais trouxeram para dentro das organizações referências teóricas que gradualmente adentravam no mundo acadêmico, sobretudo no campo das ciências agrárias (agrônomos como Ana Primavesi, Adilson Pascoal, Sebastião Pinheiro, José Lutzenberger, entre outros). Ao mesmo tempo, retroalimentavam o debate teórico e político dos movimentos estudantis com os resultados das experiências empíricas. No final dos anos 1980 e início da década de 1990, em função das conexões estabelecidas pelas ONGs brasileiras com organizações latino-americanas, particularmente com as entidades pertencentes ao Consórcio Latino-americano sobre Agroecologia e Desenvolvimento (CLADES), e com a tradução, em 1989, do livro organizado por Miguel Altieri, intitulado *Agroecologia: as bases científicas da agricultura alternativa* (Altieri, 1989), o enfoque sistêmico proposto pela agroecologia passou a ser incorporado, de forma mais sistemática, por estas organizações<sup>54</sup>.

No que tange especificamente aos movimentos agrários e ao sindicalismo rural – os quais protagonizaram as lutas sociais pela reforma agrária e pelo reconhecimento e legitimação da agricultura familiar – a adoção da agroecologia como referencial de ação revelou-se um processo gradual, contraditório e ainda incompleto. O termo esteve longe de constituir um consenso dentre estes movimentos. No começo da década de 1990, no curso das lutas que levaram à criação do PRONAF, e que contaram com uma forte participação de organizações sindicais com atuação na Região Sul do Brasil, a maioria dos movimentos sociais e sindicais rurais concentrava suas pautas na desigualdade do acesso aos fatores de produção (terra, capital e insumos). As discussões estavam menos associadas à transformação do modelo produtivo, do que à exclusão da pequena agricultura dos recursos públicos e dos mercados agrícolas.

No caso do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), foi somente durante seu 4º Congresso Nacional, em 2000, que o mesmo adotou a agroecologia como linha política de ação, tornando-se, a partir daí, um dos principais promotores do novo modelo, inclusive investindo na formação de técnicos em escolas próprias (Barcellos, 2014). A partir de 2002, o MST passou a promover, anualmente, as Jornadas de Agroecologia, entendidas pelo movimento como um espaço de formação, mobilização e troca de experiências, reunindo um público aproximado de 3.000 participantes por edição, incluindo agricultores, pesquisadores e profissionais de diferentes áreas<sup>55</sup>. Por sua vez, na Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e na Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (FETRAF), o debate foi ainda mais controverso, tendo sido parcialmente bloqueado pelas resistências de uma base social mais integrada ao modelo convencional (embora isso também seja válido para uma parcela da base social da própria Via Campesina). Verifica-se, no entanto, em ambas as organizações, um forte engajamento das mulheres no debate relacionado à agroecologia, em estreita conexão com uma agenda mais ampla envolvendo os direitos das mulheres sob uma perspectiva feminista.

Se hoje existe certa convergência em relação à agroecologia entre as lideranças das organizações agroecológicas e dos principais movimentos sociais e sindicais do país, a “ecologização dos modelos produtivos” ainda é um tema latente nas discussões sobre as estratégias e as políticas de desenvolvimento rural defendidas por diferentes atores deste campo político (Picolotto e Brandenburg, 2015). Parte dessas discussões, e dos entendimentos que foram obtidos, deve-se a um novo espaço de diálogo entre movimentos, organizações sociais, acadêmicos e gestores públicos convidados, os Encontros Nacionais de Agroecologia (ENAs, 2002, 2006 e 2014). A organização dos mesmos tem sido liderada pela Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), um movimento-rede criado em 2002, que se tornou uma das expressões contemporâneas mais abrangente das articulações sociais que se iniciaram nos anos 1980.

A ANA tem procurado reforçar também, sobretudo a partir de 2011, com a realização, em Salvador-BA, do Encontro Nacional de Diálogos e Convergências: “Por um outro Modelo de Desenvolvimento”, o diálogo entre as redes de agroecologia e um conjunto mais amplo de atores da sociedade civil. Participaram da organização do evento o Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES), a Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA), a Rede Alerta contra o Deserto Verde (RADV), a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco), a Associação Brasileira de Agroecologia

---

<sup>54</sup> Registra-se também a publicação, em 2000, do livro *Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável*, do pesquisador americano Stephen Gliessman, da Universidade da Califórnia (Santa Cruz). (Gliessman, 2000).

<sup>55</sup> Ver: <http://atemisems.wixsite.com/escolamiltonasantosvc/donate>. Acesso em : 31/10/2016.

(ABA), o Fórum Brasileiro de Soberania e de Segurança Alimentar e Nutricional (FBSSAN), a Marcha Mundial de Mulheres (MMM) e a Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB).

No campo dos debates acadêmicos, em 2004 foi criada a Associação Brasileira de Agroecologia (ABA), que se estrutura como uma associação científica e que, atualmente, é responsável pela organização bianual dos Congressos Brasileiros de Agroecologia (CBAs), os quais tem reunido em suas diferentes edições alguns milhares de participantes, bem como pela publicação dos periódicos Revista Brasileira de Agroecologia (RBA) e Cadernos de Agroecologia. A definição da agroecologia como ciência, movimento e prática foi incorporada, no período mais recente, às definições institucionais desta entidade.

Chama atenção em toda essa trajetória a emergência, no universo de atuação das organizações sociais anteriormente mencionadas, de uma diversidade de expressões da agroecologia. Consideradas nas suas diferentes nuances, estas distintas perspectivas têm em comum uma visão abrangente das transformações econômicas, sociais, ecológicas e culturais associadas à chamada “transição para a agroecologia”, buscando se contrapor, pelo menos do ponto de vista discursivo, às abordagens propostas por alguns setores ligados à agricultura orgânica, centradas, antes de mais nada, na conversão técnica dos sistemas produtivos. Isso não significa, todavia, que a certificação orgânica não seja percebida, por muitos desses atores, como uma estratégia válida de acesso aos mercados.

### A incorporação de um enfoque agroecológico aos instrumentos de políticas públicas

Os caminhos que possibilitaram a tradução (ou transcodificação) (Lascoumes, 1997) da visão de agroecologia construída, historicamente, pelas redes de organizações sociais em um enfoque capaz de influenciar a formulação e implementação de políticas públicas, foram sendo traçados através de um processo descontínuo e, em alguma medida, disperso, que atravessou diferentes arenas e espaços de interação social. No caso brasileiro, as políticas em favor da agroecologia avançaram, principalmente, no espaço político e institucional aberto pelas políticas de fortalecimento da agricultura familiar. É importante considerar, no entanto, as importantes conexões estabelecidas pelas ideias agroecológicas com as políticas sociais, as políticas ambientais e, como já foi exposto anteriormente, o modo como influenciaram a regulamentação do sistema orgânico de produção agropecuária no Brasil.

No que se refere, especificamente, às políticas de fortalecimento da agricultura familiar, tomamos como referência o quadro analítico proposto por Grisa e Schneider (2014), que identificam no Brasil o surgimento, em períodos e contextos distintos, de três gerações ou quadros de intervenção que nortearam os programas e ações governamentais direcionados a este segmento social. Os autores mencionam: (i) uma primeira geração de políticas públicas, surgida em meados da década de 1990, orientada por um referencial agrícola e agrário, enfatizando, principalmente, a capacidade produtiva da agricultura familiar e suas potencialidades na geração de trabalho e renda; (ii) uma segunda geração de instrumentos de intervenção governamental, que surge no final dos anos 1990, marcada pela preocupação com os agricultores mais descapitalizados e em situação de vulnerabilidade social, assumindo tonalidades de uma política social e assistencial e, (iii) a emergência, a partir de 2003, de um novo referencial de política pública voltado à agricultura familiar, tendo como perspectiva a construção de mercados para a segurança alimentar e a sustentabilidade ambiental.<sup>56</sup>

O recurso a essa abordagem contribui para reforçar um entendimento de que, ao adentrar o universo das políticas públicas, as ideias agroecológicas passam a interagir com dispositivos intelectuais e práticas já existentes, enfrentando resistências, avançando em muitos casos de forma descontínua e sofrendo adaptações. Buscaremos, portanto, explorar as interfaces estabelecidas ao longo do tempo entre as ideias agroecológicas e um conjunto heterogêneo de instrumentos de políticas públicas que vão sendo construídos e/ou mobilizados no Brasil em favor da agroecologia, considerando, no entanto, que muitos deles não foram estruturados, originalmente, a partir de um enfoque agroecológico. Ademais, procuramos explorar os desafios envolvidos na coordenação e articulação desses instrumentos na perspectiva da

---

<sup>56</sup> Importante destacar que a tipologia proposta por Grisa e Schneider (2014) tem por objetivo colocar em relevo “momentos críticos”, que marcam o surgimento de novas formas de ação governamental, e não estabelecer uma sequência rígida de referenciais que estruturariam as políticas de fortalecimento da agricultura familiar ao longo do tempo. Os autores destacam que diferentes quadros de interpretação coexistem, muitas vezes, em um mesmo período de tempo.

agroecologia. Apresentaremos, inicialmente, uma espécie de genealogia dos diferentes instrumentos, com especial destaque à Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO), discutindo, posteriormente, algumas lições da experiência brasileira no que diz respeito à coordenação destes diferentes instrumentos de intervenção governamental, prospectando, também, potenciais efeitos destas políticas no fortalecimento de modos de vida sustentáveis no contexto da agricultura familiar.

Apesar da crescente repercussão que os debates sobre “sustentabilidade” angariavam no Brasil (vide Conferência Rio 92), a “primeira geração” de políticas de desenvolvimento rural, simbolizada pelo PRONAF, ressaltou, fundamentalmente, a contribuição socioeconômica da agricultura familiar, em vista de sua capacidade de absorver mão de obra e abastecer o mercado interno, em um contexto de forte êxodo rural e crise inflacionária (Grisa e Schneider, 2014; Mielitz, 2011).

Chama atenção o fato de que importantes acúmulos gerados no âmbito do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7) e, particularmente, pelo Subprograma Projetos Demonstrativos (PDA), tendo como foco a conservação e manejo da biodiversidade e o desenvolvimento de atividades sustentáveis nas florestas tropicais brasileiras, não tenham sido incorporados de forma mais expressiva pelas políticas de desenvolvimento rural forjadas nos anos 1990<sup>57</sup>. O PDA possibilitou um exercício extremamente rico de participação de redes de organizações da sociedade civil, a exemplo do Grupo de Trabalho Amazônico (GTA), da Rede Mata Atlântica e das organizações ligadas à já mencionada Rede PTA, na implementação de um programa voltado ao manejo sustentável dos biomas Amazônia e Mata Atlântica. O mesmo tinha como objetivo contribuir para a experimentação, adaptação e disseminação de abordagens inovadoras de desenvolvimento sustentável, sendo implementado por organizações comunitárias e ONGs, mas, também, eventualmente, por governos municipais.

O programa operava através de chamadas públicas, contemplando, em seu escopo, o financiamento a atividades voltadas ao manejo florestal, capacitação, fortalecimento das organizações sociais, processamento de produtos da sociobiodiversidade, entre outras. As propostas, uma vez examinadas em seu mérito técnico, eram aprovadas, ou não, por um comitê técnico paritário, com representação tanto do governo como da sociedade civil. O PDA manteve sua continuidade por aproximadamente quinze anos (1995-2016), tendo financiado, ao longo desse período, 706 projetos, com um valor total de € 114,7 milhões (em Euros)<sup>58</sup>. Ainda que as referências específicas à agroecologia fossem bastante pontuais, predominando um discurso mais abrangente em torno do desenvolvimento sustentável, o conteúdo do programa e seu formato extremamente flexível e adaptável de implementação, encontrou uma grande aderência junto às redes de agroecologia, fortalecendo não apenas as experiências locais, mas a articulação em rede dessas iniciativas.

No que diz respeito especificamente às políticas públicas, o PDA serviu como referência para a criação de programas e ações governamentais em âmbito municipal e estadual, impulsionando também a criação do Programa de Desenvolvimento Socioambiental da Produção Familiar Rural (Proambiente). Este programa tinha como foco a região Norte do país, tendo sido construído com forte participação dos movimentos sociais. Seu desenho de implementação já incorporava uma crítica aos formatos de financiamento viabilizados através do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e, posteriormente, pelo PRONAF, buscando articular em uma mesma ferramenta de intervenção um leque diferenciado de ações incluindo: planejamento territorial, assistência técnica e extensão rural, certificação e pagamento de serviços ambientais, entre outras (Mattos, 2011, p. 733-735). O programa passou, no entanto, por um processo de fragilização, e, posteriormente, de extinção, em virtude da falta não apenas de recursos financeiros, mas também de apoio institucional.

---

<sup>57</sup> O PPG7 tinha como foco o manejo da biodiversidade e o desenvolvimento de atividades sustentáveis nas florestas tropicais brasileiras, contando com forte apoio da cooperação internacional, sobretudo alemã. Gerou resultados bastante significativos no que diz respeito à criação de unidades de conservação, corredores ecológicos, demarcação de terras indígenas e implantação de reservas extrativistas nos biomas Amazônia e Mata Atlântica.

<sup>58</sup> Dados extraídos da apresentação feita por Michael Schucht e Thomas Hagenbrock na oficina intitulada *O PDA : resultados e lições aprendidas*, realizada em Brasília em 26 e 27 de julho de 2016. Agradecemos aos consultores pela disponibilização do material.

Conformado ao largo destas experiências, o PRONAF institucionalizou-se, a partir de meados dos anos 1990, como o carro-chefe das políticas voltadas à agricultura familiar, mantendo essa posição nas décadas subsequentes, com significativa ampliação do volume total de recursos investidos em suas operações, a partir de 2003. O Programa consolidou, ao longo de sua história, uma estrutura voltada para o financiamento, com taxas de juros e condições diferenciadas de pagamento, para operações de crédito de custeio e investimento desenvolvidas no âmbito da agricultura familiar incluindo: custeio da safra e de atividades de processamento, investimento em máquinas agrícolas e equipamentos, infraestrutura de produção e serviços agropecuários, entre outras linhas de atuação. Foi incorporando, ao longo do tempo, uma série de inovações resultantes, em boa medida, das demandas apresentadas por diferentes grupos sociais.

No momento da sua criação, em 1995, o Programa concentrava sua atuação, fundamentalmente, no financiamento da produção agrícola, através de operações de custeio e investimento. Em 1996, passou a contemplar, no âmbito do chamado Pronaf Infraestrutura, recursos destinados à implantação de equipamentos de infraestrutura e serviços básicos municipais, bem como para a capacitação de agricultores, conselheiros municipais e equipes técnicas responsáveis pelos chamados Planos Municipais de Desenvolvimento Rural (PMDRs). Em 1997, verifica-se a criação do chamado Pronafinho, uma linha especial de custeio direcionada aos agricultores menos capitalizados, marcando a emergência de uma segunda geração de políticas voltadas à agricultura familiar, influenciadas por uma perspectiva socioassistencial.

Ainda que o PRONAF tivesse como um de seus objetivos gerais a promoção do desenvolvimento sustentável, procurando, sobretudo através do Pronaf Infraestrutura e Serviços, assumir os contornos de uma política de desenvolvimento rural, não conseguiu se afirmar como uma ferramenta capaz de impulsionar um modelo técnico-produtivo voltado à promoção de sistemas produtivos de base ecológica. Diversas iniciativas nessa direção podem ser identificadas, no entanto, sobretudo a partir do primeiro governo Lula. Verifica-se, nesse sentido, particularmente a partir do Plano Safra 2003/2004, um esforço de incorporação ao PRONAF de linhas específicas que visavam financiar atividades voltadas à promoção da agroecologia e da agricultura orgânica e ao manejo sustentável dos agroecossistemas, a exemplo do PRONAF Semiárido, PRONAF Floresta, PRONAF Agroecologia (2005/2006), PRONAF Eco (2007/2008), PRONAF Sistemico (2008/2009)<sup>59</sup>.

Todavia, estas linhas de crédito diferenciadas têm sido acessadas por um número muito reduzido de agricultores familiares e, sobretudo, muito pouco promovidas pelas instituições de ATER e os bancos públicos (Sambuiche e Oliveira, 2011). O Programa apresentou, também, no curso de sua história, uma série de limites no sentido de incorporar os segmentos mais empobrecidos da agricultura familiar e desconcentrar a aplicação de recursos - concentrados em aproximadamente 50% na região Sul do país (Grisa, 2017). A maioria dos projetos continuou, ao longo dos governos FHC, Lula e Dilma Rousseff, a financiar commodities tradicionais, sobretudo o milho, a soja, o café e o fumo, produzidas com base nas chamadas tecnologias modernas disseminadas a partir da Revolução Verde (Grisa, 2017). As dificuldades enfrentadas pelo Pronaf no atendimento aos segmentos mais empobrecidos da agricultura familiar contribuíram, em boa medida, para que os movimentos sociais passassem a questionar, ainda que com vieses e ênfases distintas, a estrutura geral do programa, sua orientação produtivista e suas limitações no sentido de se adequar às múltiplas realidades vivenciadas pela agricultura familiar.

Com o início do primeiro governo Lula, verifica-se a conformação de um ambiente político e institucional mais favorável à circulação das ideias agroecológicas. Destaca-se, nesse novo contexto: (a) a centralidade adquirida pelas questões relacionadas ao combate à fome e à SAN, com o lançamento do Programa Fome Zero; (b) o fortalecimento de espaços institucionais de interlocução Estado-sociedade civil, em que se destacam os Conselhos e as Conferências Nacionais, contemplando também, como apontam Pires e Vaz (2014), uma grande diversidade de grupos de trabalho, comitês consultivos, mesas de negociação e reuniões<sup>60</sup>; (c) uma nova geração de instrumentos de políticas públicas dirigidos à agricultura familiar.

---

<sup>59</sup> Esta última linha, que visava o financiamento integrado das atividades produtivas desenvolvidas pelos agricultores familiares, fortemente demandada pelos movimentos sociais, manteve-se, no entanto, como um programa-piloto, de alcance bastante restrito.

<sup>60</sup> A construção de espaços de interlocução Estado-Sociedade Civil encontra suas raízes no processo de democratização do país e na consolidação, na Constituição Federal de 1988, de uma série de dispositivos que buscaram institucionalizar mecanismos de controle

O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) constituiu-se como um espaço estratégico de elaboração de um novo referencial de política pública orientado por princípios de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SSAN). Este fórum ampliou em sua atuação as possibilidades de articulação prática e discursiva entre “o fortalecimento da agricultura familiar”, “o Direito Humano à uma Alimentação Saudável e Adequada” e a “agroecologia”. O Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, estruturado em 1999 e reformulado em 2003, também se fortaleceu como um espaço de diálogo em torno do tema da agroecologia, chegando a criar um comitê específico referente a esta temática. Os debates protagonizados nestes espaços contribuíram para o alinhamento de atores e a agregação de posições difusas no âmbito das redes de ação pública com atuação no campo da agroecologia, colocando em interação recursos intelectuais e práticos e categorias de conhecimento e de intervenção pertencentes a setores distintos (Lascoumes, 1996). No caso do CONSEA, os diálogos estabelecidos com as áreas da saúde, nutrição, assistência social, economia solidária, entre outras, contribuíram para fortalecer o caráter intersetorial, não apenas da SAN, mas também da agroecologia, perspectiva esta que seria incorporada ao desenho da PNAPO.

Alguns dos instrumentos de política pública voltados ao fortalecimento da agricultura familiar criados a partir de 2003, a exemplo do Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF) e do Seguro da Agricultura Familiar (SEAF), representaram, fundamentalmente, um aperfeiçoamento do PRONAF, não gerando alterações importantes na perspectiva da agroecologia. Outros, no entanto, produziram inflexões significativas, rompendo com um referencial meramente produtivista ou socioassistencial e incorporando, de diferentes maneiras, a abordagem proposta pela agroecologia.

Em 2003, sob pressão dos movimentos sociais do campo, foi criada a Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), junto ao MDA, visando potencializar um enfoque transversal, participativo e supra municipal às políticas de desenvolvimento rural. Nesta direção, ainda em 2003, foram criados o Programa de Apoio à Infraestrutura nos Territórios Rurais (PROINF) e o PRONAT (Programa Nacional de Desenvolvimento Territorial), com o objetivo de articular políticas públicas e orientar a elaboração de projetos de infraestrutura e serviços no âmbito dos territórios rurais. Foram instituídos espaços de participação em nível territorial, os Colegiados Territoriais, que conseguiram, em territórios onde existiam demandas nessa direção, formular algumas propostas de promoção da agroecologia (infraestruturas de comercialização para feiras e cooperativas, capacitação, processamento de produtos, entre outras ações). Mesmo assim, as modalidades estabelecidas de financiamento dessas ações não chegaram a responder às verdadeiras prioridades dos territórios na promoção de uma agricultura sustentável: acesso à terra e à água, regularização fundiária e regulação na utilização dos recursos naturais.

Ainda em 2003, o Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural (DATER) foi transferido para o MDA61, ficando sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura Familiar (SAF). A partir daí, teve início o processo de elaboração da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER), que entrou em vigor em 2004. A PNATER passou a referendar as ações do governo federal na área de assistência técnica e extensão rural, como um serviço exclusivamente destinado à agricultura familiar e aos agricultores atendidos pelas políticas de reforma agrária, determinando que as ações desenvolvidas deveriam estar ancoradas em uma abordagem interdisciplinar e multidisciplinar, estimulando a adoção de metodologias participativas e de “um paradigma tecnológico baseado nos princípios da Agroecologia” (BRASIL/MDA, 2004, p. 7).

A implantação da nova política de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) teve como marca importante a incorporação ao Sistema Nacional de ATER de um conjunto bastante significativo de organizações não governamentais que passaram a acessar recursos federais na implantação de programas e ações voltados, em muitos casos, à promoção da agroecologia. No que se refere, especificamente, às instituições públicas de ATER, que se encontram no Brasil, na grande maioria dos casos, sob coordenação dos governos estaduais, essa mudança de paradigma enfrentou uma série de obstáculos no diz respeito, não apenas, à sua estrutura normativa e formas de instrumentação, mas também na sua capacidade de

---

social e ampliar a capacidade de influência dos cidadãos na sua relação com as políticas públicas. Esse processo é anterior portanto, aos governos Lula e Dilma, mas se intensifica nessas administrações. Ver, por exemplo, Avritzer (2008); Pires e Vaz (2014).

<sup>61</sup>Anteriormente o DATER estava sob a tutela do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

transformar as rotinas, procedimentos e convenções que sustentam a ATER como uma ação pública. Cabe, aqui, apontar que as relações entre pesquisa e ATER constituíram-se, ao longo de toda essa trajetória, como um desafio importante a ser enfrentado pelo MDA. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), ligada ao MAPA, e cujas capacidades institucionais foram historicamente direcionadas para a implementação de agendas de pesquisa voltadas, prioritariamente, ao desenvolvimento das cadeias produtivas do agronegócio, apresentou, ao longo de sua trajetória como instituição, uma série de limites no sentido de incorporar, de forma mais abrangente, uma abordagem da agricultura e do desenvolvimento rural mais próxima da agroecologia<sup>62</sup>. Ao mesmo tempo, a relevância assumida pelas políticas de fortalecimento da agricultura familiar acabou por produzir novas demandas de pesquisa, desafiando a instituição a ampliar sua atuação junto a este segmento e a repensar, não apenas o foco das suas atividades de pesquisa, mas, também, suas perspectivas metodológicas.

O MDA, por sua vez, lançou mão de uma série de dispositivos buscando estreitar suas relações não apenas com a Embrapa, mas com as Organizações Estaduais de Pesquisa Agropecuária (OEPAs). O ministério contribuiu, em parceria com outros órgãos públicos e com diferentes organizações da sociedade civil, na construção do Marco Referencial em Agroecologia da Embrapa. Este documento, lançado em 2006, procurou dar consistência ao processo de institucionalização da agroecologia no âmbito da instituição. O texto busca estabelecer uma diferenciação entre a agroecologia como um referencial teórico, baseado em um enfoque sistêmico, e as diversas “agriculturas ecológicas” empiricamente existentes. Os princípios da agroecologia ganham significado concreto, nos termos estabelecidos pelo documento, através da sua aplicação nas mais distintas realidades locais. De acordo com este Marco Referencial, “a agroecologia é considerada uma disciplina científica que transcende os limites da própria ciência, ao pretender tratar questões não incorporadas pela ciência clássica (relações sociais de produção, equidade, produção para o autoconsumo, qualidade de vida, sustentabilidade” (Embrapa, 2006). A construção deste Marco Referencial contribuiu para fortalecer a rede de pesquisadores dedicados à pesquisa em agroecologia no âmbito da instituição. Posteriormente, verifica-se na Embrapa a estruturação do Macroprograma 6 intitulado “Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar e à Sustentabilidade do Meio Rural”, que busca estimular a estruturação de uma carteira de projetos voltados a esta temática em âmbito nacional. No esforço por estreitar as relações entre ATER e pesquisa agrícola, o MDA também estabeleceu, ao longo dos anos, uma série de termos de cooperação com a Embrapa, repassando recursos diretamente à instituição e lançando, através do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), diversos editais de pesquisa.

No que se refere, especificamente, às políticas de ATER, foi formulado, em 2010, um novo instrumento jurídico (Lei 12.188/2010), que passou a orientar a contratação dos serviços de ATER através de Chamadas Públicas, com dispensa de licitação. Nesse novo formato, itens como área de atuação, número de agricultores atendidos, metodologia utilizada e produtos a serem apresentados pelos prestadores de serviços de ATER, passaram a ser definidos a priori enrijecendo, em muitos aspectos, o desenho e implementação dos projetos (Diesel et al., 2015; Weid, 2011). Ao mesmo tempo, o enfoque agroecológico encontrou algumas resistências na sua incorporação à nova Lei, que contempla, em sua formulação, a “adoção dos princípios da agricultura de base ecológica como enfoque preferencial para o desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis”<sup>63</sup>, sem utilizar, no entanto, a expressão “agroecologia”.

Posteriormente, o MDA passou a lançar chamadas públicas específicas dirigidas à “Agricultura Sustentável” (ATER Sustentabilidade) e à “Agroecologia”. A título de exemplo, no horizonte de tempo do I PLANAPO (2013-2015), tornou-se possível atender, através de chamadas para ATER “sustentável” ou “agroecológica”, um universo de 112.800 famílias<sup>64</sup>. Entretanto, a disseminação do enfoque agroecológico através do Sistema Nacional de ATER em seu conjunto, aspiração original da PNATER, parece ter ficado, em alguma medida, em segundo plano. No ano de 2010 o DATER também lançou um edital para apoiar a estruturação de Núcleos de Pesquisa e Extensão em Agroecologia (NEAs), que deveriam se embasar

---

<sup>62</sup>Para uma visão integrada das perspectivas estratégicas que orientam o planejamento da Embrapa ver: (Embrapa, 2014).

<sup>63</sup> Lei 12.188/2010. Disponível em: [http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw\\_Identificacao\\_lei%2012.188-2010?OpenDocument](http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao_lei%2012.188-2010?OpenDocument). Acesso em: 05/04/2017.

<sup>64</sup> Ver: Plano de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO). Relatório de Balanço 2013-2015. Disponível em: [http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user\\_arquivos\\_3/relatorio\\_de\\_balanco\\_2013\\_2015.pdf](http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_arquivos_3/relatorio_de_balanco_2013_2015.pdf). Acesso em: 27/04/2017.

na PNATER. Através dos NEAs procura-se ampliar a produção científica no campo da agroecologia, realizando ações articuladas voltadas ao ensino, à pesquisa e à extensão junto aos agricultores familiares, qualificando, também, a formação de professores, pesquisadores, estudantes e profissionais de ATER. A partir de 2012, os NEAs passaram a ser intitulados de Núcleos de Estudo em Agroecologia e Produção Orgânica, sendo apoiados por meio de editais lançados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que recebe aportes financeiros de diferentes Ministérios<sup>65</sup>. Em 2013 foi criada, no âmbito do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural (DATER), uma Coordenação de Inovação e Sustentabilidade da Agricultura Familiar, responsável pela construção de um Plano específico nesta área.

A criação de programas públicos voltados à aquisição e distribuição de alimentos oriundos da agricultura familiar constituiu-se também, como uma inovação importante nesse período, com destaque para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), instituído em 2003<sup>66</sup>, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que passou a ser orientado, a partir de 2009, por uma nova legislação<sup>67</sup>. Por meio do PAA, o Governo Federal compra alimentos de agricultores familiares através de mecanismos simplificados de aquisição. Esses alimentos são fornecidos para pessoas em situação de vulnerabilidade social, equipamentos públicos de alimentação e nutrição, instituições socioassistenciais e escolas da rede pública ou filantrópica de ensino. Podem ser também destinados à formação de estoques públicos de alimentos. O PAA constituiu-se como um elo importante entre a política agrícola e as políticas sociais voltadas à garantia da SAN. Na medida em que possibilita a articulação entre os sistemas produtivos diversificados da agricultura familiar e a demanda oriunda do mercado institucional, o programa contribui para promover a diversidade dos sistemas produtivos, chegando a adquirir, em 2012, 380 itens diferenciados de alimentos. O regulamento que orienta o PAA permite a aquisição de alimentos orgânicos/agroecológicos com preços diferenciados de até 30%. O percentual de alimentos certificados adquiridos através do PAA não assumiu, no entanto, dimensões muito expressivas, representando, em 2012 (ano em que o PAA apresentou seu melhor desempenho), cerca de 2% do volume total de aquisições (Porto, 2016). O desenho do programa possibilita, também, a compra e distribuição de sementes crioulas ou varietais (não transgênicas), sendo que a aquisição de sementes através do mercado institucional potencializou importantes ações voltadas ao fortalecimento de bancos comunitários de sementes geridos pelos agricultores familiares.

O PNAE, por sua vez, tem por objetivo garantir a alimentação de estudantes da rede pública ou filantrópica de ensino durante o período letivo. Seu regulamento procura priorizar a compra de produtos orgânicos ou agroecológicos (com sobrepreço de até 30%), como também os produzidos no município ou região em que estão localizadas as instituições demandantes. A garantia de comercialização oferecida contribui para a diversificação dos sistemas produtivos dos agricultores, ampliando, assim, as possibilidades de aplicação de princípios e práticas agroecológicas. O Programa Um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC), criado em 2003, e o Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2), constituído em 2007, também são exemplos da interlocução entre sociedade civil organizada e o Estado, na construção e operacionalização de políticas públicas. Estes programas podem ser considerados como um dos resultados da consolidação da proposta de Convivência com o Semiárido que, ao longo dos anos, foi sendo construída por um amplo conjunto de organizações da sociedade civil que se congregam na Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), em oposição às tradicionais políticas de Combate à Seca. Além das diferentes esferas estatais envolvidas na implantação destas políticas públicas<sup>68</sup>, destaca-se a importância da ASA no processo de mobilização social e implementação destes instrumentos junto às comunidades rurais do semiárido brasileiro.

---

<sup>65</sup>Esta mudança esteve vinculada a criação da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO), no ano de 2012, conforme observado abaixo.

<sup>66</sup>Sob a coordenação do MDS e do Grupo Gestor do Programa, composto por representantes de diferentes ministérios: MDA, MAPA, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Ministério da Educação.

<sup>67</sup> Este programa tem suas origens na década de 1950, institucionalizado, inicialmente, como Campanha de Merenda Escolar (CME). Sua inscrição neste esforço de compilação de programas e ações em favor da agroecologia se deve às alterações realizadas no Programa em 2009, quando se definiu que pelo menos 30% dos recursos destinados ao PNAE deveriam ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar. A coordenação do PNAE compete à União, que repassa recursos aos Estados, Distrito Federal e Municípios, por meio da autarquia do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

<sup>68</sup> O P1MC contou com o financiamento do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), além de aportes de alguns governos estaduais. O P1+2 é financiado pelo MDS e também, em alguns estados, pelo poder público, contando, ainda, com o apoio de outras instituições de caráter público e privado.

O P1MC visa garantir o acesso à água de qualidade para o consumo familiar por meio da construção de cisternas de placas de cimento, com capacidade de armazenamento de 16 mil litros de água da chuva, que visam abastecer os domicílios rurais. O P1+2 busca fortalecer os efeitos do P1MC, adicionando às cisternas construídas para o abastecimento humano uma “segunda água (+2)”, que é a voltada à produção agrícola e abastecimento animal. Tendo em vista que o P1MC e o P1+2 integram o Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido da ASA, observa-se que estes programas possibilitam às famílias desenvolver várias iniciativas de manejo e gestão com vistas a potencializar o aumento e a estabilização da oferta hídrica nos sistemas produtivos, a partir de um enfoque agroecológico, a exemplo dos bancos de sementes, sistemas agroflorestais e dos quintais produtivos. Figura como uma inovação importante trazida por estes programas o fato de considerarem os processos de mobilização e organização como parte integrante das tecnologias sociais disseminadas pelos dois programas. No período mais recente o principal foco, tanto das redes de agroecologia como de segmentos importantes ligados à produção orgânica, foi a construção da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO), instituída através do Decreto 7.794/2012<sup>69</sup> e dos Planos Nacionais de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPOs), 2013-2015 e 2016-2019. O processo de formulação da PNAPO desencadeou todo um esforço de articulação e construção de convergências entre organizações sociais e gestores públicos com intervenção, tanto no campo da agroecologia, como no universo da agricultura orgânica. Não cabe aqui detalhar os múltiplos processos que possibilitaram que o tema da agroecologia ganhasse visibilidade na agenda política do primeiro governo Dilma Rousseff, desdobrando-se na formulação de uma Política Nacional e contando com o suporte tanto da Secretaria de Governo da Presidência da República (SG-PR), como de diferentes Ministérios. O protagonismo dos movimentos de mulheres organizados na Marcha das Margaridas<sup>70</sup> foi, sem dúvida, um componente fundamental nesse processo.

Do ponto de vista político-operacional, diante dos compromissos assumidos por ocasião da Marcha das Margaridas, a Presidência da República designou o MMA como órgão responsável pela coordenação do processo de construção da nova política, constituindo-se, na sequência, um Grupo Interministerial para tratar deste tema, com estreito acompanhamento da Secretaria Geral da Presidência da República (SG-PR). A densidade social alcançada pela agroecologia, repercutindo em um cenário político e institucional favorável, permitiu que este processo ganhasse dinamismo. Mas é importante, igualmente, levar em consideração a relativa visibilidade alcançada pela agricultura orgânica nas ações do MAPA. Como observa Moura (2016), estava em construção, no âmbito da Comissão Nacional de Produção Orgânica (CNPORG), envolvendo as Comissões de Produção Orgânica (CPOrgs) nos estados, a formulação de uma política mais ampla, voltada à produção orgânica, que vinha sendo discutida desde o segundo mandato do Presidente Lula. A janela de oportunidades aberta com a PNAPO foi percebida como um possível caminho para que esta proposta pudesse avançar. O esforço de mediação desenvolvido pelo MMA no intuito de aproximar redes e movimentos do campo da agroecologia e organizações ligadas à agricultura orgânica foi bem-sucedido e possibilitou que estas iniciativas convergissem.

No campo das organizações da sociedade civil, a construção da PNAPO foi um momento importante de sistematização, não apenas de uma concepção compartilhada de agroecologia, mas de uma ampla agenda de políticas públicas nas mais diferentes áreas. A Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) desempenhou um papel fundamental no sentido de articular um processo de diálogo entre as diferentes organizações, contando com o suporte financeiro do Governo Federal para a realização de encontros nas diferentes regiões do país e de um seminário em nível nacional. Esse debate mobilizou aproximadamente 300 pessoas e 133 organizações, incluindo representantes dos movimentos sociais, ONGs, redes regionais e estaduais de agroecologia e profissionais vinculados a universidades e órgãos governamentais de pesquisa e extensão. O objetivo geral da PNAPO aparece no documento, produzido pelas organizações sociais, nos seguintes termos: Promover a Agroecologia e a produção orgânica como forma de ampliar, fortalecer e consolidar a agricultura familiar

---

<sup>69</sup> Decreto 7.794/2012. Disponível em :[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2011-2014/2012/\\_decreto/d7794.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/_decreto/d7794.htm). Acesso em : 27/04/2017.

<sup>70</sup>As jornadas denominadas Marchas das Margaridas, lideradas historicamente, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), articulam um amplo conjunto de organizações de mulheres, em parceria com outros atores. As Marchas ocorrem, aproximadamente, de quatro em quatro anos, sendo que a primeira delas foi organizada no ano 2000. Em 2011 o lema principal da Marcha foi sintetizado na frase “2011 razões para marchar por desenvolvimento sustentável com justiça, autonomia, liberdade e igualdade.” No encerramento da Marcha, que reuniu milhares de mulheres, a Presidente Dilma Rousseff comprometeu-se com a criação de um grupo especial de trabalho para elaborar um Programa Nacional de Agroecologia. (Aguar, 2015; Moura, 2016).



camponesa e povos e comunidades tradicionais, nos campos, nas florestas e nas cidades, potencializando suas capacidades de cumprir com múltiplas funções de interesse público na produção soberana, em quantidade, qualidade e diversidade, de alimentos e demais produtos da sociobiodiversidade; na conservação do patrimônio cultural e natural; na dinamização de redes locais de economia solidária; na construção de relações sociais justas entre homens e mulheres e entre gerações e no reconhecimento da diversidade étnica; contribuindo para a construção de uma sociedade sustentável, igualitária e democrática. (ANA, 2012). O documento, em sua concepção geral, busca demarcar politicamente a proposta defendida pelas organizações sociais. No item referente às premissas da ANA para elaboração da PNAPO, o texto destaca que a nova política “em suas concepções, instrumentos, mecanismos de gestão e controle social, deve estar orientada para o fortalecimento de uma alternativa sustentável aos padrões atualmente dominantes na organização socioeconômica, técnica e ecológica do desenvolvimento rural brasileiro” (ANA, 2012, p. 2). Nesta mesma seção reforça que: “a PNAPO não é redutível a uma mera política ambiental, nem à promoção de um conjunto de técnicas ou boas práticas”, “não se restringe à promoção de nichos de mercado de poucos agricultores/as para poucos/as consumidores/as”, “tampouco pode se reduzir a ações compensatórias destinadas a pobres rurais desinseridos dos grandes mercados” (ANA, 2012, p. 2-3). A linha divisória estabelecida pelos atores sociais ligados ao campo agroecológico entre a agroecologia e a agricultura orgânica aparece explicitada no documento. É interessante perceber, ao mesmo tempo, que estas diferenças conseguiram ser equacionadas, em boa medida, na construção do Plano, em um ambiente de respeito às diferentes identidades.

Por sua vez, o PLANAPO previu, em sua primeira fase, um total de 125 ações e um investimento de R\$ 8,8 bilhões em ações de promoção da agroecologia, subdivididas em quatro objetivos estratégicos: (a) produção; (b) uso e conservação dos recursos naturais, (c) conhecimentos, (d) comercialização e consumo. Ações relacionadas à reforma agrária e direitos territoriais, que aparecem de forma destacada no documento coordenado pela ANA, não ganharam um lugar central no I PLANAPO.<sup>71</sup> Apesar dos números vultosos, o I PLANAPO envolveu basicamente a coordenação de programas que já existiam previamente em vários ministérios, incluindo MDA e MAPA. Assim, a principal inovação foi a criação de uma nova estrutura de governança, composta por dois espaços: (a) Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica (CIAPO) – abarcando uma dezena de órgãos governamentais e coordenada pelo MDA; e (b) Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (CNAPO) – órgão de composição paritária entre governo e sociedade civil, onde estão os principais movimentos sociais rurais e agroecológicos a, representações da agricultura orgânica, assim como as associações de pesquisadores e extensionistas rurais, mas com a notável ausência dos setores agroempresariais. A Secretaria- Geral da Presidência da República (SGP/PR) é responsável pela Secretaria-Executiva da CNAPO. Entre os avanços oportunizados pela PNAPO cabe mencionar a articulação entre os diferentes movimentos e organizações sociais, e entre “produtores orgânicos” e agroecológicos, o envolvimento de um número crescente de Ministérios, o fortalecimento do programa Ecoforte<sup>72</sup> e o exercício de monitoramento do programas e ações de políticas públicas desenvolvido através da CNAPO, focado sobretudo, até o presente momento, no cumprimento das metas físicas dos diferentes programas. Por outro lado, as tentativas de institucionalizar o Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos (PRONARA), tem encontrado inúmeras resistências protagonizadas por atores governamentais e não governamentais. A partir dos elementos anteriormente apresentados, cabe refletir acerca dos desafios relacionados à coordenação e articulação desse amplo conjunto de programas e ações de políticas públicas mobilizados através da PNAPO em favor da promoção da agroecologia. A PNAPO buscou adotar uma perspectiva intersetorial, mobilizando, além disso, um conjunto diferenciado de organizações sociais e instituições. Os riscos relacionados à fragmentação desta intervenção estão fortemente presentes, mesmo se considerarmos, de uma forma mais restrita, o mix de políticas públicas direcionadas especificamente à agricultura familiar. Como já foi observado anteriormente, muitos destes instrumentos de política

---

<sup>71</sup> Em julho de 2016 foi lançado o II Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (II PLANAPO), em um cenário marcado por profundas transformações políticas relacionadas ao processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Diferentemente do primeiro, este segundo Plano contempla, em seu Eixo 5, o tema “Terra e Território”.

<sup>72</sup> O Programa Ecoforte tem como objetivo o fortalecimento e ampliação das redes, cooperativas e organizações socioprodutivas voltadas à agroecologia, extrativismo e produção orgânica. Já vinha sendo discutido com a Secretaria de Governo da Presidência da República (SG-PR), a Fundação Banco do Brasil (FBB), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e diferentes Ministérios, através de um processo de articulação sem vínculo direto, pelo menos inicialmente, com os debates relativos à formulação da PNAPO. Verifica-se a partir de um certo momento, uma crescente sinergia entre esses dois processos.

pública não foram pensados, originalmente, como ferramentas de promoção da agroecologia. O ajuste destes dispositivos com base em um novo enfoque demanda, necessariamente, uma série de modificações tanto do ponto de vista normativo como no que se refere às suas formas de implementação.

Um outro ponto a ser mencionado diz respeito à arquitetura institucional composta pela CIAPO e pela CNAPO. Este arranjo pressupõe, de um lado, uma forte presença da sociedade civil na construção da política, e que de fato se efetivou na construção do I e II PLANAPOs, mas também uma grande disposição por parte dos gestores públicos no sentido de dialogar com as organizações sociais. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que a CIAPO conta com a participação de diferentes Ministérios, com envolvimento e níveis de interesse muito distintos no que diz respeito à agroecologia e à produção orgânica, e que o perfil dos gestores que participam da CIAPO e da CNAPO é bastante diferenciado, inclusive no que diz respeito ao seu poder de decisão. Cabe valorizar, no entanto, as conexões estabelecidas por estes órgãos com a Política Nacional através da CIAPO e da CNAPO, possibilitando às ideias agroecológicas alcançar setores do Estado que estavam muito distantes desta discussão. O I PLANAPO foi implantado em um momento em que as ações que integram o Plano Plurianual (PPA) 2012-2015 já haviam sido estabelecidas, inclusive do ponto de vista de sua programação orçamentária. O II PLANAPO já foi capaz de lograr um melhor ajuste em relação ao PPA. Mas a proposta de criação de um Fundo Nacional de Apoio e Fomento à Agroecologia e Produção Orgânica que havia sido proposto pela ANA não avançou e a PNAPO continua dependendo de um esforço de articulação de recursos que hoje se encontram distribuídos em vários Ministérios. No ambiente de formulação e implementação de políticas públicas na esfera federal, a existência de uma Política Nacional, apontada pelo centro de governo como de relevância para esta gestão, modifica o ambiente mais geral em que se situam a agroecologia e a produção orgânica. É preciso reconhecer, ao mesmo tempo, que a PNAPO tem apresentado uma série de limitações no sentido de regular as práticas associadas ao agronegócio, as quais são nitidamente prejudiciais ao desenvolvimento da agroecologia. Um exemplo marcante neste sentido é o Programa Nacional para Redução de Agrotóxicos (PRONARA), proposto no âmbito da CNAPO, e que até o presente momento não se efetivou.

As possibilidades de articulação entre os diferentes instrumentos de políticas públicas articulados pela PNAPO não ficam restritas à esfera federal. O box abaixo tem por objetivo ilustrar as interfaces estabelecidas entre uma rede de agroecologia com atuação em um contexto territorial específico e um conjunto diversificado de instrumentos de políticas públicas na promoção da sustentabilidade da agricultura familiar. Os efeitos gerados nesse encontro entre as políticas públicas e os atores sociais, em movimento, no Agreste da Borborema-PB, nos permitem vislumbrar, em uma escala territorial, um processo bastante ativo de coordenação de políticas e ações.

*Quadro 1. Construindo a transição para a sustentabilidade no Semiárido: as redes de agroecologia do Agreste da Borborema e suas interfaces com as políticas públicas*

*A experiência desenvolvida pelas organizações sociais vinculadas ao Polo Sindical da Borborema, no Agreste da Paraíba, é bastante ilustrativa dos resultados positivos gerados por um processo contínuo de mobilização e articulação de política públicas e de dispositivos de ação coletiva, com forte participação dos agricultores. Os diferentes programas e ações que integram a PNAPO não aparecem, aqui, como elementos indutores de um processo de transição para a agroecologia, mas como componentes de um mix de instrumentos de ação governamental, selecionados e ativados de forma criativa pelos agricultores familiares e suas organizações, gerando um processo coletivo de ampliação de capacidades e níveis crescentes de resiliência e sustentabilidade.*

*A construção da rede de agroecologia do Agreste da Borborema remonta à década de 1980, lançando, no entanto, suas raízes em uma trajetória social mais longa, marcada pela ascensão e declínio de atividades produtivas voltadas para o mercado e por processos cíclicos de campesinização e recampesinização. (Piraux e Miranda, 2010). A região caracteriza-se, historicamente, por elevados níveis de pobreza e por uma significativa concentração de estabelecimentos agrícolas de base familiar, estando situada em uma zona de transição entre o litoral úmido e o sertão seco.*

*O Polo Sindical da Borborema articula, atualmente, 14 Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de abrangência municipal, 150 organizações de base comunitária, uma associação regional de agricultores agroecológicos e um ativo movimento de mulheres agricultoras. Estas organizações integram um universo aproximado de 5.000 famílias.*

*A partir de 1993, os sindicatos da região passaram a atuar em parceria com uma organização não governamental de assessoria no campo da agroecologia, a AS-PTA, incorporando, em um movimento de renovação de sua atuação sindical, a agroecologia como um referencial de análise da realidade da agricultura familiar e eixo estruturador de uma série de processos de inovação nas práticas de manejo dos agroecossistemas. Constituíram-se nesse processo, redes de agricultores(as)-experimntadores que passam a trabalhar em um amplo conjunto de temáticas, orientadas por uma estratégia que busca articular a estruturação de sistemas produtivos altamente diversificados, com uma crescente autonomia, particularmente em relação aos mercados de insumos. Uma das primeiras ações emblemáticas na Borborema foi a luta pelo reconhecimento público das sementes crioulas, produzidas e conservadas pelos agricultores. A iniciativa partiu das bases comunitárias, com o apoio da AS-PTA e dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais, que atuavam nos municípios na estruturação de fundos rotativos que possibilitavam o acesso a vários tipos de recursos: esterco para batatinha, palma forrageira, cisternas para estoque de água e, principalmente variedades locais de milho e feijão. A revitalização por estes atores dos Bancos de Sementes Comunitários (BSCs) e a sua constituição numa rede de intercâmbios locais contribuiu para oferecer uma alternativa à distribuição pública de sementes híbridas, que não eram do interesse nem dos produtores e nem dos consumidores. Progressivamente, por meio da Articulação do Semiárido Paraibano, o movimento fez votar uma Lei de Sementes do*

*Estado da Paraíba em 1999, que reconhece o valor de semente aos materiais genéticos armazenados pelos BSCs e autoriza sua distribuição pela própria rede ou através dos serviços públicos de extensão.*

*Ao longo de sua trajetória, a rede foi capaz de mobilizar um amplo conjunto de políticas públicas, que foram sendo interpretadas, selecionadas e adaptadas, com base nos conhecimentos e estratégias de ação que iam sendo construídas pelos agricultores (as), em seu processo de organização. Nesse mesmo processo, o Polo se fortalecia como um ator coletivo, buscando influenciar a construção e implementação de políticas públicas, engajando-se na construção de novas referências de política e ação pública para o semiárido brasileiro, traduzidas em boa medida, pela ideia de Convivência com o Semiárido. Este conceito, que se alimenta das experiências vividas pelas comunidades rurais na luta pelo acesso à água, representa uma ruptura com os tradicionais enfoques de políticas públicas que orientaram a intervenção do Estado na região. Os programas públicos para a implantação de infraestruturas para a captação e armazenamento de água das chuvas (P1MC e P1+2) constituíram-se na Borborema como uma espécie de gatilho capaz de desencadear outros processos de inovação sócio-técnica, utilizando recursos advindos não apenas das políticas públicas, mas mobilizando capacidades endógenas da região.*

*Até 2016, já haviam sido implantadas na área de atuação do Polo Sindical 8.403 cisternas para o armazenamento de água para o consumo e 1.360 outras tecnologias voltadas à captação de água para a produção. O acesso à água permitiu às famílias ampliar sua capacidade de produção, dinamizando os quintais produtivos, gerenciados principalmente pelas mulheres, fortalecendo a participação dos agricultores, inclusive dos jovens, nas feiras de produtos agroecológicos – estas envolviam, em 2015, mais de 100 famílias de agricultores – e ativando a comercialização de alimentos através do PAA por mais de 80 famílias. No caso das sementes, o PAA foi utilizado, também, como um mecanismo de fortalecimento dos bancos comunitários de sementes, que organizavam em 2016 um universo aproximado de 950 famílias, possibilitando a conservação, melhoria e estocagem de um amplo conjunto de variedades crioulas ou localmente adaptadas como o milho, o feijão e diferentes tipos de forrageiras. A produção e estocagem de forragem para os animais, tornando os sistemas produtivos mais resilientes, particularmente no período da seca, também foi ampliada através do financiamento de máquinas motoensiladeiras utilizadas coletivamente pelos agricultores. Os desafios técnicos e sociais advindos de todo esse processo, potencializaram a interação com a pesquisa pública, estimulando parcerias tanto com a Embrapa como com as universidades, estimulando, também novos investimentos, financiados através de Fundos Rotativos Solidários (FRS). Chama atenção, nessa trajetória, a produção de um processo contínuo de aprendizado e de construção de sinergias entre políticas públicas em favor da agroecologia e processos de organização social.*

## Considerações finais

---

Nesta parte final do texto buscamos organizar alguns apontamentos sobre os possíveis aprendizados relacionados à experiência brasileira de construção de políticas públicas em favor da agroecologia.

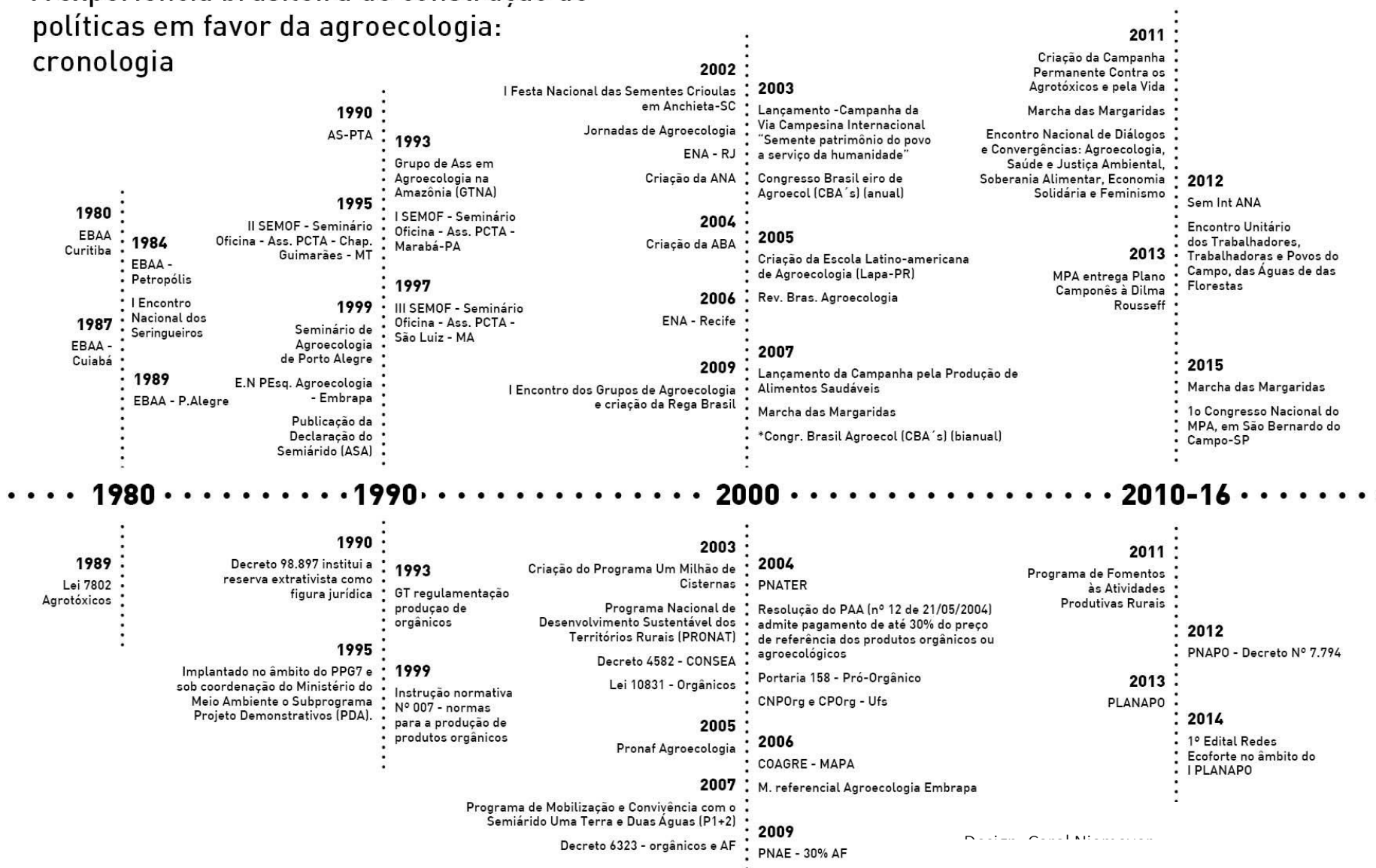
A incorporação da agroecologia como um enfoque pelas políticas públicas foi resultado de uma longa trajetória de interações, estabelecidas entre movimentos sociais e redes de articulação da sociedade civil com o poder público, resultando, ao longo do tempo, em uma pluralidade de processos de institucionalização da agroecologia. Estas iniciativas culminaram, em 2012, com a construção do PLANAPO. Chama atenção, nessa trajetória, a relevância assumida por fóruns e arenas de participação social na construção de um movimento de crítica e contestação dos efeitos gerados pelo processo de modernização da agricultura e na produção de um enfoque alternativo. Estes espaços de participação foram fundamentais no alinhamento dos diferentes atores do campo agroecológico e na construção de convergências, não apenas no âmbito das redes de agroecologia, mas, destas, com as organizações vinculadas ao universo da agricultura orgânica.

A abordagem proposta pela agroecologia avançou nas possibilidades abertas pelo reconhecimento da agricultura familiar e pela implementação de um conjunto diversificado de políticas públicas voltadas a este setor. É possível identificar, no entanto, complementaridades mas, também, descontinuidades entre o enfoque adotado pelas políticas de fortalecimento da agricultura familiar e a abordagem proposta pela agroecologia, decorrentes, entre outros fatores, das fortes conexões estabelecidas por determinados segmentos da agricultura familiar brasileira com as cadeias globais de commodities. Cabe observar, ao mesmo tempo, que a forte presença do agronegócio, que se manifesta em termos políticos, econômicos e territoriais, apresenta-se como um obstáculo à implantação de uma política de promoção da agroecologia capaz de reorientar, de uma forma mais profunda, as políticas de desenvolvimento rural, avançando para além de um “política de nicho”.

O debate em torno da agroecologia tensiona os limites políticos, institucionais e práticos de coexistência entre as duas agriculturas (agronegócio e agricultura familiar). Com a PNAPO, a agroecologia se afirma como uma abordagem intersetorial, que busca redirecionar um conjunto heterogêneo de instrumentos de política pública a partir de um novo enfoque, enfrentando, neste movimento, uma série de desafios relacionados à adequação, articulação e coordenação do conjunto diversificado de programas e ações incorporados a esta política. Avanços importantes vem sendo conquistados na escala territorial como evidencia o estudo de caso relativo à região do Agreste da Borborema.

Para finalizar gostaríamos de reforçar, mais uma vez, que a trajetória descrita ao longo do texto somente pode ser compreendida em um ambiente marcado por uma intensa participação das organizações da sociedade civil nos processos de formulação e implementação de políticas públicas. As profundas mudanças de cenário ocorridas no decorrer do último ano, marcadas não apenas por uma crise fiscal do Estado, mas por rupturas no sistema político brasileiro, parecem apontar para um movimento crescente de desestruturação das políticas públicas voltadas à agricultura familiar e das políticas sociais de forma geral. Nesse sentido, uma das lições do caso brasileiro na sua experiência mais recente, encontra-se, também, relacionada à fragilidade dos processos setoriais de inovação em políticas públicas frente às mudanças de cenário ocorridas em um contexto econômico e político mais abrangente.

# A experiência brasileira de construção de políticas em favor da agroecologia: cronologia



## Referências bibliográficas

- ACSELRAD, V.A Economia Política do Agronegócio no Brasil: o legado desenvolvimentista no contexto da democratização com liberalização. Tese (Doutorado em Ciência Política), Instituto de Estudos Sociais e Políticos. Rio de Janeiro-RJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UFRRJ, 2012.
- AGUIAR, V. V. P. Somos todas Margaridas : um estudo sobre o processo de constituição das mulheres do campo e da floresta como sujeito político. Tese (Doutorado em Ciências Sociais), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Campinas-SP, Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, 2015.
- ALEGRETTI, M. H. A construção social de políticas ambientais: Chico Mendes e o movimento dos seringueiros. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Sustentável – Gestão e Política Ambiental), Centro de Desenvolvimento Sustentável. Brasília-DF, Universidade de Brasília, UNB, 2002.
- ALMEIDA, A. W. B. D. Agroestratégias e desterritorialização: direitos territoriais e étnicos na mira dos estrategistas dos agronegócios. In: \_\_\_\_\_ et al. Capitalismo globalizado e recursos territoriais. Rio de Janeiro: Lamparina, 2010. p. 101-143.
- ALTIERI, M. As bases científicas da agricultura alternativa. Rio de Janeiro: PTA/FASE, 1989.
- ARTICULAÇÃO NACIONAL DE AGROECOLOGIA. Propostas da Articulação Nacional de Agroecologia-ANA para a “Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica”. Abril de 2012. Disponível em: <http://www.agroecologia.org.br/files/importedmedia/propostas-ana-para-a-politica-nacional-de-agroecologia-e-organicos-pdf.pdf>. Acesso em: 25/04/2017.
- AVRITZER, L. Instituições participativas e desenho institucional: algumas considerações sobre a variação da participação cidadã no Brasil democrático. *Opinião Pública*, v. 14, n. 1, 2008. p. 43-64.
- BARCELLOS, S. B. A apropriação do discurso da agroecologia pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). *Sociedade e Desenvolvimento Rural*, v. 8, n. 1, jan. 2014, p. 1-25.
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988.
- BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Plano setorial de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas para a consolidação de uma economia de baixa emissão de carbono na agricultura: plano ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono). Brasília : MAPA/ACS, 2012.
- BRASIL. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SAF/DATER. Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Brasil, maio de 2004.
- CAPORAL, F. R.; COSTABEBER, J. A. Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável: perspectivas para uma nova extensão rural. *Revista Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável*, v. 1, n. 1, jan./mar. 2000. p. 16-37.
- CUNHA, F. L. da. Sementes da Paixão e as políticas de distribuição de sementes na Paraíba. Dissertação (Mestrado em Práticas de Desenvolvimento Sustentável), Instituto de Florestas. Rio de Janeiro-RJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, 2013a.
- CUNHA, P. R. O Código Florestal e os processos de formulação do mecanismo de compensação de Reserva Legal (1996-2012): ambiente político e política ambiental. Dissertação (Mestrado em Ciência Ambiental), Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. São Paulo-SP, Universidade de São Paulo, USP, 2013b.
- DELGADO, G. C. Do capital financeiro na agricultura à economia do agronegócio: mudanças cíclicas em meio século (1965-2012). Porto Alegre: UFRGS, 2012.
- DEPONTI, C. M. Intervenção para o desenvolvimento rural: o caso da extensão rural pública do Rio Grande do Sul. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Rural), Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, Faculdade de Ciências Econômicas. Porto Alegre-RS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, 2010.
- DIAS, M. M. As ONGs e a construção de alternativas para o desenvolvimento rural: um estudo a partir da Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa (AS-PTA). Tese (Doutorado em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade), Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Rio de Janeiro-RJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, 2004.

DIESEL, V.; DIAS, M. M.; NEUMAN, P. S.. PNATER (2004-2014): da concepção à materialização. In: GRISA, Catia, SCHNEIDER, Sérgio. Políticas públicas de desenvolvimento rural no Brasil. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2015. p. 107-128.

EMBRAPA. Marco Referencial em Agroecologia. Brasília-DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2006.

EMBRAPA. Visão 2014-2034 : o futuro do desenvolvimento tecnológico da agricultura brasileira: síntese / Embrapa. Brasília-DF : Embrapa, 2014.

FARRANHA, A. C.; SANTOS, V. S. dos. Ativismo em redes sociais digitais: análise da Rede Cerrado e suas interfaces na promoção de política públicas sustentáveis. Revista Direitos Emergentes na Sociedade Global. v. 4, n.1, 2015.

FERREIRA, B.; ALVES, F.; CARVALHO FILHO, J. J. de. Constituição vinte anos: caminhos e descaminhos da reforma agrária - embates (permanentes), avanços (poucos), derrotas (muitas). In: IPEA. Políticas sociais: acompanhamento e análise. Vinte anos da Constituição Federal. Edição Especial, n. 17, v. 2, 2009, p. 155-223.

FONSECA, M.F. de A. C. A institucionalização do mercado de orgânicos no mundo e no Brasil: uma interpretação. Tese (Doutorado em Sociologia, Área de Concentração Desenvolvimento e Agricultura), Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Rio de Janeiro-RJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, 2005.

GLIESSMAN, S. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2000.

GRISA, C. A agricultura familiar nas políticas para a agricultura familiar. In: DELGADO, G. C.; BERGAMASCO, S. M. P. P. Agricultura familiar brasileira: desafios e perspectivas de futuro. Brasília: SEAD, 2017. p. 292-313.

GRISA, C.; SCHNEIDER, S. Três gerações de políticas públicas para a agricultura familiar e formas de interação entre sociedade e estado no Brasil. Revista de Economia e Sociologia Rural, vol. 52, supl. 1, 2014. p. S125-S146.

HARVEY, David. O novo imperialismo. São Paulo: Edições Loyola, 2012.

LASCOUMES, P. Rendre gouvernable: de la "traduction" au "transcodage": l'analyse des processus de changement dans les réseaux d'action publique. In: CURAP. La Gouvernabilité. Paris: PUF, 1996. p. 325-338.

LEROY, J. P.; ABRAMOVAY, R. Avaliação Rede PTA - Relatórios. Setembro de 1998.

LISBOA, M. V. Balanço da política ambiental do governo Lula: grandes e duradouros impactos. In: PAULA, M. de. (org.). Nunca antes na história desse país?: um balanço das políticas do governo Lula. Rio de Janeiro: Heinrich Böll Stiftung, 2011, p. 16-32.

LISBOA, M. V. Socioambientalismo: coerências conceituais e práticas entre os movimentos. In: PETERSEN, P. (org.) Agricultura familiar camponesa na construção do futuro. Rio de Janeiro: ASPTA, 2009. p. 129-137.

LUZZI, N. O debate agroecológico no Brasil: uma construção a partir de diferentes atores sociais. Tese (Doutorado em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade), Programas de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade. Rio de Janeiro-RJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, 2007.

MATTOS, L. A. A Análise do Proambiente como Política Pública Federal para a Amazônia Brasileira. Cadernos de Ciência & Tecnologia, v. 28, n. 3, set./dez. 2011. p. 721-749.

MEDEIROS, M. C. Estado, capital financeiro e agricultura no Brasil atual. In: Anais do XI Encontro Nacional da ANPEGE - A diversidade da geografia brasileira: escalas e dimensões da análise e da ação. Presidente Prudente-SP, 2015, p. 6223-6232. Disponível em: <http://www.enanpege.ggf.br/2015/anais/arquivos/22/605.pdf>. Acesso em: 17/03/2017.

MEIRELLES, L. Certificação e Dominação. Ipê: Centro Ecológico, 1994. Disponível em: [http://www.centroecologico.org.br/certificacao\\_download.php?id\\_pdfcertificacao=71&tipo=pdf](http://www.centroecologico.org.br/certificacao_download.php?id_pdfcertificacao=71&tipo=pdf). Acesso em: 28/04/2017.

MIELITZ NETTO, C. G. A política agrícola brasileira, sua adequação e sua funcionalidade nos vários momentos do desenvolvimento nacional. In: BONNAL, P.; LEITE, S. P. (orgs.) Análise Comparada de Políticas Agrícolas. Rio de Janeiro: Mauad X, 2011. p. 221-251.

MONTE, F. C. D. O INCRA e a Política de Assentamentos Rurais: um estudo sobre processos político-administrativos de ação pública. Tese (Doutorado em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade), Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, 2013.

MONZONI, M. Análise dos recursos do Programa ABC. Instituições Financeiras Privadas. Safra 2015/2016. São Paulo: FGV / Observatório ABC. Relatório 1, Ano 3, agosto de 2016.

MOURA, I. F. de. Agroecologia na agenda governamental brasileira: trajetórias no período 2003-2014. Tese (Doutorado em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária), Programa de Inovação em Ciência, Tecnologia e Inovação Agropecuária. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, 2016.

NIEDERLE, P.; FIALHO, M. A. V.; CONTERATO, M. A. A pesquisa sobre agricultura familiar no Brasil - aprendizagens, esquecimentos e novidades. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 52, supl. 1, 2014. p. S009-S024.

OECD-FAO. OECD-FAO Agricultural Outlook 2015. Paris: OECD Publishing, 2015.

OXFAM - Brasil Terrenos da desigualdade: terra, agricultura e desigualdades no Brasil Rural. Oxfam-Brasil, novembro de 2016. Disponível em: <https://www.oxfam.org.br/publicacoes/terrenos-da-desigualdade-terra-agricultura-e-desigualdade-no-brasil-rural>. Acesso em: 10/03/2017.

PACKER, L. Novo Código Florestal e Pagamentos por Serviços Ambientais. Regime proprietário sobre os bens comuns. Curitiba: Juruá, 2015.

PETERSEN, P.; MUSSOI, E.; DAL SOGLIO, F. Institutionalization of the agroecological approach in Brazil: advances and challenges. Agroecology and Sustainable Food Systems, vol. 37, nº. 1, 2013, p. 103-114.

PICOLOTTO, E. Os atores da construção da categoria agricultura familiar no Brasil. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 52, supl. 1, 2014. p. S063-S083.

PICOLOTTO, E.; BRANDENBURG, Alfio. Uma grande oportunidade: o sindicalismo e seus projetos de ecologização da agricultura familiar. Ambiente & Sociedade, 2015, vol. 18, p. 1-18.

PICOLOTTO, E.; MEDEIROS, L. S. de. A formação de uma categoria política: os agricultores familiares no Brasil contemporâneo. In: DELGADO, G. C.; BERGAMASCO, S. M. P. P. Agricultura familiar brasileira: desafios e perspectivas de futuro. Brasília: SEAD, 2017. p. 344-368.

PIRAUX, M.; MIRANDA, R. de S. A longa emergência da agricultura familiar: relações entre atividade agrícola, atores sociais e formas de intervenção do Estado no Agreste Paraibano. Raízes, v. 30, n. 2, jul.-dez 2010. p. 52-67.

PIRES, R. R. C.; VAZ, A. C. N. Para além da participação: interfaces socioestatais no Governo Federal. Lua Nova, n. 93, 2014, p. 61-91.

PORTO, S. A agroecologia e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Carta Maior, 14/06/2016. Disponível em: <http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/A-agroecologia-e-o-Programa-de-Aquisicao-de-Alimentos-PAA/3/36284>. Acesso em: 31/10/2016.

SAMBUICHE, R. H. R.; OLIVEIRA, M. A. C. Análise das linhas de crédito do Pronaf para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. Cadernos de Agroecologia, v. 6, n. 2, 2011. p. 1-6.

SANTILLI, J. Socioambientalismo e novos direitos. São Paulo: Peirópolis, 2005.

SILIPRANDI, E. Desafios para a extensão rural: o social na transição agroecológica. Revista Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, v. 3, n. 3, jul.-set. 2002. p. 38-48.

WEID, J. M. von der. As práticas inovadoras: identificação, sistematização, difusão. Proposta: experiências em educação popular, vol.36, 1988, p. 8-13.

WEID, J. M. von der. Texto de referência do campo agroecológico para a conferência nacional de ATER. Rio de Janeiro, ASPTA, 2011



## Capítulo 4. Las Políticas de Fomento a la Agroecología en Chile

*Hugo Martínez Torres, Mina Namdar-Irani, Constanza Saa Isamit*

### Introducción

Este artículo busca describir y analizar cómo la agroecología ha sido abordada (o no) por las políticas públicas en Chile en las últimas 2 ó 3 décadas. Para ello, el texto se ha estructurado en cuatro secciones: la primera entrega elementos de reflexión que fundamentan la definición de “Agroecología” que se ha decidido adoptar en el trabajo; se continúa, en la segunda sección, con una descripción de la trayectoria y tendencias de las políticas agrícolas y de gestión ambiental en el país, lo cual proporciona el contexto y marco que permite entender mejor los programas e instrumentos de fomento a la agroecología que se analizan en la tercera parte. La última sección culmina con una discusión y conclusiones sobre el espacio que tiene y podrá tener la agroecología en Chile.

### Agroecología, principios agroecológicos y agricultura sustentable

#### Contexto demográfico pre y post Revolución Verde

Es importante contextualizar en términos generales la demografía y comercio durante las etapas pre y post revolución verde, para situar la mirada agroecológica en el entorno económico correspondiente. Hasta el año 1930 había en Chile más población rural que urbana (50,6% de población rural), mientras que en contraste, según el Censo de 2002 la población de Chile que vivía en el campo era de sólo un 13,4%. Estimando en términos absolutos, la población rural de Chile disminuyó sólo desde 2.169.000 a 2.026.000, sin embargo, la gente que estaba vinculada a la producción silvoagropecuaria versus los consumidores de alimentos, evidentemente disminuyó drásticamente, realidad que se presentó en toda Latinoamérica y en el mundo en general. A nivel planetario la población rural correspondía al 66,4% en el año 1960, y en el año 2015 la proporción ha bajado al 46,1%<sup>73</sup>.

Más allá del rol que haya jugado la revolución verde en cuanto a la alimentación en el mundo, se podría deducir de estas cifras globales un aumento en la escala de producción de la agricultura en su producción primaria, y un proceso de mayor especialización en otras labores ajenas a lo agrícola y a lo rural en el mundo en general. En Latinoamérica además, existe un aumento en el llamado Empleo Rural no Agrícola (ERNA), en el que cada vez más gente sale de la producción primaria agrícola para ejercer otras labores en el área rural, lo que redundará en que cada vez menos población trabaja en producción primaria de alimentos (Dirven, 2011). Más allá de que este contexto como paradigma sea bueno o malo, lo concreto es que resulta ser una realidad negativa para el medio ambiente, en la medida que se presionan más los recursos naturales, se utilizan más agroquímicos; y positiva en cuanto a que el monocultivo con economías de escala ha podido hacerse cargo de ofrecer más alimentos a la población que se aleja del campo y se va especializando en otros sectores de la economía.

Otro elemento de contexto que evidencia la especialización -que en agricultura tiende a manifestarse en el monocultivo- es el comercio mundial de alimentos, que además en el caso de Chile es más relevante que en el promedio de países. El aumento en el comercio entre países implica que estos van concentrando su economía en la producción de bienes en los que son más competitivos a nivel global, en desmedro de otros productos en los que a largo plazo les convendría importarlos desde otros países. En Chile, entre los años 1997 y 2007, que corresponde a un período muy relevante en la apertura de la economía, la superficie

<sup>73</sup> <http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.RUR.TOTL>

cultivada de cereales disminuyó en un 26%, mientras que la superficie de frutales y viñas se incrementó en 45%<sup>74</sup>.

### Agroecología y agricultura sustentable

Es fácil encontrar en la literatura definiciones de agricultura ecológica (que con frecuencia se homologa a la orgánica o biológica), de agricultura de precisión, agricultura sustentable, entre otras, pero definiciones de agricultura, a secas, sin adjetivo, no se obtienen con facilidad. Sebillotte (1974) entrega una definición de agricultura bastante técnica, en el marco de la descripción de las tareas del agrónomo: “la agricultura consiste en obtener una producción de una serie de plantas y animales, sobre una superficie en el seno de un medio natural y socioeconómico dado, por lo tanto, en un marco de restricciones, poniendo en obra a factores de producción.” Este concepto de agricultura, aun siendo de la época de la Revolución verde, se basa en el “medio natural y socioeconómico”.

A su vez, Margalef plantea que la ecología se tiende a definir como el estudio de las relaciones de un organismo con su ambiente inorgánico u orgánico. Menciona que Haeckel se refería particularmente al estudio de las relaciones de tipo positivo (amistoso) y de tipo negativo (enemigos) de un ser vivo con las plantas y los animales con los que convive. “(en) la biología de los ecosistemas el nivel de referencia por tanto no es el conjunto de átomos ni de moléculas ni el de células, sino el nivel de organización cuyos elementos constitutivos esenciales son los individuos de distintas especies.” (Margalef, 1974).

Entonces, la agroecología podría entenderse como el estudio de la ecología, pero con una intencionalidad productiva e incorporación del carácter socioeconómico al entorno.

En efecto, Hecht (1999), plantea que “la agroecología a menudo incorpora ideas sobre un enfoque de la agricultura más ligado al medio ambiente y más sensible socialmente; centrada no sólo en la producción, sino también en la sostenibilidad ecológica del sistema de producción”. Sería entonces una agricultura con visión ecológica (muy basada en la teoría de sistemas), y con una perspectiva social.

Susana Hecht, en la publicación citada, realiza un interesante recorrido de la mirada sistémica en la agricultura, partiendo desde lo que se conoce (y se ha redescubierto) de los sistemas agrícolas prehispánicos, los que se habrían ido quebrando, en un primer momento por el colonialismo, la esclavitud, y posteriormente con la llegada de la revolución verde. Desde que se observó que, si bien la tecnología desarrollada durante la revolución verde incrementó los rendimientos productivos, ésta no habría sido capaz de resolver los problemas de desigualdad económica y hambrunas en los países del tercer mundo, sumado luego a los impactos ambientales que se fueron haciendo evidentes (suelos erosionados, contaminación con agroquímicos); habría entonces comenzado a resurgir la mirada sistémica, entendiendo la agricultura con un enfoque de sustentabilidad.

El Ministerio de Agricultura de Francia, con la publicación en 2013 del “Proyecto agroecológico para Francia” y de la promulgación, al año siguiente, de la “Ley del Futuro para la Agricultura, la Alimentación y el Bosque (Ley N° 2014-1130) incorpora formalmente la agroecología en sus políticas agrícolas. Concibe entonces la agroecología como un sistema integrado de los recursos y mecanismos de la naturaleza, con el objetivo de producción agrícola. Combina las dimensiones ecológicas, económicas y sociales y apunta a sacar un mejor provecho de las interacciones entre vegetales, animales, humanos y el medio ambiente.

Los principios clave de la política de agroecología francesa son: Aumentar la biodiversidad funcional de los agroecosistemas, reforzar las regulaciones biológicas, y cerrar los grandes ciclos (carbono, nitrógeno, fósforo, etc.). Si bien la agroecología se entiende más vinculada a pequeñas superficies con policultivos en

---

<sup>74</sup> Según datos de los Censos Agropecuarios de los años 1997 y 2007.

los que tiende a reciclarse la energía del sistema (combinación de diferentes estratos, reciclaje de nutrientes, entre otros), la mirada del Ministerio de Agricultura de Francia, al referirse al cierre de los grandes ciclos, abre la mirada a compatibilizar la agricultura especializada y de gran escala al concepto agroecológico cuando se mira como un todo (Guillou, 2013; Griffon, 2013; Ministère de l'Agriculture, 2013).

Dentro de las ideas de política agrícola para Chile que se han levantado en la última década, se propone avanzar hacia una agricultura de ciclos cerrados, en la que distingue un "ciclo menor", que se refiere a un nivel predial, en el que se tiende a reciclar la energía dentro del sistema de producción minimizando el uso de insumos externos; un "ciclo medio", que se cierra a nivel del sector agropecuario, incorporando el paso de estiércol, guanos y forrajes entre sistemas ganaderos y agrícolas; y un "ciclo mayor", en el que se incluye el uso de biosólidos en la agricultura, la captura de carbono en los sumideros (agrícolas y forestales) entre otros (Martínez, 2010).

En la política agrícola chilena en general se viene usando el concepto de agricultura sustentable asociado a los aspectos agro ambientales considerados por la OCDE. Martínez (2010), los sistematiza clasificándolos en dos objetivos: uso sustentable de los recursos naturales (suelo, agua, aire, biodiversidad), y la minimización de las externalidades negativas (contaminación de aguas, aire, biodiversidad y consumidores). La agricultura sustentable entonces, como se ha entendido en la política agrícola de Chile, incluye elementos de evidente beneficio productivo y de uso sustentable de los recursos naturales, pero que no van necesariamente en la línea de acercarse a lo natural y patrimonial, como el caso del uso eficiente del agua a través de riego tecnificado, o la mejora de la productividad de los suelos agrícolas a través de la adición de fertilizantes químicos, entre otros.

La agricultura orgánica, a diferencia de la agroecología que se entiende como un enfoque científico, que tiene una bajada directamente normativa. Si bien el espíritu de ésta es el uso de tecnologías "naturales", como la prohibición de OGMs y el no uso de ciertos insumos químicos de carácter más industrial, en general no incluye la mirada social y cultural. Por estar también la agricultura orgánica normada en cuerpos legales, opera en la lógica del todo o nada (cumple o no cumple), más que en ejes y criterios científicos que permitan una mirada más flexible, y por tanto más fértil para aplicar políticas con la necesaria gradualidad, pensando más que en una norma, en un enfoque de sistemas agropecuarios sustentables.

Para el presente artículo se busca analizar los esfuerzos de la política pública por ir más allá del concepto "agricultura sustentable", esto porque se considera un estándar muy amplio, dentro del que caben muchas prácticas cuya finalidad principal es la rentabilidad económica del sistema. Se opta entonces por trabajar en la línea trazada entre la Revolución Verde y la Agroecología, y sobre ella observar avances y retrocesos.

Desde la situación de una agricultura del tipo Revolución Verde, los autores consideran que una transición hacia la agroecología podría resumirse en tres ejes: **protección de la biodiversidad**, esto es conectar nuevamente la producción agrícola con los ciclos biológicos y el entorno; **eficiencia energética**, entendida como buena utilización de la energía interna del sistema agrícola, evitando la adición de insumos externos y cerrando los ciclos del carbono y nitrógeno, entre otros; y reconocimiento de las tecnologías tradicionales y patrimoniales, que se refiere a la utilización de técnicas, variedades y factores de producción provenientes del **conocimiento tradicional**. Para el presente capítulo entonces, entenderemos un avance hacia lo agroecológico desde los tres ejes mencionados: herramientas e instrumentos que promuevan la protección de la biodiversidad, la eficiencia energética, y/o el rescate y uso de tecnologías tradicionales. Bajo este planteamiento, se incluirán en el análisis los instrumentos que promuevan el avance en al menos uno de los tres ejes, y que a la vez no redunden en un retroceso en ninguno de los tres (criterio de Pareto<sup>75</sup>).

---

<sup>75</sup> Según el óptimo de Pareto, la máxima prosperidad común se obtiene cuando ninguna persona puede aumentar su bienestar en un intercambio sin perjudicar a otra. O, lo que es lo mismo, si crece la utilidad de un individuo, sin que disminuya la utilidad de otro, aumenta el bienestar social de los individuos. Aplicado al presente caso serían Paretianas

Conscientes de que prácticas relevantes para la agricultura sustentable, como las tecnologías de riego y la fertilidad de los suelos con aplicaciones de fertilizantes minerales o sintéticos, o el uso de semillas híbridas resistentes a enfermedades quedarán fuera de esta clasificación de aportes a la transición hacia la agroecología, se optó por esta definición para observar con más detalle las tendencias específicas de la política agrícola de Chile, así como los criterios que habría detrás de las decisiones en temas agroambientales.

## Trayectoria, realidad y tendencias de la gestión ambiental en Chile

Previo a analizar los instrumentos que operan en la actualidad en el país y que contribuyen a la agroecología, es importante dar una mirada a los enfoques de la política agrícola, y como se insertan en la política ambiental del país. Para ello, se hará una breve caracterización de la actual política agrícola y el nuevo paradigma que enfrenta, para continuar con la evolución general de la gestión ambiental vinculada al sector silvoagropecuario.

### Las políticas agrícolas en Chile

En términos económicos, el sector silvoagropecuario ha mostrado un relativo buen desempeño, lo cual significa que la política agrícola ha funcionado razonablemente bien: prueba de ello ha sido el sostenido incremento de la productividad de la tierra (entre 10% a 50% de incremento en la década 2005-2015 en los rendimientos de cereales, raps, remolacha, tomate industrial) y del trabajo (el producto por persona ocupada en la agricultura ha crecido 2,2 veces en el periodo 1996-2014), la diversificación de rubros productivos, el desarrollo exportador (desde US\$ 1.600 millones en 1990 a US\$ 14.690 millones en 2015) y la capacidad del sector agrícola de insertarse en la economía mundial, en un esquema de apertura comercial que casi no tiene precedentes en el mundo.

Si bien este proceso ha generado una concentración de la tierra y disminución del número de explotaciones (sobre un total de 300 mil explotaciones, aquellas de más de 1.000 has manejan el 83% de la superficie constituyendo sólo el 1,1% de las explotaciones), estos resultados también han tenido un impacto social, como lo denota la disminución de la pobreza rural: en el periodo 2006-2013, la proporción de hogares rurales en situación de extrema pobreza y pobreza por ingresos disminuyó desde el 23,5% a 8,3% y desde un 49,1% a 25,4%, respectivamente; asimismo, los hogares en situación de pobreza multidimensional pasó de 39,5% a 31,1% entre 2009 y 2013 (MIDESO, 2014).

La política agrícola chilena –en concordancia con la estrategia del país– busca contribuir a dos grandes objetivos: por una parte, reducir la desigualdad y por otra, agregar valor a los bienes y servicios del sector, con una clara orientación exportadora. Para ello, combina un conjunto de regulaciones y bienes públicos (sanitarios, comerciales, ambientales, laborales, otras), diversas líneas de crédito de instituciones públicas (INDAP y BancoEstado) junto a un paquete de subsidios públicos transferidos a los agricultores y agroindustrias, que buscan el mejoramiento de la competitividad sectorial. El apoyo a los productores es bajo en comparación con los países miembros de la OCDE, con una EAP promedio <sup>76</sup> de 3% en 2013-2015, cifra similar a las estimaciones realizadas para Australia, Nueva Zelanda y Brasil, y muy inferior al promedio de 18% que exhiben los países de la OCDE (OCDE, 2016). Buscando responder a su objetivo de reducción de la desigualdad, la mayor parte de estos recursos (75%) se focaliza hacia la Agricultura Familiar Campesina, segmento que agrupa más de 265 mil explotaciones (de un total de 300 mil). Estos incentivos

---

las medidas que mejoran el sistema en al menos uno de los tres ejes considerados, y a la vez no constituyen un retroceso en ninguno de los tres. Por ejemplo, disminuir el uso de agroquímicos usando semillas transgénicas resistentes a enfermedades, si bien se minimiza el uso de plaguicidas, significa a la vez un retroceso en el eje de conocimiento tradicional, por lo que no sería considerada una práctica que avance hacia un sistema agroecológico.

76 Estimación de Apoyo al Productor: monto de los subsidios como fracción de los ingresos agrícolas brutos

no están acoplados a la producción y se asignan a través de fondos competitivos y/o de ventanillas <sup>77</sup> que hacen posible la operación de una amplia diversidad de programas e instrumentos de fomento, muchos de los cuales se ejecutan a través de organismos privados (esquemas tercerizados). Estos programas, que entregan incentivos para la inversión y para el desarrollo de capacidades, han sido evaluados en forma continua y han logrado contar con la continuidad y estabilidad indispensables para hacer perfeccionamientos sucesivos<sup>78</sup>.

Más precisamente, la política agrícola chilena, puede ser descrita de acuerdo a seis grandes ejes temáticos<sup>79</sup>:

- Fomento de la Agricultura Familiar Campesina (AFC)
- Agregación de valor:
- Desarrollo de mercados:
- Desarrollo de una agricultura sustentable:
- Gestión de riesgos y estabilización
- Modernización de la institucionalidad

Cada uno de estos ejes se enfrenta a un escenario con cambios globales muy rápidos y profundos que obliga a colocar énfasis y velocidades diferenciadas en su desarrollo (ODEPA, 2016). Es así que la demanda por más y mejores alimentos, por parte de consumidores cada vez más informados y exigentes, coloca como eje articulador de toda la cadena los atributos de funcionalidad, diferenciación, calidad e inocuidad de los alimentos. Además, aspectos intangibles tales como las condiciones laborales, los impactos ambientales o la identidad cultural se han convertido en factores cada vez más relevantes en la diferenciación y competitividad de los productos agrícolas. Adicional a estas condiciones de mercado, el sector también tiene que hacer frente a recursos naturales crecientemente limitados— en Chile, especialmente el agua que la agricultura debe compartir con los demás sectores productivos — y las múltiples incertidumbres resultantes del cambio climático. Ello implica que ya no es suficiente el cuidado por el medio ambiente sino también un uso más eficiente de dichos recursos naturales, cada vez más escasos, y la incorporación de estrategias que ayuden a la adaptación al cambio climático.

Es en este contexto que el desarrollo de una agricultura más sustentable, o que se base en principios agroecológicos cobra crecientemente mayor pertinencia y adhesión, como se explicará en los siguientes capítulos.

### Las etapas de la gestión ambiental vinculada al sector silvoagropecuario

El tema medioambiental surge con fuerza en Chile con el retorno de la democracia, en la década de los 90, y va adquiriendo mayor dinamismo en la medida que el país se inserta en el proceso de globalización, tanto por la comparación con países pares y referentes, como por los estándares, de productos y procesos, que demandan las economías desarrolladas que compran los productos nacionales (ver recuadro).

En este contexto general, a partir del año 90, se distinguen cuatro etapas en la gestión ambiental silvoagropecuaria del Ministerio de Agricultura (ver cuadro a continuación) (Ministerio de Agricultura, 2006). El periodo 1990-1994, de preparación e instalación, corresponde a un periodo de profusa actividad, que responde más a los urgentes requerimientos ambientales postergados por décadas, que a una política ambiental sectorial explícita. En paralelo a esta dinámica de acción, se desarrolla un proceso más reflexivo

---

77 Esta modalidad es de carácter no concursable (los recursos se asignan por orden de llegada o según criterios socioeconómicos) y se aplica sobre todo a la agricultura familiar.

78 Véase [www.dipres.cl](http://www.dipres.cl)

79 Corresponde al Programa del Ministerio de Agricultura, periodo 2014-2018, el cual se sustenta —con las actualizaciones y énfasis correspondientes— en la Política de Estado para la Agricultura Chilena (MINAGRI, 2000).

a partir de la creación, en 1990, del Sistema Medio Ambiental del Sector Silvoagropecuario (SMASS), concebido como una instancia de reflexión, análisis, coordinación y formulación de políticas en materia ambiental.

El segundo periodo, de ordenamiento y consolidación, se inicia en 1995, una vez promulgada la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, y a nivel sectorial, con la publicación del Marco General de la Política Ambiental por el SMASS. A partir de esa fecha y hasta el año 2000, se ordenan e intensifican las acciones ambientales del Ministerio, en torno a tres ejes: la protección de los recursos naturales, las herramientas de intervención y la regulación de actividades de potencial impacto.

#### ***La evolución del enfoque ambiental en Chile***

*Al inicio de la década de los 90, Chile presentaba grandes deficiencias en materia ambiental. Aun cuando existían mandatos constitucionales desde 1980 y se habían impulsado algunos programas de relevancia -tales como las áreas protegidas, los estudios para la descontaminación de Santiago y la creación de la Comisión Nacional de Ecología- existía una escasa internalización del tema por parte de la sociedad y una prioridad política casi inexistente. En la práctica, el interés ambiental era manifestado por grupos "elite" y no era una herramienta de apoyo al proceso de toma de decisiones en los diferentes estamentos de la sociedad chilena.*

*En este contexto, los problemas ambientales se dividían básicamente en tres temáticas generales: el manejo deficiente de los recursos naturales; la contaminación del aire, del agua y por residuos sólidos; y la administración inadecuada del espacio territorial. En 1990, el desarrollo sustentable se convierte en un objetivo general explícito en la política gubernamental. Durante estos veintiséis años de gestión, el país ha tenido grandes avances en materia ambiental. Los más importantes -por su carácter fundacional- corresponden a la formación, en 1990, de la institucionalidad ambiental, que creó administrativamente la Comisión Nacional del Medio Ambiente y la Comisión Especial para Descontaminar la Región Metropolitana; y la promulgación, en marzo 1994 de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA). La creación, en 2010, del Ministerio del Medio Ambiente junto con el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente es otro hito de gran relevancia en materia de política ambiental. En el año 2006 se llevó a cabo por parte de la OCDE una evaluación y recomendaciones acerca de la política ambiental de Chile, previo a que el país se incorporara como país miembro. Diez años después, en 2016, se llevó a cabo una evaluación del desempeño ambiental por la misma organización, donde se menciona que: "Un crecimiento económico sostenido e inversiones en infraestructura y servicios relacionados con el medio ambiente ayudaron a mejorar el bienestar de la población chilena durante los últimos 15 años, aunque la desigualdad de los ingresos es aún la más alta entre los países miembros de la OCDE. Sin embargo, el consumo de energía y materiales, las emisiones de gases de efecto invernadero y la generación de residuos continuaron su curso alcista de la mano del crecimiento económico. Entre los miembros de la OCDE, Chile tiene una de las economías más intensivas en el uso de recursos, lo que refleja el papel clave que desempeñan la extracción y la fundición de cobre, la agricultura, la silvicultura y la pesca" (CEPAL, OCDE, 2016). En síntesis, la evaluación destaca avances en materia medioambiental, pero indica que restan muchas cosas por hacer y profundizar, destacando los siguientes aspectos:*

- Las reformas institucionales y normativas aún no han alcanzado los resultados ambientales deseados*
- Es preciso aplicar más rigurosamente la normativa ambiental*
- El sistema tributario se hace más verde*
- Se han efectuado inversiones en la infraestructura relacionada con el medio ambiente, pero quedan por satisfacer cuantiosas necesidades*
- Crecen los mercados verdes y mejora la capacidad de innovación Medioambiental*
- Chile necesita una política climática sólida y congruente*
- La política sobre diversidad biológica está avanzada, pero la gestión eficaz de las áreas protegidas plantea retos*

*Fuente: Elaboración propia en base a MINAGRI, 2006 y CEPAL, OCDE, 2016*

El tercer periodo (2000 a 2009) coloca el binomio “Productividad-Protección ambiental” como factor de competitividad. Subraya entonces que calidad y sustentabilidad representan una de las cinco tendencias de la agricultura mundial que el país debe considerar al proyectar su gestión, y en este contexto indica la necesidad de cuidar el patrimonio natural, no sólo en términos de su capacidad de producción, sino también en su condición de sustrato de recursos limpios, capaces de generar productos también limpios. Este enfoque se profundiza aún más a partir del año 2003, donde se busca vincular el énfasis productivo en la política agrícola con la protección ambiental como factor de competitividad en los mercados internacionales. Desde ese momento, la política ambiental silvoagropecuaria descansa mucho más en el fomento e incentivo ambiental que en la regulación y normas. Se busca avanzar en establecer sistemas que permitan focalizar las acciones regulatorias en aquellos temas críticos y no internalizados por el sector productivo, dejando aquellos temas ya internalizados bajo una supervisión efectiva, pero de baja intensidad. En este contexto, a final del año 2003 se elabora una nueva agenda ambiental, la cual se estructura en torno a tres objetivos: la protección de ecosistemas, especies, y recursos naturales; el fomento de la agricultura limpia; y la promoción de negocios verdes. Es también en este periodo, que se pone en marcha del programa oficial de Trazabilidad (2004), y se promulgan la Ley de Agricultura Orgánica (2006) y la Ley sobre la recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (2008).

La actual etapa, que se inicia en el 2010, se sustenta en una mirada más sistémica e intersectorial. Es así que toman relevancia los temas patrimoniales, culturales y territoriales dentro de la óptica medioambiental. Lo demuestra, a nivel país, la aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica (2014)<sup>80</sup>, la elaboración de una Política de Desarrollo Rural (2016) y el registro de 24 productos con Sello de Origen (Denominación de Origen, Indicaciones Geográficas, Marcas de Certificación y Marcas Colectivas). El fenómeno del cambio climático, así como los compromisos internacionales derivados del tema, han incentivado esta mirada multisectorial, con la que ya se han formulado distintos planes de Adaptación analizados entre los distintos ministerios, entre ellos el Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario (2013). A nivel sectorial, constituyen los hitos de esta etapa la modificación de la Ley “Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios” (2010) y de la Ley de Agricultura Orgánica, que permite a los pequeños agricultores ecológicos con sistemas propios y alternativos de certificación comercializar sus productos orgánicos en cualquier punto de venta (2015), la elaboración del Protocolo de Agricultura Sustentable que entrega un marco conceptual claro y recomendaciones de buenas prácticas aplicables al sector (2015), y la creación del Sello Manos Campesinas que busca diferenciar los principales atributos de la producción campesina (2015).

---

<sup>80</sup> Desde esta fecha, el Ministerio de Medio Ambiente realiza en forma obligatoria una Evaluación Ambiental Estratégica de los instrumentos de planificación territorial. Las políticas de recursos naturales, proyectos de Ley y otros instrumentos que tengan relación con impactos ambientales, pueden someterse voluntariamente a esta Evaluación Estratégica.

Cuadro 1. Evolución e hitos institucionales y legales de la gestión ambiental (1990-2016)

ETAPA – PERIODO	OBJETIVOS Y CARACTERISTICAS	HITOS PAIS	HITOS MINISTERIO DE AGRICULTURA
<b>Etapa 1 (1990-1994): Urgencia y definición de estrategia</b>	Acciones para responder a urgentes requerimientos ambientales postergados Formulación Políticas Ambientales	1990: Creación de la Comisión Nacional de Medio Ambiente 1994: Promulgación de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente	1990: Creación del Sistema Medio Ambiental del Sector Silvoagropecuario (SMASS)
<b>Etapa 2 (1995-1999): Enfoque de protección</b>	Acciones en torno a 3 ejes: Protección de los recursos naturales Herramientas de intervención Regulación de actividades de potencial impacto	1995 – 1997 : Implementación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (1995: Voluntaria; 1997: Obligatoria)	1995: Publicación del Marco General de la Política Ambiental 1998: Prohibición quemas agrícolas en RM durante otoño e invierno 1999: Ley “Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados”
<b>Etapa 3 (2000-2009): Enfoque de binomio productividad-protección ambiental como factor de competitividad</b>	Se busca posicionar el binomio productividad-protección ambiental como un factor de competitividad; Acciones en torno a 3 ejes: Protección de ecosistemas, especies y recursos naturales Fomento de la agricultura limpia Promoción de negocios verdes	2001: Aprobación de la Política de Nacional de Fomento a la Producción Limpia 2003 - 2005: Aprobación por CONAMA de la Estrategia de Conservación de Biodiversidad (2003) y de su aplicación a través del Plan de Acción País (2005) 2004: Homologación del sistema nacional de certificación forestal CERTFOR con el sistema internacional PEFC 2005: Ley de Denominación de Origen e Indicaciones Geográficas	2001: Creación de la Comisión de Buenas Prácticas Agrícolas 2002: Puesta en marcha del sistema de Reconocimiento a los aplicadores de Plaguicidas 2003: Elaboración de una nueva agenda ambiental 2004: Puesta en marcha del programa oficial de Trazabilidad 2006: Ley Agricultura Orgánica 2008: Ley sobre la recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal
<b>Etapa 4 (2010-Hoy): Enfoque multisectorial y rescate patrimonial</b>	Se sustenta en una mirada más sistémica e intersectorial. Toman relevancia los temas patrimoniales, culturales y territoriales dentro de la óptica medioambiental.	2010: Creación del Ministerio del Medio Ambiente Desde 2010: Vigencia de Normas Secundarias de calidad de aguas Desde 2013: Planes de Adaptación al Cambio Climático 2014: Evaluación Ambiental Estratégica 2016: Política de Desarrollo Rural	2010: Modificación de la ley “sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios” 2013: Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario 2015: Modificación de la Ley Agricultura Orgánica 2015. Elaboración del Protocolo de Agricultura Sustentable 2015: Creación Sello Manos Campesinas

Fuente: Elaboración propia



### Marco institucional chileno para el fomento de la agroecología

En el sector público, diversas son las carteras ministeriales e instituciones dependientes que han venido incorporando en su quehacer acciones que contribuyen de una u otra forma a la agricultura sustentable en general y a la agroecología, en particular, tanto desde el diseño de políticas y marcos regulatorios, como desde el fomento productivo, la innovación, la investigación, y la promoción, entre otras acciones. Sin embargo, es importante señalar que el accionar de estas instituciones no obedece a ningún marco de política pública integrador, no obstante existir espacios de coordinación que reúnen a varias de estas instituciones.

En este contexto, vale la pena un pequeño barrido descriptivo de las principales instituciones públicas vinculadas directa o indirectamente con el sector silvoagropecuario, y que han establecido acciones en materia de agroecología:

- (i) El Ministerio de Agricultura y sus servicios dependientes, principalmente, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Instituto Forestal (INFOR), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). Todos ellos contribuyen a la definición de políticas agrícolas, al fortalecimiento del patrimonio sanitario, a la definición e implementación de acciones que contribuyan a la adaptación al cambio climático, a la protección y uso de manera sustentable de los recursos naturales, al fomento de energías renovables y de la eficiencia energética, entre otras.
- (ii) El Ministerio de Economía como el encargado de promover la modernización y competitividad del país, a través de diversas instituciones dependientes, iniciativas, programas y proyectos de fomento. Entre las instituciones de importancia en materia de sustentabilidad agroambiental se encuentran la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y sus consejos dependientes como el Consejo de Producción Limpia y el Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible.
- (iii) El Ministerio de Medio Ambiente encargado de colaborar con la Presidenta de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación normativa. Sus principales instrumentos corresponden al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), al que se someten los proyectos de inversión de dimensiones industriales; y las Normas Secundarias de Calidad de Aguas Continentales, que definen un estándar máximo de contenido de contaminantes sobre un curso de agua, y cuando es superado se desarrollan planes de descontaminación que pueden ser de cumplimiento obligatorio. Este último es un instrumento adecuado para controlar la contaminación difusa en las aguas, parte de la cual provendría de actividades silvoagropecuarias.
- (iv) El Ministerio de Energía como el órgano encargado de elaborar y coordinar los distintos planes, políticas y normas para el desarrollo del sector energético del país, a través de sus servicios dependientes como lo son la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (ACHEE) y el Centro Nacional para la innovación y Fomento de las Energías Renovables (CIFES).
- (v) El Ministerio de Desarrollo Social a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) cuyos objetivos estratégicos relacionados al sector rural son reducir el déficit de activos productivos (tierras y aguas) en el mundo indígena rural, perfeccionando la política de tierras y aguas mediante la

incorporación de instrumentos de apoyo a la formación de capital humano y emprendimiento productivo; y aumentar las oportunidades para el desarrollo integral de familias, comunidades y organizaciones indígenas rurales, mediante la implementación de instrumentos y/o subsidios que fomenten la producción, acceso a mercados y cadenas de valor, como el desarrollo sociocultural y organizacional.

### Principales programas de fomento a la agroecología

A continuación, se presenta una síntesis de las actuales políticas, programas e instrumentos públicos chilenos orientados a la promoción de la agroecología, entendiendo por ella y de acuerdo a lo señalado anteriormente, a aquellos que contribuyen al avance en uno o varios de los tres ejes definidos: protección de la biodiversidad, eficiencia energética, y/o rescate y uso de tecnologías tradicionales.

El cuadro 2 presenta un listado de programas o instrumentos, indicando la institución ejecutora y la cobertura y presupuesto alcanzados, ambos datos referidos al año 2015. Asimismo, cada programa o instrumento es clasificado según el tipo de apoyo que brinda (Acceso y apoyo al uso sustentable de recursos; Gestión del conocimiento; Financiamiento; y Mercado –Certificación), según si la motivación, al momento de su creación, fue el enfoque agroecológico (coloreado con verde) o éste fue incorporado posteriormente (coloreado azul) y según el(los) eje(s) al cual apunta (B: protección de la biodiversidad; E: eficiencia energética; y T: rescate y uso de tecnologías tradicionales).

Como se observa en el cuadro, la plataforma de programas e instrumentos públicos que hoy fomenta la agroecología en el país, está compuesta por un total de 18 iniciativas ejecutadas por cuatro carteras de gobierno: el Ministerio de Agricultura, a través del INDAP, de la FIA, del INIA, de CONAF y del SAG; el Ministerio de Economía, a través de CORFO; el Ministerio de Desarrollo Social a través de la CONADI; y el Ministerio de Medio Ambiente a través de su Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y sus Normas Secundarias de Calidad de Aguas. Se trata, en su mayoría, de instrumentos de fomento productivo que brindan asistencia técnica y subsidios a la inversión predial; la excepción a ello la constituye la Ley de Producción Orgánica (SAG-MINAGRI) y las Normas Secundarias de Calidad de Aguas (Ministerio de Medio Ambiente) que cumplen un rol regulatorio y fiscalizador, respectivamente, y el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental gestionado también por el Ministerio de Medio Ambiente que fue diseñado con el objeto de evaluar los impactos de los proyectos de inversión de dimensiones industriales sobre el medio ambiente y los recursos naturales. Como se menciona al principio de este punto, estos instrumentos no operan bajo una supra coordinación institucional.

#### ***Ley 20.089 que crea el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas***

*Año de publicación en el Diario Oficial: 2006.*

***Objetivo:*** *crear el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas, cuyo propósito es asegurar y certificar que los productos orgánicos sean producidos, elaborados, envasados y manejados de acuerdo con las normas de esta Ley y su Reglamento.*

***Organismo fiscalizador:*** *Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) del Ministerio de Agricultura.*

***Principios:***

*Adscripción voluntaria, sin embargo, sólo aquellos que adscriben al Sistema y cumplen con la normativa vigente tendrán el derecho de utilizar en la rotulación, identificación o denominación de los productos que manejan, las expresiones "productos orgánicos" o sus equivalentes "biológico" o "ecológico".*

*La certificación orgánica chilena contempla dos sistemas, ambos directamente fiscalizados por el SAG:*

*Sistema de certificación de tercera parte, llevada a cabo por empresas certificadoras nacionales o internacionales.*

*Sistema de certificación de primera parte, llevada a cabo por las propias organizaciones de productores.*

**Superficie certificada:** *alrededor de 100.000 Has.de las cuales cerca de 20.000 Has son cultivos certificados (uva vinífera, frutales, berries, entre otros) y 80.000 Has superficie certificada para la recolección de productos silvestres. Esta superficie es manejada por cerca de 600 agricultores (cifras a junio de 2015).*

**Destino y valor de la producción:** *fundamentalmente la exportación a Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Japón Italia y Australia; el valor de exportación es cercano a los USD 200 millones (cifras a junio de 2015).*

**Fuente:** [www.sag.gob.cl](http://www.sag.gob.cl); *Panorama de la agricultura*

La clasificación de los programas e instrumentos según el propósito perseguido en su diseño, muestra que, de las 18 iniciativas identificadas, 10 apuntaron en su génesis a contribuir al menos a uno de los ejes agroecológicos (protección de la biodiversidad, eficiencia energética y/o rescate y uso de tecnologías tradicionales; iniciativas coloreadas en verdes en el cuadro), proporción muy importante si se consideran la cobertura alcanzada y el presupuesto asignado en el año 2015 (ver cuadro 2). Sin embargo, un análisis más detallado muestra que solo una de ellas, la Ley de Producción Orgánica, apunta en simultáneo a los tres ejes definidos, deduciéndose de ello una intención clara hacia la promoción de sistemas de producción agroecológica; mientras que todos los otros sólo se dirigen a uno de los ejes, quedando en evidencia que si bien fueron diseñados con el fin de contribuir a una agricultura sustentable, su enfoque es parcial y el fomento más sistémico de la agroecología no necesariamente estaba dentro de los objetivos perseguidos.

Por su parte, al revisar los 8 instrumentos que incorporaron elementos agroecológicos no en su diseño inicial sino en ajustes posteriores (coloreados en azul), se observa que la mayoría de ellos (6 de 8) integraron medidas que apuntan en simultáneo a los tres ejes definidos, lo que siguiendo la misma línea argumental anterior puede interpretarse como una intención clara de promover la agroecología a través de ellos.

Todos los programas señalados anteriormente, con excepción de los GTT (Grupos de Transferencia Tecnológica) de INIA, son ejecutados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) que focaliza su accionar en la Agricultura Familiar Campesina (AFC). Esta institución ha definido para el periodo 2014 - 2018 el fomento de la agricultura sustentable como uno de sus ejes estratégicos y en el marco de ello comienza a incorporar, de manera progresiva y transversal, prácticas y manejos agroecológicos en sus programas de asistencia técnica y subsidio a la inversión. Lo anterior se traduce en la definición e implementación, en conjunto con los agricultores, de líneas de acción específicas de agroecología en los planes de intervención anuales y de mediano plazo de los programas de asesorías técnicas, entre otras acciones (Figuras anteriores) .

#### ***Las iniciativas de INDAP para el fomento de la agroecología***

*El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) ha definido como uno de sus lineamientos estratégicos para el periodo 2014 – 2018 el fomento de una agricultura sustentable en el marco de lo cual la Agroecología ha sido considerada como una vía viable y pertinente para el desarrollo de la AFC. Estas definiciones obedecen a una demanda cada vez más sentida de los usuarios/as del Instituto quienes buscan apoyo técnico específico para el desarrollo de este tipo de agricultura.*

*Algunos de los avances en esta materia son:*

*Definición e implementación de líneas específicas para el fomento de la agroecología en los Planes de Mediano Plazo y Planes de Trabajo Anuales, tanto en materia de asistencia técnica como de subsidios a la inversión.*

*Publicación del Manual de Producción Agroecológica dirigido a los equipos de extensionistas (<http://www.indap.gob.cl/biblioteca/series-indap>).*

*Publicación de la Guía técnica para la planificación e implementación de prácticas productivas que favorecen la conservación de la biodiversidad (<http://www.indap.gob.cl/biblioteca/series-indap/!k/n%C2%BA5-gu%C3%ADa-t%C3%A9cnica-para-la-planificaci%C3%B3n-e-implementaci%C3%B3n-de-pr%C3%A1cticas-productivas-que-favorecen-la-conservaci%C3%B3n-de-la-biodiversidad>).*

*Publicación de la guía Sustentabilidad Agroambiental: Lineamientos conceptuales y operativos para la construcción de planes de mediano plazo (<http://www.indap.gob.cl/biblioteca/series-indap/!k/sustentabilidad-agroambiental-lineamientos-conceptuales-y-operativos-para-la-construcci%C3%B3n-de-planes-de-mediano-plazo>)*

*Conformación del Comité de Agroecología integrado por representantes de las organizaciones campesinas de representación nacional e INDAP, y cuyo objetivo es promover la agroecología en la AFC mediante la acción de fomento del Instituto.*

*Actividades de sensibilización y difusión (<http://www.indap.gob.cl/biblioteca/series-indap/!k/seminario-de-agroecolog%C3%ADa-fortalecimiento-de-la-agricultura-familiar-campesina-e-ind%C3%ADgena-bajos-condiciones-agroecol%C3%B3gicas>)*

*Fuente: Elaboración propia.*

En el caso de los GTT de INIA-MINAGRI, otro de los instrumentos que fue ajustado para abordar temas de agroecología en sus tres ejes definidos, fue diseñado para hacer transferencia tecnológica de manera participativa y más horizontal, agrupando a agricultores con intereses comunes que, a través de días de campo y visitas a terreno, conocen y adoptan innovaciones tecnológicas específicas. El instrumento es lo suficientemente flexible para abarcar nuevas temáticas y en este caso, se han implementado GTT de extensionistas (el objeto receptor del conocimiento es el extensionista quien lo transmite a sus agricultores) cuyo objetivo central ha sido la entrega de conocimientos, prácticas e innovaciones en agricultura sustentable, en general, y en sistemas agroecológicos, en particular.

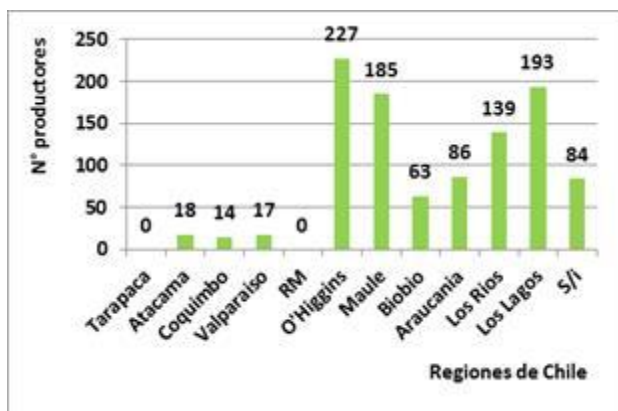
De manera complementaria, los ministerios y servicios se articulan en una serie de instancias de coordinación que pueden incluir al sector privado, a la academia y a otros actores relevantes. Dentro de estas instancias y en el marco de la promoción de la agroecología y la agricultura orgánica, cabe destacar:

- Comisión Nacional de Agricultura Orgánica (CNAO), coordinada por ODEPA y cuyo objetivo es asesorar al Ministro de Agricultura en la formulación, elaboración e implementación de políticas de producción, promoción y comercialización de la producción orgánica. La Comisión trabaja mediante grupos temáticos que abordan: Grupo 1: normativa e Institucionalidad (coordina SAG); Grupo 2: información y difusión (coordina Odepa); Grupo 3: investigación, desarrollo e innovación (coordina Fia e Inia); Grupo 4: fomento productivo, asociatividad y desarrollo del mercado interno (coordinan Indap y Corfo); y Grupo 5: desarrollo de mercados externos (coordinan ProChile y Odepa).
- Mesa Público Privada sobre Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, también coordinada por ODEPA, que tiene como objetivo identificar las acciones prioritarias a impulsar y desarrollar que propendan a la protección y valoración del patrimonio agrícola. Entre sus líneas de acción prioritarias están las siguientes: (i) inventarios, caracterización y factores de amenaza; (ii) conservación, utilización sustentable y valoración; y (iii) políticas, institucionalidad y creación de capacidad.

### Los productores “agroecológicos”, usuarios de INDAP (Catastro parcial, 2016)

De acuerdo a resultados de la encuesta levantada por la Unidad Medioambiental del INDAP en 2016 y contestada por 90 de los cerca de 600 equipos técnicos existentes a nivel nacional, existiría un subuniverso, aproximado, de 1.026 usuarios/as de la Institución que se reconocen agroecológicos o tienen certificación orgánica. Esta cifra representa cerca del 1% del universo total de usuarios del INDAP y estaría distribuido a lo largo de todo el país, con excepción de dos regiones del norte desértico, dos del extremo austral del país y de la región metropolitana:

Figura 9- Distribución de los usuarios “agroecológicos” de INDAP (autodeclaración)



Las principales prácticas utilizadas por estos agricultores/as y que los hacen considerarse agroecológicos, son:

- Elaboran y/o aplican bio-insumos
  - No aplican agroquímicos
  - Incorporan rastrojos al suelo
  - Hacen rotación de cultivos (leguminosas)
  - Utilizan menos maquinaria que la agricultura convencional
  - Conservan sus propias semillas y hacen intercambios de ellas con otros agricultores.
  - Fuente: Elaboración propia en base a información de la Unidad Ambiental de INDAP.
- 
- Comité de Agroecología coordinado por INDAP y que reúne a organizaciones campesinas de representación nacional. La creación de la Mesa surge en respuesta a una demanda de las organizaciones campesinas que buscan un apoyo explícito de INDAP en el fomento de la producción agroecológica del país. El objetivo de la Mesa es generar un espacio de discusión y análisis conjunto que apunte a promover y desarrollar la agroecología en la agricultura familiar campesina de Chile, mediante proyectos y/o programas específicos.
  - Comité Técnico Ministerial de Cambio Climático, Ministerio de Agricultura. Coordinado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), reúne a los distintos servicios del Ministerio, y coordina las líneas de trabajo en mitigación, adaptación, y posición para negociaciones internacionales. A su vez, el Ministro de Agricultura participa en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, que coordina el Ministerio de Medio Ambiente y el de Relaciones Exteriores, en el que se define la posición nacional para la Conferencia de las Partes.

### ***Otras iniciativas públicas***

*Es importante señalar la existencia de otras iniciativas públicas, todas financiadas por el Global Environment Facility (GEF):*

*Proyecto Comunidades Mediterráneas Sostenibles (MMA y PNUD) cuyo propósito es contribuir a la conservación de la biodiversidad, la captura de carbono y la recuperación de suelos degradados en la Ecorregión Mediterránea, mediante la asociatividad de las comunidades locales y el desarrollo productivo basado en los servicios ecosistémicos, la innovación y la adopción de mejores prácticas a escala de paisaje. En fase de implementación.*

*Proyecto Establecimiento de una Red de Sitios SIPAN (INDAP, ODEPA y FAO), cuyo propósito es conservar la agrobiodiversidad en Chile a través del establecimiento de Sitios Importantes del Patrimonio Agrícola Nacional (SIPAN) en las macrozonas Alto Andino y Precordillera Pehuenche. En fase de diseño.*

*Proyecto Promoviendo el Desarrollo de la Energía a Biogás en Pequeñas y Medianas Agroindustria del Sector Lechero (Ministerio de Energía y ONUDI). Su propósito es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) promoviendo la inversión y el desarrollo del mercado de tecnologías de energía a biogás en PYMES del sector lechero, al mismo tiempo de aumentar la generación de ERNC a fin de potenciar la economía local mediante la creación de una nueva industria local sustentable.*

*Fuente: Elaboración propia*

Figura 10- Programas e instrumentos que fomentan la Agroecología en Chile

PROPÓSITO DEL PROGRAMA/INSTRUMENTO	
	Programas e instrumentos cuyo propósito es la promoción de sistemas agroecológicos de producción
	Programas e instrumentos que han incorporado dentro de sus objetivos la promoción y fomento de la producción agroecológica

EJES DE LA AGROECOLOGÍA A LOS CUALES APUNTA	
B	Biodiversidad
E	Energía
- T	Tecnologías tradicionales

Institución	Propósito del programa/instrumento	Ejes de la Agroecología Ejes Agroecológico	Programa/Instrumento	Objetivo	Cobertura total del programa (Productores) Año 2015	Presupuesto total del programa (millones de \$)	Tipo de instrumento				Año de creación	Año de incorporación del enfoque agroecológico
							Acceso y apoyo al uso sustentable de recursos	Gestión del conocimiento	Financiamiento	Mercado -Certificación		
INDAP MINAGRI		E	Programa Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios (SIRSD-S) para la agricultura familiar campesina	Subprograma <i>Establecimiento de cobertura vegetal en suelos descubiertos o con cobertura deteriorada.</i> Subprograma <i>Empleo de métodos orientados a evitar la pérdida y erosión de los suelos, favoreciendo su conservación</i>	17.500	5.086	x		x		1999	2010
		BET	Programa de Desarrollo Local (PRODESAL)	Fortalecer los sistemas productivos de los agricultores más vulnerables y sus actividades conexas, para aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida.	80.000	38.769		x	x		1996	2016
		BET	Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI)	Apoyar pequeños productores agrícolas de familias indígenas a fortalecer sus actividades silvoagropecuarias y actividades conexas respetando su cosmovisión y procurando aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida	35.500	20.340		x	x		2010	2016
		BET	Programa Agropecuario para el Desarrollo Integral de los Pequeños Campesinos del Secano de la Región de Coquimbo (PADIS)	Apoyar a las familias rurales de Coquimbo para fortalecer sus actividades silvoagropecuarias y asociadas, entregando asesoría técnica y fondos de inversión, para aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida	2.500	1.155		x	x		2009	2016
		BET	Programa de Asesoría Técnica (SAT)	Contribuir a mejorar de forma sostenible el nivel de competitividad del negocio o sistema productivo desarrollando las capacidades de los usuarios, por medio de acciones de transferencia técnica, asesoría en gestión y la articulación con otros programas de fomento	12.500	9.752		x			2003	2016
INDAP-MINAGRI		BET	Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI)	Concurso Especial – Sustentabilidad Ambiental. Cofinanciar la ejecución de proyectos de inversión productiva, orientados a modernizar los procesos productivos de las	9.400	9.526			x		2008	2016

				empresas de la agricultura familiar, para hacerlas más competitivas en el mercado y sustentables en el tiempo										
		T	Sello Manos Campesinas	Busca diferenciar y potenciar los productos y servicios generados por la agricultura familiar campesina, asegurándole al consumidor el origen a través del reconocimiento de ciertas características y atributos propios de los procesos productivos y el "saber hacer" en la producción campesina	120	87					x			2015
CONAF MINAGRI	-	B	Ley de Bosque nativo	Proteger, recuperar y mejorar los bosques nativos, con el fin de asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental e impulsar el progreso social y económico de las comunidades rurales en equilibrio con la protección del medio ambiente	1.500 productores 50 a 60 mil has	2.238					x			2008
SAG-MINAGRI		BET	Ley de Producción Orgánica	Administra el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas, que establece las condiciones para la comercialización de productos bajo la denominación de orgánico o sus equivalentes.	<i>no aplica</i>								x	2006
		E	Programa Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios (SIRSD-S) para la mediana y gran agricultura	Subprograma <i>Establecimiento de cobertura vegetal en suelos descubiertos o con cobertura deteriorada.</i> Subprograma <i>Empleo de métodos orientados a evitar la pérdida y erosión de los suelos, favoreciendo su conservación</i>	2.600 productores	3.190	x				x			1999 2010
FIA – MINAGRI		T	Proyectos de valorización del patrimonio agrario y agroalimentario	Proyectos de innovación orientados a la identificación y/o valorización de productos con identidad territorial, que contribuyan a mejorar la competitividad de la Agricultura Familiar.	24 y 14 proyectos/ 2014 y 2015	Máximo US\$ 91 mil/Proyecto					x	x		2014
		E	Proyectos de Innovación en Energías Renovables No convencionales para el sector agroalimentario y forestal	Incorporar tecnologías para el autoabastecimiento energético en base ERNC en el sector agroalimentario y forestal, de modo de mejorar la gestión energética de las empresas del sector y favorecer su competitividad y/o rentabilidad.	16 proyectos 2014	1.000 (aprox.) en total 2014					x	x		2014
INIA-MINAGRI		BET	Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT) para Extensionistas en agricultura sustentable	Proveer herramientas a los participantes para analizar y mejorar la sustentabilidad económica, social y ambiental de sus operaciones agrícolas. La metodología establece la formación de grupos de 10 a 15 participantes que comparten características similares que acuerdan reunirse periódicamente bajo la coordinación de expertos del INIA. Así, estos grupos reciben conocimientos técnicos y económicos a través de múltiples actividades (cursos, talleres, seminarios, días de campo), para alcanzar sus objetivos.	56 GTT beneficiando a más de 700 participantes, aprox.	<i>s/i</i>					x			1982 2016
CONADI MIDESO	-	T	Fondo de desarrollo indígena	Aumentar las dimensiones económica, cultural, ambiental y política del bienestar de las familias, comunidades y organizaciones indígenas, mediante la elaboración, implementación y evaluación de programas y proyectos especiales (pertinencia cultural, identitaria y de género)	<i>s/i</i>	<i>s/i</i>					x	x		<i>s/i</i> <i>s/i</i>
CORFO CPL – MINECON		E	Acuerdos de Producción Limpia - Comité de Producción Limpia (CPL)	Convenio voluntario entre una asociación empresarial y el sector público, cuyo objetivo es mejorar las condiciones productivas y ambientales a través de la implementación de metas y acciones específicas en un plazo determinado.	37 APL firmados con cerca de 4.000 productores agrícolas y empresas en todo el periodo	140 (presupuesto 2015)					x		x	1999



					de aplicación del programa (desde 1999)						
		<b>E</b>	Acuerdos para la Gestión de Cuencas - Comité de Producción Limpia (CPL)	Convenio entre empresas, organizaciones interesadas y el sector público, para fomentar la producción limpia en territorios determinados.	s/i	s/i	x			x	2016
<b>Ministerio de Medio Ambiente</b>		<b>B</b>	Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)	Evalúa los impactos de los proyectos de inversión de dimensiones industriales sobre el medio ambiente y los recursos naturales; se someten al SEIA proyectos pecuarios y forestales de grandes dimensiones.	<i>No aplica</i>		X				1995
		<b>B</b>	Normas Secundarias de Calidad de Aguas Continentales	Definen un estándar máximo de contenido de contaminantes sobre un curso de agua, y cuando es superado se desarrollan planes de descontaminación que pueden ser de cumplimiento obligatorio; es un instrumento adecuado para controlar la contaminación difusa.	<i>No aplica</i>		X				2010

Fuente: Elaboración propia

Como se muestra en el cuadro 2, la incorporación de enfoques ambientales en la política agrícola de Chile es paulatina desde los años 90. En una primera etapa busca hacerse cargo de pasivos ambientales, como la degradación de suelos, y posteriormente se perfilan a mejorar el posicionamiento competitivo de la agricultura a través de una agricultura más verde. El enfoque asociado a estas dos primeras etapas es claramente la mejora de la rentabilidad de los sistemas de producción, ya sea con recursos naturales más productivos, o con mejor acceso o posicionamiento en los mercados (todo esto muy asociado a la apertura económica y estrategia exportadora). Por cierto, que esas líneas de trabajo contribuyeron, y siguen contribuyendo a una agricultura sustentable, sin embargo, no se diseñaron en una lógica anti revolución verde ni tampoco con un enfoque sistémico, y, por tanto, no responden “*strictu sensu*” a una lógica de transición de la agricultura hacia la agroecología.

En Chile, la agroecología se ha entendido muy asociada a la agricultura orgánica, de hecho, las instituciones que promovieron esta forma de producción en los años 80 y 90 del siglo 20, se encontraban muy asociadas a organizaciones de productores orgánicos y a empresas certificadoras. Eso se entendió así también en el desarrollo de la normativa de agricultura orgánica, la que por cierto era coherente con el desarrollo del binomio productividad-protección ambiental, pero también incorpora un claro objetivo asociado a la inocuidad-salud humana.

En la última década han surgido algunos instrumentos que contribuyen de manera más directa a lo que sería una transición a la agroecología, y se asocian, más que a una conciencia agroecológica de los diseñadores de políticas, a la revalorización de los valores campesinos e indígenas, lo que no siempre va asociado a una mirada de sustento de la biodiversidad. Esto en parte porque en la geografía chilena los cultivos asociados (cultivos entrehileras, y silvopastoreo) no son una práctica común, más allá de la rotación en el tiempo de los potreros; ni en la agricultura tradicional ni en la asociada a la revolución verde; y prima el monocultivo<sup>81</sup> en la mayoría de las explotaciones, normalmente con paquetes tecnológicos tipo Revolución Verde. Por ejemplo, los pequeños productores maiceros de la zona central del país, que producen grano para el mercado, tienden a usar semillas híbridas para la producción, y adicionan importantes cantidades de urea como fuente de nitrógeno.

En resumen, si bien hay en los últimos años la aparición de instrumentos que fomentan lo tradicional y patrimonial, su razón de ser tiene más relación con la valorización cultural que con la agroecología, que en Chile no parecen estar claramente vinculados, como sí posiblemente lo están en otros países de la Región

Otro elemento relevante de la política agrícola chilena es el enfoque del instrumental hacia la demanda de los productores y de sus organizaciones. En el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) dominan los instrumentos de enfoque flexible, en los que se financian inversiones y asistencia técnica en factores de producción y sistemas tecnológicos que se resuelven según el requerimiento de los beneficiarios. Esto es, un mismo instrumento puede financiar la implementación de una compostera como la compra de maquinaria para aplicar plaguicidas. Esto se traduce en que importantes instrumentos pueden ser usados para una transición hacia la agroecología -y de hecho han sido útiles en ese sentido para algunos grupos de agricultores y algunas comunas del país- pero no tienen un enfoque agroecológico “duro” desde la oferta. En otras palabras, estos instrumentos permiten (pero no obligan) instalar prácticas agroecológicas.

### Los ejes conductores en la actual política de agricultura sustentable

Como ya se señaló (cuadro 1), los objetivos de la política agroambiental en los años 90 eran de reparación de parte del pasivo ambiental sobre recursos naturales generado hasta los años 80. Luego el eje conductor de las decisiones de política se trasladó hacia la apuesta de hacer una agricultura más sustentable y más competitiva,

---

Entendiendo monocultivo como una única especie en el potrero, es decir lo contrario del cultivo asociado. No implica que la explotación o sistema productivo no pueda tener más potreros, cada uno con especies distintas.

respondiendo a los nuevos requerimientos de sustentabilidad exigidos por los mercados de los países desarrollados. Este último eje conductor sigue vigente en los instrumentos de política sectorial actual, tanto para la agricultura de tipo empresarial, que realiza mejoras en su gestión básicamente para mejorar el acceso a los mercados de sus productos de exportación; como para la Agricultura Familiar Campesina, donde responde a una estrategia que busca a veces sumarse a la apuesta exportadora o acceder a cadenas de mercado interno más lucrativas, pero también puede inscribirse en la voluntad de volver a sistemas de producción con ciclos más cerrados.

En los últimos años, la mirada holística multisectorial ha dominado el desarrollo de instrumentos en la política ambiental chilena, y también particularmente en la estrategia agro ambiental. Esa lógica multisectorial se ha articulado en dos ejes conductores principales: La mitigación y adaptación al cambio climático, para el sector silvoagropecuario en general; y la valorización de los productos, técnicas y conocimientos tradicionales en el segmento de la Agricultura Familiar Campesina.

Las líneas de trabajo asociadas al eje conductor de cambio climático se refieren principalmente a dos objetivos: por una parte el uso eficiente de los recursos hídricos, instrumento que no aporta a la agroecología; y por otra la incorporación y mantención de materia orgánica en el manejo de los suelos, línea de trabajo del Programa Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios (SIRSD-S) que sí se incluye en el eje de eficiencia energética de agroecología.

En lo referente a valorización de los sistemas de producción campesinos y los productos tradicionales hay tres instrumentos específicos que se incluyen en los que promueven la agroecología: Sello Manos Campesinas (INDAP, creado en 2015), Valorización del Patrimonio Agrario (FIA, creado en 2014) y el Fondo de Desarrollo Indígena (CONADI).

Si bien una parte importante de los instrumentos vigentes aporta entonces a la agroecología, no es el enfoque agroecológico el que explica su desarrollo, sino que los temas de cambio climático, la valorización del patrimonio campesino, y el acceso y posicionamiento en los mercados, estarían al origen de su presencia en la política agro ambiental actual. Sí cabe mencionar que la actual administración del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), está claramente empujando la incorporación de la mirada agroecológica en el fomento, a través de un direccionamiento explícito de los instrumentos genéricos de asesorías técnicas e inversiones prediales hacia la instalación de prácticas o sistemas agroecológicos, los que ya tendrían un nivel de adopción interesante en el segmento más pequeño de agricultores.

### Mirada de futuro, ¿Transición hacia la agroecología?

En la política silvoagropecuaria de Chile la agroecología ha sido promovida en los últimos años como una alternativa para el segmento de productores más pequeños. Instrumentos de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), y principalmente de INDAP, se orientan en ese sentido. Estos agricultores podrán comercializar sus productos en ferias locales y agroecológicas que se están desarrollando crecientemente, respondiendo a un consumo cada vez más responsable de un segmento de consumidores nacionales. Sin embargo, es importante reconocer que existen elementos en la agricultura chilena y probablemente en la agricultura del siglo 21 en general, que dificultan y –tal vez- ponen en cuestión el desarrollo de la agroecología “purista” para la agricultura en su conjunto. Estos elementos dicen relación con:

- i. **Enfoque agro exportador y de sustitución de importaciones.** La agricultura chilena está globalizada, ya sea está destinada a la exportación, o debe competir con productos importados principalmente desde los países de la Región. Este elemento dificulta pensar en una reversión de la genética productiva actual hacia una de tipo tradicional, así como en la no adición de insumos (artificiales o naturales) provenientes desde fuera de la explotación, ambas prácticas redundando en una baja de rendimientos. Así también, las mismas exigencias fitosanitarias para la exportación incluyen el uso de agroquímicos (incluso la fumigación con bromuro de metilo), para cumplir con los estándares de

control de plagas cuarentenarias. A excepción del segmento mencionado de los agricultores más pequeños, la competitividad del resto de la agricultura campesina y de los agricultores empresariales descansa en paquetes tecnológicos de la revolución verde.

- ii. **Especialización de la producción y economías de escala.** A nivel global, la necesidad de abastecer de alimentos a un número cada vez mayor de población alejada de la producción primaria de alimentos, ha derivado en especialización (monocultivo) y economías de escala (mecanización). Independientemente de los problemas de distribución de alimentos u otros que puedan explicar la persistencia del hambre en regiones del planeta, lo cierto es que esta lógica estructural de la producción no parece ser fácil de revertir.
- iii. **Eficacia de las políticas agroambientales.** El objetivo de las políticas agroambientales es eliminar o al menos minimizar el daño que la producción sectorial le hace al planeta. Al respecto, se debe reconocer que -si bien no es excluyente- es probablemente más eficaz disminuir el uso de plaguicidas por parte de la agricultura empresarial (8,3 millones de hectáreas en Chile), que promover la reconversión a lo agroecológico de todos los agricultores de segmento de menor tamaño (1,1 millones de hectáreas).

En resumen, para el segmento de agricultores de menor tamaño es claramente posible y conveniente promover y apoyar la instalación de sistemas productivos agroecológicos, una de las líneas de acción que INDAP ha definido en el marco de su lineamiento estratégico asociado a la promoción de una agricultura más sustentable. Sin embargo, pensar en una transición hacia la agroecología del sector agropecuario en su conjunto, parece muy difícil y no necesariamente conveniente bajo un enfoque muy purista.

En efecto, ignorar los avances tecnológicos en cuanto a mecanización y genética podría limitar de sobremanera abordar los desafíos del mundo actual, más allá de que resulta efectivamente necesario revalorizar los conocimientos y variedades tradicionales, tanto para la aplicación en agroecología en pequeños productores como para contribuir al mejoramiento técnico de la agricultura en su conjunto.

Sí resulta positivo y necesario para la agricultura en general el cierre de los grandes ciclos de carbono, nitrógeno y fósforo, propuesto en la política de agroecología francesa, que conceptualmente incluiría las estrategias de mitigación de gases efecto invernadero en todo el ciclo de producción y mercadeo; así se podría satisfacer globalmente parte de los principios agroecológicos que se promueven para pequeñas unidades. Inversiones en reciclaje, valorización de residuos de la cadena productiva (guano, purines), y líneas de trabajo en eficiencia energética y en la aplicación de fertilizantes, contribuirían a imprimirle parte de la mirada agroecológica a los grandes sistemas de monocultivo con sus encadenamientos productivos.

Es así que junto con avanzar hacia una agricultura de ciclos cerrados en el “ciclo menor” (que se refiere a un nivel predial) en las pequeñas unidades de producción, se debe actuar –vía incentivos y normativas- también en el “ciclo medio”, que se cierra a nivel del sector agropecuario, incorporando el paso de estiércol, guanos y forrajes entre sistemas ganaderos y agrícolas; y en el “ciclo mayor”, en el que se incluye el uso de biosólidos en la agricultura, la captura de carbono en los sumideros (agrícolas y forestales), generación con biodigestores (en base a excrementos y purines bovinos y porcinos), entre otros.

Parece conveniente, entonces, incentivar la agroecología en la Agricultura Familiar Campesina y promover, a través de normativa y desarrollo tecnológico una agricultura sustentable en las explotaciones empresariales.

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Evaluaciones del desempeño ambiental: Chile 2016, Santiago. 2016.
- Dirección General de Estadística. Resultados del X Censo de Población efectuado el 27 de noviembre de 1930. Volumen 1, marzo de 1931. República de Chile. 1931.
- Dirven, M. El empleo rural no agrícola y la disminución de la pobreza rural. ¿Qué sabemos en América Latina en 2010? Conocimiento y cambio en pobreza rural y desarrollo. Documento de trabajo N°2. Enero de 2011.
- Griffon, M. Qu'est ce que l'agriculture écologiquement intensive ? Éditions Quae. 2013.
- Guillou, M. Le projet agro-écologique : Vers des agricultures doublement performantes pour concilier compétitivité et respect de l'environnement. 2013.
- Hecht, S. Capítulo 1: La evolución del pensamiento agroecológico. En: Agroecología. Bases científicas para una agricultura sustentable. Ed: Altieri, M.A. Editorial Nordan Comunidad. P 15-30. 1999.
- Instituto Nacional de Estadísticas. Censo 2002 Resultados. Volumen I, Población país – región. 2003.
- LOI N° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
- Margalef, R. Ecología. Ediciones Omega, Barcelona. 1974.
- Martínez, H. Capítulo 4. Desarrollo ambiental agropecuario: estado de situación y desafíos. En: La agricultura chilena en la nueva revolución alimentaria. Eds: Barrera, A; Sotomayor, O. Editorial universitaria. P 141-176. 2010.
- MIDESO. Casen 2013, Situación de la pobreza en Chile, Presentación de la nueva metodología de medición de la pobreza y síntesis de los principales resultados. 2014.
- MINAGRI. Una Política de Estado para la Agricultura Chilena, Periodo 2000-2010. 2000.
- Ministerio de Agricultura. Memoria Ministerio de Agricultura Periodo 2000-2006. 2006
- Ministere de l'Agriculture de France. Le projet agroécologique pour la France. 2013.
- ODEPA. Coyuntura internacional I, Mejores políticas para un sistema agroalimentario productivo, sostenible, y resiliente según países OCDE. Autora: Héléne Bombrun. 2016.
- ODEPA. Panorama de la agricultura chilena 2015. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), Ministerio de Agricultura de Chile. Julio de 2015. Disponible en: [http://www.odepa.cl/wp-content/files\\_mf/1468525798panorama2015Web.pdf](http://www.odepa.cl/wp-content/files_mf/1468525798panorama2015Web.pdf). 2016.
- Sebillotte, M. Agronomie et Agriculture. Essai d'analyse des tâches de l'agronome. Cahiers de l'ORSTOM, série biologie, 24, 3-25. Paris. 1974.
- Sotomayor, O. Clima, geografía, historia e instituciones: cuatro rasgos singulares del sistema agroalimentario chileno. En: Barrera, A. y O. Sotomayor (Eds). La agricultura chilena en la nueva revolución alimentaria. Ed. Universitaria, Santiago de Chile, pp. 65-114. 2010.
- <http://www.odepa.cl/odepaweb/servicios-informacion/publica/Agricultura-2010.pdf>

## Capítulo 5. Políticas de apoyo a la agroecología en Costa Rica

Fernando Sáenz-Segura, Jean François Le Coq y Muriel Bonin

### Introducción

El sector agropecuario costarricense ha pasado por diferentes transiciones en su estructura productiva, determinados por contextos internacionales que terminan definiendo las políticas públicas que direccionan estas transiciones. Así, por ejemplo, se han visto desarrollar, y luego casi desaparecer, sistemas de autoconsumo y comercialización de excedentes, o bien momentos de auge y estabilización de sistemas basados en la agroexportación, tales como el café, banano, carne y azúcar. Más recientemente, la apertura comercial y la globalización ha traído diferentes sectores “boom”, que tienen su auge y luego decaen por cambios en los mercados internacionales (palmito, ornamentales, melón, más recientemente piña, entre otros).

Actualmente, existe en el país una gran diversidad de modelos de producción agropecuaria, que muestran a su vez diferentes formas de tenencia de la tierra, sistemas de producción, y estrategias de articulación al mercado (Valenciano-Salazar, J.A.; F. Sáenz Segura, J.F. Le Coq, Zárate-Montero, 2015). Dentro de esta diversidad existen tipos de agricultura que han sido menos visibles a los ojos de la sociedad, y hasta hace poco ausentes de las agendas de la política pública sectorial, tales como la agricultura familiar, la agricultura orgánica, la llamada agricultura sostenible, y finalmente la agroecología.

Inicialmente, la agroecología se ha planteado como un modelo de producción contestatario a la revolución verde. El concepto comenzó a usarse desde la década de los 70s. Ya desde la Segunda Edición de Agroecología (Altieri, 1995), la agroecología se define muy normativamente como una ciencia que aborda la agricultura, desde una perspectiva más integral en términos sociales y ambientales. Dicho abordaje se hace más allá de una visión productivista, de las que clásicamente se enseñaba en las escuelas de agronomía alrededor del mundo, y se amplía hacia una preocupación por la sostenibilidad de dichos sistemas de producción. En ese sentido, se le ha llamado una definición normativa, porque comenzó a incorporar una serie de reglas, indicadores, requisitos, en una especie de protocolo, que comenzó a sistematizar esas preocupaciones de sostenibilidad ambiental y social, y superando el mero sistema de producción *per se* (Altieri, 1995).

El presente estudio sintetiza la evolución que ha tenido la agroecología en Costa Rica y las diferentes políticas públicas que han influido en este tipo de producción alternativa. Este caso país se enmarca dentro de un estudio regional titulado “Políticas de agroecología y producción orgánica en América Latina y en el Caribe”, el cual fue definido en el seno de la Red PP-AL posterior a la realización del estudio regional sobre agricultura Familiar, como tema a elaborar para el período 2016-2017.

El objetivo de este estudio regional es hacer un análisis comparativo entre diferentes países latinoamericanos en relación a cómo las políticas públicas han promovido (o no) dos formas alternativas de agricultura, llámense la agroecología y la agricultura orgánica. En ese sentido la pregunta central de investigación es **¿cómo esas políticas públicas han influido (o no) en el desarrollo rural y la transición agro-ecológica de las unidades productivas?**

El estudio se centra en analizar los procesos de emergencia e institucionalización de las políticas públicas que contribuyen en el apoyo y la promoción de una agricultura de base agroecológica y orgánica en América Latina y en el Caribe. En esa dirección, interesa abordar tres grandes temas: 1) Identificar y analizar la trayectoria de las políticas públicas (en promover o no la agroecología), los instrumentos que se implementan, 2) los conceptos e interpretaciones que se hacen de estas formas alternas de agricultura, y 3) los procesos sociales y los actores involucrados. También interesan aquellos instrumentos de política que, sin ser específicamente de apoyo a la agroecología, están contribuyendo con una agricultura más sostenible, alimentos más sanos, agro-ecosistemas más preservados, mayor producción y mejor distribución de valor agregado, mercados más justos, más y mejores

oportunidades de trabajo, mayor capital institucional a nivel de territorios, conocimientos más socializados, y dinámicas de innovación técnica y socio-organizativa basadas en recursos locales.

El resto del documento se organiza de la siguiente forma: la segunda sección establece el objetivo de este estudio, seguido por la metodología de análisis, en la tercera sección. En la cuarta sección se hace un recuento de la evolución de las políticas públicas, que marcaron diferentes momentos en las agendas agropecuarias y ambientales. En la quinta sección se presentan algunas cifras que revelan el estado general del sector agropecuario en el país y de las diferentes formas de agricultura. En la sexta sección se hace una revisión detallada de como el cambio estructural que afecto fuertemente al sector agropecuario, fue delineando paulatinamente en una agenda agroambiental relativamente consolidada, y sus instrumentos de apoyo. Se concluye en la séptima sección.

### Objetivo del estudio en el caso de Costa Rica

Para empezar a abordar la anterior pregunta de investigación y poder plantear una hipótesis, en el caso costarricense, se parte del antagonismo planteado por (Toledo, 2012), en el cual la agroecología y los agronegocios industrializados son exponentes de dos visiones de mundo diferentes, contradictorias, y mutuamente excluyentes (Figura 11).

Figura 11: Características principales de dos modelos antagónicos de la agricultura

Modelo agroecológico	Modelo agroindustrial
Ciencia de la complejidad, multi e interdisciplinario.	Ciencia especializada, analítica y reduccionista.
Autosuficiencia tecnológica.	Dependencia tecnológica.
Diálogo de saberes.	Dominio epistemológico.
Pequeña escala.	Gran escala.
Uso diversificado.	Uso especializado.
Basada directa o indirectamente en fuentes naturales de energía: solar, eólica, hidráulica, animal, humana.	Basada en fuentes de energía fósil: petróleo y gas.

Fuente: Toledo, 2012, p.45

Sin embargo, más allá de esta visión dicotómica entre dos modelos, recuperamos la idea de que existe una gradiente de tipos de modelos de agricultura, según diversos criterios técnicos y sociales, tal y como lo indicamos en el estudio de (Valenciano-Salazar, J.A.; F. Sáenz Segura, J.F. Le Coq, Zárata-Montero, 2015). El analizar como la agroecología se ha venido desarrollando dentro de esta diversidad de estilos de producción, y que a su vez involucran diferentes tipos de actores, permite entonces un mejor entendimiento de la elaboración y gestión de las políticas públicas agroambientales, y del público meta al cual van dirigidas.

La pregunta central de investigación para este caso de estudio es: ¿cuál ha sido la evolución de la agroecología y la agricultura orgánica en Costa Rica producto de una trayectoria de un conjunto de políticas e instrumentos de política pública? En este sentido, el estudio se focaliza en analizar el vínculo entre estas políticas públicas y sus instrumentos, con las dinámicas sociales alrededor de los diferentes modelos de producción. Particularmente nos interesa identificar, por un lado, los factores externos, o de contexto, que propiciaron la formulación de políticas públicas agroambientales, y, por otro lado, el papel desempeñado por diferentes actores, o grupos de actores (movimientos sociales), y su capacidad de incidencia en la formulación de dichas políticas.

En este estudio, los contextos productivo, histórico y político de los sectores agropecuario y ambiental se tratan desde una perspectiva de la evolución político-institucional, en donde en cierto punto surge y se desarrolla una agenda agroambiental. Para abordar metodológicamente estos contextos se hizo uso de una mezcla de información secundaria y primaria. El abordaje fue cualitativo, descriptivo analítico, con el objetivo de ofrecer una primera revisión del tema de investigación, en función de la pregunta de investigación planteada.

Se inició con una revisión de información secundaria, de la cual se seleccionaron 31 documentos diversos (Leyes y reglamentos, documentos oficiales de ministerios involucrados, tesis de investigación, reportes de proyectos, boletines técnicos, etc.). Se utilizó además información proveniente del Censo Agropecuario 2014 (CENAGRO 2014). Posteriormente se realizaron una serie de entrevistas a actores claves, utilizando una guía de entrevista única, bajo la cual se pidió la opinión de los entrevistados en tres grandes temas: 1) la concepción del término agroecología y otras formas de agricultura alternativa, 2) la participación propia y de otros actores en los procesos de formulación y diseño de políticas públicas, y 3) la implementación y evaluación dichas políticas. Se realizaron siete entrevistas a representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), específicamente al actual encargado del Programa de Agricultura Sostenible; al ex-gerente del Programa de Agricultura Orgánica, representantes de agencias certificadoras (Dir. Ecológica), representantes de productores orgánicos y agroecológicos (red COPROALDE, MAOCO, ANAO), y representantes de la academia (Universidad Estatal a Distancia- UNED).

El análisis del proceso de políticas públicas a partir de la información obtenida tuvo las siguientes cuatro fases:

1. Línea de tiempo: reconstrucción en el tiempo de la dinámica institucional y del proceso de políticas públicas, en relación con los eventos de los contextos nacionales e internacionales.
2. Análisis del discurso: caracterización de los conceptos de agroecología y agricultura orgánica según las diferentes interpretaciones de los actores involucrados.
3. Matriz de políticas públicas: inventario de los principales instrumentos de política que actualmente operan y contribuyen a la transición agroecológica.
4. Evaluación cualitativa: percepción sobre resultados de los instrumentos actuales por parte de diferentes actores.

De esta forma se elaboró el vínculo entre las políticas y sus instrumentos, con las diferentes dinámicas sociales alrededor de los diferentes modelos de producción.

## Evolución del marco de políticas agrícolas y ambientales de Costa Rica

---

A lo largo de la historia, Costa Rica conoció una transición de una estructura productiva de autoconsumo y comercialización de excedentes, a un sistema agroexportador, principalmente dependiente de la exportación de café, banano, carne y azúcar. Este sistema de agro exportación, inicialmente ligado al café, comenzó a sentar las estructuras capitalistas en el país, y a su vez que modificó el paisaje en las fincas del Valle Central, que se ligaron a un monocultivo exportador. Este período conocido como liberal (de 1821 a 1948), se caracterizó por una economía abierta y basada en producción primaria, que tenía como objetivo la generación de divisas con la exportación de bienes agrícolas semi procesados, para poder adquirir bienes industrializados terminados. En este periodo se comienza a instaurar la institucionalidad pública del sector agropecuario, y se considera que la implementación de la primera Ley de Aguas (L-1634 Sistema Nacional de Acueductos y Alcantarillados, SNAA, de 1942), fue la primera legislación ambiental en la historia de Costa Rica (Valenciano-Salazar, J.A.; F. Sáenz Segura, J.F. Le Coq, Zárate-Montero, 2015) (Chaves Moreira & Sáenz Segura, 2014)(Alonso-Ubieta S., Saenz-Segura, F., Le Coq, 2011)

Desde el punto de vista ambiental, los recursos naturales fueron considerados en este período como abundantes e inagotables. La tierra se manejaba bajo un concepto de frontera agrícola, en donde el bosque era talado, para



dar paso a la colonización, la siembra de cultivos y pasturas para el ganado. Popularmente, a esta dinámica se le conocía como “hacer o limpiar la finca”. El agua era un recurso del cual se hacía uso y disposición, sin mayores preocupaciones en cuanto a su agotamiento o contaminación.

De 1949 a 1980 el país sustituye el modelo de economía “abierto”, por el de Industrialización por Sustitución de Importaciones”, el cual era un modelo de economía “cerrada” y de fuerte intervención estatal. Bajo este modelo se buscaba una autosuficiencia industrial, una modernización educativa y de salud pública, una construcción y urbanización de una clase media. Estos fuertes cambios significaron un primer paso en la desruralización del país y en la modernización del sector agropecuario, el cual fue llamado a proveer los alimentos necesarios para una clase media creciente y no rural. Dado este último objetivo, este fue un período en donde se consolidó la institucionalidad formal del sector agropecuario y la diversificación de la oferta agropecuaria. Producto de este estilo de desarrollo, la frontera agrícola se expandió y el país se comenzó a deforestar rápidamente, hasta casi solo quedar los existentes parques nacionales como áreas con cobertura forestal (21% de cobertura forestal a 1987). Los sistemas de producción de los principales cultivos se derivaron del paradigma de la Revolución Verde, los cuales fueron intensivos en agroquímicos. En este período es cuando el país comienza a construir la deshonrosa reputación de ser uno de los mayores usuarios de ingredientes activos químicos per cápita del mundo. Adicionalmente, el agua y el suelo se asumían como recursos que se podían contaminar y sobre explotar indefinidamente.

De 1980 en adelante se dio un cambio total de paradigma sobre el papel del Estado en la economía, pues, la crisis de la deuda externa y la consecuente inestabilidad económica obligaron al país a adoptar los llamados Programas de Ajuste Estructural, los cuales se diseñaron por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estas políticas de ajuste estructural causaron cambios profundos en el sector agropecuario, pues se desmontaron buena parte de los sistemas de apoyo de comercialización, crédito y seguros que apoyaban sobre todo a la pequeña agricultura, y se estimuló fuertemente una diversificación agrícola exportable, bajo una visión de agro negocios (Chaves Moreira & Sáenz Segura, 2014). Excepción fueron los servicios de extensión agropecuaria, pero, los cuales, aunque no se eliminaron, sí sufrieron cortes presupuestarios y reducción fuerte de personal.

En este período es también donde se hace una apuesta país hacia la conservación y el desarrollo sostenible. Esta apuesta país fue ampliamente influenciada por una preocupación a nivel internacional por el ambiente, que se tradujo en una serie de trabajos científicos y cumbres internacionales (Comisión Brundtland, Cumbres de Río, Kyoto, etc.). Los debates generados en estos medios internacionales ocasionaron en el país, el diseño e implementación de una serie de políticas públicas que introdujeron cambios en el sector agropecuario, y provocaron además el surgimiento y paulatina consolidación del sector ambiental. El Programa Pago por Servicios Ambientales (PPSA) ha sido y es el instrumento de política pública más exitoso de este surgimiento del sector ambiental. Posterior a esta experiencia, se desarrollaron otros instrumentos como los corredores biológicos, la promoción de reservas y zonas de protección privadas, y arreglos institucionales de involucramiento y uso de las zonas de protección por parte de comunidades vecinas.

Es en este último período de fuerte cambio estructural en el que surgen preocupaciones agroambientales, que a su vez dan origen a movimientos sociales diversos y sus respectivas tensiones con el Estado, lo que paulatinamente van dando origen a la agroecología y la agricultura orgánica como práctica cultural, como actividad comercial y como movimiento. Esta evolución se abordará con más detalle en la sexta sección.

### **Breve estado del sector agropecuario y de la agroecología en particular**

Es importante indicar que la mayoría de la evolución del marco de políticas agrícolas y ambientales descrito en la sección anterior, se dio bajo un contexto de ausencia de información sistemática sobre el estado del sector agropecuario. El último censo agropecuario se realizó en el año 2014 y anteriormente el último había sido en 1984. Así, pasaron 30 años en donde se tomaron decisiones importantes que afectaron al sector agropecuario,

sin tener información censal sobre el estado del mismo. En esta sección se presentan cifras muy generales del estado del sector agropecuario, según el último censo del año 2014.

### El sector agropecuario en cifras

La información extraída del Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO 2014) indican que en el país existen 93 017 fincas, las cuales suman un total de 2 406 418,4 ha. En 1984 había 101 938 fincas (3 070 300 ha), lo que significa que se dio una reducción del 8,7% en número de fincas, implicando además una reducción del 21,6% en el número de hectáreas. Aun así, la extensión en número de hectáreas al 2014 cubre el 47,1% de la superficie total del país, lo que sugiere que es un sector muy presente en términos paisajísticos y geográficos

El 76% de esas fincas comprende una propiedad y en el 86% de los casos, esa propiedad está a nombre de una persona física (91,2% tenencia propia). Más preocupante es que la edad promedio del productor es de 53,9 años, lo que tiene serias implicaciones de corto plazo en cuanto a relevos generacionales. Los principales usos de la tierra se distribuyen así: Ganadería (28,5%), Café (24,3%), Frutas (12,3%), Granos básicos (8,4%), Hortalizas (4,8%), y Otros (21,7%)<sup>82</sup>. A pesar de presentar un uso de la tierra muy diversificado, el porcentaje de participación del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto no sobrepasa el 9% y ha venido reduciéndose desde el año 2000 (medido a valores constantes, año 1991).

Finalmente, solo un 20% de las fincas con un cultivo utiliza algún sistema de riego, lo que significa que los sistemas de producción son altamente dependientes del agua de lluvia. Por otro lado, únicamente el 5,2% de todas las fincas utiliza ambientes protegidos, mientras que el 82% de las fincas utilizan fertilizantes y el 90% plaguicidas. Es de suponer entonces, que únicamente el 10% de las explotaciones podrían ser de agricultura orgánica, o de agroecología. Desafortunadamente el CENAGRO 2014 no incluyó variables específicas, que permitieran un mejor conocimiento del estado de esta agricultura alternativa.

### La agroecología en cifras

Efectivamente, el país no cuenta con registros sistemáticos sobre producción agroecológica, ni mucho menos sobre su impacto en la economía del país. Tampoco existen estudios completos sobre el impacto de este tipo de agricultura sobre las economías locales en los territorios en donde se desarrolla, o bien el efecto sobre la salud de los habitantes y sobre las capacidades para suplir alimentos para el país.

Dada las anteriores limitantes, queda tratar de aproximar algunas cifras de tipos de agricultura que refieran un poco a algunos elementos de sostenibilidad, y/o, agroecología. Uno de los tipos de productos que más ayudan a esta aproximación son aquellos con algún tipo de certificación y que van mayoritariamente a los mercados internacionales. GLOBALGAP, Fair Trade y RainForest Alliance son los tres tipos de certificaciones más comunes en los productos de agro exportación de Costa Rica. En ese sentido, los datos que se muestran a continuación reflejan únicamente la producción agrícola certificada, la cual incorpora elementos que garantizan al consumidor final una producción socialmente responsable, y ambientalmente más amigable, pero no significa que se trate de producción agroecológica.

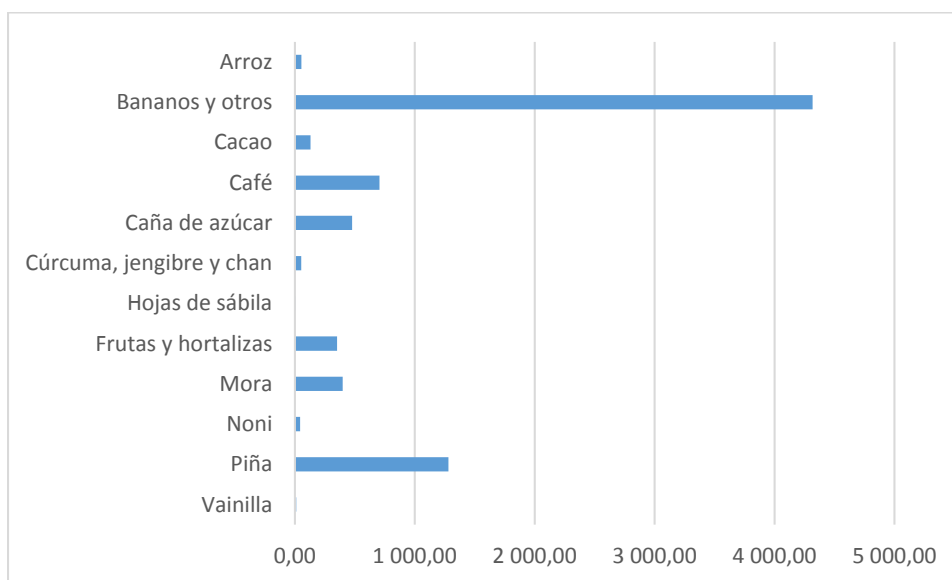
Según registros del MAG, para el año 2014 había mayoritariamente 12 productos certificados (ver Gráfico 1, por superficie certificada), en donde los cuatro primeros en importancia son banano y similares (55%), piña (16%), café (9%), y caña de azúcar (6%). Este resultado es esperable, pues los primeros tres cultivos son los más importantes en mercados internacionales, los cuales son mercados dinámicos y altamente exigentes en cumplir con una serie de estándares sociales y ambientales. De ahí la importancia de las certificaciones.

---

<sup>82</sup> Árboles forestales, caña de azúcar, manejo y protección de bosque, natural, ornamentales, palma aceitera, pastos, raíces y tubérculos, turismo rural, otras actividades agrícolas, otras actividades pecuarias, otros usos de la tierra.

Cabe destacar que la actividad bananera supera por mucho a los demás en áreas certificadas, pues fue el sector que tomó la iniciativa en “limpiar” la mala reputación que tuvieron en el pasado, en cuestiones ambientales y sociales. En el caso de la piña, se ha desarrollado con fuerza en los últimos años y también ha integrado certificaciones a su proceso productivo, con el fin de mantener su posicionamiento en aquellos mercados demandantes de garantías ambientales y sociales (Mora-Vega R., Saenz-Segura F., Le Coq, 2012a, 2012b). En tercer lugar, se encuentra el café, en el cual se adoptaron las certificaciones como repuesta a la crisis de precios bajos (inicios de los años 90s y luego de los años 2000), como mecanismo para dar un mayor valor agregado a la producción de café. En el caso de la caña de azúcar, si bien la producción se destina mayoritariamente al mercado local, es un sector que también ha mostrado cierta preocupación por adquirir una imagen industrial más amigable con el ambiente, por lo que no es extraño que presenten áreas de cultivo certificadas. Llama la atención que únicamente arroz (1%) y hortalizas y frutales (4%) son los únicos sectores certificados, los cuales están vinculados directamente con la seguridad alimentaria.

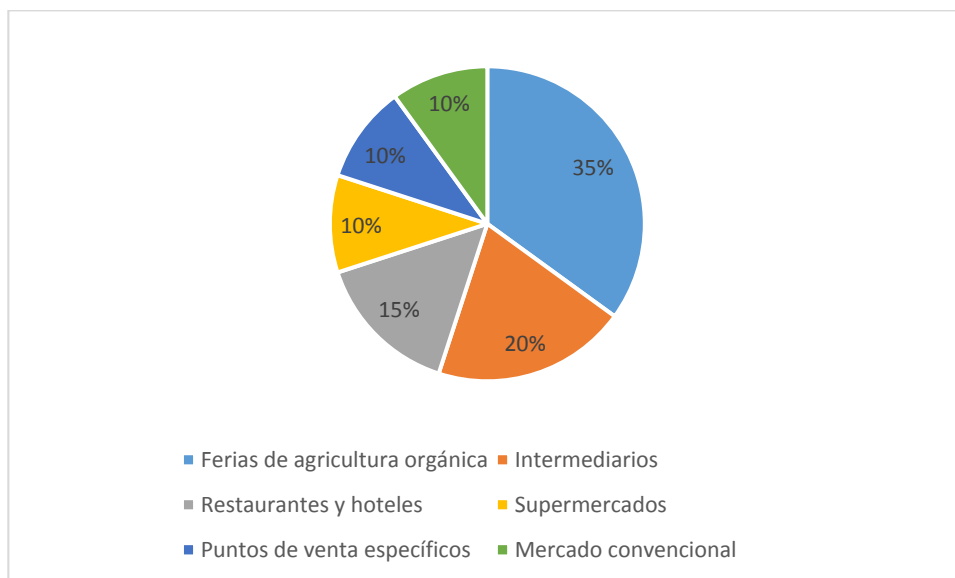
Figura 12: Hectáreas certificadas por cultivo, 2014



Fuente: MAG, 2014

Con respecto a la producción orgánica nacional, el 69% del total producido se orienta a la exportación (IBS Soluciones Verdes, 2013). El principal destino de la exportación es Estados Unidos de América. En cuanto al mercado local, el gráfico 2 muestra los principales destinos.

Figura 13 Distribución de la comercialización de los productos orgánicos en Costa Rica



Fuente: MAG, 2014

Se puede decir que la agricultura orgánica es una agricultura de nicho y de circuito corto, pues va mayoritariamente a ferias de agricultura orgánica (35%), o bien va hacia agentes ubicados en los tramos finales de la cadena, concentrándose en minorista o clientes finales. Únicamente un 20% pasa por intermediarios, contrario con lo que sucede con muchos productos hortícolas de producción convencional.

Actualmente la producción orgánica genera más de \$5 millones anuales entre el mercado nacional y el internacional, y la demanda interna crece cerca de 20% por año. La calidad de la reglamentación nacional y el esfuerzo de las familias productoras han permitido que la producción orgánica costarricense sea reconocida y buscada a nivel internacional.

Para efectos del MAG, se denomina “producción sostenible” cualquier tipo de producción orgánica o no, que incorpore prácticas amigables con el ambiente. En ese sentido la producción certificada orgánica representa unas 9.570 ha. Para el MAG, la producción que incorpora algún tipo de tecnología sostenible suma un total de 116.470 ha, al 2015.

## El cambio estructural y la agroecología

### Evolución de las Políticas, movimientos y tensiones

Como se introdujo en la cuarta sección, hasta aproximadamente el año 2003, el sector agropecuario fue marginalizado de muchas políticas públicas importantes en ese momento. El cambio estructural de la década de los años 80s vino bajo una gran presión internacional por reestructurar el Estado y la economía del país. Esto implicó el fin del llamado “Estado Benefactor” para el sector agropecuario, por lo que se adoptó un único paradigma de sesgo agroexportador. De igual forma, otras acciones más relacionadas con la conservación de suelos, la utilización de fertilizantes no químicos, la agricultura orgánica, y la recuperación de prácticas culturales, las certificaciones y los sellos, también respondieron más a corrientes de influencia internacional público-privadas, que a políticas de Estado. El fin era mejorar el posicionamiento de los productos en los mercados internacionales y darle al país una imagen de “país verde”(Chaves Moreira & Sáenz Segura, 2014).

Estos cambios en las políticas públicas del país generaron una serie de tensiones dentro del sector agrícola, entre el nuevo y dinámico sector agro-exportador y la llamada “pequeña agricultura”, la cual resintió la pérdida del soporte Estatal. También se dieron tensiones entre el sector agropecuario y el sector ambiental, en donde el

primero se vio “culpabilizado” por la degradación ambiental. Esta estrategia de confrontación seguida por diferentes gremios del sector agropecuario, hace que el sector llegue tarde a la discusión del problema ambiental de forma pro activa, por lo que tuvo una baja capacidad de incidencia en la formulación e implementación de las nuevas políticas públicas ambientales (Le Coq, J.F., Alonso-Ubieta, S., Saenz-Segura F., Pesche, 2010)

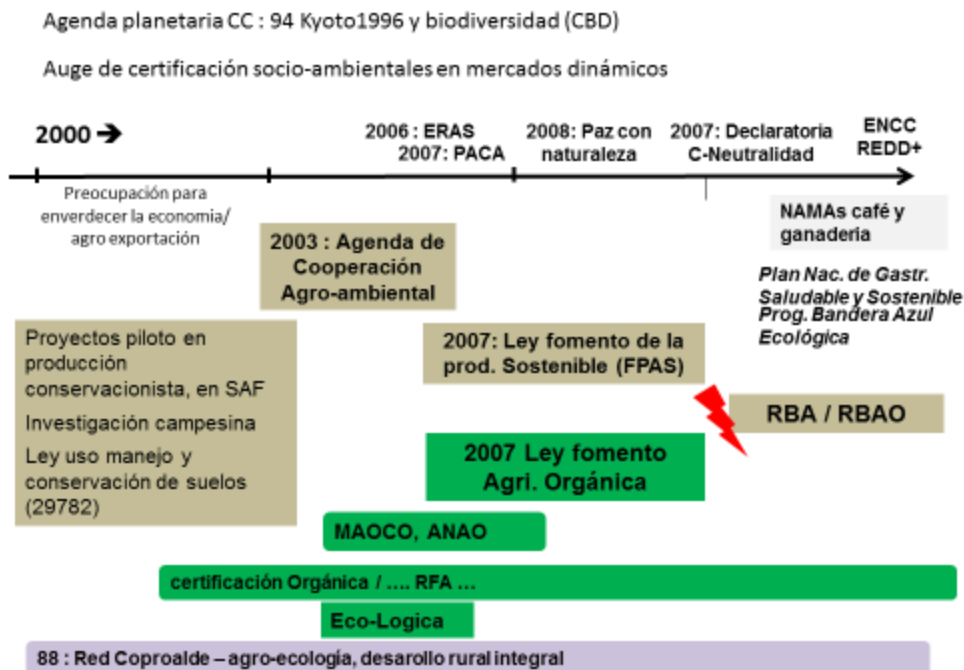
Paradójica y más anteriormente, se da de forma paralela la introducción y desarrollo de la agricultura orgánica en Costa Rica. Este proceso inició con una preocupación particular de Coopebrisas R.L., bajo el liderazgo de Henry Guerreo, J.J. Paniagua, y la comunidad del cantón de Zarcero, en cuanto al excesivo uso de plaguicidas en la producción hortícola en el cantón. De esta preocupación de base social, surge la iniciativa de solicitar ayuda a la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA), lo cual se concreta con la llegada del cooperante japonés Shogo Sasaki en 1988, quien inicia todo un trabajo de capacitación con productores de Zarcero sobre técnicas de producción de agricultura orgánica. Posteriormente, la actividad de cooperación evolucionó hacia el proyecto JICA “Proyecto de Agricultura Orgánica (PAO)”, el cual impulsó actividades de investigación, transferencia tecnológica y concientización sobre la agricultura orgánica, con el apoyo de la Estación Experimental Fabio Baudrit, de la Universidad de Costa Rica. Este proyecto se extendió por casi una década, lo cual aumentó la capacidad técnica en agricultura orgánica entre muchos de los actores sociales, quienes posteriormente consolidaron la agenda agroecológica en el país. Adicionalmente, por el año 1988 se forma la Red COPROALDE con una lógica de movimiento social en favor de una visión integral de la agricultura, en oposición con el paradigma del agronegocio.

A partir del año 2000 se dan una serie de hechos a nivel internacional y nacional que impulsan aún más la agenda agroecológica. En la siguiente línea de tiempo, se hace una reconstrucción de la dinámica institucional y del proceso de políticas públicas más relevantes en ese período (ver Figura 1). De esta forma, se inicia con un contexto internacional que fuertemente condicionaba la política agroambiental del país, principalmente por la agenda planetaria sobre Cambio Climático y sus respectivas cumbres mundiales, y el auge de las certificaciones socio-ambientales para garantizar el acceso a mercados especializados dinámicos. Esto orientó la política comercial y productiva hacia un esfuerzo por mostrar una oferta agro exportable amigable con el ambiente, y bajo el resguardo de estándares sociales consolidados en el país desde la Constitución de 1949. Dentro de los hechos más destacados en este período está la promulgación de La Ley N° 29782 Ley de Manejo y Conservación de Suelos.

Es a partir del año 2003 que se comienza a dar una mayor interrelación entre los sectores ambiental y agropecuario con el fin de ir integrando políticas relativamente comunes. Así se inició con la implementación de la llamada Agenda de Cooperación Conjunta MAG-MINAE, que derivó en una llamada Agenda Agroambiental, que tenía por lema “Conservar Produciendo y Producir Conservando”, lo cual marca un hito en materia agroambiental nacional y regional.

Esta agenda fue la base de la llamada Estrategia Regional Agroambiental y de Salud (ERAS), y fue un primer esfuerzo para vincular los sectores agropecuario, forestal, ambiental y de salud pública, bajo una llamada visión de “desarrollo rural sostenible”, y que tenía como paradigma el combate a la pobreza por medio de políticas públicas integradas en favor de la agroexportación (Alonso-Ubieta S., Saenz-Segura, F., Le Coq, 2011).

Figura 14: Línea de tiempo integración agro-ecología /orgánica/ sostenible



Fuente: elaboración propia, 2016

Es claro que este tipo de políticas se derivaron a su vez de políticas internacionales inspiradas en el Consenso de Washington, que veían la agroexportación (y la automaticidad de mercados) como el único motor de desarrollo en territorios rurales. La única diferencia, es que a inicios de la década del 2000 se le quería dar una imagen verde a este paradigma agroexportador. En este contexto surge la Ley N°8408, que da origen al Programa de Fomento de la Producción Agropecuaria Sostenible (PFAS), que fue un contrato de préstamo entre el Estado Costarricense y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la introducción de tecnologías y sistemas de producción innovadores y sostenibles.

La Agenda Agroambiental contaba con cinco ejes temáticos de acción, de los cuales dos eran de gestión institucional y uso de los recursos (“Planificación y Coordinación en la Gestión Agropecuaria Ambiental” y “Ordenamiento, Planificación y Gestión Territorial bajo un enfoque ecosistémico”); uno de conservación (“Protección y Conservación de la Biodiversidad. Conocer, salvar y usar”); y dos de visión integral de los sectores (“Diversificación de Sistemas Productivos Competitivos y Sostenibles” y “Valoración Multifuncional de los Ecosistemas”).

Los dos últimos ejes anteriormente mencionados fueron los que pusieron sobre la mesa temas novedosos en ese momento, tales como ecoturismo, certificaciones, bioseguridad, agrocadenas más integradas y más sostenibles, incorporación de visión multifuncional de los ecosistemas, recursos filogenéticos, conservación del suelo, agricultura bajo ambiente controlado, y una llamada “agricultura alternativa”.

Posteriormente, en el año 2005 se implementa la Estrategia Agro21, la cual buscó combatir problemas de competitividad y posicionamiento en los mercados de diferentes agrocadenas estratégicas para el país, pero que mostraban desarrollos diferenciados. Sin embargo, esta fue una propuesta más orientada, de nuevo, a impulsar el desarrollo de zonas rurales, bajo un enfoque de mercado tendiente a aprovechar los tratados de libre comercio que el país comenzó a implementar. En esta estrategia únicamente se hace una leve mención a potenciar una “Producción sostenible con calidad”.

Todas estas iniciativas de política pública posteriores al 2003 tienen un contexto favorable a nivel de América Central, con el lanzamiento de la Política Agrícola Centroamericana 2008-2017. Una agricultura competitiva e integrada para el mundo global (PACA), la cual igual impulsaba una agenda de competitividad y de desarrollo, con ciertas preocupaciones ambientales y de conservación. Todas estas presiones internacionales jugaron un papel importante en la formulación e implementación de estas iniciativas locales, tales como la Agenda de Cooperación Conjunta, la Agenda de Cooperación Técnica “Conservar Produciendo y Producir Conservando”, el Plan Nacional de Desarrollo Jorge Manuel Dengo Obregón 2007-2011 (PND), la iniciativa Paz con la Naturaleza (IPN) lanzada en el 2008 por la Administración Arias -Sánchez, y el Plan Nacional de Alimentos (PNA) lanzado hacia el período 2009-2010 (Alonso-Ubieta S., Saenz-Segura, F., Le Coq, 2011).

De forma paralela, entre los años 2000 y 2006 se consolidan dos importantes organizaciones promotoras de la agricultura orgánica (con el apoyo de la ONG HIVOS): el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO) y la Asociación Nacional de Agricultura Orgánica (ANAO), algunos de cuyos miembros ya habían tenido una primera experiencia con el proceso iniciado con JICA casi 18 años atrás.

El año 2006 queda marcado por el proceso de negociación y firma del llamado Tratado de Libre Comercio entre América Central y Estados Unidos (TLCAN-DR). Esto derivó en una fuerte polarización social, pues el tratado implicó, entre otras cosas, la consolidación de la globalización de la agricultura y el sesgo agro-exportador. La lucha contra el TLCAN-DR fue la última que protagonizaron los gremios representantes de grupos campesinos, pequeños agricultores, y ambientalistas, entre los que se contaban los grupos de agricultura orgánica y agroambiental. En el caso de Costa Rica, el TLCAN-DR duró tres años en ser aprobado por la Asamblea Legislativa, bajo fuertes negociaciones y pugnas entre diferentes actores sociales.

En el contexto de lucha contra el TLCAN-DR y después de un año de periplos en la Asamblea Legislativa, los grupos opositores al tratado, liderados por MAOCO, lograron que el 16 de agosto del 2007 se aprobara la Ley N° 8591, Ley Para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica en Costa Rica. Este hito fue considerado como una gran victoria de incidencia política por parte de estos movimientos sociales.

La Ley N° 8591 abarca las siguientes cuatro áreas:

1. Reconocimiento del papel importante de la agricultura orgánica a nivel nacional
2. Apoyo a la agricultura orgánica desde la educación, la investigación y la extensión
3. Fomento de la agricultura orgánica por medio de incentivos
4. Protección de la agricultura orgánica frente a amenazas

Además, la ley implica una serie de mandatos tales como: 1) El desarrollo, promoción, fomento y gestión de la actividad; 2) Beneficio de salud humana, animal y vegetal, cuidado de suelo, recurso hídrico y biodiversidad; 3) Beneficio especial de personas micro, pequeñas y medianas productoras; 4) Equidad de género, diversidad cultural, reparto de la riqueza, protección del ambiente.

Por otra parte, el gobierno de esa época fue promulgando políticas públicas en la dirección que creía más apropiada, tales como la iniciativa “Paz con la Naturaleza” y la Declaratoria Nacional de Carbono Neutralidad para el año 2022. De estas iniciativas surgieron dos instrumentos de política pública: el Reconocimiento por Beneficios Ambientales (RBA) y su variante orgánica RBAO, los cuales han sido interpretados por los grupos ambientalistas como instrumentos de política ajenos al logro de la Ley N° 8591, por lo que se han convertido en una nueva fuente de conflicto. Adicionalmente, el país ha impulsado una serie de iniciativas como la valoración de servicios ecosistémicos, la producción baja en emisiones, las llamadas Normas Ambientalmente Aceptadas (NAMAS) para café y ganadería, la estrategia de cambio climático, el Programa Bandera Azul Ecológica, el Plan Nacional de Gastronomía Saludable y Sostenible, y la REDD+. En el caso del sector cafetalero, a raíz de la crisis de precios internacionales y el subsecuente cambio estructural del sector, varios proyectos de investigación se centraron en analizar y promover cambios en los sistemas de producción adoptados, algunos totalmente orgánicos y otros más intermedios.

## Políticas e Instrumentos disponibles a favor de la agroecología

La Figura 15 resume los principales instrumentos de política pública que se originaron principalmente hacia el final del período de tiempo descrito en la sección anterior. En este cuadro mostramos las principales cuatro características que determinan a cada instrumento.

En el caso de la Ley de Manejo y Conservación de Suelos (N° 29782) y la ley de Protección Fitosanitaria y sus reformas (N° 7664), del cual se deriva el reglamento Uso y Control de Plaguicidas Sintéticos Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico, Coadyuvantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola (N° 33495), son instrumentos que clasificamos como regulatorios, pues tiene un carácter coercitivo de ley. En otras palabras, son instrumentos que especifican cuáles prácticas agrícolas se pueden implementar y cuáles agroquímicos de pueden utilizar, y cuáles no, so pena de que el desacato o violación de estas regulaciones implicarían sanciones previstas en la ley. Sin embargo, no agregan nada más.

La Ley Para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica en Costa Rica (N°8591), si bien tiene un carácter regulatorio para delimitar bien que es agricultura orgánica y qué no lo es, también tiene un carácter de generación de conocimiento, a partir de un aprendizaje de manejo cultural de suelos y plagas.

En el caso de las certificaciones, si bien tienen un cierto carácter coercitivo, en realidad son voluntarias, y dicho carácter coercitivo reside en el hecho de que, si no se cumplen, se pierde el derecho a usar el sello de certificación. Sin embargo, el principal carácter de las certificaciones reside en el acceso a mercados dinámicos especializados, o de nicho. Dicho acceso está en función de una garantía de que las características intrínsecas y extrínsecas del producto, así como las consecuencias sociales y ambientales de la producción del mismo, están acorde con ciertos estándares de protección, tanto para el que consume (mercado meta), como para los que están involucrados en el proceso de producción (trabajadores), y el entorno donde se da (ambiente). El perder la certificación es perder el acceso a estos mercados especializados.

Figura 15: Principales instrumentos de política pública

Instrumentos	Regulación y normativa (publica o privadas)	Generación del conocimiento	del Financiero (pago condicional)	Acceso a mercados
Ley de Manejo y Conservación de Suelos	X			
Reglamento de Uso y Control de Plaguicidas	X			
Reconocimiento de Beneficios Ambientales (RBA)		X	X	
Reconocimiento de Beneficios Ambientales a la agricultura orgánica (RBAO)		X	X	
Valoración de Servicios Ecosistémicos y Agricultura Familiar (SE/AF) (proyecto piloto)		X	X	
Certificaciones Públicas/Privadas	X			X
Acciones de mitigación nacionalmente adecuadas (NAMAS)		X		
Programa Bandera Azul Ecológica		X		X

Fuente: elaboración propia, 2016



En el caso de la agricultura orgánica, las certificaciones juegan un papel muy importante. En ese sentido, existen dos tipos de certificaciones según la Ley 8591, artículo 5.

- 1) Certificación de tercera parte: sistema de certificación de productos orgánicos, en el cual, necesariamente, debe haber un proceso de verificación que involucre la participación de un organismo de certificación considerado tercera parte independiente. Este organismo deberá estar acreditado bajo los parámetros de normas ISO, o de otras normas equivalentes, avaladas por un sistema internacional de certificaciones, para dar fe de que la producción se realiza bajo las regulaciones de producción orgánica, oficialmente reconocidas por un país o una región.
- 2) Sistemas de certificación participativa: sistemas desarrollados mediante una relación directa entre la persona o las personas productoras orgánicas, y la persona o las personas consumidoras, quienes, entre sí, garantizan el origen y la condición de los productos orgánicos destinados al mercado nacional. Estos sistemas deberán basarse en la normativa nacional para productos orgánicos, y podrán aplicar otras normas y principios construidos por los llamados Grupos de Personas Productoras Orgánicas Organizadas (GPO), los cuales están registrados ante el Órgano de Control del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y que no contradigan las disposiciones nacionales. En este tipo de certificación, también podrán participar otros actores sociales que avalen y respalden al GPO y el sistema de certificación participativa.

Por otra parte, existen un grupo de instrumentos cuya principal característica es la generación de conocimientos entre los implementadores mismos. Esto significa que el productor que adopte los estándares o requerimientos especificados en cada instrumento, desarrolla su propio proceso de aprendizaje, pues implica hacer cambios o innovaciones en su finca y procesos de producción. Algunos de ellos implican un pago compensatorio por esos cambios o innovaciones, o bien crean un imagen que diferencian los productos o las fincas (Bandera Azul ecológica – galardón agropecuario<sup>83</sup>).

En el caso específico de los Reconocimientos de Beneficios Ambientales, y su variante orgánica Reconocimientos de Beneficios Ambientales a la Agricultura orgánica (RBA y RBAO), los impulsa el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y van dirigidos a micro, pequeños y medianos productores orgánicos, en el marco de la ley N° 8591 “Desarrollo Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica”, y en el marco de Ley N° 8408 “Inversiones con efecto ambiental positivo”. Es así que entre el MAG y los productores interesados en el programa se firma un contrato, que establece las obligaciones y derechos de casa parte, especialmente cuando se trata de organizaciones.

Según la normativa para la aplicación y asignación de los RBA/RBAO, los productores que apliquen para estos reconocimientos deben de hacer cambios o inversiones en sus fincas de la siguiente naturaleza:

1. Realizar inversiones directamente en sus sistemas productivos para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Realizar inversiones para adaptar sus sistemas productivos a los efectos del cambio climático.
3. Realizar inversiones directamente en sus sistemas productivos que permitan la aplicación de buenas prácticas agropecuarias.
4. Realizar inversiones que permitan mejorar la sostenibilidad y competitividad del sistema productivo y proteger los recursos naturales.

El programa propone que sean los productores quienes ya sea desde su propia iniciativa, o bien buscando asesoría hagan cambios sustantivos en sus sistemas de producción, de tal forma que aumenten sus ingresos y mejoren la calidad de vida de sus familias. Se trata de una autogestión que fomente la competitividad de dichos sistemas de producción, sobre una base económica y ambientalmente sostenible.

---

<sup>83</sup> <http://banderaazulecolologica.org/cambio-climatico-agropecuario/656>

Una vez demostrado ante los administrados de los RBA/RBAO, que dichas inversiones cumplen con lo anteriormente especificado, los productores recibirán un incentivo económico, el cual varía entre el 20 y 30% del equivalente del valor de las inversiones realizadas. Dichos reconocimientos económicos se hacen por medio de un cálculo matemático, sustentado en el artículo 28 del reglamento de la ley 8591, y contractualmente se establece como un incentivo económico por tres años. La fórmula que se especifica de la siguiente manera:

$$RBA = (AC) * ((VSA * 0,6) + (VENC * 0,4)) * VI + US\$100$$

En donde:

AC: Área certificada por productor

VSA: Valor relativo del Servicio Ambiental

VENC: Valor relativo del Esfuerzo para No Contaminar

VI: Valor I

$$\text{Valor I} = (TFP - ((US\$ 100 * PS)) / \sum (AC * ((VSA * 0,6) + (VENC * 0,4)))$$

TFP: Total de Fondos Presupuestados

PS: Total de Productores Solicitantes

US\$100: Monto base constante por productor

Existen cuatro tipos de inversiones (individual/colectivo) de corto plazo y de largo plazo, las cuales se implementan y se adaptan según las condiciones particulares de cada finca y sistemas de producción.

### Actores y conceptos

Actualmente existen en el país un variado grupo de actores públicos y privados, que han tenido una participación clave en incidir, diseñar e implementar diferentes políticas e instrumentos, que han promovido las diferentes expresiones de esa agricultura alterna y ambientalmente amigable. Los actores más relevantes son:

### DFPAO

Departamento de Fomento a la Producción Agropecuaria Orgánica del MAG, el cual es el encargado de la coordinación de actividades claves para la ejecución de la Ley Para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica en Costa Rica, N°8591. Sin embargo, ha sido el Departamento de Producción Sostenible del MAG que ha tomado el liderazgo en la acción estatal sobre estas formas de agricultura.

### MAOCO

“El Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO) es un espacio de concertación, intercambio y encuentro entre diferentes actores comprometidos con el desarrollo de la agricultura orgánica costarricense<sup>84</sup>.

El Movimiento está conformado por asociaciones de productores y productoras orgánicas de todo el país, organizaciones no gubernamentales que apoyan al sector, y entidades estatales ligadas a la producción orgánica. Ha desarrollado diversas experiencias de producción, investigación, capacitación, certificación, promoción y comercialización de productos orgánicos, lo que ha dado como resultado una variedad de experiencias desarrolladas, familias capacitadas, y sistemas productivos eficientes que van desde fincas en transición orgánica, hasta sistemas agroecológicos consolidados. Este trabajo se ha impulsado a partir de la definición de Estrategias Regionales de Agricultura Orgánica en las cuales se ha visualizado el desarrollo del sector a mediano y largo plazo, y desde las que se estructura el trabajo del Movimiento.

Buena parte del auge de la producción y venta de productos orgánicos en Costa Rica se debe a que MAOCO emprende actividades de fomento de este tipo de producción, amparado en los recursos legales que la Ley N°8591

<sup>84</sup>[https://www.facebook.com/El-Movimiento-de-Agricultura-Organica-Costarricense-MAOCO-160938763954432/info/?tab=page\\_info](https://www.facebook.com/El-Movimiento-de-Agricultura-Organica-Costarricense-MAOCO-160938763954432/info/?tab=page_info)

ya prevé. Las principales áreas de trabajo de MAOCO incluyen el fortalecimiento de la capacidad productiva, fomento de la producción de semillas criollas, mercados locales, sistemas de garantía, promoción de la producción y consumo orgánico, gestión política y fortalecimiento institucional”.

MAOCO y su asociación (ASOMAOCO), se consideran los promotores de la Ley de agricultura orgánica N° 8591. Durante el mes de marzo de 2017, y con la ayuda del MAG, lograron coordinar con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que es el principal operador de telefonía celular en el país, la creación de “Cr Orgánico”. Esto es una aplicación para teléfonos celulares que permite a los consumidores de productos orgánicos ubicar productores sin necesidad de intermediarios. Este es un ejemplo de la promoción de un mercado de circuito corto usando la tecnología celular. Es de esperar que este instrumento tecnológico ayudará a terminar de consolidar los mercados ya existentes de productores orgánicos, a promover el consumo de estos productos, y a atender nuevas demandas.

## ANAO

La Asociación Nacional de Agricultura Orgánica (ANAO) fue fundada en 1992 con el objeto de promover la agricultura orgánica en Costa Rica, capacitar a productores en el tema, y apoyar en los procesos de comercialización de productos orgánicos, especialmente mejorando el acceso de los productores a la certificación internacionalmente reconocida<sup>85</sup>.

La asociación que tiene por fin promover la producción y el consumo de alimentos orgánicos en Costa Rica. Fuimos fundadores de la primera y única agencia certificadora nacional Eco-LOGICA, y estamos especialmente interesados en apoyar, desde nuestra perspectiva, para que los mercados orgánicos se desarrollen de manera sostenible para los agricultores y consumidores”.

## Red COPROALDE

La Red COPROALDE se creó en 1988 y se compone de organizaciones campesinas, organizaciones indígenas y ONGs, que coordinan, tanto en conjunto, como bilateralmente. COPROALDE trabaja en el Desarrollo Rural Alternativo, cuya propuesta aborda la Producción Sostenible integrando su perspectiva política en: Agroecología, Agro ecoturismo, Manejo de la biodiversidad y Artesanía<sup>86</sup>.

Promueve entre sus miembros y hacia lo externo intercambio, reflexión, debate, diálogo y elaboración de propuestas, favorece relaciones sinérgicas entre actores, genera acciones de incidencia política: propuestas y acciones para modificar las condiciones políticas que le desfavorecen. Además, dinamiza la circulación horizontal de saberes y estimula las capacidades de los sujetos rurales alternativos.

Los objetivos de la red son:

1. Promover la agricultura sostenible, a través de la metodología de campesino a campesino, con enfoque a soberanía y seguridad alimentaria y equidad de género.
2. Incidir en la política pública en favor de la agricultura sostenible y acceso a mercados locales a nivel municipal y nacional.
3. Controlar y facilitar el acceso a los recursos, como por ejemplo semillas, mercados locales, tierra.
4. Desarrollar mercados locales campesinos e indígenas, y la metodología de certificación participativa.
5. Hacer conciencia y promoción entre consumidores.
6. Fortalecer MAELA CA y Caribe.

---

<sup>85</sup> <http://productosorganicoscostarica.com/>

<sup>86</sup> <http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?id=28745&entidad=Agentes&html=1>

## Agencias Certificadoras

Las agencias certificadoras son las instancias encargadas de verificar que los productos llevados a los mercados cumplen con las normativas de la agricultura orgánica. Ellas garantizan a los compradores y consumidores que se han cumplido los requisitos legales y técnicos para que el producto sea sano y saludable. Anteriormente, las agencias certificadoras internacionales tomaban contacto con los productores interesados en la certificación. Las primeras experiencias en la región se hicieron con las agencias certificadoras de Estados Unidos (OCIA, por ejemplo) y Europa (BCS-okö garantie y ECOCERT), que tenían reconocimiento en los mercados estadounidense y europeo, respectivamente. Esas agencias enviaban sus propios inspectores para la certificación, lo cual significaba un costo muy alto para las organizaciones de productores y para los productores individuales.

La creación de agencias nacionales (tal como Ecológica creada en 1997) cambió el proceso de certificación, y progresivamente lograron ser reconocidas en países de la Unión Europea y en Estados Unidos de América. En el caso de Costa Rica, el Estado, por medio de la oficina de acreditación, puede brindar respaldo legal a las agencias inscritas. En ese caso, el reconocimiento como "tercer país" significa que los productos orgánicos certificados por agencias registradas en Costa Rica son, reconocidas en los mercados de la Unión Europea, avalados previamente por la oficina encargada de la acreditación. Los trámites detrás de este mecanismo han sido lentos, pero si han facilitado el ingreso de los productos costarricenses a los países europeos. También, estas agencias certificadoras locales desempeñan un papel importante en la construcción de normas para el mercado nacional<sup>87</sup>.

Las entrevistas realizadas en el marco de este estudio revelaron que todos estos actores tienen sus propias visiones y concepciones sobre la agroecología y sobre la agricultura orgánica. Otro hecho interesante, es que a pesar de que los actores privados son varios y comparten mucho del accionar que tienen, en realidad coordinan poco, o nada, sus actividades. De hecho, estos actores no acostumbran a actuar como un solo colectivo y ejercer así un mayor poder de incidencia en la formulación y diseño de la política pública. Tampoco han tenido éxito en fortalecer aún más actividades que ya están contempladas en la ley de agricultura orgánica.

Tomando tres de los actores más importantes (MAOCO, COPROALDE, y el Departamento de Producción Sostenible del MAG), se aprecian diferencias en la visión del sector, la población meta y la institucionalidad.

Figura 16: Diferentes concepciones desde los actores

	MAOCO	COPROALDE	MAG departamento Producción sostenible
<b>Visión de la agroecología</b>	Agroecología = agricultura orgánica (estrategia de unir las fuerzas en un movimiento social)	Agricultura orgánica reducida a sustitución de insumos químicos por insumos orgánicos / Agroecología más amplia (manera de producir y movimiento social, cultural y político)	Mismos principios entre agroecología y agricultura orgánica. La diferencia viene de la certificación para orgánico.
<b>Técnico</b>	Regulación natural Eliminación de agroquímicos y OGM	Regulación natural	Incentivar Producción sostenible
<b>Socio-económico</b>	Pequeños	Pequeños, visión integral de la finca con dimensiones culturales, sociales, económicas, ambientales	Pequeñas y medianas
<b>Institucional</b>	Incidencia política al nivel nacional (ley de fomento a agricultura orgánica)  Visión sectorial (agricultura orgánica + agroecología para reunir y tener un peso político)	Incidencia política al nivel nacional (ley de fomento a agricultura orgánica) + Comunitario e incidencia política (a nivel de municipalidades)  Visión de desarrollo integrado	Incentivos para Sostenible (RBA) y orgánico (RBAO)

Fuente: Elaboración propia, 2016

<sup>87</sup> [http://webiica.iica.ac.cr/comuniica/n\\_17/art.asp?art=6](http://webiica.iica.ac.cr/comuniica/n_17/art.asp?art=6)

En el caso de MAOCO no ven mayor diferencia entre la agroecología y la agricultura orgánica, en el entendido de que se trata de un sistema de producción libre de agroquímicos, y lo definen como un “sistema de producción de pequeña escala sobre todo que ha eliminado completamente los agroquímicos y que trata de “copiar” los sistemas naturales de producción, usando controles biológicos”. También lo ven como un movimiento social. COPROALDE por su parte, tiene una conceptualización de la agroecología y la agricultura orgánica muy similar a la de MAOCO, igualmente dirigida a pequeños productores, pero incorporando fuertemente una dimensión cultural social, por lo que lo ven como un movimiento social más integral.

Contrastan fuertemente estas visiones con la del MAG, representado por el Departamento de Producción Sostenible, en donde ven a la agroecología y la agricultura orgánica como variantes de lo que ellos llaman “producción sostenible”. Esta “producción sostenible” resulta ser muy amplia para las dos visiones anteriores, pues resulta que pueden entrar productores pequeños y medianos, que se ajusten únicamente a los protocolos existentes para el RBA y RBAO. Esto ha causado conflictos entre estos actores, pues los primeros le reclaman al MAG la amplitud de criterios bajo esa “producción sostenible” que se aparta de los objetivos iniciales de la agroecología y la producción orgánica. A nivel institucional MAOCO y COPROALDE se ven como movimientos sociales de incidencia política, y trabajaron conjuntamente en la consecución de la Ley Nº 8591. Sin embargo, ambos grupos evidenciaron luego varias divergencias en su visión de la agroecología, por lo que coordinan poco o nada sus actividades, y funcionan más como grupos independientes uno del otro, lo que limita su capacidad de incidencia e influencia sobre el Departamento de Producción Sostenible del MAG.

### Conclusiones y recomendaciones

---

La evolución de la agroecología y la agricultura orgánica en Costa Rica ha sido producto de un conjunto de políticas e instrumentos, y de iniciativas de grupos de productores y actores locales con apoyo de la cooperación internacional, que han tenido trayectorias diferentes y hasta antagónicas. Para empezar, la conjunción de fuerzas y presiones internacionales por ejecutar una reforma del Estado, y un cambio estructural que afectó a muchos sectores de la economía, especialmente el agropecuario, derivó también en una especie de “agenda verde”, y que paulatinamente fue definiendo una agenda agroambiental. Esta nueva agenda ambiental respondió también más a corrientes de influencia internacional público-privadas, que a políticas de Estado.

Aun cuando la agricultura orgánica tuvo un origen temprano desde la década de los años 80s, e independiente de las demás fuerzas que institucionalizaron la agenda agroambiental, los movimientos que adversaban la agroexportación como objeto único de política pública, no supieron aprovechar esta naciente experiencia, y preparar un mejor posicionamiento de una “nueva pequeña agricultura” ante la sociedad. Por el contrario, se optó por una estrategia de resistencia que los hizo “llegar tarde” al debate público ambiental.

Hay una cierta diferenciación en el uso de los diferentes conceptos sobre agroecología y agricultura orgánica, por parte de diferentes actores. Agroecología, agricultura orgánica, y agricultura sostenible parecen ser sinónimos para algunos actores y conceptos diferentes para otros. Esto revela diferentes visiones de la agricultura y sus propósitos que se aleja del antagonismo dicotómico que planteaba Toledo (2012). Esta situación podría explicarse por el hecho de que tanto MAOCO, ANAO, y la Red COPROALDE surgen como movimientos independientes entre sí, en un contexto en donde el tipo de agricultura que defendía era marginal para la política agropecuaria de entonces. En otras palabras, estos movimientos surgen sin un discurso articulado entre sí para enfrentar esa marginación.

Esta diversidad de visiones (y antagonismos) produce una fragmentación conceptual y práctica sobre la agroecología entre actores, por lo que sus relaciones se vuelven poco o mal coordinadas, y a la vez antagónica entre ellos y el Gobierno. Esta fragmentación de visiones también dificulta la implementación de los instrumentos de apoyo existentes y limita las potencialidades que estos tipos de agricultura alternativa tienen. Hay una tendencia desde el Gobierno de querer posicionarse como un actor dominante, cuando en realidad ha estado en pugna/colaboración con otros actores dentro y fuera del país.

En general, en Costa Rica la política pública en este tema se ha mostrado ambivalente, pues mientras se daban pasos pioneros en cuestiones ambientales, tales con la definición de áreas protegidas, el programa de pago para servicios ambientales, la creación de corredores biológicos, y el involucramiento activo sobre la agenda del cambio climático, también, por otro lado, la agenda agrícola integraba muy lentamente los retos ambientales.

Existe una agenda agroambiental que se ha desarrollado bastante con la implementación por un lado de una amplia gama de instrumentos tanto regulatorios y normativos público/privados, como que de incentivos económicos (RBAs), o cognitivos; y, por otro lado, con la consolidación de movimientos sociales para la promoción y desarrollo de este tipo de agricultura. Esto ha permitido la práctica de un tipo de agricultura más sostenible y comercialmente viable. Sin embargo, también existe un potencial no aprovechado en la agricultura orgánica, que, aunque está legalmente sustentado por la Ley Para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, no termina por desarrollarse y visibilizarse socialmente de forma más amplia. En este sentido, falta una mayor visualización y posicionamiento de este tipo de agricultura alternativa ante el resto de la sociedad civil como una fuente de alimentos sanos, ambientalmente limpios, y a dentro del mismo sector agropecuario, que sigue dominado por actores que defienden una agricultura convencional enfocando a monocultivos y alto uso de agroquímicos.

En la práctica se requiere una acción pública del Estado que haga más efectiva lo que ya la Ley 8591 de fomento de la agricultura orgánica prevé, y que se supere así la actual y confusa confrontación entre productores orgánicos y técnicos gubernamentales que promueven una llamada “agricultura sostenible”. Superar este estado de inacción y confrontación es crucial para un mejor desarrollo y promoción de una agricultura ambientalmente más amigable con un enfoque social orientado al soporte de la pequeña y mediana agricultura familiar.

### Referencias bibliograficas

---

- Alonso-Ubieta S., Saenz-Segura, F., Le Coq, J. F. (2011). *Evolución y práctica de las Políticas Públicas Ambientales y Agrícolas en Costa Rica : Una revisión de 1910 al 2008* . (No. 2011–7). Montpellier.
- Altieri, M. A. (1995). Agroecology: the science of sustainable agriculture. *Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture.*, (Ed. 2). Retrieved from <https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19960700911>
- Chaves Moreira, J. M., & Sáenz Segura, F. (2014). La Institucionalidad del Sector Agropecuario Costarricense : evolución y efectos sobre el desarrollo del sector.
- IBS Soluciones Verdes. (2013). *Estudio sobre el entorno nacional de la agricultura orgánica en Costa Rica*. Retrieved from [http://www.mag.go.cr/biblioteca\\_virtual/bibliotecavirtual/prog-nac-agric-org-entorno.pdf](http://www.mag.go.cr/biblioteca_virtual/bibliotecavirtual/prog-nac-agric-org-entorno.pdf)
- Le Coq, J.F., Alonso-Ubieta, S., Saenz-Segura F., Pesche, D. (2010). Mitigation of climate change and agricultural/environmental policies: The Costa Rican paradox. In *117 th European Association of Agricultural Economists Symposium (EAAE), Seminar “Climate Change, Food Security and Resilience of Food and Agricultural Systems in Developing Countries: Mitigation and Adaptation Options”* (p. 33). Hohenheim.
- Mora-Vega R., Saenz-Segura F., Le Coq, J. F. (2012a). Génesis, evolución y funcionamiento de una certificación socio-ambiental en Costa Rica: El caso de Rainforest Alliance Certified (RAC) (No. 9). Montpellier.
- Mora-Vega R., Saenz-Segura F., Le Coq, J. F. (2012b). Implementación de sistemas de certificación en el sector agrícola de Costa Rica: el caso de Rainforest Alliance Certified (RAC). Montpellier.
- Toledo, V. M. (2012). La agroecología en Latinoamérica: tres revoluciones, una misma transformación. *Agroecología*, (6), 37–46. Retrieved from <http://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co:2056/servlet/articulo?codigo=4116060&info=resumen&idioma=ENG>
- Valenciano-Salazar, J.A.; F. Sáenz Segura, J.F. Le Coq, Zárata-Montero, D. (2015). Costa Rica: Desafíos y políticas públicas para la agricultura familiar. In *Políticas públicas y agriculturas familiares en América Latina y el Caribe: Nuevas perspectivas* (p. 402).

## Capítulo 6. Políticas públicas y transición hacia la agricultura sostenible sobre bases agroecológicas en Cuba

*Luis L. Vázquez; Jacques Marzin y Niurlys González*

### Introducción

En los últimos 58 años varios acontecimientos ocurridos en Cuba han tenido una gran repercusión socioeconómica, principalmente los siguientes: (1) el triunfo de la Revolución Cubana en 1959; (2) el bloqueo económico impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos a principios de 1962 y (3) el derrumbe del campo socialista de Europa del Este desde principios de los años noventa, todo lo cual ha influido en las políticas públicas en el país.

Particularmente en el sector agrario, desde la Primera Ley de Reforma Agraria en 1959, hasta el DL 300 de Entrega de Tierras Ociosas en 2012, la mayoría de las políticas públicas han tenido una proyección hacia la sostenibilidad y la soberanía, principalmente para lograr autosuficiencia en la producción de alimentos y la sustitución de importaciones.

Sin embargo, la producción agropecuaria se ha realizado mediante enfoques tecnológicos contrastantes, que ha caracterizado dos periodos en la mayoría de las tierras agrícolas del país: (1) auge de la agricultura convencional, bajo la influencia del paradigma de la revolución verde, desde los años 60 hasta finales de los 80s, que condujo a la subvención de energía, insumos y equipos importados; (2) transición acelerada hacia la agricultura sostenible sobre bases agroecológicas desde principios de los 90s, como una necesidad imperiosa, debido a la desaparición repentina de las importaciones de energía, insumos y equipos del antiguo campo socialista, que colapsó el modelo de agricultura convencional, altamente dependiente de estos y creó las condiciones para la innovación y la soberanía tecnológica.

La transición hacia la sostenibilidad sobre bases agroecológicas, que ha caracterizado más del 70 % de las tierras agrícolas durante los últimos 25 años, ha contribuido a grandes logros para el país. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha destacado los avances en la lucha contra el hambre y la desnutrición, convirtiéndose en un referente de la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, que es uno de los pocos países de la región que han logrado erradicar completamente el hambre.

Los esfuerzos de Cuba, en pos del desarrollo sostenible, cuentan también con otros reconocimientos internacionales. En 2006 fue referida por el Informe “Planeta Vivo”, (informe bianual de la Fundación Mundial de la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés), como el único país en el mundo con condiciones para llevar adelante las metas del desarrollo sostenible.

En 2015 la Red de la Huella Ecológica Global (Global Footprint Network), identifica a Cuba entre los ocho países que cumplen las dos condiciones esenciales para alcanzar el desarrollo sostenible, en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por Naciones Unidas, al combinar un bienestar alto, con una Huella Ecológica inferior a 1.7 hectáreas.

En el presente capítulo se ofrece, en apretada síntesis, un análisis de las políticas públicas relacionadas con el sector agrario en el país, los principales factores y actores relacionados con las mismas, así como una valoración de impactos logrados y los desafíos futuros. Para su realización fue necesario, en primer lugar, compilar los principales documentos relacionados con las políticas (legales, procedimientos, metodologías, manuales, publicaciones científicas), posteriormente analizarlos bajo una percepción histórica (línea del tiempo, contexto, factores) y agroecológica (científica, tecnológica, social), para finalmente redactarlo, en lo cual contribuyó el haber estado vinculados al sector agropecuario del país.

Aunque no se ha propiciado ningún espacio para consensuar una conceptualización nacional, se ha generalizado y aceptado a la agroecología como la base para la transición hacia la producción agropecuaria sostenible.

Una característica que ha predominado en los diferentes tipos de actores relacionados directa e indirectamente con la producción agropecuaria en Cuba, es la tardía y limitada apropiación de la teoría sobre agroecología y agricultura sostenible, incluyendo la soberanía alimentaria, tecnológica y energética, así como la resiliencia ante eventos extremos como los cambios en el clima.

Aunque pudiesen existir otros factores que justifiquen esta situación, hay varios que son fundamentales: (1) la necesidad en las soluciones prácticas y rápidas a los problemas, bajo limitaciones financieras, que dejan a un lado cuestiones teóricas de las tecnologías; (2) el bajo acceso a fuentes de información internacional; (3) la baja capacidad económica para editar y distribuir materiales impresos y digitales; (4) la persistencia del paradigma del productivismo de la agricultura convencional en diversos actores relevantes de los ámbitos académicos, empresariales y políticos, como única opción para resolver las necesidades de alimentos.

En la producción agropecuaria, la mayoría de los especialistas que trabajan en las provincias y municipios, así como técnicos de base y agricultores, está generalizada la apropiación de la agroecología y agricultura sostenible en base a las nombradas prácticas agroecológicas, para definir: una agricultura ecológica, diferente a la convencional mediante: (1) la sustitución de insumos químicos por biológicos, principalmente plaguicidas y fertilizantes; (2) las diferentes prácticas de conservación y manejo del suelo, como la rotación de cultivos, el laboreo de conservación, entre otras; (3) diversificación e integración de tipos de rubros productivos, principalmente los policultivos; (4) integración de barreras vivas y otras prácticas con la vegetación no cultivada; (5) el modelo de fincas, establecido desde la agricultura tradicional campesina.

También es importante entender que la apropiación de la agroecología en Cuba ha sucedido como un proceso continuo, que ha dependido de diversos factores, la mayoría referidos más adelante; pero, que ha tenido una dinámica progresiva en las políticas, investigaciones, innovación tecnológica, adopción por los agricultores y socialización, con una tendencia hacia los principios de la agroecología; esto significa, que la agroecología en Cuba no es teórica, sino que esta expresada en diferentes niveles de actuación, sobre bases sólidas.

Esta dinámica de apropiación se inició por la sustitución de insumos, implementos, maquinarias y equipos, mediante procesos intensivos de innovación para generar alternativas que podían ser logradas localmente; de esta forma se desarrolló la producción local de controladores biológicos, abonos orgánicos, biofertilizantes, semillas, pie de crías, implementos agrícolas y pecuarios, máquinas de diferentes tipos, entre otros.

Las alternativas en energía comenzaron con la tracción animal para labores culturales, traslado de cargas y desplazamiento de personas en las zonas rurales, entre otros. También para la extracción de agua mediante molinos de viento, la cocción y el alumbrado mediante biodigestores y paneles solares y otras tecnologías sostenibles.

Paralelamente la necesidad de disponer de material genético de calidad devino en sistemas descentralizados de obtención de semilla y pie de crías, acompañados de laboratorios para el control de la calidad; estableciéndose las investigaciones sobre genotipo-ambiente y la regionalización de variedades y razas. En este contexto surgió el Fitomejoramiento Participativo, una poderosa herramienta que ha tenido importantísimos resultados e impactos en todo el país.

La diversificación de especies productivas y la integración agricultura, ganadería y forestería, que era tradicional en fincas de campesinos, careció paulatinamente desde finales de los noventa, con un auge significativo desde 2008-2009 en coincidencia con la política de diversificar las producciones agropecuarias, dejando atrás las producciones especializadas.



El Movimiento Agroecológico de Campesino a Campesino (MACaC) de la ANAP, expresa que frente al modelo convencional, la agroecología ofrece a Cuba sostenibilidad, soberanía y seguridad alimentarias, al asegurar: (a) mayor resiliencia frente a los embates climáticos tan comunes en la isla (huracanes, sequías, inundaciones, etcétera); (b) restauración de los suelos degradados por efecto del uso intensivo de agroquímicos; (c) alimentos sanos (ningún daño contra la salud); (d) mayor productividad; (e) ahorro en divisas, insumos e inversiones (Machín *et al*, 2010), definición muy objetiva, por su sentido práctico, que refleja las dimensiones económicas, ambientales, sociales y tecnológicas de la sostenibilidad.

Respecto a la agricultura orgánica en Cuba, resulta muy interesante que existen personas conocedoras de que su origen y propósitos iniciales han sido modificados por el negocio de las entidades certificadoras y comercializadoras, para acceder a mercados especiales que ofrecen ventajas en precios de venta; en cambio otros la relacionan con un tipo de agricultura ecológica, donde no se deben utilizar insumos químicos.

Debido a que en Cuba aún no existe mercado orgánico certificado para consumo de la población, como es usual en otros países, se exportan algunos rubros por esta vía; no obstante, muchísimas hortalizas y frutos, entre otros productos frescos que son comercializados en los mercados del país son de hecho orgánicos, porque no reciben ningún tipo de producto químico para la nutrición y la sanidad de cultivos. Es decir, la mayoría de la población cubana no tiene cultura de consumir productos orgánicos, pero entiende lo que significa y cómo se obtienen.

Actualmente se están creando las bases para establecer procesos de certificación de productos orgánicos, mediante el proyecto "Apoyo a una Agricultura Sostenible en Cuba" (PAAS) de conjunto con el Instituto Nacional de Investigaciones en Agricultura Tropical "Alejandro de Humboldt (INIFAT) y el Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical (IIFT), quienes están organizando un Sistema Participativo de Garantía (SPG) cubano, que permita a los productores y productoras acceder a un sello de garantía de forma voluntaria (Gavilanes *et al*, 2015). Igualmente se ha establecido la Norma Cubana 500-2010 "Directrices para la producción y elaboración de alimentos por métodos orgánicos, conforme a los requisitos de la normativa internacional y nacional", que tiene incorporados los principales avances de la innovación tecnológica llevadas a condiciones de extensión, en el campo de la agroecología en las condiciones de Cuba.

Respecto a la agricultura sostenible, hasta el momento no existe un consenso nacional sobre lo que significa para las características y condiciones de la producción agropecuaria en el país, ni para las proyecciones, sino que las personas y entidades tienen sus propias definiciones o se apegan a los más divulgados criterios internacionales, que expresa en sus niveles de actuación.

Sin embargo, el auge y alcance del Movimiento Agroecológico Campesino a Campesino (MACaC) y del programa de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, así como de las Fincas Forestales Integrales, entre otros programas, están evidenciando sostenibilidad en los sistemas de producción, con la integración agricultura, ganadería y forestería, entre otros diseños y manejos agroecológicos, así como por su articulación local.

Respecto al componente social de la agroecología, los avances son más evidentes en las políticas públicas que han incidido en las zonas rurales, tanto del llano como en las montañas, así como en la salud, la educación y la cultura, que por su extensión no abordaremos en el presente documento; pero, que ha tenido impactos significativos, que están documentados y son evidentes. La equidad de género, que está bien fortalecida en las políticas públicas a nivel de toda la sociedad; ha sido una temática bastante abordada en diversos proyectos del sector agropecuario, donde hay avances, pero no suficientes.

De esta forma, la agroecología en Cuba se ha consolidado como una ciencia que se apropia de la agronomía, la ecología, la economía y la sociología, que ha tenido resultados prácticos y científicos, la mayoría documentados; pero, que aún no se ha consensuado suficientemente en el orden teórico y por las entidades académicas.

En el presente estudio se ha aprendido que la agroecología, sostenibilidad, soberanía, resiliencia y otros términos relacionados con una agricultura diferente a la convencional, no son usualmente mencionados en la mayoría de

las políticas públicas y sus herramientas; pero, si están implícitos en sus enfoques y decisiones. En cambio, en algunas se menciona la sostenibilidad, pero no resulta evidente en el enfoque ni en las decisiones que establecen.

Recientemente en la región de América Latina y el Caribe se ha dimensionado la agroecología como ciencia, tecnología y sociedad (Toledo, 2012); en Cuba estas dimensiones han estado muy relacionadas, como se evidencia en los libros Transformando el Campo Cubano (Funes *et al*, 2001) y Avances de la Agroecología en Cuba (Funes y Vázquez, 2016).

La experiencia de agroecología en Cuba, específicamente en el sector campesino, el movimiento de agricultura urbana y los colectivos de profesionales de ciencias agrícolas y sociales que actúan en los municipios, aglutinados en organizaciones como ANAP, ACPA y ACTAF, así como por algunos proyectos de innovación, refuerzan las multifunciones sociales de la agroecología, principalmente las relacionadas con la creación de capacidades para la soberanía local, el empoderamiento de los agricultores en la gestión de sus fincas, la concientización sobre la obsolescencia de la agricultura convencional, la necesidad de que las políticas públicas y su implementación tengan una visión ecosistémica y socioeconómica, entre otras funciones.

### Políticas y factores en el sector agropecuario

La mayoría de las políticas públicas que se relacionan con el sector agropecuario en Cuba, han concebido en sus propósitos la transición hacia sistemas con atributos de la sostenibilidad, principalmente como respuesta a efectos negativos de factores socioeconómicos externos, como el bloqueo económico y financiero de los Estados Unidos desde 1962 y el derrumbe del campo socialista de Europa del Este desde 1990, ambos mantenidos hasta la actualidad; pero, como se mencionó antes en la conceptualización, estos términos no siempre se manejan en dichos documentos.

Por otra parte, la implementación de estas políticas ha tenido influencias diversas, entre ellas las relacionadas con la percepción tecnológica de los actores claves involucrados, con predominio de los que han considerado que esta transición es solamente posible mediante modelos de agricultura convencional; en cambio, unos pocos han estado convencidos de que la única forma es adoptar la agroecología como base para lograrlo. Esta dicotomía en la percepción tecnológica de decisores, que también se expresa en investigadores, profesores, especialistas, técnicos y agricultores, constituye uno de los principales factores restrictivos de la agroecología en el país.

Para un mejor estudio de estas políticas, se han agrupado en los tipos siguientes: (a) tenencia y explotación de las tierras, (b) creación de organizaciones y movimientos de agricultores; (c) protección del medio ambiente; (d) conservación y manejo de recursos naturales; (e) alimentación y comercialización; (f) creación de instituciones de investigación y desarrollo. Una síntesis de las mismas y de los principales factores que han contribuido a su promulgación se ofrece a continuación.

#### Tenencia y explotación de las tierras.

Estas han estado relacionadas con cuatro procesos trascendentales: el primero, con posterioridad al triunfo de la Revolución Cubana en 1959, con la *nacionalización* de tierras pertenecientes a grandes latifundios propiedad de cubanos y extranjeros, mediante dos leyes de reforma agraria. Inmediatamente comenzó, como segundo proceso, la *estatalización* de tierras nacionalizadas, al crearse las Granjas del Pueblo y posteriormente las Empresas Estatales, que se prolongó hasta finales de los ochenta; paralelamente a este proceso comenzó el tercero, a finales de los años sesenta, que concebía la *cooperativización* como organización colectiva de entidades productivas y, también paralelamente con este, se inició el cuarto proceso desde principios de los años noventa y hasta el 2016, con la *diversificación* en la administración y decisiones sobre el uso de las tierras.

Figura 17 Cronología de las políticas públicas y herramientas sobre tenencia y explotación de las tierras promulgadas e implementadas en Cuba. 1959-2016.

COOPERATIVIZACIÓN	ESTATALIZACIÓN	<b>1959-1969</b>	Primera Ley de Reforma Agraria (1959) Ley 905. Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)(1959, 1960) Segunda Ley de Reforma Agraria (1963) Granjas del pueblo y empresas estatales (1961, 1964) Cooperativas de crédito y servicios (CCS)(1963)
		<b>1970-1979</b>	Cooperativas de producción agropecuaria (CPA)(1975) Ley 1323. Ministerio de la Agricultura (MINAG)(1976)
DIVERSIFICACIÓN		<b>1980-1989</b>	Ley 36. Cooperativas agropecuarias (1982) Programa de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar (1987, 1997, 2009)
		<b>1990-1999</b>	Medidas para el Período Especial (1990) Programa para la producción familiar de huevo y carne (1990) Decreto-Ley 125. Régimen de posesión, propiedad y herencia de la tierra y bienes agropecuarios (1991) Programa Cultivo Popular del Arroz (1992-93) Programa de plantas medicinales (1992) Programa de permacultura de la FANJNH (1993) Decreto Ley 142. Unidades Básicas de Producción Cooperativas (UBPC)(1993) Decreto 197. Plan Turquino-Manatí en las zonas montañosas (1995) Fincas Forestales Integrales (FFI)(1995, 1998)
		<b>2000-2009</b>	Decreto-Ley 259. Entrega de tierras ociosas en usufructo (2008)
		<b>2010-2016</b>	Lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución (2011, 2016) Decreto-Ley 300. Entrega de tierras estatales ociosas en usufructo (2012) Decreto-Ley 298. Seguridad social de los usufructuarios de tierra (2012)

### Nacionalización.

En el alegato de “La historia me absolverá”, en 1953, que conformó el “Programa del Moncada”, Fidel Castro fundamentó la necesidad de que en Cuba se aplicara una Reforma Agraria, ya que: "el ochenta y cinco por ciento de los pequeños agricultores cubanos está pagando renta y vive bajo la perenne amenaza del desalojo de sus parcelas; más de la mitad de las mejores tierras de producción cultivadas está en manos extranjeras; hay doscientas mil familias campesinas que no tienen una vara de tierra donde sembrar unas viandas para sus hambrientos hijos; en cambio, permanecen sin cultivar, en manos de poderosos intereses, cerca de trescientas mil caballerías de tierras productivas" (Castro, 1967).

La aparición de grandes latifundios levantados sobre las ruinas y el despojo de cientos de familias campesinas luego de la última guerra por la independencia (1895-1898), de la primera intervención norteamericana (1898-1902) y del establecimiento de la república neocolonial (1902-1958), fue la característica fundamental de la estructura agraria durante la primera mitad del siglo XX, con sus apéndices: campesinos no propietarios de la tierra y un numeroso ejército de asalariados rurales (Le Riverend, 1999).

En 1958 solo un 9.4 % de los poseedores de tierra eran propietarios del 73.3% de las mismas (Nova, 2001), el 85% de los campesinos pagaban renta, existían más de cuatro millones de hectáreas sin cultivar, había 200 mil familias sin tierra, altos índices de analfabetismo, mortalidad infantil e insalubridad en el país; de una población de algo más de seis millones de habitantes, había 600 000 desempleados y más de 500 000 obreros del campo subempleados, que solo trabajaban cuatro meses al año; más de la mitad de las mejores tierras agrícolas estaban en poder de propietarios extranjeros (Castro, 1975; citado por Funes 2001).

La expansión acelerada de las plantaciones de caña y tabaco, así como de la ganadería, arrasaron con los bosques naturales, reduciendo la cubierta forestal a 13% de la superficie del país. Los monocultivos cañero, ganadero, tabacalero y cafetalero, cuya producción se destinaba principalmente a la exportación hacia Estados Unidos, ocupaban más del 80% de las tierras explotadas. Este fenómeno acentuó el subdesarrollo de la economía agrícola y repercutió de forma negativa en la calidad de los suelos, la disminución de la cubierta forestal y la disponibilidad de agua (Machín *et al*, 2010).

Con el triunfo de la Revolución Cubana de 1959, se promulgan la Primera y Segunda Leyes de Reforma Agraria, entregándole la tierra a quienes la trabajan (100 mil campesinos) y eliminando el latifundio, foráneo y criollo, pasando a manos del Estado el 70 % de las tierras del país (Nova, 2001).

En febrero de 1959, en la clausura del I Congreso Campesino, se planteó que: "Para mantener el consumo, para mantener la riqueza, para hacer la Reforma Agraria, no es posible repartir la tierra en un millón de pedacitos", constituyendo esta la estrategia que abrió el camino hacia la producción especializada convencional en grandes empresas estatales.

### *Estatización.*

La administración de las tierras por el Estado se inició con la creación de las Granjas del Pueblo en 1961, que agrupaban las tierras nacionalizadas, junto con las granjas cañeras y las fincas estatales. Las Granjas del Pueblo vinieron a ocupar inicialmente las tierras de los antiguos latifundios ganaderos y en 1962 también habían sido creadas 300 Granjas constituidas en los antiguos latifundios arroceros. Estas nuevas formas de administración de las tierras comenzaron a ser financiadas y controladas por el presupuesto estatal, cuya organización comenzaba a responder a los requerimientos de una economía socialista.

El surgimiento del sector estatal creó condiciones para una reorganización territorial de forma planificada, que desde un inicio se trazó como estrategia la diversificación de la agricultura, con el objetivo de reducir la dependencia de un solo producto: el azúcar, así como sustituir importaciones y diversificar las exportaciones de productos alimenticios (Vilariño y Domenech, 1986; citados por Nova, 2001); sin embargo, con la suspensión de la cuota azucarera cubana por parte del gobierno de los Estados Unidos, como una de las primeras medidas económicas aplicadas contra Cuba, y ante la política de diversificación, se decidió reducir las áreas cañeras y por ende la producción azucarera; no obstante, la ex Unión Soviética y demás países socialistas del Este de Europa, decidieron adquirir el azúcar cubano, contándose a partir de ese instante con un mercado seguro, precios estables y preferentes en el largo plazo; esta decisión contribuyó a reconsiderar que la vía del desarrollo inicial se podía apoyar en la agroindustria azucarera y esto condujo a la prolongación de la dependencia de un solo producto (Nova 2001).

De esta forma, el modelo agrícola cubano se caracterizaba por el predominio de la empresa estatal de grandes escalas de producción ("gigantismo") y elevada centralización; este estaba basado en una agricultura industrial, altamente consumidora de insumos, con una importante dotación de inversión y equipamiento por hectárea, pero a la vez con una alta dependencia externa. En la década de los ochenta, particularmente en la segunda mitad, este modelo comenzó a mostrar signos de agotamiento, donde un grupo de indicadores económicos globales reflejaban la realidad de la problemática (Nova, 2006).

Cuando las relaciones comerciales con los países del este europeo se derrumbaron y los Estados Unidos recrudescieron el bloqueo económico, Cuba se sumergió en una crisis económica; en 1991 el gobierno declaró el "Período Especial en tiempo de paz", que básicamente puso al país en un programa austero, con un estilo de economía de tiempo de guerra. Hubo una reducción inmediata del 53 % en las importaciones de petróleo, que no solo afectó su disponibilidad para la economía, sino que también redujo a cero el intercambio internacional que Cuba había logrado anteriormente con la reexportación de este producto. Las importaciones de trigo y otros granos para el consumo humano se redujeron en más del 50 %, mientras otros alimentos disminuyeron aún más. La agricultura cubana se enfrentó a una caída de más del 80 % de disponibilidad de fertilizantes y plaguicidas, y más del 50 % de combustible y otras fuentes de energía producidas a partir del petróleo (Rosset y Bourque, 2002).

Como consecuencia de esta crisis económica y financiera, se deprimió significativamente la producción agropecuaria convencional en las grandes empresas estatales especializadas, que alcanzaban alrededor del 80 % de las tierras, convirtiéndose en entidades insostenibles, todo lo cual fue el factor decisivo para fortalecer las políticas de cooperativización y diversificación, consideradas como un paso trascendental en la reconversión hacia la sostenibilidad.

### *Cooperativización.*

Con la promulgación de la primera y segunda Leyes de Reforma Agraria, en 1959 y 1963 respectivamente se organizaron las cooperativas del sector campesino.

Primero se crearon las Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS), poco después de la segunda reforma agraria en 1963, para facilitar la organización de los agricultores beneficiarios y con el objetivo de socializar la tramitación de los principales servicios para la producción. En las CCS cada familia tiene su propia finca, que trabaja de forma individual, pues los agricultores son propietarios de sus tierras, cultivan de manera independiente, pero se unen para la compra de ciertos equipos, así como para la comercialización de algunos de sus productos.

Posteriormente se crean las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), en que los agricultores privados unieron sus tierras, así como otros medios de producción, convirtiéndose de propiedad privada a colectiva, de la misma forma que la organización del trabajo. En estas cooperativas se forjaron valores como el colectivismo y la cooperación, en apogeo dentro del movimiento campesino cubano.

El derrumbe del campo socialista a principios de los años noventa, constituyó el detonante que, ante un modelo agrícola agotado, propició la crisis económica del sector agropecuario cubano y de la economía en su conjunto; a la vez afloró que las formas cooperativas existentes hasta entonces, las CPA y CCS, se encontraban mejor preparadas que la empresa estatal para trabajar y funcionar bajo condiciones tensas de limitaciones de recursos, pues en el año 1992, el 85 % de las CPA eran rentables, debido a que su escala productiva era menor; también porque se ejercía el derecho de propiedad respecto a sus decisiones y resultados; además, las CPA hacían un uso eficiente de los limitados recursos materiales y fuerza de trabajo, así como un mejor aprovechamiento y conservación de los recursos naturales (Nova, sf).

En este periodo surge una nueva forma de cooperativa, a partir de tierras administradas por el Estado, las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), que se constituyeron a partir de la subdivisión de empresas estatales especializadas, inicialmente del sector cañero, que poseían grandes extensiones de tierra y un alto nivel de recursos por área. A los colectivos de trabajadores que laboraban en esas empresas estatales, les fueron entregadas áreas de tierra bajo condiciones de usufructo indefinido, sin pago de renta hasta el presente y le fueron vendidos el resto de los medios de producción en condiciones de créditos blandos y un período de gracia establecido. Las UBPC nacen así con una importante deuda económica en una situación económica extremadamente difícil, dentro del contexto de crisis económica del país (Nova, sf).

### *Diversificación.*

La diversificación de la producción agropecuaria, proceso iniciado como consecuencia del periodo especial de principios de los noventa, ha tenido diversos impactos y enseñanzas, ya que además de reducir el tamaño de las entidades productivas (fraccionar las grandes empresas estatales en cooperativas), se valoriza el modelo de fincas, contribuyendo a una mayor diversidad de personas que administran las tierras.

De esta forma, las decisiones colectivas en las cooperativas e individuales en los finqueros, sean estos propietarios, usufructuarios o administradores, ha contribuido a la diversificación de las especies productivas, la integración agricultura, ganadería y forestería, la adopción del enfoque agroecológico, mayor beneficio a la alimentación local, entre otros cambios que contribuyen a la transición hacia la agricultura sostenible.

A esta diversificación también tributaron resultados científico-técnicos obtenidos en décadas anteriores, así como las políticas sobre innovación integrando centros de investigación, técnicos locales y agricultores, así como la demanda social del autoabastecimiento en alimentos.

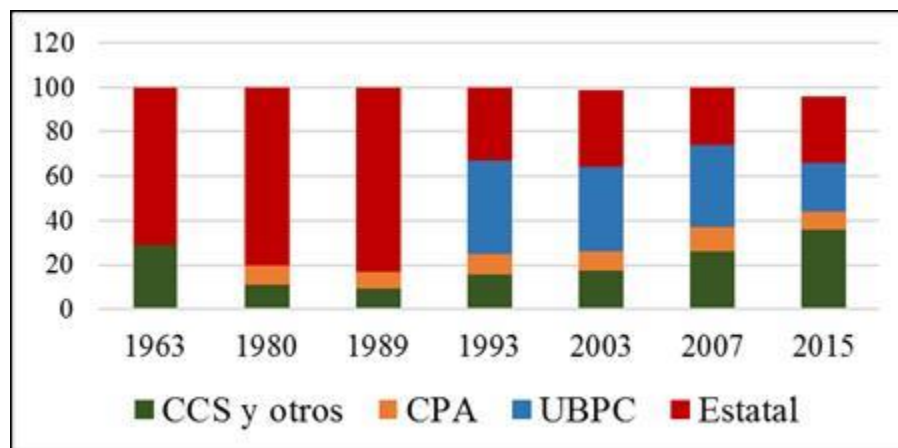
La experiencia de Cuba durante los años 90, ante una crisis alimentaria, en que la ayuda internacional estuvo escasamente disponible, el país se vio obligado a recurrir a sus propios recursos naturales y humanos, a conjugar viejos y nuevos métodos para impulsar la producción de los alimentos básicos, sin depender de las importaciones; no resultó fácil, pero de diversas maneras el pueblo y el gobierno cubanos estaban singularmente preparados para enfrentar este reto; la población, educada y enérgica, puso en la tarea su dinamismo e ingenio, en tanto el gobierno mantuvo su compromiso de alimentar a todos y a la vez mantener apoyo a la ciencia y la tecnología del país (Rosset, 1998; Rosset y Altieri, 1994).

También en este periodo surgieron importantes programas especiales, como el Programa de Agricultura Urbana y Suburbana (Companioni *et al.*, 1997), el Programa de Arroz Popular (Socorro *et al.*, 2001), entre otros, que tenían como objetivo contribuir al autoabastecimiento local en la producción de alimentos; programas que apuntaban a una mayor descentralización de la producción de alimentos, hacia la soberanía alimentaria de los territorios del país. También la legislación sobre políticas públicas ha sido prolífera con posterioridad a los años noventa, siendo trascendentales los procesos de entrega en usufructo de tierras ociosas de las Empresas Estatales, a través de los Decretos Leyes 259 y 300 de 2008 y 2012 respectivamente; consolidando de esta forma el proceso de descentralización en la administración de las tierras.

En la última década ha ocurrido una reactivación del sector agropecuario, desde el 2007 se han operado cambios como: incremento en los precios de compra del Estado al agricultor en la leche, carne bovina y productos agrícolas; la entrega de tierras ociosas, toma de decisiones locales y simplificación de estructuras y funciones ministeriales en la producción primaria y procesamiento de alimentos y se han operado cambios y aproximaciones en el reordenamiento agropecuario del país y diversificado las formas de propiedad existentes, cooperativizadas gran cantidad de las empresas anteriormente estatales, disminuyendo el tamaño de las unidades y convirtiendo muchas de ellas en fincas, donde los trabajadores reciben sus ingresos según su gestión y eficiencia productiva (Nova, 2016).

Al concluir el 2015, la utilización de las tierras en el país muestra una distribución muy contrastante con los años sesenta y finales de los ochenta (Figura 2), pues el estado ha pasado de manejar alrededor del 80 % de las tierras en esos años, al 30,3 % recientemente; aunque, esta cifra pudiera ser actualmente alrededor del 35-40%. También las CCS y otros agricultores pequeños han aumentado la superficie que manejan al 35,3%. De esta forma, el sector cooperativo en su conjunto, donde hay mayores posibilidades para transitar hacia la sostenibilidad, ocupa alrededor del 60-70 % de las áreas agrícolas, que representan 4 350 270,17 hectáreas.

Figura 18 Dinámica de cambios en la administración de las tierras en Cuba. 1959-2016. Fuente: ONEI, MINAG



### Organizaciones y movimientos de agricultores.

Durante los últimos 57 años, han surgido diferentes organizaciones y movimientos sociales, para apoyar el proceso de transformación de la agricultura del país (Tabla 1), con una contribución destacada, principalmente desde principios de los años noventa, a la transición hacia una agricultura sostenible.

Figura 19- Cronología de la creación de organizaciones y movimientos sociales relacionadas con el sector agropecuario en Cuba. 1959-2017.

Período	Políticas y herramientas
1959-1969	Resolución No. 247 Creación de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)(1961)
1980-1989	Movimiento del Fórum de Ciencia y Técnica (1981) Asociación Cubana de Técnicos Agropecuarios y Forestales (ACTAF)(1987)

<b>1990-1999</b>	Programa de Desarrollo Sostenible del Consejo de Iglesias de Cuba (PDS-CIC)(1991)
	Grupo Gestor de la Asociación Cubana de Agricultura Orgánica (ACAO)(1992)
	Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA)(1974)
	Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre (FANJNH)(1994)
	Proyecto Comunitario de Conservación de Alimentos (1995)
	Movimiento Agroecológico Campesino a Campesino (MACaC)(1997)

Se reconoce como pioneros en la promulgación del enfoque agroecológico de la agricultura en el país a un grupo de profesores e investigadores, que pertenecían principalmente a las universidades y centros de investigación, conscientes de la necesidad de promover las alternativas para el cambio de la agricultura convencional, quienes se unieron para discutir las ideas agroecológicas en el entonces Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana (ISCAH), hoy Universidad Agraria de La Habana (UNAH) y de esta manera se convoca al Primer Encuentro Nacional de Agricultura Orgánica, el cual se celebró en mayo de 1993 en el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), con la participación de más de 100 delegados cubanos y 40 extranjeros (Funes, 2001).

En este encuentro se creó el Grupo Gestor de la Asociación Cubana de Agricultura Orgánica (ACAO), cuyos principales objetivos fueron (Funes, 2001): (a) Crear una conciencia nacional sobre la necesidad de realizar una agricultura en armonía con la naturaleza y el hombre, así como la de producir económicamente alimentos suficientes y sanos al alcance de toda nuestra población; (b) instrumentar proyectos de base para el desarrollo de una agricultura agroecológica, así como la formación y capacitación de los protagonistas de este nuevo paradigma de desarrollo rural; (c) estimular la investigación y enseñanza agroecológica, así como el aprendizaje y rescate de los principios en que se han basado tradicionalmente muchos sistemas de producción; (d) coordinar la asesoría a productores y promover el establecimiento de sistemas de producción agrícolas orgánicos y naturales; (e) propiciar el intercambio de experiencias con organizaciones extranjeras (con énfasis en el trópico y subtrópico latinoamericano) y con los actores individuales que trabajen en agricultura sostenible y desarrollo rural de base; (f) promover y difundir la importancia de la comercialización de productos orgánicos.

A partir de ese momento se llevó a cabo una labor de desarrollo de conciencia a través de talleres, días de campo, charlas en universidades y centros de investigación, conferencias, eventos y reuniones participativas con productores, así como mediante la rotación de bibliotecas agroecológicas por diferentes centros de producción, investigación y docencia, cooperativas agropecuarias y otros organismos interesados (Funes, 2001).

Se destaca en este periodo el programa de Faros Agroecológicos, organizado con agricultores con el objetivo de promover sistemas de producción sostenibles en diferentes localidades del país, que fue apoyado por el proyecto SANE (Sustainable Agriculture Networking and Extension – Red de Agricultura Sostenible y Extensión) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y contempló también acciones de capacitación con la UNAH e Institutos Politécnicos Agropecuarios (IPA) y que continuó en otras provincias, con el apoyo financiero de Pan para el Mundo de Alemania, Hivos de Holanda y Oxfam América de Estados Unidos (Funes, 2001).

La Asociación Cubana de Técnicos Agropecuarios y Forestales (ACTAF), creada el 2 de febrero de 1987, es una entidad con personalidad jurídica, con la misión de potenciar la gestión del conocimiento articulando a técnicos, profesionales y otros actores que contribuyan al desarrollo agropecuario y forestal sostenible sobre bases agroecológicas. Cuenta con 15 filiales provinciales y otra en el Municipio Especial Isla de la Juventud, cada una dirigida por un presidente, al igual que en todos los municipios del país. Al cierre del 2014 la integraban 25 902 afiliados, de ellos 40 % mujeres.

La Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA) es fundada en 1974 como organización no gubernamental, con la misión de contribuir con sus acciones, experiencias y recursos, al desarrollo humano, técnico-productivo sostenible en la esfera de la producción e industria animal. Cuenta con más de 32.000 socios individuales, más de 2400 órganos de base y más de 3000 socios institucionales, distribuidos en las 15 filiales,

El Movimiento Agroecológico Campesino a Campesino (MACaC) promovido e iniciado por la ANAP en 1997 para la conservación del patrimonio de prácticas agrícolas tradicionales y la valorización de la agroecología como base



para la transformación de la producción agropecuaria hacia sistemas sostenibles, ha sido protagonizado por los campesinos, quienes mostraron una gran resiliencia ante las influencias tecnológicas de la agricultura convencional que se implementó durante los años 60-90 del pasado siglo y lograron un alto nivel de contribución a la alimentación de la población cuando se decretó el periodo especial de la economía cubana, para consolidar un movimiento innovador, de gran arraigo a la cultura agrícola del país.

En 1994, en pleno inicio e impactos del periodo especial, se inició la recuperación del sector campesino, proceso que se caracterizó por una alta intensidad de innovación campesina, que se convirtió en una línea estratégica del país. Este proceso condujo a que en 1997 comenzara en la provincia de Villa Clara y posteriormente en 2001 en Sancti Spiritus y Cienfuegos la aplicación experimental de la metodología de campesino a campesino, que había sido observada por Chirino en Nicaragua, que se convirtió en un proyecto de la ANAP y que posteriormente el entonces presidente Lugo Fontes lo convirtió en un movimiento con una visión integral que se generalizó en el resto del país como Movimiento Agroecológico de Campesino a Campesino (MACaC) de la ANAP (Braulio Machín, comunicación personal, 2016).

Desde su creación en 1997, ha logrado aglutinar a más de 100 mil familias campesinas a lo largo y ancho de la isla, lo que representa la tercera parte de las más de 250 mil economías familiares campesinas cubanas, que ya han transformado de forma significativa sus sistemas de producción, gracias a la agroecología (Machín *et al*, 2010).

El resultado de este trabajo de sistematización demuestra de modo fehaciente que la agroecología ha sido la opción más viable y, de hecho, perdurable para la agricultura campesina cubana, en medio de condiciones económicas y ambientales desfavorables de la isla. Más aún: los componentes fundamentales de sostenibilidad de los sistemas tradicionales campesinos se convirtieron, más que en alternativas, en líneas estratégicas de resistencia. Ello comprobó la viabilidad de este modelo agrícola para hacer frente –e ir saliendo de forma sostenida– a la aguda crisis desatada en los años 90, luego que desaparecieran las relaciones comerciales con los países del Este europeo, amén del recrudecimiento del bloqueo económico estadounidense, conocido en Cuba como Período Especial (Machín *et al*, 2010).

La ACAO, que posteriormente se integró a la ACTAF, así como ACPA y ANAP, han promovido vínculos y proyectos con diversas organizaciones del mundo, que han generado publicaciones, han organizado eventos y el intercambio internacional de los técnicos y agricultores cubanos que promueven la agroecología, en lo cual se destacan las organizaciones internacionales Vía Campesina e IFOAM, así como las latinoamericanas SOCLA y MAELA, además de instituciones científicas de diversos países, principalmente de los Estados Unidos, quienes han acompañado estos procesos durante los últimos 25 años.

### Protección del medio ambiente.

Por su importancia, las políticas sobre medio ambiente que se analizan a continuación son las de carácter general para todos los sectores del país, ya que, por su alta relación con el sector agropecuario, las políticas públicas específicas sobre conservación y manejo de recursos naturales se abordan en el acápite siguiente.

Las políticas públicas generales sobre medio ambiente han estado presentes desde 1959, y se han ido fortaleciendo mediante actualizaciones posteriores, hasta la actualidad en que se ha logrado una elevada institucionalización de las mismas.

**Figura 20 Cronología de las políticas públicas y herramientas sobre medio ambiente promulgadas e implementadas en Cuba. 1959-2016.**

Período	Políticas y herramientas
<b>1959-1969</b>	Comisión Nacional de Protección del Medio Ambiente y Conservación de los Recursos Naturales (COMARNA)(1976)
<b>1980-1989</b>	Ley 33. Protección del Medio Ambiente y el Uso Racional de los Recursos Naturales (1981)
<b>1990-1999</b>	Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (1990)



Constitución de la República de Cuba. Modificación del Artículo No. 27 sobre protección del medio ambiente (1992)

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA)(1994)

Ley No 81. Nueva Ley de Medio Ambiente (1997)

Estrategia Ambiental Nacional (1997)

Muy significativo fue que, apenas concluida la Cumbre de Río en el año 1992 y tomando como base los compromisos contraídos por el país, Cuba modificó el Artículo 27 de la Constitución de la República, el cual establece expresamente que: “El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. Corresponde a los órganos competentes aplicar esta política...”

En 1976, y por Acuerdo del Consejo de Ministros, se crea la Comisión Nacional de Protección del Medio Ambiente y Conservación de los Recursos Naturales (COMARNA), integrada por los órganos, organismos e instituciones más directamente vinculadas con la protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales.

El 10 de enero de 1981, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley No. 33, de Protección del Medio Ambiente y el Uso Racional de los Recursos Naturales, que estableció los principios básicos en este campo y creó el Sistema Nacional de Protección del Medio Ambiente y del uso Racional de los Recursos Naturales.

En 1994, se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), que antes se nombraba Academia de Ciencias de Cuba (ACC), es un organismo de la Administración Central del Estado que se encarga de proponer la política ambiental y dirigir su ejecución sobre la base de la coordinación y control de la gestión ambiental del país.

Posteriormente, en 1997, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley 81 del medio ambiente, que ha servido de base a importantes legislaciones complementarias, normas y otros instrumentos de la gestión ambiental, lo que incluye los elementos regulatorios y de supervisión estatal.

En general, el cuerpo normativo en torno a la cuestión ambiental, el desarrollo sustentable y la agricultura fundada en estos parámetros se ha ido ampliando a través de la Ley de Protección del Medio Ambiente y Uso Racional de los Recursos Naturales (1997), la Ley Forestal (1998), así como el Decreto-Ley 190/99 referido a la seguridad biológica, el Decreto-Ley 200/99 de las Contravenciones del medio ambiente, el Decreto-Ley 201/99 del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el Decreto-Ley 212/2000 que regula lo concerniente a la gestión de las zonas costeras y la Estrategia Ambiental para la Agricultura (1999), dirigida a proteger el patrimonio natural vinculado a la actividad agropecuaria (Arias y Leyva 2012).

### Conservación y manejo de recursos naturales.

Las políticas públicas y sus herramientas sobre conservación y manejo de recursos naturales (Tabla 3), principalmente suelo, agua y biodiversidad, constituyen una evidencia del enfoque de sostenibilidad en las políticas públicas relacionadas con el medioambiente, las han involucrado activamente el sector agropecuario del país.

**Figura 21 Cronología de las políticas públicas y herramientas sobre conservación y manejo de recursos naturales promulgadas e implementadas en Cuba. 1959-2016.**

Período	Políticas y herramientas
Antes de 1959-1993	Programa Nacional de Producción de Medios Biológicos (1951, 1982, 1988, 1993)
1959-1969	Ley 1279. Registro del ganado mayor y de razas puras (1974)
1980-1989	Decreto Ley No 110. Reglamento para la protección sanitaria del ganado porcino (1982) Resolución No. 277. Medidas para detener la degradación de los suelos por salinización (1986)

<b>1990-1999</b>	Resolución No. 366. Reglamento para la importación de plantas, productos de origen vegetal y otros susceptibles a causar perjuicios al estado fitosanitario del país (1990) Frente Nacional de Tracción Animal (1990)
	Resolución No. 225. Determina las especies forestales cuya tala está prohibida (1991)
	Decreto No. 175. Regulaciones sobre la calidad de la semilla y sus contravenciones (1992)
	Decreto No. 176. Protección de la apicultura, sus recursos melíferos y contravenciones (1992)
	Decreto No. 179. Protección, Uso y Conservación de los Suelos y sus Contravenciones (1993)
	Decreto-Ley No. 136. Del Patrimonio Forestal y la Fauna Silvestre (1993)
	Decreto Ley N° 138. Aguas Terrestres (1993)
	Decreto Ley No. 137. Medicina veterinaria (1993)
	Decreto No. 180. Contravenciones de las regulaciones sobre patrimonio forestal y la fauna silvestre (1993)
	Decreto-ley número 153. Regulaciones de la sanidad vegetal (1994)
	Resolución No. 110. Exigencias sobre suelos en proyectos de inversiones (1996)
	Resolución No. 528. Medidas para atenuar o detener la degradación de los suelos por el uso incorrecto del fuego (1998)
	Ley No. 85. Ley Forestal (1998)
<b>2000-2009</b>	Programa Nacional de Mejoramiento y Conservación de Suelos (2001) Programa Nacional de Abonos Orgánicos y Biofertilizantes (1991, 2003).
	Registro de plaguicidas (2007)
<b>2010-2016</b>	Programa de polígonos demostrativos de conservación del suelo, el agua y el bosque (2010)

Uno de los programas pioneros en la conservación de la biodiversidad fue el de control biológico del bórer de la caña de azúcar, principal cultivo agrícola del país, establecido desde principios de los años cincuenta, que fue reforzado en 1982 por el Ministerio del Azúcar y que en 1988 el Ministerio de la Agricultura abrió para la producción agropecuaria, esta último también reforzado en 1993 como una necesidad de la crisis económica, programas que concebían la sustitución de los plaguicidas químicos por agentes de control biológico. Estos programas, actualmente integrados, poseen una red de Centros de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos (CREE) y varias plantas industriales para la producción de bioplaguicidas, todos ubicados en las áreas de producción agrícolas, con la misión de producir (o reproducir) organismos (bacterias, hongos, insectos) para su utilización por los agricultores localmente.

Otras políticas sobre biodiversidad, que han sido generalizadas se relacionan con las variedades y especies productivas, las áreas forestales y protegidas, así como relativas a la salud de las plantas y los animales productivos, en las cuales se ha evidenciado la preocupación por la conservación y una utilización racional.

Sobre conservación y mejoramiento de suelos, las investigaciones y servicios analíticos fueron iniciadas desde los años sesenta, mientras que las políticas han sido prolíferas desde principios de los años noventa, al ser evidentes los afectos degradativos de la agricultura convencional que se había practicado en las mejores tierras del país. Algunas políticas más significativas han sido:

El Decreto No. 179. Protección, Uso y Conservación de los Suelos y sus Contravenciones, promulgado en 1993, donde se establece el control sobre el uso, la conservación y el mejoramiento y la rehabilitación de los suelos; determinar el orden de utilización de los suelos, su control y levantamiento cartográfico, así como su caracterización y clasificación; conservar y proteger la fertilidad de los suelos agrícolas y forestales; determinar las contravenciones personales y las medidas administrativas a imponer por las violaciones de las disposiciones de este Decreto. Esta normativa también define lo referente a la explotación de los suelos bajo el principio de racionalidad, conservación y protección contra todas las formas de degradación, así como de actos o efectos que puedan perjudicarlos.

El Programa Nacional de Mejoramiento y Conservación de Suelos (PNMCS), establecido en 2001, que tiene como principal objetivo, detener y revertir el proceso de degradación de los suelos, mediante el resarcimiento de los gastos a las entidades productivas, por la ejecución de medidas simples de conservación y mejoramiento de los suelos, lo cual indudablemente constituye un incentivo que en la actualidad supera los 25 millones de pesos anuales.

El Programa Nacional de Abonos Orgánicos y Biofertilizantes, que desde 1991, ha promovido la producción local de estos bioinsumos, inicialmente por la imposibilidad de adquirir grandes cantidades de fertilizantes químicos y posteriormente como una práctica que favorece la conservación y mejoramiento de los suelos. Este fue reforzado desde el 2002, se organizó el Programa Nacional de Producción de Abonos Orgánicos y Biofertilizantes.

El Programa de polígonos demostrativos de conservación del suelo, el agua y el bosque, auspiciado por el Ministerio de la Agricultura y conducido por el Instituto de Suelos, fue iniciado en el año 2010, como sitios destinados a validar tecnologías integradas para la gestión de estos recursos y crear capacidades para enfrentar el efecto del cambio climático. Considera la finca como unidad básica de manejo y atienden la cuenca hidrográfica como espacio físico geográfico a proteger.

De gran contribución a la conservación de los recursos naturales han sido los campesinos, quienes con posterioridad a las Leyes de Reforma Agraria de 1959 y 1963, fueron portadoras de conocimientos ancestrales que fueron preservados, principalmente la tracción animal, la diversificación de cultivos y animales, la rotación de cultivos, la integración de arboledas, además del modo de vida en fincas y su capacidad de resistencia; es decir, cuando posteriormente se implementó la revolución verde a finales de los años sesenta, el campesino cubano mantuvo y conservó las prácticas tradicionales, mismas que fueron posteriormente rescatadas como una necesidad del periodo especial de los años noventa (Braulio Machín, comunicación personal, 2016).

### Alimentación y comercialización.

Una de las problemáticas en la cuestión agroalimentaria a resolver en Cuba ha sido la erradicación de la alta dependencia externa, esta preocupación se manifiesta de acuerdo con el Partido Comunista de Cuba (2011) en la política agroindustrial de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución donde se expone en el lineamiento 177 la necesidad de revertir la situación actual del país como importador neto de alimentos.

Prácticamente todas las políticas públicas del sector agropecuario han estado concebidas para lograr este propósito; por otra parte, varias políticas han abordado aspectos relacionados con la nutrición, la inocuidad, entre otras, incluyendo una incursión inicial sobre producciones orgánicas (Tabla 4).

También ha existido una dinámica de políticas y herramientas diversas relacionadas con la comercialización y los mercados de productos agrícolas, incluyendo el tributo a la industria, las cuales han experimentado aciertos y desaciertos; pero, aún no han logrado que exista una correspondencia racional entre: producción obtenida y ofertada, diversidad producida y diversidad ofertada, momento de cosecha y tiempo de venta, costo de producción y precio de venta a la población, entre otros aspectos que han resultado de gran complejidad para los decisores.

**Figura 22 Cronología de las políticas públicas y herramientas sobre alimentación promulgadas e implementadas en Cuba. 1959-2016.**

Período	Políticas y herramientas
<b>1980-1989</b>	Decreto-Ley Número 54. Disposiciones Sanitarias Básicas sobre producción e importación de alimentos (1982) Ley 41. Salud Pública. Artículo No. 66. Estado nutricional de la población, el control sanitario de los alimentos y bebidas de consumo, y regulaciones en materia dietética (1983)
<b>1990-1999</b>	Programa Nacional de Acción para la Nutrición (PNAN)(1990)

	Mercado Libre Agropecuario (1994)
	Resolución Ministerial del MINSAP No. 64. Regula la circulación y comercialización de alimentos en el territorio nacional mediante la inscripción en el Registro Sanitario (1997)
<b>2000-2009</b>	Resolución Ministerial del MINSAP No. 338. Crea el Buró Regulatorio para la Protección de la Salud relacionadas con la calidad de la producción, el almacenamiento, transporte, distribución, elaboración y comercialización de los alimentos, aditivos alimentarios, el material de envase, y las materias primas (2005)
<b>2010-2016</b>	Producción orgánica. Norma cubana y Sistema Participativo de garantías (2010)

Uno de los mayores aciertos en estas políticas es la protección de la alimentación a niños, ancianos y personas que padecen determinadas enfermedades con requisitos nutricionales, así como de escuelas, círculos infantiles, hogares de ancianos y hospitales, entre otras necesidades sociales, que han sido muy valorizadas por la población.

De hecho, la soberanía y seguridad alimentaria constituye un tema poco abordado en el contexto cubano; sin embargo, resulta evidente la necesidad de analizarlo en toda su dimensión, toda vez que bajo las condiciones de Cuba este se muestra complejo. Las políticas de soberanía y seguridad alimentaria en Cuba se sitúan en un marco de relaciones diferentes a las de otros países, pues predomina el poder del Estado, con una economía centralizada en vía de descentralización, y la lógica del mercado en ocasiones no decide el funcionamiento del sistema alimentario (Gamboa *et al*, 2013)

La cuestión agroalimentaria no debe centrarse solo en los cambios de estructura, pues las decisiones tomadas en la agricultura cubana por parte de los agentes y diseñadores está muy influida por las entradas al sistema como los cambios en la estructura y tenencia de la tierra, nivel de producción y servicios, modelo tecnológico, entre otros, y en menor medida por el nivel de desarrollo agrario, eficiencia y desarrollo organizativo que constituyen las salidas del sistema agrario (Valdés, 2010; citado por Gamboa *et al*, 2013).

### Creación de instituciones de investigación y desarrollo

En Cuba existe tradición en el establecimiento de entidades de investigación y desarrollo para el sector agropecuario, pues desde principios del siglo pasado se creó la Estación Experimental Agronómica en Santiago de Las Vegas, La Habana y posteriormente estaciones experimentales sobre tabaco, caña de azúcar, entre otras; siendo muy prolifera la creación de institutos de investigaciones en las décadas de los sesenta y setenta.

Figura 23 Cronología de la creación de instituciones de investigación y desarrollo en el sector agropecuario de Cuba. 1959-2016.

Período	Políticas y herramientas
<b>Antes de 1959</b>	Estación Experimental Agronómica de Santiago de Las Vegas (1905), Instituto de Investigaciones Fundamentales de la Agricultura Tropical (INIFAT)(1975)
<b>1959-1969</b>	Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey (EPPFIH)(1962) Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar (INCA)(1964) Dirección de Suelos (poco después Dirección General de Suelos y Fertilizantes, DGSF)(1964); Instituto de Investigaciones de Agroquímica y Mejoramiento de los Suelos (IIAMS)(1970); Instituto de Suelos (1965, 1987) Instituto de Medicina Veterinaria (IMV)(1961, 1967); Empresa Cubana de Productos Veterinarios (Cubavet)(1976); Grupo Empresarial Labiofam ( ) Instituto Nacional de Desarrollo y Aprovechamiento Forestal (INDAF)(1967); Centro de Investigación y Capacitación Forestales (CICF)(1969); Instituto de Investigaciones Agroforestales (IIAF)(1975) Grupo Apícola Nacional (1968); Empresa Cubana de Apicultura (1976); Estación Experimental Apícola (1982)
<b>1970-1979</b>	Centro Nacional Fitosanitario (1967). Sistema Estatal de Sanidad Vegetal (1973); Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV)(1975) Estación de Pruebas de Máquinas Agrícolas (EPMA), Centro de Mecanización Agropecuaria (1974); Instituto de Investigaciones de Mecanización Agropecuaria (IIMA)( ) Instituto de Investigaciones de Riego y Drenaje (IIRD)(1975) Instituto de Investigaciones de Cítricos y Frutales (IICF), Instituto de Investigaciones de Fruticultura Tropical (IIFT)(1975) Combinado Avícola Nacional (CAN)(1964); Instituto de Investigaciones Avícolas (IIA)(1975); Dirección Principal Avícola, Dirección Principal de Piensos (1977); Unión de Empresas Combinado Avícola Nacional (UECAN)(1984); Unión de Empresas Combinado Avícola Nacional (1987) Estación Experimental Hortícola Liliana Dimitrova (1972); Instituto de Investigaciones Hortícolas Liliana Dimitrova (IIHLD)(1975). Combinado Porcino Nacional (1968); Instituto de Investigaciones Porcinas (IIP)(1975) Instituto de Investigaciones del Tabaco (IIT)(1975) Centro de Investigaciones de Semillas Agámicas (CENSA); Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales (INIVIT)(1975)
<b>1990-1999</b>	Centro Nacional de Bioseguridad (1993)
<b>2000-2010</b>	Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos (2004)

En otros ministerios también se crearon centros de investigaciones agropecuarias, como son: Instituto de Ciencia Animal (ICA), Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA), Instituto de Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitrov, entre otros en las universidades.

Las ciencias agropecuarias cubanas han acumulado resultados y experiencias, tanto en agricultura convencional como sostenible. Precisamente, muchas de estas instituciones evidenciaron los efectos colaterales, ineficiencia e insostenibilidad de la agricultura convencional que se practicaba en las empresas estatales, desde la década del 70, lo que condujo a que desde este periodo el gobierno implementara algunos cambios conducentes a una agricultura más racional y acorde con nuestra realidad. Se destaca entonces la creación del sistema estatal de protección de plantas en 1974 y el programa nacional de control biológico en 1988, para reducir el excesivo uso de plaguicidas químicos y sus efectos colaterales en la resistencia de plagas a diversas moléculas.

Los centros de investigación orientaron sus objetivos y estrategias hacia nuevos programas de trabajo, sobre bases más racionales y sostenibles. En este período repercutió en el país la crisis mundial de la energía y los precios imperantes de los combustibles, fertilizantes, concentrados, plaguicidas, las manufacturas y otros influyeron negativamente en nuestra economía agrícola. En los años de la década del 80 se incrementan la investigación, extensión y desarrollo en cuanto a las técnicas de sustitución de insumos (Funes, 1997).

La agroecología está integrada en la formación profesional en el diseño de varias carreras, a través de la asignatura de Agroecología en las carreras de agronomía y forestal, y se está integrando en las nuevas carreras de ingeniería agrícola y procesos agroindustriales, esta última como cátedra de la UNESCO en educación a distancia. Nunca se pensó en abrir una carrera de agroecología, porque no se logran las habilidades y no se transita por el conocimiento básico agronómico, como por ejemplo de suelos, fitotecnia, genética y otros. La agroecología está en el perfil del estudiante y en la política de formación y orientación vocacional de la educación superior de Cuba (Pedro Pablo del Pozo, comunicación personal, 2016).

Estas instituciones, de conjunto con las entidades de servicio del Ministerio de la Agricultura en todo el país, el acompañamiento de organizaciones como ANAP, ACPA y ACTA, así como el apoyo de proyectos de organismos internacionales y otros donantes, lograron la adecuación, introducción y generalización de nuevas tecnologías, apropiadas para la nueva agricultura que se estaba construyendo desde el Periodo Especial.

Pero, este flujo de tecnologías mantuvo el mismo enfoque verticalista de la transferencia de tecnologías, basado en la capacitación. Como expresara Ríos (2016), para la introducción de nuevas variedades las mejores eran seleccionadas y aprobadas por un grupo de personas expertas nacionales, se diseminaban en las empresas de producción, para ser cultivadas siguiendo las directivas centralizadas.

De manera general este modelo de innovación y transferencia de tecnologías se ha mantenido; aunque, la mayoría de los centros de investigación lograron una mayor vinculación con los agricultores, principalmente para probar las nuevas tecnologías en sus áreas de producción o realizar demostraciones-capacitaciones para implementarlas, mientras que algunos centros avanzaron hacia modelos de innovación participativa, que han contribuido a una mayor apropiación y adaptación de tecnologías y han establecido modelos sostenibles de innovación, como es el caso del Fitomejoramiento Participativo (FP) y el Programa de Innovación Agrícola Local (PIAL) creado y generalizado en el país por el INCA (Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas).

### **Actores e implementación de las políticas públicas en agroecología**

---

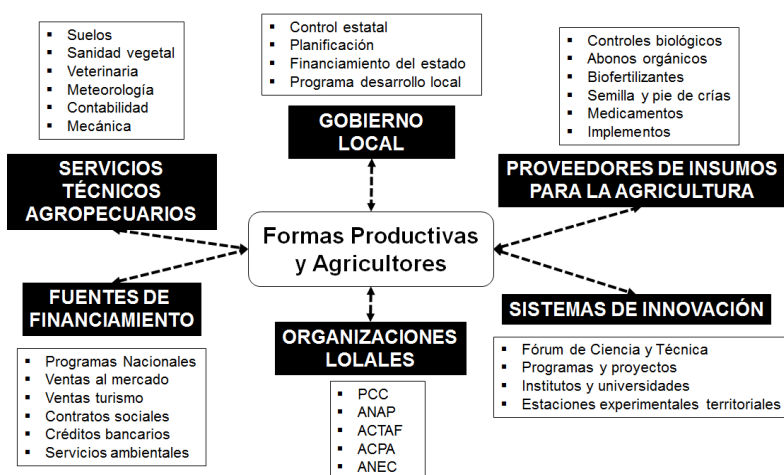
Las políticas que están relacionadas con los sectores de la economía y la institucionalidad, son elaboradas por especialistas de los ministerios, posteriormente se someten a consultas por entidades centrales y provinciales, para finalmente disponer de una versión final lista para su aprobación por el Estado. En el proceso de elaboración y consulta, son importantes las contribuciones de especialistas y otros actores de experiencia, así como de investigadores de centros científicos relacionados con las mismas.

El Ministerio de la Agricultura es el organismo de la administración central del Estado que tiene la misión de: “Proponer y una vez aprobada dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado y Gobierno sobre el uso, tenencia y explotación sostenible y sustentable de la superficie agrícola del país propiedad de todo el pueblo, colectiva e individual; la producción agropecuaria y forestal para la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población, la industria y la exportación” (MINAG, 2016).

Una expresión social de la adopción de la agroecología puede observarse en los territorios agrícolas del país, donde se han propiciado condiciones para una mayor articulación de actores relacionados con la producción agropecuaria, como resultado de la necesidad de lograr autosuficiencia local (Figura 3).

Resulta muy significativo que, en los municipios rurales del país, donde actúan organizaciones líderes en agroecología como ANAP, ACTAF y ACPA, existe una elevada colaboración y coherencia en actividades de capacitación e intercambio, articuladas con entidades del Consejo de la Administración Municipal, sedes universitarias, estaciones experimentales, así como formas productivas, entre otras, donde los especialistas y técnicos que las integran muestran una percepción cognitiva y afectiva sobre la agroecología, constituyendo una fortaleza como base para la transición hacia la agricultura sostenible.

Figura 24 - Articulación de agricultores con entidades locales en territorios de Cuba.



Los mayores avances se aprecian en el Programa de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, que ha consolidado un sistema de participación multinstitucional a escala de los municipios, con el propósito de contribuir a la autosuficiencia en la producción de alimentos. Este programa abarca todas las zonas urbanas (ciudades y pueblos) en los 157 municipios del país, donde también se ha avanzado hacia la zona suburbana, diez km de radio a su alrededor en las ciudades y cinco en los pueblos.

La enseñanza de la agroecología para la formación de técnicos y profesionales agrónomos, no es sistémica en la mayoría de los currículos académicos, sino que se limita a una cátedra o asignaturas prácticas, predominando en las asignaturas básicas el enfoque analítico, además de ser insuficiente la enseñanza del enfoque sistémico, la comunicación social y la innovación en la gestión agraria.

La investigación básica y fundamental orientada en las ciencias agropecuarias, mantiene con mayor protagonismo la producción convencional, reforzada por el enfoque del producto, la sustitución de insumos y los paradigmas de la biología molecular y la ingeniería genética.

A pesar de los impactos positivos y experiencias de los procesos de innovación participativa, generados y consolidados alrededor del movimiento del Fórum de Ciencia y Técnica del Consejo de Estado, el MACaC de la ANAP y el Programa de Innovación Agrícola Local (PIAL) del INCA, este tipo de innovación con participación de agricultores no es suficientemente reconocido por algunos círculos científicos, que se mantienen aferrados a la investigación formal y generalizan las nuevas tecnologías mediante el enfoque clásico de la transferencia de tecnologías.

Una incidencia internacional, que también se está promoviendo en Cuba, es el enfoque de Sostenibilidad Intensiva, que se argumenta científicamente bajo la Agricultura de Conservación, pero constituye un camuflaje para las tecnologías convencionales. Esta nueva propuesta, que crece en promotores, constituyen una portada de las transnacionales de tecnologías e insumos y se contraponen al enfoque de transición agroecológica hacia sistemas sostenibles para la soberanía tecnológica, alimentaria y energética. Si bien tiene impactos a corto plazo sobre la productividad, genera los mismos efectos negativos que la agricultura convencional.

Por último, debe mencionarse el apoyo en colaboración y apoyo internacional recibido en educación, investigación y divulgación agroecológicas por parte de diversas organizaciones, entre las cuales citaremos a la FAO, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM), Movimiento Agroecológico Latinoamericano (MAELA), Consorcio Latinoamericano para el Desarrollo (CLADES), FOOD FIRST, AIAB, Pan para el Mundo (PPM), OXFAM, HIVOS, CERAI, CEDECO y otras (Funes, 2001).

La ANAP, como organización que representa los intereses sociales y económicos del campesinado cubano, fundada 1961, cuenta hoy con más de 380 000 socios en de 3 300 asociaciones de base, quienes, junto con sus familiares, integran un importante sector poblacional con más de un millón de personas. El Movimiento Agroecológico Campesino a Campesino coordinado por esta organización, se ha ido consolidando en todo el país y hoy es un fuerte movimiento con más de 120 000 familias participantes, que cada día acrecienta sus logros tanto productivos, como económicos, ambientales y sociales (Roque, 2016).

En la segunda mitad de los años sesenta, la economía cubana alcanzó adecuados niveles de desarrollo, con ritmo de crecimiento medio anual del Producto Interno Bruto (PIB) por habitante superior al 2,5 %; los esfuerzos de todos estos años precedentes permitieron el establecimiento de capacidades industriales, el montaje de una infraestructura base, carreteras, aeropuertos, puertos y puentes, y la calificación de los recursos humanos, pilares en que se ha basado el desenvolvimiento económico del país (Nieto y Delgado, 2001).

Como resultado de la implementación del enfoque convencional en la producción agropecuaria por las granjas y empresas estatales, entre 1960 y 1990 la agricultura cubana empleaba tecnologías intensivas, especializadas y dependientes de altos insumos externos. Este modelo industrial permitió aumentar la productividad de la tierra y del trabajo; sin embargo, resultó ineficiente, en términos biológicos y económicos, y nocivo al medioambiente. La propia dependencia externa, la artificialización de los procesos productivos, a través de tecnologías costosas basadas en subsidios, así como la débil conexión entre los factores biofísicos, organizativos y socioeconómicos, le confirieron al modelo una alta vulnerabilidad (Funes-Monzote, 2009).

Durante la década de los ochenta, la intensidad del uso de fertilizantes alcanzó niveles comparables con los de países europeos; a comienzos de los años setenta la densidad de tractores llegó a ser aproximadamente de uno por cada 50 hectáreas, similar a la de los países más desarrollados; en 1960 la situación en Cuba ya resultaba favorable en comparación con la región de Centroamérica y el Caribe, y la ayuda de los países socialistas permitió triplicar en una década la densidad de tractores. La intensidad de la fuerza de trabajo descendió a casi la mitad entre 1960 y 1975, para llegar, a finales de los ochenta, a valores solo ligeramente inferiores a los europeos, es decir, alrededor de cinco hectáreas por trabajador. Asimismo, la proporción de tierras irrigadas para la agricultura se duplicó entre 1960 y 1985, siendo más del doble que en los Estados Unidos, América Central, el Caribe y Europa (Funes-Monzote, 2009).

Según Rosset (1997), posterior al año 1959 y antes del Período Especial o de crisis económica, los incrementos registrados en la producción nacional de alimentos son meritorios; no obstante, a finales de los años 80 se observa un decrecimiento de los rendimientos y de otros indicadores de eficiencia en un grupo importante de producciones agropecuarias, sustentadas en un modelo de desarrollo intensivo, basados en altos insumos y con una elevada dependencia externa (principalmente maquinaria, combustibles y productos agroquímicos) para sostener sus producciones; esta cuestión también ocurrió en otros países que aplicaron el mismo modelo productivo.

Incluso, el empleo de tecnologías costosas y de altos insumos no alcanzó las expectativas y tuvo impactos ambientales negativos reportados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en 1997. Entre los fundamentales se mencionan: reducción de la biodiversidad, contaminación de las aguas subterráneas, erosión de los suelos y deforestación. La aplicación de este modelo agrícola también derivó en serias consecuencias socioeconómicas, como la migración a gran escala de la población rural hacia las ciudades, que ocasionó la pérdida de muchos agricultores experimentados y, con ellos, sus conocimientos y tradiciones. A pesar de la alta calidad de la infraestructura instalada y de los crecientes niveles de capital, fertilizantes y concentrados disponibles, desde mediados de los años ochenta la productividad de la tierra había comenzado a declinar (Nova, 2006), fenómeno que fue objeto de discusión durante la formulación de un Programa Alimentario Nacional (Monzote *et al.*, 2001).



La degradación de los suelos, que se había iniciado como consecuencia del monocultivo desde los años cincuenta y se incrementó con el modelo de agricultura convencional en las grandes empresas especializadas desde los sesenta hasta principios de los noventa, según Instituto de Suelos (1989) se expresa en que el 65% del total de los suelos de Cuba presentan afectaciones por diferentes procesos degradativos y alrededor de un 76,8% posee factores limitantes para producir alimentos y más del 40% presentan afectaciones por erosión, entre otros.

Como consecuencia del Periodo Especial de la economía del país, a principios de los noventa se realizaron cambios organizacionales, como una nueva estructura de la propiedad agraria, fue realmente el de mayor trascendencia. En breve lapso de tiempo se añadieron a los relativamente escasos conglomerados de cooperativistas y privados existentes, una masa de nuevos cooperativistas y campesinos, hacia donde se trasladó el 42.3% de las tierras agrícolas del Estado. En suma, el 67.3% de la superficie agrícola está en manos de productores no estatales, lo que representa el 40.7% de la superficie total del país. Lo que fueron grandes extensiones de tierra de cientos de granjas o empresas estatales, se agrupan en casi 3 000 Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), con la entrega en usufructo gratuito de la tierra, haciendo posible el crecimiento de la actividad agropecuaria (Nieto y Delgado, 2001).

Las formas cooperativas existentes hasta entonces, las CPA y CCS, se encontraban mejor preparadas que la empresa estatal para trabajar y funcionar bajo condiciones tensas de limitaciones de recursos, pues en el año 1992, el 85 % de las CPA eran rentables, debido a que su escala productiva era menor; también porque se ejercía el derecho de propiedad respecto a sus decisiones y resultados; además, las CPA hacían un uso eficiente de los limitados recursos materiales y fuerza de trabajo, así como un mejor aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. Sin embargo, en 2009 las CCS y los campesinos privados presentan como promedio mejores resultados productivos y económicos que las CPA, pues lograron producir el 56 % de leche (las empresas estatales producían el 15 %), disponían de más del 55 % de las vacas en ordeño y de más del 50 % del ganado vacuno existente, y poseían, estimándose que sus resultados productivos, por lo general, son los más eficientes (Nova, tema 12). Las de mayor eficiencia son las CCS y fincas privadas, que en los últimos años han producido 57 % del total de alimentos agropecuarios del país, con solo 24,4 % de la tierra cultivable, en tanto registran solo el 3,7 y 1,7 % respectivamente de la tierra ociosa (Nova 2016).

Es decir, con el proceso de nacionalización de las tierras iniciado en 1959, la mayoría de estas pasaron a ser administradas por el Estado hasta finales de los ochenta, mediante el modelo de agricultura convencional; en cambio, desde el inicio de los noventa este proceso se revirtió, incrementándose las tierras en transición hacia la sostenibilidad, administradas por diferentes tipos de cooperativas y propietarios, entre otros.

Por ello, entre otros programas, el de conservación y mejoramiento de suelos, según Aguilar *et al* (2016) se han beneficiado en el período 2001-2013 más de 600 000 ha, destacándose el trabajo realizado en las cuencas priorizadas del país y la producción de humus de lombriz y compost asciende anualmente a 6 y 15 millones de toneladas respectivamente, con el empleo de los más disímiles sustratos para su producción y diferentes alternativas de sombra (Martínez y García, 2016), ascendiendo a 100 mil toneladas las que se emplean en la agricultura urbana.

El programa de agricultura urbana cuenta con 28 subprogramas dirigidos a asegurar la diversificación y la sostenibilidad (ejemplo: abono orgánico, semillas, hortalizas y condimento frescos, frutales, arroz, etc.). Esta producción se realiza sobre la base de prácticas orgánicas, con un uso racional de recursos locales. Algunos de sus principales resultados son: la utilización de áreas ociosas, la formación de fuentes de empleo permanente para más de 350 mil personas y el crecimiento acelerado de la producción de hortalizas, de 480 mil toneladas en 1994 a más de 4.2 millones de toneladas en 2006 (Lineamientos para los Subprogramas de la Agricultura Urbana 2008-2010), avanzándose de manera sostenida hasta la cifra de 1 352 000 t en 2010 sólo en organopónicos, huertos intensivos y cultivos semiprotegidos, sin incluir otras producciones como microhuertos, parcelas, patios y otros cuyas producciones tributan a las familias, centros de trabajo y población cercana, resultados que además han

generado más de 300 000 nuevos empleos, de ellos un 22 % de mujeres, 27 % de jóvenes menores de 35 años y 11 % de jubilados (Companiononi *et al.* 2016).

En la actualidad este Programa ocupa 12 588,91 km<sup>2</sup> del territorio nacional que significa el 14% del área agrícola del país. Comprende la totalidad del territorio de la provincia de La Habana, unos 10 km a la redonda de las restantes capitales, provinciales y de la ciudad de Manzanillo; unos 5 km alrededor de las cabeceras municipales; entre 1-2 km en torno a poblados de más de 1000 habitantes que no son cabeceras municipales.

### Desafíos para la agricultura del futuro

---

La continuidad hacia la agricultura del futuro en Cuba, debe partir de las lecciones aprendidas durante más de cincuenta años de experiencias a escala nacional, de la base disponible en la mayoría de las políticas públicas y de las capacidades humanas e institucionales creadas.

El enfoque de obtener grandes volúmenes de producción de varios rubros en una o dos épocas del año, independientemente de los costos económicos, energéticos y ambientales, que ha sido característico de la agricultura convencional en las grandes empresas especializadas, significa una solución parcial e insostenible, que además de degradar recursos naturales, aumenta la vulnerabilidad ante el cambio climático y limita la transición hacia la soberanía tecnológica. Precisamente, un gran desafío para las políticas públicas en agricultura está relacionado con la necesidad de lograr eficiencia productiva, económica, energética, ecológica y social del proceso de producción, transformación y comercialización de alimentos, indicadores que no han sido suficientemente considerados en la valoración de la producción agropecuaria.

Cuando se produjo el denominado Periodo Especial, que se cortó rápidamente el suministro de equipos, maquinarias y agroquímicos desde los antiguos países socialistas de Europa del Este, se propiciaron poderosos procesos de innovación participativa descentralizada, en el que se involucraron agricultores, técnicos e investigadores, entre otros actores, para recuperar prácticas tradicionales, generar e introducir nuevas tecnologías de productos, equipos y procesos, de manera que se garantizara la producción de alimentos. Esta valiosa experiencia, que ha sido impulsada por el movimiento del Fórum de Ciencia y Técnica, es valorizada en todo el país; pero, para lograr la agricultura del futuro debe ser institucionalizada, de manera que se convierta en un sistema coherente y articulado, cuyos impactos estimados en la soberanía tecnológica, energética y alimentaria son incalculables, si se comparan con las limitaciones del verticalismo tecnológico que muestra síntomas de recuperación.

En los últimos años se están consolidando las nuevas políticas de descentralización de las funciones del Estado y el fortalecimiento de las estructuras locales alrededor de los Consejos de la Administración Provincial (CAP) y Municipal (CAM), con un enfoque de Desarrollo Local, en lo cual se integra la producción agropecuaria, principalmente a través del Programa de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, todo lo cual se considera un proceso que permitirá transitar hacia la seguridad y soberanía alimentaria.

Bajo esta perspectiva, existe un gran desafío respecto a la necesidad de una articulación eficaz de la diversidad de entidades de servicios técnicos (suelos, sanidad vegetal, veterinaria, recursos hidráulicos, meteorología, proveedores de insumos, sedes universitarias, estaciones experimentales, entre otras) que existen en los municipios, independientemente de los organismos centrales a que pertenecen, de manera que la contribución a la producción agropecuaria sostenible y resiliente al cambio climático sea coherente, cooperada y eficiente en el orden del aprovechamiento de los recursos naturales, físicos y humanos.

Evidentemente todos los territorios agrícolas no son iguales desde el punto de vista biofísico y socioeconómico, también son muy diferentes las formas productivas y dentro de estas las fincas que integran, porque en esto también influyen factores humanos, principalmente la percepción de directivos, técnicos y agricultores. Sin embargo, la planificación económica, productiva y tecnológica generalmente considera otros criterios, principalmente tipos de rubros productivos, destino de las producciones, tipos de formas productivas, extensión

de las áreas, entre otros. Una mirada a este asunto en el país, evidencia contrastes en recursos físicos para la producción agropecuaria, al estar más favorecidas las formas productivas que mantienen el enfoque de agricultura convencional, en contraste con las han transitado hacia la producción sostenible, todo lo cual constituye un gran reto para las políticas agrícolas, por la necesidad de considerar nuevos criterios, principalmente con base de sostenibilidad.

Transitar hacia una agricultura con enfoque de sostenibilidad, requiere de la gestión inclusiva, que se nutra de investigaciones, experiencias y validaciones contextuales, para disponer de programas y proyectos robustos, que cuando sean generalizados garanticen su eficiencia y perdurabilidad. En enfoque de cadenas o redes de valores se considera lo más apropiado para países como Cuba; en cambio, el de cadenas productivas que esta predominando, es aceptado para países y regiones con otras condiciones socioeconómicas.

Atención especial es para el tema del agua, en un país insular como Cuba, con limitadas reservas de este recurso natural y ubicada en el Caribe, una subregión expuesta a sequía, donde la población en general y el sector agropecuario en particular, tienen una percepción limitada del problema, al considerar como solución un enfoque de enfrentamiento, basado principalmente en garantizar el suministro de agua, establecer medidas de ahorro y buscar variedades y razas tolerantes, entre otras medidas relacionadas con el enfoque convencional del factor limitante.

Diversos estudios agronómicos, económicos y sociales realizados en el país, han demostrado que existen grandes oportunidades para el desarrollo a mayor escala de sistemas agrícolas sostenibles que combinan la factibilidad técnica, la viabilidad económica, la sustentabilidad ecológica y la aceptación social (Funes *et al.*, 2001; Wright, 2006); también es cierto que se necesitan estrategias políticas más concretas con el fin de incentivar aquellas formas de producción que combinen estos elementos y así contribuir de manera sustancial al sector agrario cubano (Funes-Monzote, 2009).

El acervo de iniciativas y experiencias dentro de las comunidades agrícolas, constituyen faros exitosos que exhiben una infinidad de innovaciones tecnológicas, diseños de fincas diversificadas e integradas y formas de organización, que constituyen la base de una estrategia de soberanía alimentaria, energética y tecnológica, y lo que es aún más importante, verdaderos modelos de agricultura resiliente al cambio climático (Altieri, 2016).

El nuevo modelo agrícola productivo a desencadenar, sustentado en la UBPC, CPA, CCS, la empresa estatal y el sector privado, es decir un modelo diversificado en cuanto a sus formas de propiedad y tenencia de la tierra, requiere para su consolidación de un modelo totalmente nuevo de gestión económica, para lograr la realización de la propiedad y con ello destrabar las fuerzas productivas, donde el territorio constituye el escenario fundamental (Nova, 2016).

La reciente entrega de tierras ociosas (cerca de un millón ochocientos mil hectáreas en el 2015), a la vez conduce a un nuevo modelo agrícola que consolida el predominio de los productores no estatales, particularmente las CCS y los productores privados, pasando de un 18,5 al 51,0 % de tenencia de la tierra. Si estos suelen ser los mejores productores (de acuerdo a los resultados), y los que están más cercanos a las prácticas agroecológicas, de hacerse realidad las medidas a lo largo del ciclo producción-distribución-cambio-consumo, es de esperar incrementos importantes en la producción de alimentos en el país (Nova, 2016).

Aún resulta insuficiente la cantidad, calidad y variedad de alimentos producidos para satisfacer la demanda nacional de un país como Cuba, que tiene el imperativo de reducir las importaciones. Se hace necesario además producir estos alimentos con alta eficiencia y mínima utilización de insumos externos. A estos problemas se suman las dificultades con las cadenas productivas y los mecanismos de comercialización. Una parte considerable de los alimentos que se producen se desperdicia debido a los aún deficientes mecanismos de transportación, conservación, procesamiento y almacenamiento (Funes-Monzote, 2009).

Cuba no está exenta de la influencia y efectos de la política neoliberal, a pesar del control interno por parte del Estado, ya que el mercado mundial de productos agropecuarios se ha visto afectado en varias ocasiones por la oscilación de los precios, a lo cual se unen las subvenciones que reciben los agricultores de los países centrales por sus productos, situación que hace poco competitivos a las producciones obtenidas en las regiones de bajo desarrollo y periféricas (Gamboa et al, 2013), para lo cual Cuba debe erradicar la dependencia alimentaria, donde se expone en el lineamiento 177 de la política agroindustrial de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, la necesidad de revertir la situación actual del país como importador neto de alimentos (PCC, 2012).

Las diferentes medidas llevadas a cabo a partir de 2008, bajo la presidencia de Raúl Castro, parecen mantener en gran medida la línea de la sustitución de alimentos importados basándose en la agricultura familiar sostenible; con unas estructuras agrarias y de mercado cada vez más flexibles y descentralizadas. Así lo muestran, en teoría, el conocido Decreto Ley 259 de entregas de tierras en usufructo de 2008 y su versión más reciente el Decreto Ley 300 de 2012. Sin embargo, ¿requerirá Cuba un nuevo shock externo para promover una conversión completa hacia la agricultura sostenible? Con la entrada directa de divisas y petróleo, ¿se abandonará el modelo de "desarrollo mirando hacia dentro"? La cuestión estriba en la complementariedad entre producción nacional de alimentos y la potencialidad que presenta la isla en las exportaciones tanto de productos tradicionales como no tradicionales. En el nuevo contexto global y nacional, ¿podría Cuba conjugar ambos tipos de agricultura? La evolución del sector agropecuario cubano es, en este sentido, un laboratorio al que debemos mirar atentamente en los próximos años (Botella, 2015).

Un gran desafío para alcanzar la producción sostenible de alimentos en Cuba es lograr una revolución en las ciencias agropecuarias, pues se ha demostrado que la existencia de 15 o más centros de investigación en el propio Ministerio de la Agricultura es insostenible, ya que además de encarecer la ciencia, reduce las posibilidades de sinergias en la utilización de equipos costosos y el ahorro de energías, para citar dos ejemplos; además de mantener el verticalismo tecnológico, que es contradictorio con la producción sostenible, ya que las tecnologías generadas por estos centros se transfieren o "disparan" hacia los agricultores, con un mínimo de posibilidades de interacción con los restantes institutos, para reducir las incompatibilidades tecnológicas desde que se generan las tecnologías.

Estudiosos de estos temas consideran como un gran logro de la agricultura cubana disponer de tal diversidad y cantidad de centros de investigación, incluso algunos expresan que esto es superior a otros países, donde las investigaciones agropecuarias están en una sola institución; sin embargo, los avances de las ciencias agropecuarias en el Mundo, sugieren la integración de disciplinas como estrategia más poderosa para los desafíos que significan la globalización neoliberal, el cambio climático y la transición hacia la soberanía alimentaria con sostenibilidad y resiliencia.

Muchos son los desafíos para continuar la reconversión hacia la producción agropecuaria sostenible, conquistada con la Primera Ley de Reforma Agraria en 1959 e interrumpida por la agricultura convencional tipo "revolución verde" implementada hasta finales de los ochenta; pero, grandes son las capacidades humanas creadas en el país por el Gobierno Revolucionario y las experiencias del Periodo Especial, que sin dudas constituyen una base sólida para que la agricultura del futuro en Cuba sea soberana, resiliente y sostenible, como respuesta nacional ante la globalización neoliberal, que conlleva al hambre, la desnutrición, los precios injustos y la colonización tecnológica.

- Aguilar, Yulaidis; N. Castellanos y M. Riverol. Manejo ecológico del suelo. En: Funes, F. y L. L. Vázquez. Avances de la Agroecología en Cuba. Ed. Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey. Matanzas, Cuba. pp.91-105.2016.
- Altieri, M. A. Patrimonio ecológico de la humanidad. En: Funes, F. y L. L. Vázquez. Avances de la Agroecología en Cuba. Ed. Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey. Matanzas, Cuba. Pp.11-12. 2016.
- Botella, Elisa. La agricultura cubana en el contexto global: un experimento de “desarrollo mirando hacia dentro”. 14 diciembre, 2015. <http://www.condistintosacentos.com/la-agricultura-cubana-en-el-contexto-global-un-experimento-de-desarrollo-mirando-hacia-dentro>. Bajado: 1 de agosto de 2016.
- Castro, F. La historia me absolverá. Ediciones Políticas. Instituto del Libro. La Habana. 73 p 1967.
- Companioni, N.; A. Rodríguez Nodals; Miriam Carrión; Rosa María Alonso; Yanet Ojeda y Elizabeth Peña. 1997. La Agricultura Urbana en Cuba. Su participación en la seguridad ali-mentaria. Conferencias. III Encuentro Nacional de Agricultura Orgánica. UCLV, Villa Clara: 9:13.
- Companioni, N.; A. Rodríguez-Nodals y Justa Sardiñas. Agricultura urbana, suburbana y familiar. En: Funes, F. y L. L. Vázquez. Avances de la Agroecología en Cuba. Ed. Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey. Matanzas, Cuba. Pp.233-246. 2016.
- Funes, F. 1997. Experiencias Cubanas en Agroecología. Revista Agricultura Orgánica. 3: 2-3: 10-14.
- Funes, F. El movimiento cubano de agricultura orgánica. En: Funes, F., L. García, M. Bourque, N. Pérez, y P. Rosset. (Eds.). 2001. Transformando el Campo Cubano. Avances de la Agricultura Sostenible. Actaf-Food First-Ceas. La Habana. Pp. 15-38. 2001.
- Funes, F. y L. L. Vázquez. Avances de la Agroecología en Cuba. Ed. Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey. Matanzas, Cuba. 605p. 2016.
- Funes, F., L. García, M. Bourque, N. Pérez, y P. Rosset. (Eds.). 2001. Transformando el Campo Cubano. Avances de la Agricultura Sostenible. Actaf-Food First-Ceas. La Habana: 286 p.
- Funes-Monzote, F. R. Agricultura con futuro. La alternativa agroecológica para Cuba. Est. Exp. Pastos y Forrajes Indio Hatuey. Matanzas. 156p. 2009.
- Gamboa, A.; R. González y Angelina Herrera. Soberanía y seguridad alimentaria en Cuba: políticas públicas necesarias para reducir la dependencia alimentaria. Revista Agrisost 19 (3): 1-14. 2013.
- Gavilanes, P.; Michely Vega, J. Pérez; J. Gómez. Manual de diseño e implementación del sistema participativo de garantía en Cuba (SPG). 58p. Proyecto de apoyo a una agricultura sostenible en Cuba (PAAS). Coordinado por ACTAF y cofinanciado por COSUDE e HIVOS. 2015.
- Instituto de Suelos. 1989. Mapa Nacional de Suelos de Cuba a escala 1: 25 000. Documentos y hojas cartográficas. Instituto de Suelos, La Habana.
- Le Riverend, J. Breve historia de Cuba. Ed. Ciencias sociales. La Habana. 140 pp. 1999.
- Machín B., A. M. Roque: D.R. Ávila y P.M. Rosset. 2010. Revolución Agroecológica: El Movimiento de Campesino a Campesino de la Anap en Cuba. Anap. Vía campesina. CECCAM.166 p.
- Martínez, F. y Clara García. Abonos orgánicos. En: Funes, F. y L. L. Vázquez. Avances de la Agroecología en Cuba. Ed. Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey. Matanzas, Cuba. Pp.109-122. 2016.
- Monzote, Marta; E. Muñoz y F. R. Funes-Monzote. Integración ganadería-agricultura. En: Funes, F., L. García, M. Bourque, N. Pérez, y P. Rosset. (Eds.). 2001. Transformando el Campo Cubano. Avances de la Agricultura Sostenible. Actaf-Food First-Ceas. La Habana. pp. 235-256.
- Nieto, M. y R. Delgado. El sector agrario y la seguridad alimentaria. En: Funes, F., L. García, M. Bourque, N. Pérez, y P. Rosset. (Eds.). 2001. Transformando el Campo Cubano. Avances de la Agricultura Sostenible. Actaf-Food First-Ceas. La Habana. Pp.39-56.
- Nova, A. (sf). Las cooperativas agropecuarias en Cuba: 1959-presente. En: Parte 4. Las cooperativas y la construcción socialista en Cuba.
- Nova, A. 2006. La agricultura en Cuba: evolución y trayectoria (1959-2005). Ed. de Ciencias Sociales, La Habana. 36p.

- Nova, A. Economía de la transición Agroecológica. En: Funes, F. y L. L. Vázquez. Avances de la Agroecología en Cuba. Ed. Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey. Matanzas, Cuba. Pp. 47-55. 2016.
- Nova, A. La agricultura cubana previo a 1959 hasta 1990. En: Funes, F., L. García, M. Bourque, N. Pérez, y P. Rosset. (Eds.). 2001. Transformando el Campo Cubano. Avances de la Agricultura Sostenible. Actaf-Food First-Ceas. La Habana. Pp. 1-14. 2001.
- Partido Comunista de Cuba (PCC). Lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. VI Congreso del PCC. La Habana. 38p. 2012.
- Roque, Adilén. Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap). En: Funes, F. y L. L. Vázquez. Avances de la Agroecología en Cuba. Ed. Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey. Matanzas, Cuba. P56. 2016.
- Rosset, P. M. y M. A. Altieri. 1994. Agricultura en Cuba: Una Experiencia Nacional en Conversión Orgánica. Agroecología y Desarrollo (Chile), Número Especial 7 agosto 1994
- Rosset, P. M. y M. Bourque. Lecciones de la experiencia cubana. En: Funes, F., L. García, M. Bourque, N. Pérez, y P. Rosset. (Eds.). 2001. Transformando el Campo Cubano. Avances de la Agricultura Sostenible. Actaf-Food First-Ceas. La Habana. Pp. xiii-xx. 2001.
- Rosset, P. M.. 1998. Alternative Agriculture Works: The Case of Cuba. Monthly Review . 50 : 3.
- Rosset, P.M. 1997. Alternative Agriculture and Crisis in Cuba. Technology and Society 16:2:19-25.
- Socorro, M., L. Alemán y S. Sánchez. El cultivo popular del arroz en Cuba. En: Funes, F., L. García, M. Bourque, N. Pérez, y P. Rosset. (Eds.). 2001. Transformando el Campo Cubano. Avances de la Agricultura Sostenible. Actaf-Food First-Ceas. La Habana. Pp. 111-118. 2001. Ministerio de la Agricultura (MINAG). Misión, estructura y funciones. [http://www.ecured.cu/Ministerio\\_de\\_la\\_Agricultura\\_\(Cuba\)](http://www.ecured.cu/Ministerio_de_la_Agricultura_(Cuba)). Descargado 2016.
- Toledo, V. M. La agroecología en Latinoamérica: tres revoluciones, una misma transformación. Agroecología 6: 37-46, 2012
- Wright, Julia. Cuba's enforced ecological learning Experience. Revista Leisa. Pp.6-9. June 2006.

## Capítulo 7. Políticas a favor de la producción orgánica y agroecología en El Salvador

*Wilfredo Moran*

### Introducción

Con 21,000 kms<sup>2</sup>, El Salvador es un país pequeño en cuanto a extensión territorial, con una alta densidad poblacional (294 hab./km<sup>2</sup>). Es el tercer país más habitado de Centroamérica, con una población total superior a los 6 millones, de la que el 37,5% vive en zonas rurales. El 65% de la superficie del país está en zonas de laderas, con una pendiente mayor al 15%. El 36,5% de la población de El Salvador se encuentra en los umbrales de la pobreza, con un 33% considerado como pobreza extrema y un 67% como pobreza relativa. El 43,2% de la pobreza total se halla localizada en zonas rurales. (FAO, 2012)

En este contexto, el cuarto censo agropecuario del país (2007-2008) registra a 395,588 productores y productoras, de los cuales un 18% son comerciales y grandes. Mientras que 325,044 explotaciones (82%) figuran como pequeños productores y productoras, cuya superficie de cultivo es menor a tres hectáreas. Al mismo tiempo, la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2010 afirma que el 87% del total de las explotaciones tiene un tamaño inferior a dos manzanas (equivalente a 1.4 hectáreas). El 9% de los productores poseen el 72% de la superficie, mientras que el 91% restante tiene el 28% de la superficie cultivable.

La gran mayoría de productores y productoras pertenece a la agricultura de subsistencia. Estas ocupan el 29% de la superficie total cultivable o dedicada a la producción agrícola y contribuyen con aproximadamente el 70% de la producción nacional de granos básicos (CENTA, 2011).

La Agricultura Familiar en El Salvador tiene un importante y excepcional papel en relación a los medios de vida de las familias campesinas, por su capacidad para garantizar la Seguridad Alimentaria y Nutricional, la generación de ingresos, la conservación del medio ambiente y el equilibrio demográfico. La Agricultura Familiar es la base sobre la cual descansa el equilibrio entre naturaleza, sociedad, economía, estabilidad política y sostenibilidad social. (FAO, 2012)

El sector de la Agricultura Familiar se caracteriza también por un acceso limitado a los recursos, que determinan su escasa productividad, y el acceso a otros servicios básicos, como la salud. En estas familias se observan también múltiples estrategias para la generación de ingresos, que no siempre se ajustan a actividades agropecuarias. Se trata, en definitiva, de unidades de producción con limitado acceso al mercado y, a menudo, relacionadas con la pobreza.

Desde el punto de vista climático, y según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en El Salvador, se ha pasado de tener un evento extremo por década, en los años 60 y 70, a ocho, en los años 2000 lo que ha tenido un impacto enorme en la agricultura. Los eventos extremos de precipitaciones han aumentado y con éstos los riesgos de sequías, erosión, inundaciones y derrumbes. Las medidas de adaptación al cambio climático en el país son ineludibles por ser un país con alto grado de vulnerabilidad. En este contexto las organizaciones sociales han visibilizado la agroecología como una opción viable para hacer frente a la degradación, al cambio climático y a la marginación que por muchos años estuvo sometida la Agricultura Familiar, lo que ha llevado a este sector a emprender una serie de acciones y elaborar propuestas destinadas a institucionalizar la vigencia del nuevo paradigma.

En El Salvador, la agroecología “ya” tiene su expresión en numerosas iniciativas que requieren de acciones de políticas públicas que faciliten su escalamiento en el ámbito territorial y nacional; una política que responda a los intereses de los sectores campesinos, de los habitantes del área rural y de la sociedad en general. Para contribuir al desarrollo de la agroecología y hacer frente a estos desafíos el Grupo de Diálogo Rural ha formulado una propuesta lineamientos de “Política para Fomentar la Agroecología en El Salvador”. En este mismo marco de

trabajo se ha concluido un Mapeo de Experiencias de Agroecología en El Salvador que da cuenta de las potencialidades y limitaciones de estas experiencias agroecológicas en el país, y que han servido de referentes en la elaboración de la propuesta de los lineamientos de política. En el proceso de formulación participaron directamente en entrevistas, talleres de consulta y grupos focales, organizaciones de productores y productoras, cooperativas, organizaciones de mujeres, jóvenes y representantes de comunidades indígenas; delegados de universidades, organismos no gubernamentales y centros de pensamiento; instituciones de gobierno central como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial y el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria.

La apuesta nacional de Mitigación basada en Adaptación implica la transformación a gran escala del paisaje rural, así como la restauración y conservación inclusiva de los ecosistemas, por lo que el alcance y los esfuerzos sociales y políticos son mucho más amplios que el enfoque anterior, pero también se amplían los cobeneficios (conservación de la biodiversidad, aumento de la agrodiversidad, control de la erosión, formación del suelo, retención de humedad del suelo y regulación hídrica, entre otros) lo que incide directamente en el fortalecimiento de la capacidad productiva, la seguridad alimentaria y en general, en los medios de vida. (PRISMA, 2014)

La modernización de la agricultura en el marco del modelo de la revolución verde en El Salvador, lejos de resolver los problemas del área rural, ha generado una crisis expresada en el creciente deterioro de los recursos naturales y vulnerabilidad frente al cambio climático, pobreza rural, migración, inviabilidad social y económica de los medios de vida de la agricultura familiar campesina, y la pérdida de soberanía alimentaria. El panorama antes mencionado, amerita una respuesta diferente, que permita iniciar un proceso de transición de la agricultura convencional a la agroecología.

### Contexto general

---

Durante los últimos años, Centroamérica pasó a ser una de las regiones más vulnerables a la variabilidad y cambio climático, tanto por su ubicación geográfica, como por los severos niveles de degradación de los recursos naturales, particularmente suelos y bosques. Las sequías e inundaciones provocadas por precipitaciones excesivas ocurren con mayor frecuencia e intensidad, generando impactos considerables en la producción agropecuaria en general, y en la seguridad alimentaria en particular, especialmente en el denominado Corredor Seco Centroamericano. Estos problemas se vuelven críticos en la vertiente del Pacífico, donde se concentran los principales núcleos de población y los centros económicos más relevantes de la región.

Este contexto plantea fuertes y complejos desafíos, frente a los cuales se requieren abordajes y marcos estratégicos capaces de integrar los desafíos del cambio climático, con marcos de gestión del desarrollo a escalas significativas, que de manera simultánea apoyen la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria, la generación de ingresos y el fortalecimiento de medios de vida locales, el manejo del agua, la conservación de suelos y la restauración de áreas degradadas, entre otros. Asimismo, dichos abordajes cada vez más, deben responder a la complejidad de las dinámicas socio-económicas y estructuras institucionales que inciden en las condiciones de uso y manejo de los recursos naturales, así como en su gobernanza a distintas escalas.

La economía salvadoreña se transformó durante las últimas décadas. Lejos de ser un proceso agotado, dicha transformación se amplía y profundiza a través del auge de sectores como la maquila, el turismo y los servicios logísticos. Esto está reconfigurando el rol de los territorios, dando paso a nuevas dinámicas con claras implicaciones para los medios de vida y los derechos de comunidades rurales pobres, en un contexto de alta vulnerabilidad a los impactos del cambio climático y de una institucionalidad pública nacional debilitada y fragmentada.



A pesar de la importancia de la agricultura para la economía nacional<sup>88</sup>, en la década de los noventa, el sector agropecuario fue prácticamente desmantelado, producto principalmente de las reformas neoliberales, que marcaron un punto de inflexión en la política económica salvadoreña con un claro sesgo anti-agroexportador y de fomento al sector terciario.

Las políticas implementadas en El Salvador a partir de la década de los noventa, impactaron negativamente la agricultura, restándole capacidad de atender la demanda interna de bienes agrícolas y creando un alto grado de dependencia a las importaciones y una alarmante vulnerabilidad ante cambios en los patrones de precios y producción internacionales. Desde entonces, la inversión pública en el sector agrícola ha sido baja, en la última década se ha mantenido entre un margen de 1.5 y 2% del presupuesto general de la nación (UCA, 2012). Con el Plan de Agricultura Familiar (PAF)<sup>89</sup> implementado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a partir de 2011, se ha aumentado la inversión, pasando de \$48.6 en 2009 a \$73.7 millones en 2016.

### **Proceso de desarrollo de las políticas relativas a la agroecología y producción orgánica.**

Entre la diversidad de modalidades de agricultura alternativa a la agricultura convencional, están: agroecología, agricultura orgánica, agricultura sinérgica, permacultura, agricultura sintrópica, agricultura sostenible, agricultura ecológica, agricultura natural, agricultura de conservación y agroforestería sucesional, entre otras. En El Salvador las modalidades más difundidas son la agricultura orgánica y la agroecología. (PRISMA, 2016)

### **Arranque de producción orgánica y Política de Agricultura Orgánica**

Las primeras experiencias de producción orgánica en el país se iniciaron a finales de los años ochenta y principios de los noventa, como producto de la situación socioeconómica y en el marco del proceso de finalización de la guerra y posterior firma de los Acuerdos de Paz en 1992. Durante ese periodo la cooperación internacional fue determinante para la introducir/fomentar la agricultura orgánica, aportando recursos financieros y técnicos manejados a través de ONG's, cuyos beneficiarios principales eran pequeños productores caracterizados por vivir en pobreza, carentes de capital de trabajo, sin acceso al crédito, y por tanto con un modelo de producción de bajo a nulo uso de insumos. Estas organizaciones también apoyaron a pequeños y medianos productores con visión empresarial tratando de asociarlos para incursionar en mercados internacionales. De igual manera apoyaron aquellos productores que iniciaban proyectos "amigables" con la naturaleza como una alternativa económica viable. A continuación, los hitos y actores más relevantes en el desarrollo de la producción orgánica en El Salvador:

- Pequeños productores localizados en las zonas de guerra inician la ejecución de proyectos "amigables" con la naturaleza con el apoyo de ONG's.
- La firma de los acuerdos de Paz, la crisis de precios del café de 1992 y el abandono de los cafetales durante la guerra, propiciaron que las fincas estuvieran listas para el inicio de la agricultura orgánica con fines comerciales.
- En 1992, organizaciones como CLUSA dan un giro en su accionar incursionando en la producción orgánica, formalizando ese año una alianza con la Unión de Cooperativas de la Reforma Agraria Productoras, Beneficiadoras y Exportadoras UCRAPROBEX, lográndose la certificación de la primera finca de café, y se exporta el primer lote de café orgánico certificado. Luego se promovieron alianzas con productores y exportadores privados y cooperativas, en cultivos como ajonjolí, marañón, cacao y hortalizas.
- Con el mismo enfoque, SALVANATURA, con apoyo de GTZ, agrupa y apoya a productores en el manejo de sus cultivos, con certificación y exportación, a través de BIO FACH.

<sup>88</sup> Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el año 2014, el sector agropecuario salvadoreño representó el 11% del producto interno bruto (PIB) del país.

<sup>89</sup> El PAF beneficia con insumos agrícolas, asistencia técnica y créditos a más de 390 mil familias salvadoreñas.

- El proyecto de Café y Biodiversidad financiando por el Banco Mundial a través del GEF propició un enfoque que combinaba prácticas de Agricultura Orgánica con prácticas de agricultura convencional.
- En 1996 un representante del Movimiento de Agricultura Orgánica de El Salvador, ocupa la vicepresidencia de Organic Crop Improvement Association (OCIA).
- Este período propicia otras iniciativas interesantes y nacen tres empresas productoras de insumos orgánicos con fines comerciales: Agro Inagor, Industrias HUISIL y BIOTEC, las que recibieron reconocimiento internacional.
- El país ha tenido presencia de Organizaciones de Certificación de los Estados Unidos y de la Unión Europea por medio de: Organic Crop Improvement Association - OCIA; BCS Okö Garantie y Naturland de Alemania, y en los últimos años, Bio Latina. También se han otorgado algunos sellos de Comercio Justo de origen Europeo.
- La Dirección General de Agronegocios (DGA) del MAG fomenta el mercadeo de productos orgánicos y la Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal (DGSVA) desempeña un rol de contraloría de toda la cadena orgánica. En esta última se creó la Unidad de Acreditación.
- La Fundación CORDES tiene como prioridad en su programa agropecuario el desarrollo de la Agricultura Orgánica y de sus procesos de transformación, se aumenta la gama de productos incluyendo la caña, los productos lácteos e insumos microbiológicos.
- CLUSA, NOBS, REDES, FUNDESYRAM y una diversidad de ONG's han impulsado por años proyectos de producción y comercialización de cultivos orgánicos.
- Las Asociaciones de Desarrollo Económico Local (ADEL) organizaciones de raíces comunales, constituidas después de los acuerdos de paz han enfatizado la producción orgánica, principalmente al nivel de la seguridad alimentaria.
- En el año 2004, gracias a los esfuerzos de varias ONG's se oficializa el "Reglamento para la Producción, Procesamiento y Certificación de Productos Orgánicos". Asimismo, se crea un marco de apoyo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y se conforma la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica (CNAO), como un organismo de carácter asesor del Ministerio, en todo lo relacionado con la agricultura orgánica nacional. También se estableció la Unidad de Registro, Control y Acreditación de la Agricultura Orgánica. No obstante lo anterior, las instancias establecidas han operado con muy bajo perfil. Los acuerdos ministeriales relacionados con la Agricultura Orgánica están más dirigidos a regular las autoridades que estarán al frente de este subsector y deja de un lado aspectos relevantes para la aplicación de la norma. (Franco y Parada, J.E., 2006)
- En 2006 se aglutina el Movimiento de Agricultura Orgánica de El Salvador, (MAOES)<sup>90</sup>, el cual tiene como objetivo fomentar la agricultura orgánica como una estrategia de transformación y desarrollo integral de los productores agropecuarios salvadoreños.
- Se establece la Política de Agricultura Orgánica de El Salvador en el año 2008.

### Adaptación al cambio climático y propuesta de política de Agroecología

A partir de 2009 el cambio de gobierno da un giro hacia una serie de políticas públicas orientadas a solventar la crisis económica y la inseguridad alimentaria en los sectores vulnerables, priorizando las zonas rurales y la agricultura familiar sobre todo la de subsistencia, conduciendo a la elaboración del Programa de Agricultura Familiar.

Al mismo tiempo cobra relevancia la consideración de que la crítica degradación ambiental del país en el contexto del cambio climático es una seria limitante para cualquier política que pretenda mejorar las condiciones de vida rurales y promover el desarrollo productivo de largo plazo. Revertir la degradación ambiental y reducir la

---

<sup>90</sup>El MAOES es un espacio permanente de coordinación y consulta a nivel nacional, abierto al diálogo y la integración de nuevos miembros. Está organizado en estructuras locales de coordinación llamadas Comités Zonales, conformadas por organizaciones de productores y ONG's con presencia en una zona geográfica determinada.

vulnerabilidad frente al cambio climático, privilegiando la restauración de ecosistemas y la adaptación, se convierte en el objetivo central de las políticas ambientales.

En esa línea el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales actualizó la Política Nacional de Medio Ambiente (PNMA) en 2012, dentro de la cual cobra relevancia la problemática ambiental de los territorios rurales, el MARN evidencia que la agricultura y la ganadería representan el principal uso del suelo del país (tres cuartas de la superficie del territorio nacional). (MARN, 2012). Uno de los objetivos de la PNMA es “reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático”, mediante una “agricultura resiliente al clima y amigable con la biodiversidad”, se propone la “transformación gradual, pero radical” de las prácticas agrícolas, incluyendo “medidas de conservación de suelos y agua” para adaptarse mejor a condiciones extremas de lluvia y de sequía. La Política considera que esta transformación de la agricultura es necesaria para la “restauración y conservación inclusiva de ecosistemas”.

La Estrategia Nacional de Recursos Hídricos publicada en 2013, presenta un diagnóstico completo de la situación del agua en El Salvador. Entre otras cosas recomienda masificar el uso de sistemas agroforestales que retienen humedad en el suelo, enfatizando la necesidad de esta práctica en la producción de granos básicos. Recomienda masificar el uso sistemas agroforestales.

Estrategia Nacional de Biodiversidad 2013, esta estrategia le da prioridad "especial" a la biodiversidad del suelo por su importancia para la agricultura, destacando la importancia de la materia orgánica en el suelo para conservar la humedad. La estrategia enfatiza la importancia de la transformación de prácticas agropecuarias para protección del suelo. Asimismo, busca promover las buenas prácticas en la caficultura, los cultivos de caña, granos básicos y en la ganadería. La estrategia recomienda masificar los sistemas agroforestales, para resistir mejor los períodos de sequía y de lluvias extremas. Afirmando que es “urgente” hacerlo<sup>91</sup>.

El Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Paisajes (PREP). Es un programa que incluye como parte de sus tres líneas de acción el desarrollo de una agricultura resiliente al clima y amigable con la biodiversidad, para ello se plantea: la promoción masiva de la agricultura sostenible, la promoción de prácticas de agricultura alternativas en las zonas de influencia del programa, la agroforestería, agricultura orgánica y la agroecología como formas de producción. El PREP busca la transición hacia una agricultura más sostenible y resiliente ante el cambio o variabilidad climática y la transformación de paisajes y territorios completos.

Como puede evidenciarse de la secuencia anterior, ha habido un avance en el entendimiento de la necesidad de un cambio de paradigma respecto la agricultura; sin embargo, la institucionalidad pública de investigación y extensión agropecuaria no está en sintonía con la nueva visión agroecológica. (PRISMA, 2016) El Programa de Agricultura Familiar promueve el uso de fertilizantes y agroquímicos e, pero no consideró el rediseño de las fincas o parcelas como un eje fundamental del programa. Por otra parte, el CENTA, principal centro de investigación agrícola del país, carece de suficientes recursos humanos, equipo y materiales para la investigación que le permitan trabajar con las comunidades y promover la investigación participativa en el marco de un diálogo de saberes, careciendo además de una visión estratégica que responda a la agroecología. En años recientes el CENTA ha ejecutado proyectos de fomento del uso de abonos orgánicos y de cobertura vegetal, promoviendo la producción hortícola sin agroquímicos en algunos municipios del oriente del país, con el apoyo de la cooperación japonesa (JICA), y en los últimos años han sido capacitados técnicos en agroecología con el apoyo de la cooperación de México. Sin embargo, hace falta un proceso mucho más audaz en el campo de la agroecología. Es importante destacar que un buen número de extensionistas de la institución conocen y difunden prácticas de agricultura sostenible vinculadas al manejo de suelo, agua, y abonos orgánicos, de manera que existe potencial para iniciar un proceso de reconversión hacia la agroecología que irradie al quehacer de toda la institución, y logre articularse a las iniciativas territoriales que ya promueven la agroecología.

---

<sup>91</sup> MARN, 2013. Estrategia Nacional Biodiversidad.

Los espacios formales de educación técnica y universitaria con la excepción de la Universidad Luterana Salvadoreña, han tenido pocos avances en el desarrollo de profesionales especializados en agroecología.

Debido a que la actividad agrícola es uno de los rubros elementales de la economía nacional, es importante contar con instrumentos que permitan incentivar nuevas estrategias para lograr la sustentabilidad, una mayor resiliencia, y soberanía alimentaria. Para ello se necesita contar con una Ley de Fomento de la Agroecología, coherente con el marco jurídico nacional y los convenios internacionales vigentes.

Para contribuir a llenar el vacío de instrumentos favorables al nuevo paradigma agroecológico el Grupo de Diálogo Rural (GDR) y el Comité Nacional de Agricultura Familiar (CNAF) han formulado en forma participativa una propuesta de “Lineamientos de Política para Fomentar la Agroecología en El Salvador”, la que fue presentada a mediados de 2016, al Sr. Ministro de Agricultura y Ganadería, Lic. Orestes Ortez, quien manifestó que la propuesta era muy oportuna. La propuesta fue revisada por la Oficina de Planificación de la Política Sectorial (OPPS) del Ministerio de Agricultura y será discutida en el marco del Consejo Nacional Agropecuario.

### Conceptos utilizados en el país.

---

La diversidad de tipos de agricultura ecológica comparte ciertos objetivos comunes como: reducir o eliminar el uso de agroquímicos y reducir el deterioro de los ecosistemas. En el caso salvadoreño los conceptos prevalecientes hasta el momento han sido el de Agricultura Orgánica (AO), Agroecología y en menor grado la Permacultura.

Según el Reglamento para la producción, procesamiento y certificación de productos orgánicos de Octubre 2004, que es la normativa nacional por Decreto Ejecutivo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, actualmente en vigencia, agricultura orgánica es: “El método de producción agropecuaria que se basa en la salud, nutrición, conservación y mejoramiento de suelos; en el uso apropiado de la energía, el agua, la diversidad vegetal y animal y en la aplicación de técnicas e ingredientes que benefician al ambiente y contribuyen al desarrollo sostenible, prescindiendo del uso de insumos de síntesis química artificial. También se conoce como agricultura biológica ó ecológica”. El concepto manejado en El Salvador tiene como referencia las normas establecidas por IFOAM, y el Codex Alimentarius, las cuales rigen los principios y normas de certificación que hay en el mundo. (Franco y Parada, 2006).

En la política actual de Agricultura Orgánica “se considera a la agricultura orgánica como un rubro más, y no como un modelo de desarrollo de la agricultura en el sentido amplio de su finalidad, este aspecto, posiblemente es una de las barreras por la cual la política actual no tiene visibilidad, además no cuenta con una estrategia de desarrollo sostenible, desde el punto de vista de la economía campesina, la salud de la población, el rescate ancestral de la agricultura, la soberanía alimentaria y la protección del medio ambiente, que son elementos evidenciados por productoras y productores que trabajan la agroecología y la agricultura orgánica orientados a la sostenibilidad de la finca o la parcela.” (Marín, X. 2016)<sup>92</sup> También hace notar que la política de AO actual está a favor de un grupo pequeño de productores dedicado a la exportación.

Según el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) la agroecología se define como “la aplicación de un conjunto de métodos y técnicas para el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, en la producción de plantas y animales, además permite la conservación, productividad y rescate cultural de las poblaciones indígenas y campesinas. La agroecología cambia el enfoque, mira a la naturaleza como un todo, con sus ciclos dinámicos y característicos de cada lugar.” Hay una coincidencia en la mayoría de los actores de la sociedad civil que promueven la agroecología que su objetivo no es dominar, ni abusar de la naturaleza, que no se trata de buscar la máxima ganancia económica de forma rápida, a costa de la sobreexplotación, si no de la forma de

---

<sup>92</sup> Ingeniera Agrónoma y Maestra en Gestión Ambiental, Actualmente Coordinadora Nacional en El Salvador del Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de Incidencia en Políticas Públicas SAN de los pequeños productores de la Producción agroecológica y Orgánica 2014 a 2017, CLUSA El Salvador-UNAG, financiado por la Unión Europea.

producción que respeta la persona, la biodiversidad, el agua, el aire y los suelos, necesarios para el buen vivir. <http://www.cesta-foe.org.sv/areas-de-trabajo/agroecologia.html>

Aunque el término “agroecología” se usa con frecuencia, se mencionan sus ventajas y se alude a sus características, no se lo define. En general hay coincidencia en que la agroecología incorpora a la agricultura sustentable pero va más allá, integrando aspectos antropológicos, sociales, económicos (ej. ciclos cortos de comercialización), aspectos ecológicos como el manejo de la biodiversidad y aspectos políticos asociados principalmente a la resistencia/defensa de los territorios.

Según Adalberto Blanco<sup>93</sup> (FECORACEN) en el caso salvadoreño, no hay un concepto en uso, en la mayoría de los casos se aplica el término agroecología, sin mayores criterios, algunas organizaciones como Bálsamo y FECORACEN comparten con La Vía Campesina, los principios agroecológicos con sus respectivas prácticas. En coherencia con lo anterior Rosset y Martínez (2016) expresan que: “En La Vía Campesina, no queremos decir que un nombre es mejor que otro. Preferimos especificar los principios que defendemos.”

La difusión del concepto de Permacultura aunque está presente es de mucha menor difusión en cuanto a cobertura, sin embargo en términos conceptuales es de alta fidelidad al concepto original acuñado por Bill Mollison “la Permacultura es la ciencia del mejor posicionamiento relativo de los componentes en un plan o un modelo para incrementar los recursos, conservar o crear energía y reducir o eliminar la contaminación y los residuos. Es un estudio interdisciplinario que se basa en la riqueza de información, que atraviesa todas las fronteras y está siempre abierta hacia las tecnologías y las informaciones que le asistan en el proceso de conseguir sus objetivos. La Permacultura acoge bajo su paraguas tanto la sabiduría antigua como las modernas tecnologías.” (Mollison, B, 1979)

En relación con los tres conceptos anteriores y su promoción en El Salvador, los actores prominentes han sido organizaciones de la sociedad civil, las instancias gubernamentales han mantenido escaso protagonismo.

### **Contenido de la Propuesta de Política de Fomento de la Agroecología.**

Actualmente en El Salvador no hay políticas específicas para el fomento de la Agroecología. Como se mencionó antes solo se tiene una política de AO, pero hasta el momento no ha cobrado vida en la práctica ya que “lamentablemente ninguna Dirección del Ministerio de Agricultura se apropió de la institucionalidad, ni de los principales ejes de acción de la política.” (Marín, X., 2016)

La cooperación internacional y las ONG’s han tenido un rol clave en la promoción de modelos alternativos producción agropecuaria. En la actualidad continúan apoyando proyectos en sus zonas de influencia y están en la disposición de apoyar iniciativas que generen cambios estructurales en el sector orgánico.

El desarrollo de la producción orgánica en El Salvador es una actividad de desarrollo reciente, producto de iniciativas privadas, principalmente de productores individuales, o agrupados en cooperativas u otras formas asociativas, de universidades, de cooperantes internacionales y de organizaciones no gubernamentales, entre otros, los cuales han llevado a la actividad al nivel en que actualmente se encuentra, el Estado ha estado prácticamente ausente en este proceso, la propia dinámica de la actividad le ha llevado a una etapa de desarrollo que requiere la intervención estatal a través de la implementación de acciones de carácter macro, que los actuales protagonistas de la AO no pueden suplir, por ejemplo: un sistema nacional de información, investigación, asistencia técnica, legislaciones, incentivos, financiamiento, promoción de la actividad, modificaciones curriculares en el sistema escolar y centros de enseñanza media y superior, entre otros. (Franco y Parada, 2006).

La mayoría de los esfuerzos para impulsar la agroecología y la producción orgánica han estado dirigidos a la implementación de prácticas en las fincas y parcelas, y no se ha realizado un contundente proceso de incidencia.

<sup>93</sup> Adalberto Blanco, comunicación personal.

Un factor en contra del avance de los procesos de fomento lo constituye la comunidad técnica, que debido a su formación, no considera viable un nuevo paradigma que evolucione del sesgo agroquímico a una modalidad más de base biológica y ambiental. A menos que las estructuras encargadas de la investigación, asistencia técnica, educación superior y rectoría política establezcan un entorno favorable a la agroecología y producción orgánica, el sector seguirá siendo dominado por la industria y el comercio de insumos agroquímicos, que debido a sus elevados intereses económicos, mantiene una fuerte capacidad de incidencia política especialmente en el congreso nacional.

Los factores que han llamado la atención hacia la necesidad de una nueva modalidad de agricultura han sido los impactos negativos del cambio del clima (especialmente la seria amenaza a la seguridad alimentaria por inundaciones o sequías) y la alta tasa de casos de insuficiencia renal crónica en áreas tradicionalmente caracterizadas por el uso intensivo de agroquímicos en cultivos como el algodón y la caña de azúcar.

Como respuesta a las amenazas del cambio climático y los riesgos para la salud humana, organizaciones de la sociedad civil y del movimiento cooperativo elaboraron durante el 2016 una propuesta de lineamientos de política para el fomento de la agroecología. La propuesta tiene como objetivo: “promover la sustentabilidad de los agroecosistemas, ecosistemas, la soberanía alimentaria y el desarrollo socioeconómico de la sociedad salvadoreña, a través del fortalecimiento de la agricultura familiar campesina de base agroecológica”. La propuesta es el resultado de una actuación conjunta de diversas organizaciones campesinas, ONG’s y cooperantes que están impulsando desde diversas áreas la transformación de la agricultura familiar hacia modalidades más sostenibles que avancen a la resiliencia frente al cambio climático, reduzcan la dependencia de agroquímicos y logren una relación más justa con los mercados. Su estructura contempla los cinco grupos de lineamientos que siguen:

1. *Producción*, con el objetivo de mejorar la sustentabilidad de los agroecosistemas, garantizando la viabilidad y equidad económica de la agricultura familiar campesina y la soberanía alimentaria.
2. *Comercialización y consumo*, que pretende que la sociedad salvadoreña disponga y acceda de la manera más directa, a los alimentos agroecológicos producidos en el país por la agricultura familiar campesina.
3. *Investigación y gestión del conocimiento*, para disponer de capacidades para la generación y socialización del conocimiento de los agroecosistemas de base agroecológica en los centros de investigación, formación, extensión y en las redes de campesinos agroecológicos.
4. *Gestión de ecosistemas y paisajes*, para generar dinámicas socio institucionales para la recuperación y manejo sostenible de paisajes y ecosistemas.
5. *Gestión institucional*, que busca disponer de instituciones eficientes y comprometidas en el desarrollo de la agroecología

### Impactos de los esfuerzos para el fomento de la Agroecología y producción orgánica

Es positivo el reconocimiento que el Ministro del MAG del período 2004 a 2009 hizo al Movimiento de Agricultura Orgánica de El Salvador (MAOES), que contribuyó sustantivamente con sus aportes a la construcción de la política Agricultura Orgánica; sin embargo la operativización de la política no fue asumida por la institucionalidad vigente en ese momento. Otro aspecto positivo de ese momento lo constituyó la apertura política, desde la cartera de estado para considerar otra modalidad de producción de alimentos, como parte del desarrollo del agro salvadoreño, lamentablemente se orientó más a las tendencias del mercado internacional. (Marín, 2016).

También es muy positivo que el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales haya reconocido que por ser El Salvador un país donde la mayoría de la superficie está en manos de productores agropecuarios, para la restauración de ecosistemas, conservación de los recursos naturales y reducción de riesgos, es indispensable la implementación de formas de manejo sustentable, lo que se refleja en el marco de políticas ambientales actuales ( por ejemplo: la Política Nacional de Medio Ambiente y el Plan Nacional de Cambio Climático),. Este hecho contribuyó para que el MAG al elaborar su propio marco de políticas para el cambio climático (la Estrategia de

Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal y Acuícola, así como la actualización de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional) incluyese también la necesidad de un giro hacia el paradigma orgánico/agroecológico. Otro impacto positivo asociado a la producción orgánica es el establecimiento de una línea de crédito específica por parte del Gobierno a través del Banco de Fomento Agropecuario, que se originó de una propuesta consensuada con representantes de la Mesa Agropecuaria e Indígena. (J. Peñate, comunicación personal, 12 diciembre 2016).

En relación con la propuesta de lineamientos de política para el fomento de la agroecología, elaborada de manera participativa con la coordinación del GDR y el CNAF, el mes de junio de 2016 se realizó una presentación al Sr. Ministro de Agricultura y Ganadería, Lic. Orestes Ortez, quien manifestó que la propuesta es muy oportuna. La propuesta fue revisada por la Oficina de Planificación de la Política Sectorial (OPPS) y cuenta con una opinión positiva por parte de esta dependencia del MAG. Actualmente se continúa el diálogo para continuar con el proceso de incidencia. Es importante mencionar que en 2016 el MAG a través de CENTA ha realizado una serie de eventos que pueden ser interpretados como señales de apertura a una nueva forma de hacer agricultura más amigable con el ambiente y con menos impactos negativos para la salud humana.

### Factores que facilitaron y dificultaron los procesos de construcción política

Entre los factores importantes para los procesos para construir tanto la propuesta de lineamiento de política de fomento a la agroecología como la política de AO, está la existencia de un tejido organizativo que aglutina a representantes del sector de productores, ONG's de apoyo, academia y funcionarios del gobierno con interés en el establecimiento de un marco que favorezca el avance hacia una nueva forma de agricultura.

Otro factor contribuyente a considerar la importancia del cambio es el entendimiento de que la agroecología y la producción orgánica representan opciones válidas para la adaptación al cambio climático y para la disminución de los riesgos asociados con este.

La preocupación por lograr la soberanía y seguridad alimentaria asociada con el surgimiento de planes de atención a la agricultura familiar, y el alto costo de los insumos agroquímicos sintéticos.

La conciencia sobre el efecto dañino de los pesticidas generada en la sociedad por el apareamiento de numerosos casos de insuficiencia renal crónica en zonas de cultivo intensivo de algodón y caña de azúcar con alto uso de agroquímicos.

La tendencia a prestar una mayor atención a las especificidades territoriales, junto con las iniciativas de movimientos sociales para la defensa de los territorios frente a los efectos de la globalización.

Entre los factores que obstaculizan están los siguientes:

- La consideración de la agricultura orgánica como un rubro más, y no como un modelo de desarrollo de la agricultura en el sentido amplio. Marín, X. (2016) considera que este aspecto, posiblemente es una de las barreras por la cual la política actual de AO no tiene visibilidad, además no cuenta con una estrategia de desarrollo sostenible, desde el punto de vista de la economía campesina, la salud de la población, el rescate ancestral de la agricultura, la soberanía alimentaria y la protección del medio ambiente.
- Los programas de entrega masiva de fertilizantes y semillas mejoradas.
- La perpetuación del paradigma de la agricultura convencional en la currícula de escuelas técnicas y universidades, lo que tiene una fuerte incidencia en los sistemas de asistencia técnica e investigación tecnológica.
- La dispersión de los actores del movimiento orgánico.
- La elevada capacidad de incidencia del sector empresarial que comercializa agroquímicos.

## Facilitadores / Barreras para la implementación

Franco y Parada (2006) afirman que es generalizada la opinión de que hay un vacío institucional, siendo lo más notorio la ausencia de una instancia gubernamental que fomente la actividad. Solo en años recientes el Ministerio de Agricultura a través de CENTA ha incluido en sus planes un modesto accionar en la dirección de un modelo más amigable con el ambiente y con menos riesgos para la salud humana.

La desarticulación de los actores del movimiento orgánico también ha dificultado la implementación de las modestas conquistas logradas, al no lograr constituirse en un conglomerado que vigile y exija el cumplimiento de la política de AO.

La carencia de un mercado local que reconozca el valor de la producción agroecológica u orgánica es un desincentivo para contar con un sector pujante que pueda consolidarse para tener peso político importante.

El consumo fuertemente influido por las tendencias internacionales que imponen las grandes empresas agroalimentarias, en detrimento de los productos de consumo tradicional y endógeno. Hay una tendencia a la concentración en pocos productos, la mayor parte de las calorías que en promedio se consumen en el país, proviene de un escaso número de alimentos (maíz, leguminosas, azúcar, aceites y grasas). (PRISMA, 2016).

Un factor de mucho peso para restringir el desarrollo de la agroecología, la AO y las políticas y regulaciones de soporte es la cultura de los agroquímicos que permea las diferentes instancias de las instituciones pública, privadas y hasta de la sociedad civil. El negocio de la industria y comercio de agroquímicos tiene significativa influencia política la que se ha utilizado para generar la percepción de que el modelo convencional basado en la revolución verde es la única opción viable de producción agropecuaria para la seguridad alimentaria y generación de ingresos.

La orientación de la política de AO, a la producción macro, a la demanda del mercado internacional y la consideración de la opción orgánica como una alternativa a los bajos precios internacionales, marginalizando la pequeña producción familiar. Debido a la orientación de la AO al mercado internacional la certificación de los productos orgánicos se volvió un requisito indispensable, su costo relativamente alto para los pequeños productores ha sido un obstáculo, por otra parte el mercado nacional todavía no valora la importancia del consumo de productos orgánicos/agroecológicos y prefiere los de menos precio. El poco interés de las generaciones rurales jóvenes y más educadas en las actividades agropecuarias como medio de vida.

### Limitantes y potencialidades para desarrollo de agroecología en El Salvador.

En este apartado se presentan algunas reflexiones sobre las limitantes y potencialidades en torno a la agroecología desde el punto de vista de los productores y actores entrevistados.

#### Limitantes

*La agroecología requiere mayor esfuerzo físico* (en términos del esfuerzo físico que implica no es lo mismo controlar malezas con un herbicida que hacerlo con un machete o azadón, o elaborar y aplicar bokashi que aplicar fertilizante químico) además este trabajo extra no es compensado con un mayor precio en el producto. En este sentido, existe el desafío de encontrar opciones agroecológicas que no demanden tanto esfuerzo físico y que a la vez resulten rentables.

*Los resultados actuales se basan en experiencia empírica.* Se carece de respaldo técnico-científico que valide las prácticas y estimule el desarrollo de adecuados insumos agroecológicos. La formación de los técnicos e investigadores es mayoritariamente convencional, lo que no genera una actitud favorable hacia el tema y limita su capacidad de dar acompañamiento técnico a este tipo de procesos; esto también influye en la toma de decisiones sobre políticas que afectan la vida de las familias rurales.



*Falta asistencia y acompañamiento técnico permanente por parte de las instituciones del gobierno.* Por ahora las intervenciones del gobierno central y local se limitan a acciones puntuales, y son mayoritariamente las ONG's las que acompañan los procesos agroecológicos.

*Riesgo de seguridad alimentaria durante el periodo de transición.* Muchos agricultores deciden no practicar la agroecología por los riesgos que conlleva la transición, principalmente durante los primeros años en que la producción tiende a disminuir. La producción disminuye cuando se deja de utilizar fertilizantes químicos en suelos degradados, sin embargo, a medida que los suelos se recuperan los rendimientos tienden a subir. Por ello, si se quiere avanzar en la masificación de las buenas prácticas agrícolas, es necesario compensar las posibles pérdidas, reduciendo los riesgos de seguridad alimentaria durante el período de transición.

*Falta de suficientes condiciones para la comercialización directa.* Los productores agroecológicos no siempre cuentan con espacios e infraestructura adecuada para la comercialización de sus productos, ni obtienen precios que reconozcan el trabajo extra de los productores. Por otra parte, los consumidores desconocen los beneficios del consumo de productos agroecológicos u orgánicos.

*Falta de estudios de soporte.* Estas experiencias necesitan de un mayor apoyo de la academia, faltan investigaciones que den respuesta a las necesidades de la producción agroecológica. A nivel nacional únicamente la Universidad Luterana Salvadoreña ofrece una carrera de Agronomía basada en la Agroecología.

*Limitada capacidad de inversión.* Hay productores que tienen disponibilidad de tierra y agua, sin embargo por la falta de visión empresarial y limitada disponibilidad de mano de obra familiar o capital de inversión, no están produciendo excedentes para el mercado.

*Dependencia de insumos externos a la finca.* Si bien la mayoría de productores entrevistados elaboran insumos orgánicos (compost, bokashi, biofermentos, foliares etc.), algunos todavía dependen de recursos externos para su elaboración. Con excepción de las fincas de café, el concepto de agroforestería para la producción de biomasa in situ para cobertura del suelo, forraje para el ganado o materia prima para compost no se ha generalizado.

## Potencialidades

*Organización y apoyos institucionales.* Existe un importante tejido social que agrupa a productores y organizaciones con interés en la producción agroecológica. Incluso están funcionando plataformas multiactores o redes para el compartimiento de saberes. Por otra parte, hay alcaldías que han comenzado a interesarse en los procesos agroecológicos, principalmente en la elaboración de compost y establecimiento de parcelas demostrativas. Estos esfuerzos, son piezas importantes para el proceso de masificación o escalamiento de la agroecología.

*Interés estatal por apoyar la agroecología.* Aunque de manera incipiente, el CENTA ya ha comenzado a trabajar en el tema de la agroecología. Se ha hecho un esfuerzo importante para utilizar únicamente agroquímicos de etiqueta verde, así como un abordaje más amigable con el ambiente en las diversas unidades de investigación, también se ha trabajado en el mejoramiento de variedades (especialmente de maíz y frijol) mejor adaptadas a los diferentes nichos agroecológicos. Asimismo, hay proyecciones de comenzar a entregar insumos agroecológicos como parte de los paquetes agrícolas que se entregan a pequeños productores al inicio de la temporada agrícola.

Por su parte el Ministerio de Medio Ambiente a través del Programa de Restauración de Ecosistemas y Paisajes PREP, busca incentivar las prácticas sostenibles que como la agroecología “garanticen la conservación de suelos y agua en los suelos para frenar la erosión y aumentar la retención de humedad en los suelos para extender el periodo de siembra y aguantar mejor periodos de sequía” (MARN, 2012) como parte de las estrategias definidas para la adaptación al cambio climático.

*Iniciativas de comercialización.* Existen algunas iniciativas de comercialización de productos orgánicos y agroecológicos promovidas por organizaciones sociales y la cooperación internacional. Organizaciones como

REDES y UNES promueven agro mercados y ferias agroecológicas, las cuales tienen un potencial importante para la expansión de la producción agroecológica y de los co-beneficios que implica para la sociedad. La iniciativa Canasta Campesina es una experiencia que combina la producción agrícola orgánica y la comercialización anticipada de productos orgánicos. Estos esfuerzos resultan claves pues cuando los productores no tienen oportunidades adecuadas o espacios de comercialización, carecen del estímulo necesario para ir más allá de la producción para el consumo familiar.

*Impulso de la seguridad alimentaria y nutricional.* Los esfuerzos de política pública para seguridad alimentaria y nutricional tienen un buen aliado en la agroecología y viceversa. Está demostrado que la producción agroecológica tiene un enorme potencial para mejorar los niveles de nutrición de las familias a través de la diversificación de la dieta y el rescate de especies con alto valor nutritivo como el Ujushte (*Brosimum alicastrum*), el Teberinto o Moringa (*Moringa oleifera*) y la Chaya (*Cnidoscolus chayamansa*), entre otros.

*Interés del gobierno y de la sociedad en la protección y rescate de la biodiversidad.* La comunidad agroecológica tiene también la potencialidad de su gran contribución a la protección y rescate de la agro biodiversidad y es una pieza importante para las políticas ambientales en ese ámbito. Muchos productores y productoras cuentan con semillas propias y ya se evidencian acciones en la dirección del establecimiento de bancos o santuarios de semillas, además las ferias o intercambios de semillas son una práctica bastante difundida en el país. El redescubrimiento de especies nativas subutilizadas capaces de resistir la variabilidad climática forma parte del rescate de la cultura campesina impulsado por la agroecología.

*Población campesina sensibilizada y con motivación para cambiar el modelo tradicional de prácticas agrícolas.* Existe un sector de productores que está consciente de la necesidad de abandonar los insumos peligrosos para la salud humana y ambiental, pero carecen de las facilidades o tiempo para la elaboración de sus propios abonos orgánicos o biofermentos. Esta circunstancia tiene el potencial para desarrollar emprendimientos que produzcan insumos agroecológicos para la venta en sus comunidades, lo que podría ser una ventana de oportunidad para las organizaciones juveniles.

Siendo que la mayoría de los productores agroecológicos han sido formados y sensibilizados en el seno de las organizaciones sociales y productivas, es necesario, fomentar y consolidar la organización de base comunitaria.

---

## Conclusión

En El Salvador existen experiencias agroecológicas que han sido apoyadas por diversas organizaciones sociales y gremios de productores y productoras pero no se cuenta con un marco institucional lo suficientemente robusto para ampliar la escala de aplicación de estas prácticas, de modo que puedan convertirse en una alternativa sostenible para la producción de alimentos, la restauración de los bienes y servicios ecosistémicos, y la dinamización productiva de los territorios rurales.

En los últimos años las acciones de política pública han estado enfocadas a enfrentar un contexto de crisis socio económica, que se expresa en situaciones como la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad ambiental incrementada por la variabilidad climática, frente a lo cual se han ido produciendo nuevos enfoques, programas y estrategias de acción, al mismo tiempo se han ido impulsando espacios de diálogo de políticas, mesas técnicas y nuevas investigaciones que también apuntan a la urgente necesidad de un cambio de paradigma en la agricultura.

Esta confluencia entre la acción de las organizaciones sociales y apertura de las políticas públicas permite que existan nuevas oportunidades para que las iniciativas sociales que apuestan y practican la agroecología sean parte de una amplia estrategia que permita avanzar hacia una agricultura familiar agroecológica como opción de agricultura sostenible (PRISMA, 2016) que responda adecuadamente al incremento de los procesos de degradación ambiental que se originan en una combinación de factores antropogénicos, naturales y del cambio climático, lo cual ha incrementado los niveles de vulnerabilidad. Según el MARN, es imprescindible tomar medidas

correctivas con urgencia de lo contrario el deterioro podría alcanzar niveles de irreversibilidad. La reducción y deterioro de ecosistemas naturales y la pérdida de biodiversidad se traducen en disminución de la calidad de aire, agua, suelo, dando como resultado el desmejoramiento en la calidad de la vida humana (GEO, 2007).

El cambio de la agricultura convencional a una agricultura familiar campesina con base en la agroecología va mucho más allá que una simple sustitución de técnicas e insumos, es primeramente un cambio en la mentalidad, en la conciencia, como lo demuestran las experiencias analizadas en el mapeo realizado en 2016. Además, requiere de un soporte institucional con base territorial que permita el desarrollo de nuevas habilidades y la adquisición de otros saberes tecnológicos al alcance de los agricultores familiares.

Con base a lo anterior se presentan algunas sugerencias que podrían contribuir al desarrollo de la agroecología en El Salvador:

*Desarrollar un sistema territorial, participativo e inclusivo para la promoción y escalamiento de la agroecología*

- Territorializar la gestión de la investigación y asistencia técnica, de manera que responda mejor a los intereses y particularidades económicas, ecológicas, sociales y culturales de los territorios. Con ello se asegura el acompañamiento del proceso y la facilitación de la capacitación en temas concretos que los productores y productoras pueden poner en práctica de manera inmediata.
- En esa misma línea se vuelve importante fomentar y consolidar la organización de base comunitaria y estimular la creación de las organizaciones pertinentes donde no existen, ya que como demuestran los casos analizados estas han sido actores clave en la transición de la mayoría de los productores agroecológicos formados y sensibilizados en el seno de las organizaciones sociales y productivas. Estas organizaciones también son claves para realizar acciones de sensibilización sobre la importancia de la agricultura familiar y el papel de la agroecología para el logro de la soberanía alimentaria y la adaptación al cambio climático.
- Complementariamente promover la aplicación de metodologías de aprendizaje horizontal como “campesino a campesino”, a través del establecimiento de una red de campesinos innovadores que constituyan las vanguardias de la agroecología, campesinos que trabajan en las mismas condiciones y enfrentan los mismos problemas que el resto de la comunidad; que además están dispuestos a abrir sus parcelas para mostrar a los demás los resultados y las lecciones obtenidas.
- Facilitar las condiciones para que los productores puedan experimentar lo aprendido. Esta facilitación puede tomar diferentes formas, desde proveer transporte para la obtención de algunos insumos o materiales, hasta proveer insumos como semillas, herramientas u otros materiales o equipo que no están al alcance de la familia campesina. Las familias aprenden haciendo, es necesario que puedan experimentar sin mayor riesgo y evidenciar por sí mismas la utilidad en sus propias circunstancias de las alternativas agroecológicas.
- Facilitar las condiciones para fortalecer la participación de los jóvenes y las mujeres en los procesos organizativos, en el aprendizaje y la innovación, como actores que aportan con nuevos conocimientos, habilidades y motivaciones al desarrollo de la agricultura familiar agroecológica.
- Como parte de una efectiva estrategia de escalamiento o masificación de las prácticas agroecológicas, se requiere facilitar espacios donde los productores puedan ver, aprender y probar. Para ello, las giras o intercambios, los talleres y demostraciones, las escuelas de campo y las parcelas demostrativas han demostrado ser una importante herramienta de formación y sensibilización. Asimismo, es necesario formar y sensibilizar en el tema de la agroecología a las autoridades y tomadores de decisión, así como a los técnicos y futuros profesionales de agronomía.
- Se requiere de esfuerzos adicionales que den continuidad y estabilidad a los procesos iniciados como parte de los proyectos, especialmente cuando estos terminan. No volver a comenzar de cero, sino continuar y consolidar

las experiencias o procesos iniciados previamente. Para ello, los gobiernos locales y organizaciones con mayor permanencia en los territorios pueden jugar un papel muy importante.

#### *Investigación y tecnología accesible a los productores y a las características de los territorios*

- Territorializar la investigación tecnológica. La agroecología implica el rediseño de los agroecosistemas, con una estructura diversificada y funcional que logre que el sistema funcione sin necesidad de insumos externos sintéticos u orgánicos. Debido a la diversidad en los suelos, gradientes de temperatura, disponibilidad hídrica, preferencias culturales, altitud sobre el nivel del mar, predominancia de vientos, etc. se vuelve un imperativo territorializar la investigación tecnológica para la agroecología, esto además daría la oportunidad para que los actores del territorio participen desde la misma planificación de la investigación.

- Enfatizar tecnologías de rápido impacto, que resuelvan problemas sentidos por las familias, de aplicación sencilla, que demanden poco esfuerzo, que tengan bajo costo, aceptables culturalmente, que se hayan probado con éxito y que sea posible conocerlas como experiencias concretas en las parcelas de sus pares.

- Asegurar la disponibilidad de agua para la producción familiar. Debido a que la producción de biomasa es fundamental para la restauración del suelo, alimentar los animales y generar cobertura, es muy importante contar con agua para la producción de la parcela o finca durante la estación seca o períodos de sequía. En el contexto de variabilidad climática y particularmente en el corredor seco es un tema crítico que merece especial atención porque permite a la familia asegurar la producción para su consumo y para vender o compartir. Un programa que facilite horas de maquinaria para excavación de reservorios, y facilite la obtención de geomembranas para la cosecha y almacenamiento de agua lluvia puede hacer una enorme diferencia para una unidad de producción familiar; además de lo anterior permitiría la obtención de al menos una cosecha de tilapias en el año.

#### *Programas de Incentivos que aseguren una transición adecuada y la consolidación del paradigma agroecológico*

- Desarrollar programas que apoyen el proceso de transición hacia la agroecología. El temor al riesgo de perder es uno de los principales limitantes para el cambio de paradigma; por tanto sería muy útil apoyar el proceso de transición con medidas que contribuyan a mitigar el riesgo de la disminución temporal de la producción causada por el abandono de agroquímicos en suelos degradados, con medidas que aseguren el sustento de la familia, por ejemplo un fondo de garantía o seguro de cosecha, etc.

- Apoyar la comercialización de los productos agroecológicos producidos por la agricultura familiar. Un buen incentivo para la consolidación o arraigo del nuevo paradigma es el apoyo a la comercialización, esto implica realizar esfuerzos para que la sociedad valore el esfuerzo extra que implica la producción agroecológica, urge que los consumidores comprendan que estos productos son beneficiosos tanto para la salud personal como para la salud del planeta. Al corto plazo en El Salvador es factible fomentar la provisión de productos agroecológicos en los programas de compras públicas pues ya han mostrado ser un buen incentivo para la producción agroecológica, para esto es clave promover la acción interinstitucional entre las diversas instancias estatales y a la vez una articulada colaboración con las municipalidades y mancomunidades para que se puedan abrir espacios que faciliten y mantengan las ventas de productos agroecológicos a los programas y dependencias del estado (hospitales, escuelas, destacamento militares, etc.). Considerando que la participación de las mujeres es principalmente en la comercialización de excedentes de productos, su empoderamiento en el tema de mercadeo y agregación de valor puede ser un estímulo para aumentar la producción.

#### *Establecer un marco de políticas que promueva el desarrollo de la agroecología en El Salvador*

- Es necesario avanzar a un marco de políticas que permita institucionalizar la agroecología como un modelo de agricultura de alto interés social y económico por todos los beneficios que esta aporta en términos nutricionales, ambientales y económicos. Existe un conjunto de políticas que ya han reconocido las ventajas de las prácticas agroecológicas y están desarrollando acciones que permiten su fortalecimiento, entre estas, la Política Nacional

de Medio Ambiente, el Plan Nacional de Cambio Climático, La Estrategia de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal y Acuícola del MAG, así como la actualización de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Con estos antecedentes es posible avanzar a una propuesta de política que permita organizar las acciones estatales y sociales para que pasar de buenas experiencias dispersas a un modelo consolidado de agroecología para los territorios rurales de El Salvador.

## Bibliografía

---

- IV Censo Agropecuario 2007-2008, El Salvador, C.A.
- CENTA. Plan anual operativo institucional 2011. CENTA. San Andrés. 2011
- DIGESTYC. Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. 2010
- FAO. La FAO y la Agricultura Familiar. Caso El Salvador. San Salvador. 2012
- Franco, M. y Parada, J.E. Diagnóstico de Situación de la Producción Orgánica en El Salvador y una Propuesta para su Fomento. CLUSA. San Salvador. 2006
- GEO. Perspectivas del Medio Ambiente de El Salvador. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2007
- MAG. Política de agricultura orgánica de el salvador. Santa Tecla. 2008
- Marín, X. Opinión sobre la política de agricultura orgánica ministerio de agricultura y ganadería (MAG), Oficina de Planificación Estratégica (OPE), julio de 2008. Comunicación personal. 2016
- MARN. Política Nacional de Medio Ambiente. San Salvador. 2012
- MARN Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Paisajes, PREP. San Salvador. 2012.
- MARN. Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2013. 2013
- MARN. Estrategia Nacional de Biodiversidad 2013. 2013
- Mollison, B. Permaculture Two. Practical Design for Town and Country in Permanent Agriculture. Tasmania. 1979
- Rosset, P. M. y Martínez, M. E. Agroecología, territorio, recampesinización y movimientos sociales. Estudios Sociales. Revista de investigación científica. v. 25(47) p. 275-299. 2016.
- PRISMA. Mapeo de experiencias agroecológicas con potencial de escalamiento en El Salvador. Documento de trabajo. San Salvador. 2016
- PRISMA. Vinculando adaptación y mitigación del cambio climático: Implicaciones para Centroamérica. San Salvador. 2014
- PRISMA. Lineamientos de Política para el Fomento de la Agroecología en El Salvador. San Salvador. 2016
- UCA. Análisis del deterioro de la agricultura en el salvador a partir del proceso de liberalización económica de los 90. San Salvador. 2012

## Capítulo 8. Agroecología en México. Marco de políticas públicas

Juan Pulido Secundino, Gonzalo Chapela y Mendoza

### Introducción

En condiciones críticas de orden económico y ambiental, la agroecología aparece como una respuesta racional de homo sapiens para sobrevivir. No obstante, la inmensa mayoría de los esfuerzos públicos y de los productores muestran una realidad contrastante, donde los paquetes tecnológicos, el monocultivo, el uso intensivo de maquinaria y combustibles fósiles, fertilizantes sintéticos y agroquímicos tóxicos dominan el escenario. La revisión del estado de la agroecología en México busca contribuir a discernir sobre esa contradicción vital para el futuro de las generaciones presentes y futuras.

La agroecología tiene definiciones poco precisas que pueden implicar diversos grados de exigencia. En general, la agroecología implica una disciplina del conocimiento y también una forma de hacer agricultura, con características de mínima artificialización del agroecosistema y mínimo impacto ambiental en cuanto al balance de gases de efecto invernadero, contaminación por plásticos y agroquímicos, la mínima dependencia de insumos y factores productivos externos y también implica diversos aspectos de las relaciones de producción y la cultura (Altieri, 1995).

En México, prácticamente no se identifican políticas dedicadas específicamente a la agroecología o producción agroecológica, pero sí se pueden observar elementos que tienden hacia alguno o varios de los objetivos y prácticas agroecológicas. En las líneas siguientes se hablará de estos elementos que pueden ser denominados como *ambientales o sustentables* y que ocasionalmente coinciden con formas específicas de agricultura como la *permacultura* o de esquemas de distinción en el mercado, como la certificación de la producción orgánica. Hablamos, entonces, de políticas que inducen o favorecen prácticas agroecológicas, generalmente reconocidas como de *sustentabilidad*.

Se presenta primero un contexto de la historia, los recursos naturales y la producción; en un segundo apartado se examinan las políticas públicas a través de sus instrumentos, procurando hilar un texto que muestra su evolución; el tercero reseña algunos movimientos y organismos de la sociedad como parte de la explicación de la transición agroecológica y un cuarto apartado procura exponer como conclusión algunos de los principales desafíos para el desarrollo de la agroecología en general y particularmente de las políticas públicas para ese desarrollo.

### Historia y trayectoria de los instrumentos y políticas que han contribuido para el apoyo a la agroecología y a la producción orgánica

#### Contexto productivo, político e histórico en México

México tiene aptitud agropecuaria y silvícola, con condiciones eco-geográficas muy diversas, desde tierras de llanura en las costas, hasta tierras de altiplanicie y de montaña; climas de tropical húmedo hasta seco estepario; variados suelos y condiciones fisiográficas. Asimismo, el país cuenta con una gran diversidad cultural en la que resalta el mestizaje con fuerte influencia de raíces indígenas<sup>94</sup>.

<sup>94</sup> Según SAGARPA- INEGI (2015), en México, 7 millones 382 mil 785 personas de 3 años y más hablan alguna lengua indígena, las más habladas son: Náhuatl, Maya y Tzeltal. Indica, además que, independientemente de hablar o no lengua indígena, hay 24.4 millones de personas de 3 años y más que se auto reconocen indígenas, cifra que representa 21.5% de la población mexicana en ese rango de edad. Este porcentaje representa tres veces más al de la población hablante de lengua indígena.

Las culturas indígenas prehispánicas aportaron diversos conocimientos sobre la agricultura, la medicina tradicional y el manejo de recursos naturales, entre otros aspectos, que coevolucionaron en los diversos ambientes ecogeográficos que se reconocen hoy como *memoria biocultural* (Toledo y Barrera, 2008). Boege (2008) los caracteriza como *patrimonio biocultural*<sup>95</sup>. Más de dos décadas antes de estos autores, Hernández-X (1988) había hecho énfasis en la necesidad de revalorar los conocimientos tradicionales para incorporarlos al desarrollo del campo mexicano. Siendo México lugar de origen de la agricultura, en su diversidad eco-geográfica y cultural ha aportado al mundo plantas comestibles como el maíz-frijol-calabaza, jitomate, cacao, aguacate, y diversos tubérculos tropicales, así como plantas de uso medicinal, fibras, resinas y muchas otras, en sistemas de policultivos ingeniosos<sup>96</sup> con prácticas agroecológicas.

Con la conquista, se introdujeron nuevos cultivos y elementos, como el trigo, la caña de azúcar, el café, y muchos frutales y hortalizas, así como el arado y los animales de trabajo, que significaron el acceso a las mejores tierras productivas de los bajíos, una neta orientación mercantil (Brading, 1980) y la simplificación de los sistemas productivos, ahora de monocultivo, a la vez que el sincretismo cultural y tecnológico.

Para comprender el estado actual del país en cuanto a los tipos de producción agrícola, es necesario hacer un breve recuento de las etapas que ha transitado la política agraria y agrícola en el último siglo y a la fecha.

En las haciendas la tierra estuvo acaparada principalmente para producción mercantil, coexistiendo con la agricultura practicada por los peones y comunidades indígenas en pequeñas parcelas y solares de poca capacidad productiva, cedidos temporalmente en usufructo por los hacendados como parte del salario.

La profunda reforma agraria mexicana<sup>97</sup> prohió el auge en la producción y el desarrollo de instituciones públicas en el campo, con un impulso modernizador que significó un nuevo desplazamiento de los sistemas complejos tradicionales y sincréticos que siguieron practicando de manera marginal los pequeños productores. Esta etapa fue coincidente con la consolidación del Estado post revolucionario y un auge productivo propio de la circunstancia de la Guerra y el periodo posterior de expansión económica.

En este periodo, coexistieron esfuerzos muy importantes para el desarrollo de la agricultura intensiva que sentó las bases de la *revolución verde* y, por otro lado, el inicio de estudios sobre el conocimiento tradicional y los recursos genéticos con trabajos pioneros en etnobotánica. Corresponde también a este impulso el reconocimiento de la importancia de la conservación y el manejo cuidadoso de los recursos naturales, que se reflejan en la Ley Forestal de 1942 y la Ley de Conservación de Suelo y Agua, de 1946.

La vía de intensificación productiva avanzó en el marco de la *Revolución Verde*, consolidando un modelo de gestión controlado por las instituciones a través de un servicio nacional de extensionismo, la generación de *paquetes tecnológicos* estandarizados aplicados mediante instrumentos de crédito y aseguramiento condicionados a la aplicación de los *paquetes*.

Este modelo, diseñado y asesorado por asesores en universidades estadounidenses tuvo su epítome en el Plan Puebla. Los resultados inmediatos de la aplicación masiva de subsidios en este modelo generaron el incremento sustancial de la productividad por hectárea en tierras de buena calidad y clima favorable, pero pronto mostró limitaciones llegando, en 1964 a la pérdida de la autosuficiencia en maíz y en los principales productos.

Los movimientos sociales de fines de los '60 y la década siguiente fueron el último impulso agrario y en los ochentas las principales movilizaciones y organizaciones en el campo se dirigieron hacia la apropiación del proceso productivo.

---

<sup>95</sup> Según Cocks (2006), el concepto de bioculturalidad es aplicable tanto a comunidades tradicionales indígenas como a no indígenas.

<sup>96</sup> Actualmente la milpa maya está en proceso de ser reconocida como sistema inteligente del patrimonio agrícola mundial (Terán, Silvia y Manuel Rabasa, 2016)

<sup>97</sup> La superficie de propiedad social alcanza el 48 % (Registro Agrario Nacional, 2011)

Desde la década de 1980 -1990, en el contexto de la crisis de deuda que se extendió por la mayoría de países de la región, el modelo económico neoliberal, desplazó al Estado de su papel rector y promotor, para intensificar el comercio y <sup>98</sup>dar entrada a las corporaciones nacionales y transnacionales. Este proceso complejo, que se puede asociar al desarrollo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, 1992), significó la terminación de la reforma agraria, la reducción de inversiones públicas y el desmantelamiento institucional y programático previo; ha conllevado una mucho mayor supeditación de la agricultura a la industria y, con ella, la profundización de un modelo tecnológico del tipo de la Revolución Verde, con mecanización, uso de agroquímicos y plásticos y pérdida de agrobiodiversidad por la expansión de la utilización de semillas híbridas y transgénicas que sustituyen y minan los recursos genéticos de polinización libre.

A la par, los conflictos derivados de tan fuerte ajustes, así como un flujo de información en las crecientes poblaciones urbanas, permitieron algunos avances en cuanto a las preocupaciones ambientales y en temas de salud, así como en reivindicaciones de sectores populares rurales que se concretaron en acuerdos, leyes, instituciones y programas favorables a las agriculturas campesinas y al cuidado ambiental y de los recursos naturales. Entre estos, destacan la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la promulgación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y los *acuerdos para el campo*, derivados de la movilización social *El Campo no Aguanta Más*, relacionado con *Vía Campesina* y coincidente con el inicio, en el año 2000, de la alternancia política. De manera tardía, la Ley de Productos Orgánicos (2006) se puede asimilar a este ciclo de desarrollo de políticas públicas.

En los últimos años está instrumentándose una profunda transformación del campo al adquirir prioridad absoluta en la política pública la minería y los energéticos en términos de exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y de esquistos, instalación de campos eólicos y construcción de embalses para generación de energía hidroeléctrica.

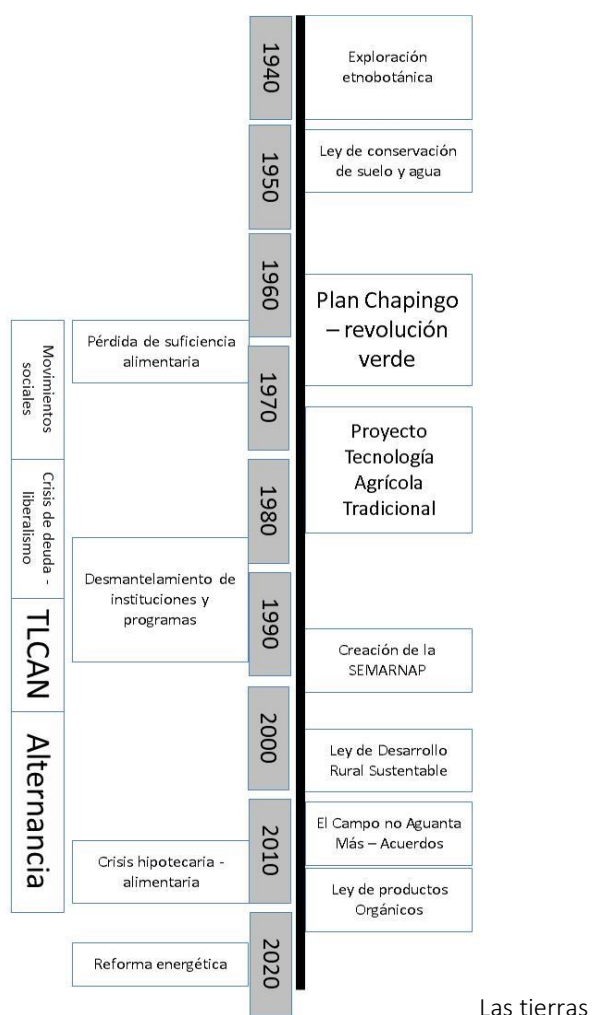
En el diagrama siguiente se muestran de manera sinóptica los hitos de la historia reciente de la agricultura y la transición agroecológica y su contexto.

---

<sup>98</sup> En este aspecto, destacan el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y el Acuerdo Latinoamericano de Integración (ALADI) y los esfuerzos para promover el Acuerdo Comercial Transpacífico



Figura 25 - historia reciente de la agricultura y la transición agroecológica y su contexto



México cuenta con una superficie continental de 195,9 millones de hectáreas de las cuales 32,3 son agrícolas, 79,5 de ganadería pastoril y 67,5 de bosques, selvas y otras formaciones forestales (INEGI, 2014). El 79,7% de la superficie agrícola carece de riego. (SAGARPA, 2015).

En México la degradación de las tierras es importante y avanza, aunque se tiene poca información que permita establecer con qué velocidad.

El estudio de Degradación de las Tierras Causada por el Hombre (SEMARNAT-CP 2002), mostró que un 45,2% de la superficie nacional presentaba algún grado de degradación: pérdida de fertilidad (17%); erosión hídrica (11,8%); erosión eólica (9,5%) y otras formas de degradación física (6%). Este estudio enfatiza que un 93% de la degradación tiene como factor causativo la utilización de malas prácticas de manejo de las tierras.

El estudio de línea base de la desertificación (CONAFOR-UACH, 2013), indica que aproximadamente un 20% de la superficie del país presenta algún grado de erosión hídrica, y que la cobertura vegetal que se encuentra deteriorada en algún grado representa el 54%, en tanto que 27% corresponde a la categoría de degradación severa. Señalan también que el 63,2% del país presenta algún grado de degradación edáfica y concluye que: “cerca de la mitad del país tiene problemas de severos a extremos de degradación de tierras”.

Bollo et al. (2014) encontraron que un 50,2% de la superficie nacional presentaba algún grado de degradación del suelo; 47,9% presentaba algún nivel de degradación de la cobertura vegetal, de la cual 22,3% correspondió a muy alta, 14,2% alta y 4,3% baja, en tanto que solo el 0,4% del país mostró modificación antropogénica en menos del 10% con respecto a la cobertura original.

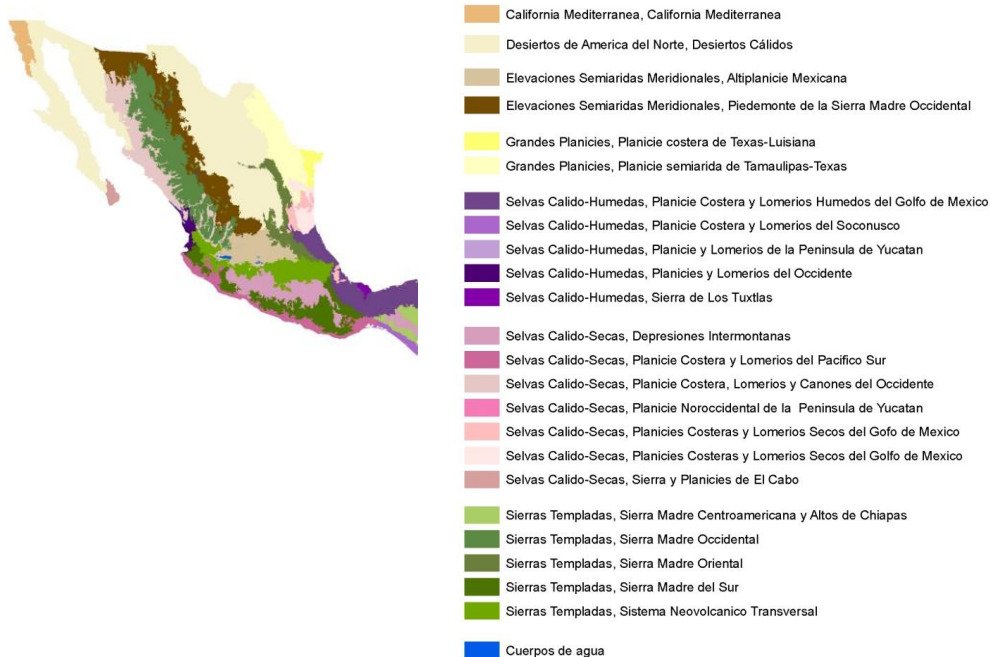
## Biodiversidad

México tiene una gran diversidad de ambientes y nichos de endemismos, lo que da por resultado 97 ecorregiones terrestres (INEGI-CONABIO-INE 2007) con hasta 50 tipos de vegetación (INEGI 2013; Challenger y Soberón 2008). Así, es uno de los 17 países megadiversos. En el país se han descrito alrededor de 100.000 especies de todos los grupos taxonómicos en más de 200 años de colecta y documentación sistemática y se estima que esto corresponde a entre el 30 y 50% de las especies que pueden existir en el país (Martínez-Meyer 2014), aunque existen grupos taxonómicos prácticamente desconocidos en México. Reúne endemismos, como en cactáceas, que rebasan el 90% de las especies (Hernández, et al, 2004; CONABIO, 2016). Se estima que la diversidad de especies de México representa aproximadamente entre 10 y 12% de las especies conocidas en el mundo (ver cuadros 1 y 2). Especialmente importante es su biodiversidad humanizada, (Perales y Aguirre, 2008) como centro de domesticación de por lo menos 100 especies cultivadas (Bellón et al. 2009).

**Figura 26 - Número de especies reportadas en la literatura y en bases de datos para el mundo y para México, para hongos y algunos grupos de flora. Tomado de CONABIO (2016).**

Grupo	especies mundo	reportadas.	especies México	reportadas	Porcentaje estimado de endemismo
Hongos		99.000		6.500	Se desconoce
Algas		43.918		ND	Se desconoce
Briofitas		20.000		1.585	12%
Plantas vasculares		-		23.005	40 – 60 %
Pteridofitas		13.000		1.014	19%
Gimnospermas		1.000		155	Se desconoce
Angiospermas		352.000		21.841	50%

**Figura 27 - Ecorregiones terrestres de México nivel II (CCA 1997). Tomado de Challenger y Soberón (2008).**



La homogenización de los paisajes agrícolas y el uso de tecnología e insumos agrícolas ha mermado la capacidad de los ecosistemas para regular las poblaciones de plagas y proveer servicios de polinización, lo cual ha traído también consecuencias económicas negativas de gran magnitud (Balvanera *et al.*, 2009; Power, 2010).

El uso creciente e indiscriminado de herbicidas, plaguicidas y fertilizantes, así como la especialización productiva basada en el monocultivo y el consumo desmedido de agua para el riego, ha provocado la degradación química, física y biológica de los suelos<sup>4</sup> (erosión y disminución de la fertilidad), la pérdida de diversidad genética de muchos cultivares, la contaminación del aire y del agua (Anta Fonseca *et al.*, 2008; Balvanera *et al.*, 2009; SEMARNAT y Colegio posgraduados, 2002). Por otro lado, el uso de fertilizantes alcanza los 5.500 millones de toneladas anuales (SIAP, 2013); además de incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero, ha resultado en la contaminación, eutrofización e hipoxia de suelos y cuerpos de agua más allá del ámbito local (Power, 2010; Rabalais *et al.*, 2002).

## La producción

El patrón de producción del campo mexicano ha sufrido un profundo cambio desde la pérdida de suficiencia alimentaria en 1964 y, sobre todo, desde la firma del tratado de libre comercio en América del Norte (TLCAN), lo que ha significado exportar productos hortofrutícolas e importar hasta un 40% de los alimentos necesarios para el consumo interno (Chapela, *et al.*, 2014). Los procesos de urbanización la importancia cada vez mayor de las tiendas de autoservicio, que controlan más de la tercera parte del mercado de productos del campo (León, 2007), hacen dedicar crecientemente la producción a la elaboración de alimentos pecuarios y a la agroindustria.

En esta forma, 2,1 millones de hectáreas se destinan a cultivos hortofrutícolas (SAGARPA, 2015) y se importan 12 millones de toneladas de maíz al año, principalmente del tipo amarillo con destino a la alimentación animal y a la producción de alta fructosa destinada a la industria refresquera y otros ramos agroindustriales.

México produce 235 millones de toneladas de productos agrícolas y 19 millones de toneladas de productos pecuarios (SIAP, 2013). La mayor parte de la producción comercial se lleva a cabo en superficies medianas y grandes, aunque la participación de las agriculturas familiares (en predios menores de 5 hectáreas) alcanza un sustancial 36% del abasto nacional (Chapela *et al.*, 2015). El 58% de la superficie sembrada se dedica al cultivo de maíz grano blanco, sorgo grano, frijol, café, caña de azúcar y trigo grano (SAGARPA-INEGI, 2015).

Este patrón productivo está generando un efecto general de intensificación productiva en las zonas de mayor productividad, mientras que en las zonas de productividad marginal, gestionadas generalmente en pequeñas unidades familiares, la reducción de los márgenes de utilidad, la migración y otros procesos tienden a degradar tanto la base productiva como la aplicación de conocimientos y la pérdida de sistemas intensivos de policultivos con tecnología tradicional.

El 86% de las unidades de producción con actividad agrícola utilizan algún tipo de tecnología del tipo de revolución verde; no obstante, también va avanzando el uso de técnicas que pueden considerarse sustentables o ambientales, en la medida que representan ahorros o incrementos productivos. Entre 2012 y 2014 la labranza de conservación aumentó de 22,2% a 34,3%; la rotación de cultivos pasó de 19,6% a 26,8% y también creció el uso de elementos de manejo integrado de plagas. En contraste, los abonos naturales registraron una disminución del 40,4% al 27,5% (SAGARPA-INEGI, 2015).

La agricultura protegida ha alcanzado 15.973 ha en 2014<sup>99</sup> en 25.814 unidades: 65% invernaderos, 10% macrotúneles, 10% microtúnel y 15% casa sombra, techo sombra o pabellón, en las cuales se producen principalmente frutillas, jitomate, pepino, pimientos, rosas y otros cultivos ornamentales, culinarios, forestales y medicinales<sup>100</sup>. En algunos casos, esta forma de producción alcanza grados interesantes de sustentabilidad en algunos aspectos, principalmente el de la reducción de uso de herbicidas y plaguicidas tóxicos.

---

<sup>99</sup> Calculado a partir de datos del SIAP. [http://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/datosabiertos/siap/Paginas/superficie\\_agricola\\_protegida.aspx](http://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/datosabiertos/siap/Paginas/superficie_agricola_protegida.aspx)

<sup>100</sup> Información del SIAP: <https://www.gob.mx/siap/articulos/en-mexico-existen-25-814-unidades-de-produccion-de-agricultura-protegida?idiom=es>

Algunos sistemas productivos también han incorporado modelos con elementos de sustentabilidad. Destacan la producción de café orgánico bajo sombra y la ganadería silvopastoril intensiva. En el primer caso, los productores minifundistas organizados lograron ingresar exitosamente a los mercados mundiales de café certificado, compensando las bajas de precios y la inestabilidad en el mercado internacional del aromático (Argenis, *et al.*, 2012; Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2001) y, en el segundo caso, el incremento en productividad ha sido sustancialmente superior que en los sistemas convencionales, tanto en productividad como en costos (Murgueitio e Ibrahim, 2009).

### Políticas públicas que contribuyen a la transición agroecológica

---

A continuación, se describen algunos rasgos de las políticas públicas que han aportado, o que tienen relación con la agroecología y el manejo sustentable de los recursos naturales.

#### Los orígenes

Exploración etnobotánica en los '40. Al final de la segunda guerra mundial, la Fundación Rockefeller promovió las bases del desarrollo agrícola moderno, que tomó posteriormente el cauce de la revolución Verde. Como primeros pasos, destacan los trabajos de exploración etnobotánica y la colecta de germoplasma de maíces en México y Mesoamérica (Wellhausen *et al.*, 1951), que recopilan a la vez un acervo abundante de información sobre las prácticas y condiciones de producción agrícola.

LCSA- Ley de Conservación de Suelo y Agua de 1946 (DOF, 1946). Esta ley, de visión conservacionista, fue adoptada por influencia del Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos, que entonces enfrentaba los estragos del fenómeno de degradación masiva de suelos conocido como *dust bowl* (Simonian, 1999: 140-143). Esta ley contemplaba diversas acciones para la conservación de los recursos naturales, incluyendo la formación de recursos humanos y la formación de la Dirección General de Conservación de Suelos, que se fue diluyendo en diversas instituciones hasta prácticamente desaparecer. La LCSA fue derogada en 1996 en el proceso de reforma de la ley ambiental.

#### Investigación sobre tecnología tradicional en los 60 a 80

Estos trabajos pioneros dieron base a varias líneas de investigación sobre tecnología agrícola tradicional desde la Comisión Nacional de las Dioscóreas, en los años 60 y 70 y el programa de investigación en Tecnología Agrícola Tradicional en el Colegio de Postgraduados de Chapingo con trabajos en Yucatán (Yaxcabá), Chiapas, Tabasco (Nacajuca), valles centrales de Oaxaca y Guanajuato. Igualmente, dichos trabajos fueron la base para la línea de investigación de validación de tecnología tradicional del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, que se mantuvo durante los finales de la década de los años 70 y mediados de los 80. Estas líneas de investigación tuvieron algunos aportes modestos a las políticas públicas como la inclusión de técnicas genéticas de selección masal, la comprensión del sistema de Roza-Tumba y Quema <sup>101</sup> y la inclusión de modalidades de milpa en los programas públicos (milpa maya, roza, pica – incorpora).

Estos esfuerzos fueron perdiendo fuerza en la medida que se consolidaba el paradigma de la Revolución verde y se iba perfilando cada vez más un enfoque agrícola de tipo industrial (mecanización, fertilizantes químicos, agrotóxicos, etc.) como prioridad de los programas de gobierno.

**Sistema Alimentario Mexicano.** En 1980, el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) fue un programa que tuvo por objeto estimular la producción de alimentos básicos mediante acceso a créditos, extensión y precios de garantía, entre otras estrategias (González, 1981).

---

<sup>101</sup> La RTQ es un sofisticado sistema ancestral de cultivo que consiste en el manejo mimético de la sucesión regenerativa de ecosistemas forestales con fases de siembra en policultivo (milpa) y varios usos extractivos en el periodo de descanso o *barbecho*. Por desconocimiento y prejuicio, se le ha tildado como depredador.

Después de tres años fue liquidado en el contexto de la crisis fiscal de esa época (Spalding, 1985).

A partir de 1983 se crea el Programa Nacional de Alimentación (Pronal), como una de las medidas de ajuste estructural para disminuir el gasto público reduciendo significativamente los subsidios relacionados con el consumo y producción de alimentos” (Barquera *et al.*, 2001).

**Ley de Fomento Agropecuario** (DOF, 1981). Como parte del impulso de la revolución verde y el Sistema Alimentario Mexicano, procuraba el fomento de la producción agropecuaria y forestal, con la asignación de recursos fiscales abundantes y el desarrollo de una red de atención a los productores en los Distritos de Desarrollo Rural.

### Las políticas públicas y sus instrumentos

#### *LDRS - Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 2001*

La LDRS fue decretada en 2001 (DOF, 2001) y derogó a la Ley de Fomento Agropecuario de 1981. No cuenta con reglamento, excepto el que corresponde al Consejo y a los sistemas. Esta ley procura un enfoque integral del desarrollo, constreñido tradicionalmente a la producción agropecuaria y, a la vez, incorpora la perspectiva ambiental. En el contexto de su generación, proveyó de un marco programático del que carecía un gobierno novato, emanado de la transición a la alternancia política, así como un diseño institucional para operarlo.

Se han hecho diversas críticas a esta ley (Herrera, 2013; Durand-Alcántara, 2009; Torres-Carral, 2008; Casas *et al.*, 2007), que señalan cuestiones como la falta de aplicación y diversas carencias, junto con aspectos útiles.

En cuanto a los avances que representa en términos de sustentabilidad se pueden mencionar la inclusión de los servicios ambientales y el capital natural como interés público, la prioridad de las inversiones que conduzcan a la conservación y recuperación del capital natural, la instrumentación de la lucha contra la desertificación, la regulación de la carga animal en agostaderos y la aplicación del principio de precaución, entre otros aspectos.

La LDRS tuvo varios proyectos derivados, entre los que se encuentran la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, promulgada al calor de los conflictos de ese sector productivo en la primera mitad de la década de 2000, el proyecto desechado de la Ley de Desarrollo Integral y Sustentable de la Cafecultura o la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.

#### *LGDFS - Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 2003*

De acuerdo con Mauricio Limón (2003), entre 1926 y 2003 hubo ocho leyes forestales, lo que muestra la oscilación de las orientaciones de política. La ley de 1926 buscaba la protección con vedas y parques nacionales; las de 1942 y 1947 promovían unidades industriales de explotación forestal; la de 1960 establecía la empresa paraestatal y la de 1986 otorgaba condiciones para la apropiación de los recursos por las comunidades campesinas, mientras que la de 1992 procuraba la desregulación y las condiciones para la expansión de las grandes empresas privadas; la de 1996 procuraba un equilibrio regulatorio y de reivindicación de los dueños de los recursos forestales, mientras que la ley vigente, de 2003 (DOF, 2016a), está dedicada reforzar a la Comisión Nacional Forestal (Chapela, 2017).

La ley vigente establece objetivos propicios a la conservación de los recursos naturales y también implica una interacción con el entorno agropecuario, así como algunos mecanismos para la gestión forestal y la regulación de esta actividad. Actualmente se encuentra en revisión en el Congreso.

#### *El paradigma del Desarrollo Sustentable.*

Después del Informe del Club de Roma (Meadows, 1972) se dieron paulatinamente las condiciones para cambios de política pública en algunos temas sensibles en ese tiempo como la contaminación, especialmente del aire; de esta corriente son la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental de 1971, la Ley General de Asentamientos Humanos de 1976, el Código Sanitario de 1973 (en 1984 sustituido por la Ley General de Salud) y la Ley de Planeación, de 1983, y como fundamento constitucional, la adición a la fracción XVI del artículo 73 del

6 de julio de 1971 referente a las medidas para prevenir y combatir la contaminación ambiental (Carmona, 1990); en 1982 se expide la Ley Federal para la protección al Ambiente y en 1988 la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, reformulada en 1995 (Ponce-Nava, 2013; DOF, 1995 y 1998).

Estos esfuerzos precursores tuvieron su asidero institucional primero en la Secretaría de Salubridad y Asistencia y, en 1976, en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, que en 1982 cambió a Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología para ser transformada, en 1988, en Secretaría de Desarrollo Social; en 1992 se creaban el Instituto Nacional de Ecología y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en sustitución de la subsecretaría de Ecología de la SEDUE. Adicionalmente, ese mismo año fue formada la Comisión Nacional para el conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).

### **LGCC – Ley General de Cambio Climático, 2012**

Esta ley deriva de los convenios internacionales en materia de cambio climático (De Vengoechea, 2012). Busca la generación de políticas y coordinación de acciones hacia la mitigación y adaptación al cambio climático (DOF, 2012b). Casi 20% de las emisiones de GEI son derivadas del uso del suelo y cambio de uso del mismo, conocido como USCUS (INECC, 2014), por lo que la sustentabilidad de la producción agrícola es uno aspecto importante para la reducción y captura de GEI. Entre las acciones más destacadas en este campo, está la iniciativa de Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación Forestal (REDD), que procura alinear las políticas de desarrollo rural para promover la aplicación de modelos productivos de bajas emisiones que coinciden generalmente con prácticas que se acercan a la agroecología (Deschamps *et al.*, 2015). Entre los trabajos para el diseño de una estrategia de REDD, se han establecido *acciones tempranas*, en las que se han generado y evaluado modelos para posteriormente expandir las alternativas más prometedoras como la milpa sustentable de bajas emisiones, la agricultura de conservación o los sistemas silvopastoriles intensivos.

Otras acciones en el marco de la LGCC son: la creación del Fondo de Cambio Climático; la instalación de la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático; la formulación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, visión 10-20-40; la aprobación del Impuesto al Carbono para combustibles fósiles; el Programa Especial de Cambio Climático 2013-2018, Estrategia de Mitigación (DOF, 2013); una Iniciativa para la Reducción de Emisiones (IRE) y el Reglamento del Registro Nacional de Emisiones (SEMARNAT, 2014). De acuerdo a Guzmán-Luna (2012), una ventaja para la aplicación de esta ley es que ya existen las estructuras que la pueden operar de manera transversal (CICC, 2013).

### **LBOGM - Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, 2005**

La LBOGM se deriva del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (Protocolo de Bioseguridad) del cual México es suscriptor (Agrobio, 2012). Contribuye a la agroecología en la medida en que incluye precauciones para evitar la pérdida de agrobiodiversidad y efectos sobre la diversidad silvestre. Es de interés por la presunción de riesgo para la biodiversidad y la salud humana que implica el uso de organismos genéticamente modificados (OGM) (DOF 2005a). Cuenta con su reglamento publicado en 2008 y un protocolo denominado Régimen de Protección Especial del Maíz. En la aplicación de esta ley están involucradas diversas dependencias oficiales entre las que destacan SAGARPA, SEMARNAT y SSA, agrupadas en la Comisión Interinstitucional de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM).

Aun cuando la LBOGM señala criterios precautorios sobre la liberación de los OGM en la agricultura, ha habido una fuerte polémica al respecto, que destaca evidencias sobre afectación a la salud humana y el efecto erosivo sobre el acervo de biodiversidad de los recursos genéticos (Acevedo-Gasman *et al.*, 2009; López-Barreto, 2015; Massieu-Trigo, 2009). A raíz de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, se desarrolla una batalla en tribunales entre la SAGARPA y las comunidades respecto del otorgamiento de permisos de siembra de OGM, así como una controversia entre el gobierno federal y el de Yucatán, que decretó al estado como libre de

OGM, lo que no es más que un plano de movilizaciones sociales frente a las corporaciones semilleras y productoras de agroquímicos asociados con los OGM en defensa del patrimonio biocultural y de la tierra<sup>102</sup>.

El caso de Yucatán es de extrema importancia por su carácter experimental, ya que se ensayan cuestiones como la confrontación entre derechos comunitarios y una línea de política pro – empresarial que encuentra límites que pueden escalar hacia temas tan trascendentes como la defensa de territorios frente a la minería o la aplicación de la reciente reforma energética, que tiene aspectos expropiatorios. También es un caso fundacional muy importante en términos del alcance y definiciones básicas del Estado mexicano, que tiene un carácter federal declarado, pero una práctica centralista donde el gobierno nacional tradicionalmente ha dictado políticas.

### **ENMST - Estrategia y Programa Nacional para el manejo Sustentable de Tierras 2010 - 2015**

La ENMST (SEMARNAT, 2010) fue formulada en el marco de la Convención de las Naciones Unidas de Combate a la Desertificación (ONU, 1994), como el plan de acción que dicho tratado obliga a los países suscriptores. Un lustro más tarde, la Estrategia daría lugar a un Programa (SEMARNAT, 2015), que establece las acciones, metas y recursos por aplicar a los objetivos del Programa; la Estrategia fue aprobada por el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, SINADES, órgano creado por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable como la instancia de coordinación de la Convención, mientras que el Programa no fue procesado completamente ni se espera que ello suceda en la actual administración.

La ENMST adopta ocho estrategias y una treintena de líneas de acción que incluyen la sensibilización, educación, monitoreo, investigación, acción internacional, convergencia entre convenciones y también la armonización y mejora de las políticas y el marco normativo.

Entre los aspectos de la ENMST hacia la agroecología, están el estudio, documentación, validación y aplicación de conocimiento agrícola tradicional; la innovación científica y tecnológica; la documentación de buenas prácticas; la difusión y capacitación sobre buenas prácticas, la asignación de recursos para la divulgación y el fomento de buenas prácticas; un enfoque preventivo y de carácter integral, bajo un concepto de práctica sustentable que incluye las tecnologías aplicadas así como en conjunto de condiciones (organización, acceso a mercados, etc.) que hacen viable la aplicación de técnicas sustentables.

En el contexto de las vísperas de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Biodiversidad (Cancún, diciembre de 2016), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, concluyó un largo proceso para la formulación de una Estrategia, que fue también resultado de las varias ediciones de los informes de país a esa Convención, conocidas como *El Capital Natural de México* (Sarukhan, 2009; CONABIO, 2009).

Esta Estrategia procura la instrumentación de las tres líneas señaladas por la Convención: el Conocimiento, el uso y el acceso equitativo a los recursos genéticos y sus beneficios (ONU-CDB, 1992). En cuanto a la perspectiva de uso, la Estrategia procura conciliar los aspectos de desarrollo con los Objetivos del Desarrollo 2030 y con las Metas de Aichi (PNUMA, 2013); el instrumento correspondiente para el aspecto de acceso a los recursos genéticos está encuadrado en el *Protocolo de Nagoya*, (ONU, 2010) instrumento vinculante de la propia Convención.

La ENBIO abarca líneas estratégicas con una perspectiva integral sobre la sistematización y generación de conocimiento, los saberes tradicionales, la ciencia ciudadana, el acceso a la información, el conocimiento, la conservación y restauración; conservación *in situ* y *ex situ*, restauración de ecosistemas degradados (incluyendo sistemas agroforestales y acciones para recuperación de suelos degradados), aprovechamiento sustentable; cadenas de valor, empresas sociales, prácticas sustentables en los sistemas productivos convencionales, diversificación de productos y mercados; criterios de conservación y uso sustentable en programas de gobierno, financiamiento y trámites.

---

<sup>102</sup> La batalla contra los transgénicos. url: <http://horizontal.mx/la-batalla-contra-los-transgenicos/>



Aunque los temas “biodiversidad” y “desertificación” no han merecido la misma atención que “cambio climático” y mucho menos que la modernización agrícola en modelo *revolución verde*, sí va proporcionando un cuerpo argumental que va filtrando en el discurso en la formulación de las políticas públicas.

### Políticas públicas que fomentan la agroecología

Se puede afirmar que en México no existen políticas públicas específicamente dedicadas a la agroecología, pero sí hay un interés creciente por la problemática ambiental, en parte derivada de la multiplicidad de acuerdos internacionales que establecen compromisos de sustentabilidad; de la insistencia, desde el sector ambiental, para un enfoque transversal; de nuevas preferencias del mercado y de la presión de organizaciones de productores y de organismos civiles vinculados a la problemática ambiental o del desarrollo, especialmente después de la instalación de la SEMARNAP – SEMARNAT y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Podemos reseñar, como principales políticas relacionadas con este tema, a la agricultura orgánica, el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, el Programa para el mejoramiento de Maíz y Trigo, MasAgro y el Programa de Desarrollo Sustentable, PRODERS.

### Agricultura orgánica

La agricultura orgánica incluye una variedad de modelos productivos que no necesariamente se ajustan al paradigma de la agroecología; en rigor, el carácter de orgánico está referido a la supresión del uso de fertilizantes sintéticos, plaguicidas, herbicidas u hormonas, pero bajo ciertos esquemas de certificación incluyen otros criterios adicionales. En esta categoría están productos provenientes de invernaderos o cultivados con acolchados plásticos o en invernadero, con grados altos de artificialización, junto con producción más apegada a los cánones agroecológicos.

La producción orgánica y la respectiva ley fomentan y regulan sistemas de producción más amigables con el medio ambiente y estimulan la organización de productores para productos específicos. Incluyen empresas agrícolas y pequeños productores organizados y han constituido una alternativa ante condiciones de volatilidad de los mercados y bajos precios.

Algunos beneficios de la producción orgánica son la reducción de contaminación y daños a la salud de los trabajadores agrícolas por el uso de agrotóxicos y la generación de fuentes de empleo, ya que su adopción requiere 30% más de mano de obra por hectárea con respecto a la producción convencional.

Aunque la producción orgánica tiende a ser aprovechada por segmentos empresariales de productores, se ha desarrollado un esquema de certificación participativa, con productores y academia, que posibilita la inclusión de pequeños productores, gracias a una mayor flexibilidad y costos accesibles (Maldonado *et al.*, 2013; Red de Tianguis Orgánicos de México, 2016). Es así un instrumento potencial para enfrentar problemas del campo, especialmente en agriculturas familiares (Gómez *et al.*, 2010; Gómez-Tovar *et al.*, 2015).

De acuerdo con Rita Schwentesius *et al.* (2016), la producción orgánica inició en la década de los 1960's con la certificación de café en Chiapas y en los 80 la crisis de precios del aromático impulsó la expansión de la certificación orgánica a Oaxaca; en tanto, otros productores, principalmente hortofrutícolas exportadores de Baja California y Michoacán se incorporaron a esta tendencia. En 1997 se creó la Certificadora Mexicana (CERTIMEX). La producción orgánica se ha polarizado con pequeños productores campesinos en el sur del país y productores capitalistas con operaciones de escala mayor en el norte y centro del país (Zamilpa, 2016).

La agricultura orgánica ha tenido un crecimiento constante en los últimos 20 años, con impactos benéficos en la creación de empleos directos y en la generación de divisas (ver Cuadro XX). Como se puede apreciar en la Figura 1, el café es el producto más importante con aproximadamente el 50%, seguido por las hortalizas, el aguacate y las hierbas aromáticas.



La superficie agrícola de cultivos orgánicos en México registró un acelerado incremento; en un período de apenas 12 años pasó de 21.265 hectáreas en 1996 a 378.693 hectáreas en 2008 y 512.246 hectáreas en 2012. Por su parte, el número de productores dedicados a estos cultivos aumentó casi 10 veces, al pasar de 13.176 a 128.862 productores en 2008 y a 169.570 en 2012” (Impulso Orgánico, A.C.)<sup>103</sup>; la producción exportada alcanza un valor de 141,4 millones de dólares (SAGARPA, 2015).

Las proyecciones y antecedentes permiten pronosticar un crecimiento continuado de la agricultura orgánica, a pesar de los problemas económicos y otros relacionados con cuestiones como la escasa aplicación de la ley, la dependencia de las certificadoras y acreditadoras extranjeras, las limitaciones de la certificación participativa y otras. Ortigoza *et al.* (2012) plantean una serie de acciones prioritarias para seguir impulsando la agricultura orgánica en México entre las que destacan: (1) Fomento para la transición; (2) Apoyo a la certificación orgánica y a los Sistemas Internos de Control; (3) Créditos con tasas preferenciales para el acopio y la comercialización de la producción; (4) Apoyo a la capacitación, asesoría técnica y formación de capital humano en la agricultura orgánica; (5) Programa de conservación y mejoramiento de los suelos para incidir en la productividad; (6) Compras institucionales. Participación del Estado en la demanda interna; (7) Retribución a los productores orgánicos por los servicios ambientales generados.

**Figura 28 - Valores de productos exportados**

Cultivo	Superficie (%)	Valor exportación (millones de US\$)	Porcentaje de las exportaciones (%)
café	32.5	38.8	27.5
Maíz	11.7		
Aguacate	9	43.1	30.4
Pasto	7		
Alfalfa	5.8		
Frijol	3.8		
Agave	3.5		
Sorgo	2.4		
Ajonjolí	2		
Plátano		21.4	15.1
Mango		19.2	13.6
Pimiento		18	12.7

Con rezago respecto del avance en la producción orgánica, en México se han desarrollado instrumentos jurídicos, regulatorios, de fomento y de diseño institucional.

### **LPO - Ley de Productos Orgánicos, 2006**

La Ley de Productos Orgánicos (LPO), promulgada en 2006 y cuyo objetivo central es promover y regular los criterios y/o requisitos para la producción orgánica en México, es la primera de este tipo, aun cuando en la práctica la producción orgánica tenía más de dos décadas en desarrollo. La LPO cuenta con un Reglamento (DOF, 2010) y sus respectivos Lineamientos para la Operación Orgánica (DOF, 2013b), así como un Distintivo Nacional de Productos Orgánicos (DOF, 2013a).

El Consejo Nacional de Producción Orgánica (CNPO), desde 2007 está contemplado en la LPO, como “órgano de consulta de la SAGARPA con carácter incluyente y representativo de los productores y agentes de la sociedad en materia de productos orgánicos” (CNPO)<sup>104</sup>. Por otro lado, el Servicio Nacional del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) tiene a su cargo la supervisión de la certificación, con una norma nacional.

<sup>103</sup> Consultado el 07-Nov-2016. url: <http://www.impulsoorganicomexicano.com/productos-organicos-en-mexico>

<sup>104</sup> Consultado el 07-Nov-2016. url: <http://www.cnpo.org.mx/presentacion.html>

En cuanto al fomento, se puede señalar que en los años subsecuentes de la promulgación de la LPO existe un concepto de apoyo en los programas de subsidio de la SAGARPA, principalmente destinado al pago de los gastos de certificación (SAGARPA, 2015 a).

### ***PESA - Programa Especial de Seguridad Alimentaria (Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria, a partir de 2008)***

El PESA es un programa que inició en México en 2002, como parte de la iniciativa “América Latina sin Hambre”, que propuso la FAO aprovechando la experiencia brasileña Fome Zero. Tiene cobertura nacional y es operada por la SAGARPA en coordinación con la FAO y a través de Agencias de Desarrollo Rural (ADR), (SAGARPA, 2013c).

En México, el PESA se instala como opción ante los resultados de la evaluación de la Alianza para el Campo, que mostró el sesgo fiscal regresivo y los problemas de los pequeños productores familiares para el acceso a los recursos de los programas (SAGARPA, 2013c). En el diseño del PESA se establece un enfoque territorial, de tipo integral, así como un abordaje multidisciplinario, congruente con lo anterior, mediante el establecimiento de Agencias de Desarrollo Rural que actúan sobre los diversos aspectos y necesidades de comunidades en un territorio específico y no sólo sobre la producción agropecuaria primaria. Su enfoque es hacia la creación de capacidades persistentes y atención hacia el desarrollo de mercados locales y el uso de los alimentos, considerando a la vez la producción local y el incremento diversificado de los ingresos familiares. (SAGARPA, 2016). El método de intervención se centra en las unidades familiares y no en los productores aislados, la participación comunitaria y la autogestión SAGARPA-FAO (2014). En sus documentos el PESA enfatiza el enfoque de género, la sustentabilidad y, en muchos casos, la visión agroecológica (FAO-SAGARPA, 2016).

La estrategia del PESA considera etapas: (1) impulso al hogar saludable a través de temas nutricionales y de higiene, estufas ahorradoras de leña, almacenamiento de granos y cisternas para cosecha de agua; (2) de producción de alimentos a través de huertos de traspatio, gallineros, árboles frutales, milpa, y obras de captación y almacenamiento de agua a nivel comunitario; (3) generación y diversificación de ingresos a través de producción intensiva de alto valor para el mercado, cultivos orgánicos, industrialización de productos agropecuarios o turismo rural, entre otros (SAGARPA-FAO, 2014).

El PESA amplió su cobertura a 24 estados, 862 municipios y a 10.568 localidades, en las cuales opera 262.742 proyectos con 201.858 familias. En el proyecto participan 361 Agencias de Desarrollo Rural (ADR) y 22 Agencias COUSSA-IPASSA (SAGARPA-FAO, 2014).

El PESA se ha identificado como el esquema más eficaz para intervención en zonas con escaso desarrollo económico, a pesar de la existencia de vicios y fallas, como su estructura vertical, el sesgo clientelar, el alto costo de intervención y la exclusión de comunidades por límites en la capacidad de cobertura del proyecto.

### ***COUSSA - Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (2002)***

Este programa inició en 2003 como uno de los acuerdos para el campo derivados de la movilización El Campo no Aguanta Más!: básicamente concertado como un esquema de fomento a buenas prácticas de manejo de tierras, que frenaran y revirtieran su degradación. Ha sido operado por la SAGARPA y la CONAZA (SAGARPA, 2013a). Es de cobertura nacional, aunque no abarca todos los municipios. Debido a inercias y paradigmas de los funcionarios a cargo, el COUSSA fue transformándose en un programa de inversiones en infraestructura, siguiendo la ruta del antiguo programa de conservación de suelo y agua, contenido en la Ley de 1946. En 2016 esos cambios fueron reflejados en el cambio de nombre del programa para convertirse en *Inversiones para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua*, IPASSA (SAGARPA, 2016 a).

De ser un programa esencialmente de cambio de prácticas de manejo de tierras, basado en la creación de capacidades y la planeación productiva en parcela, el COUSSA se fue orientando a la transferencia de activos privados, principalmente para adquisición de insumos, no muy diferente de otros programas convencionales; cada vez más, posteriormente, fue creciendo la importancia del financiamiento a la construcción de infraestructura,

adquisición de equipamiento productivo y realización de obras, también convencionales, de conservación de suelos. Para 2016, el IPASSA apoya dos tipo de obras: las obras: para captación, manejo y almacenamiento de agua y para el aprovechamiento sustentable de suelo y vegetación (CONAZA, 2016).

Figura 29 -Cobertura geográfica y beneficiarios del COUSSA 2013-2015

AÑO	ESTADOS	MUNICIPIOS	LOCALIDADES	BENEFICIARIOS
2013	19	153	263	10.238
2014	32	384	721	21.024
2015	32	233	401	8.134

Fuente: CONAZA (2016).

### *MASAGRO - Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (2010)*

También en los Acuerdos para el Campo de 2003 (SAGARPA – organizaciones campesinas) se estableció el rescate y mejoramiento de la agricultura tradicional y la inversión para el aumento de la productividad de maíz y trigo en regiones de pobreza y marginalidad; hasta 2011, mediante acuerdo entre SAGARPA y el CIMMYT, empezó, operado por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP (Hernández, 2014). La meta del MASAGRO es ambiciosa: incrementar 85% la producción nacional de maíz y 10% la de trigo en diez años en condiciones de temporal” (SAGARPA, 2013b).

Muy lejos del enfoque de los trabajos pioneros sobre agricultura tradicional, MasAgro instaló doce nodos o *hubs*<sup>105</sup>, 43 plataformas de investigación y 452 módulos demostrativos que desarrollaron, evaluaron, adaptaron y difundieron prácticas y tecnologías agronómicas sustentables y arrancó un programa intenso de mejoramiento de maíces y trigos de México y Centroamérica. En 2015<sup>106</sup> el incremento del rendimiento de maíz fue 20,5% y en trigo 2,8%; los ingresos en maíz se elevaron 23% y trigo 4% los de trigo en relación con unidades productivas testigo en las mismas localidades.

Masagro replica los métodos y filosofía tradicionales del CIMMYT y de la Revolución verde, abocado no a los sistemas productivos ni al complejo de las unidades de producción de pequeños productores, sino sólo a dos cultivos, mediante el desarrollo de los también convencionales paquetes tecnológicos estandarizados. Por otro lado, incorpora algunas prácticas, como la rotación de cultivos, la incorporación de materia orgánica y la reducción del uso de agroquímicos. El paradigma de MasAgro es la labranza de conservación, que presenta claroscuros, como el uso de herbicidas y eventualmente, con éstos, de semillas transgénicas y, por lo general, semillas híbridas generadas por corporaciones, que desplazan a las semillas criollas y las prácticas de selección por los productores, lo que es semejante a lo que ocurre en otros países de la región, como Argentina, Paraguay o Brasil.

Aunque en 2016 desapareció el programa, se incorporó como Estrategia Transversal (CIMMYT, 2015: CMDRS, 2016) y la perspectiva es operarlo como proyecto estratégico, mediante lo cual escapa a las disciplinas de las Reglas de Operación a las que están sujetos los demás programas.

### *Otros programas y componentes.*

El conjunto de programas, subprogramas, componentes y conceptos de inversión de la complicada trama construida en torno al ejercicio presupuestal arroja más de 300 modalidades de instrumentos de fomento de que disponen las dependencias de gobierno para modular el desarrollo del campo y orientar los enfoques productivos (Chapela y Álvarez, 2007).

Numerosos y arduos esfuerzos se han emprendido a fin de alinear los programas en sentido ambiental o sustentable. Se pueden mencionar las disposiciones expresas de *conurrencia* contenidas en la LDRS y su

<sup>105</sup> “hubs” o nodos de innovación.

<sup>106</sup> Información de MasAgro: <http://masagro.mx/index.php/es/componentes/masagro-productor> (7-ene-2017)

instrumento principal, el Programa Especial Concurrente (PEC); la campaña de “enverdecimiento” de la SAGARPA al ocupar su conducción el anterior secretario de Medio Ambiente; el programa de *transversalidad* intentado por la SEMARNAT durante los sexenios de 2000 a 2012; las propuestas y acercamientos en el marco de la Convención contra la Desertificación, de la efímera Dirección General de Conservación de Suelos; los *planes de inversión* ensayados por el Corredor Biológico Mesoamericano; los *proyectos estratégicos* impulsados por la Alianza México REDD+, entre muchos otros de carácter nacional o local.

A pesar del limitado alcance obtenido por todas y cada una de dichas iniciativas, se puede destacar que ha habido paulatinas transformaciones en la apertura programática y en las características de las reglas de operación de los programas. Por ejemplo, el principal programa de subsidios a la producción ganadera, PROGAN, define inversiones para el aumento de la capacidad forrajera y el auspicio de sistemas silvopastoriles, así como un menú de prácticas *sustentables*; el Fideicomiso de Riesgo Compartido abrió una línea de financiamiento a *proyectos ecológicos*; la Financiera nacional de Desarrollo incorporó algunos reactivos dedicados a la sustentabilidad dentro de sus protocolos de selección de proyectos; en diversos programas de fomento agrícola se incluyen conceptos de inversión en cuestiones como la biofertilización o el control biológico de plagas.

### Iniciativas de políticas públicas “congeladas” o en proceso que pueden contribuir a la transición agroecológica

#### *Legislación para la soberanía alimentaria. LPSSAN - Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional (2005); reforma constitucional en materia de derechos humanos*

La idea de la soberanía alimentaria<sup>107</sup> es motivo de debates desde, por lo menos, la década de los '60. En la línea principal de esta discusión está el papel de la agricultura familiar y su carácter multifuncional, así como una convergencia con el paradigma de la sustentabilidad, de manera que los promotores de la soberanía lo son también de la sustentabilidad, en términos generales.

Tomando en cuenta que la doctrina económica prevaleciente es contraria a la idea de la suficiencia o soberanía alimentaria, es un hecho notable que la LDRS contenga un capítulo dedicado a este propósito y establezca, entre otras cosas, que debe garantizarse la producción de los principales productos destinados a la alimentación, caracterizados como básicos (maíz, trigo, sorgo, arroz, azúcar, frijol, huevo, leche, carne de bovino, porcino, aves y pescado) así como productos estratégicos que deben protegerse por su importancia en el desarrollo rural (se incluyó el café y está en discusión la inclusión de productos forestales).

Con el aliento de la LDRS, propuestas y movilizaciones campesinas que ganaron una representación importante en el Congreso en el período 2003-2006, lograron que la legislatura formulara, presentara y aprobara en primera instancia una ley de esta materia, aunque el gobierno y su coalición legislativa logró suspenderla en el proceso revisor en el Senado y posteriormente fue desechada<sup>108</sup> (Fox y Haight, 2010; Suárez, 2008).

Este proyecto de ley establece, entre otros aspectos, un papel preponderante de las agriculturas familiares y un claro enfoque de sustentabilidad (manejo integral de plagas, reducción de agroquímicos, desarrollo de tecnologías *apropiadas*, mejora genética con variedades de polinización abierta), una orientación de *manejo de oferta* (supply management, en inglés), la formación de reservas, el desarrollo de mercados regionales, la reducción de desperdicios alimentarios y otras disposiciones principalmente orientadas de manera programática (Cámara de Diputados, 2005).

---

<sup>107</sup> Soberanía alimentaria: la Ley de Desarrollo Rural Sustentable la define como: “libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional”

<sup>108</sup> En esta página la LPSSAN aparece como DESECHADA en 2014.

[http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp\\_HPProcesoLegislativo.php?SID=60fde1f203cb4767b051ebbb622f8c1c&Seguimiento=2237791&Asunto=](http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_HPProcesoLegislativo.php?SID=60fde1f203cb4767b051ebbb622f8c1c&Seguimiento=2237791&Asunto=)

No obstante el desenlace negativo de la Iniciativa de la LPSSAN, las campañas en torno a la soberanía alimentaria, auspiciadas también internacionalmente (De Schutter, 2011) hicieron posibles, en 2011, dos importantes reformas en el contexto de la adecuación de la constitución mexicana. La primera, es incluir el derecho humano a la alimentación en el texto y la segunda, establecer el mandato de proveer la alimentación por medio del desarrollo rural integral y sustentable, en el artículo 27, que incluye la base de la reforma agraria y de las modalidades de la propiedad (México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Aunque existe gran distancia entre el texto constitucional y las políticas específicas, esta reforma continúa alentando los esfuerzos por, a la vez, instrumentar los conceptos y medidas que animan esta corriente y también insistir en la necesidad de un marco jurídico robusto en esta materia.

### *Ley MST. Ley para el Manejo Sustentable de las Tierras.*

La creación de la SEMARNAP en 1994, significó la incorporación de la lucha contra la desertificación, la creación de una dependencia dedicada a este tema, en nivel de dirección general (tercer nivel jerárquico) y, con ello, la revisión de la política de conservación de suelos, extraviada en los organigramas y programas de los últimos 30 años. El Programa Sectorial Forestal y de Suelos 1995-2000 (SEMARNAP, 1995) contempló, entre otras cosas centrales, la revisión del marco jurídico para dar centralidad y potencia al tema, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Ya en 1995 fue formulado un primer proyecto legislativo para esa materia, a la vez que era derogada la ley de Conservación de Suelo y Agua, de 1946. En 2005 la Cámara diputados aprobó una iniciativa de Ley para el Manejo Sustentable de las Tierras, que posteriormente fue desechada por el Senado y en 2009 fue presentada en ese mismo órgano una nueva iniciativa que no fue dictaminada.

El proyecto de la ley MST se centra en la instrumentación de la concurrencia y la armonización de políticas, principalmente a través de la transferencia masiva de buenas prácticas probadas por los productores y de la revisión del diseño de los programas y la arquitectura de gobernanza, para la aplicación del esquema de *Contratos de aprovechamiento de tierras*, con los que se ordena la aplicación de la batería de programas para la ejecución de *planes de manejo de tierras*. Estos planteamientos están históricamente relacionados con el desarrollo de los planteamientos sobre desertificación y manejo sustentable de tierras, en un continuo desde 1995, alineados con los conceptos y líneas estratégicas de la Estrategia Nacional para el Manejo Sustentable de Tierras.

### *LGB – Ley General de Biodiversidad*

En vísperas de la celebración de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica, fue presentada por sorpresa una iniciativa de Ley General de Biodiversidad, (Cámara de senadores, 2016) que suscitó fuertes reacciones de diversos organismos sociales y grupos académicos, que hizo frenar el proceso legislativo y abrir la discusión al respecto, la cual se encuentra inconclusa.

En la situación actual, la mayor parte del marco jurídico relacionado con la Biodiversidad se encuentra en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Vida Silvestre, además de aspectos específicos o referencias en otras leyes como la de Desarrollo Rural Sustentable y la LBOGM.

En la revisión de la iniciativa han surgido contenidos que afectan a la agricultura agroecológica, principalmente la carencia de referencias y consideraciones respecto de la agrobiodiversidad, que debería incluir, para efectos de la ley, la protección de los agroecosistemas, el fomento de la selección y el manejo de germoplasma de polinización libre, la protección y fomento de los conocimientos tradicionales, la protección contra el uso de semillas transgénicas y las controladas por las corporaciones semilleras, así como la regulación del acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios económicos provenientes de éstos, en los términos del Protocolo de Nagoya (ONU, 2010).

### Movimientos sociales organizados

“El campo no Aguanta Más” y el Acuerdo Nacional para el Campo (2003)

Este movimiento sintetiza un proceso cuyo origen se puede rastrear en los finales de los años '70, cuando los movimientos sociales posteriores a 1968 se radicalizaron y a la vez incorporaron de manera orgánica a grupos y agentes ligados a los ámbitos académicos; esta composición de liderazgo y nuevo discurso propuso el desarrollo de organizaciones de nuevo tipo (Gordillo, 1988), ante el agotamiento del modelo corporativo de las organizaciones sujetas al partido oficial.

Este proceso dio lugar a la constitución de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), que a su vez prohijó directa o indirectamente, nuevas organizaciones especializadas en servicios financieros, comercialización de granos, forestal, de abasto de insumos y productores de café. En este proceso, que tuvo lugar entre 1980 y 1995, se incorporó un discurso y prácticas orientadas hacia las preocupaciones ambientales, el carácter multifuncional de la agricultura, la reivindicación de la agricultura familiar y los conocimientos tradicionales, entre otros aspectos críticos al modelo de la *revolución verde* (Chapela, 1998).

El relevo de los mandos federales en 2000 inauguró la alternancia en México y con ella un trato hostil a las organizaciones campesinas y un vacío programático en un gobierno sin experiencia en la compleja gestión del desarrollo rural. El último aspecto fue manejado con cierto éxito gracias a la LDRS y al proceso de discusión mismo, que sirvió en la formulación del plan de gobierno del régimen entrante.

La relación con las organizaciones campesinas no tuvo igual suerte y provocó rápidamente la reacción ríspida de cafetaleros, cañeros, productores de piña, demandantes de tierra y otros que, de manera más o menos espontánea y desorganizada se manifestaron en defensa de sus reivindicaciones, a través de 2001 y 2002. En esa coyuntura un grupo de organizaciones provenientes de la matriz de UNORCA formularon el lema *El campo no Aguanta Más*, que logró nuclear a las organizaciones campesinas más importantes como el Congreso Agrario Permanente, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, UNORCA y otras más, en torno al cumplimiento de la LDRS, el incremento del presupuesto al campo, la revisión de los términos de aplicación y contenidos del TLC y la reivindicación de la demanda agraria pendiente (Suárez, 2005).

La movilización logró establecer acuerdos para el desarrollo de mesas temáticas con la participación gubernamental del más alto nivel, coordinada por el secretario de gobernación, dirigentes campesinos y académicos, entre las que se estableció una mesa de trabajo especializada en la perspectiva ambiental, que reivindicó los aspectos de conservación de la biodiversidad, las tierras, el agua, los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y los agroecosistemas con una perspectiva territorial.

El producto de las mesas de trabajo fue un *Acuerdo Nacional para el Campo* con 286 puntos específicos, plazos y recursos comprometidos, que debía entrar en vigor desde el segundo trimestre de 2003 (Gobierno mexicano – organizaciones campesinas, 2003).

El Acuerdo ha tenido una aplicación dispar y declinante, en la medida que ocurrió el reflujó del movimiento y el gobierno adoptó una política de negociación bilateral con aportaciones particulares y cuotas por organización en el manejo de recursos públicos y en transferencias financieras directas a las dirigencias y aparatos administrativo – político de las organizaciones.

Desde entonces, no se ha visto nuevamente la convergencia de las organizaciones, excepto por un periodo en que se mantuvo un pequeño núcleo formado por las organizaciones derivadas de UNORCA y algunas más, bajo el nombre de *Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas* (CONOC), que sobrevivió hasta 2012, y un intento por reeditar el movimiento a través de la coalición de cinco organizaciones aglutinadas bajo la

denominación *El Campo es de Todos*, que no logró convocar a una coalición capaz de negociar un programa para el campo en la coyuntura de cambio de gobierno en 2012.

No obstante sus limitaciones, *el Campo no Aguanta Más* y los acuerdos de 2003, son un hito en las políticas públicas en México, que han dejado un marco programático y conceptual que sigue teniendo vigencia e influencia en diversos episodios de debate sobre políticas públicas.

### **Sin maíz no hay país y la lucha contra los transgénicos**

De manera simultánea y sucesiva a *El Campo no Aguanta Más*, una parte del núcleo de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) formularon una campaña permanente sin formato de organización, tomando la figura del Popol Vuh en la célebre novela del guatemalteco Miguel Ángel Asturias (*Hombres de Maíz*, 1949). Esta campaña, con una mayor composición de Organismos civiles de activismo, fue impulsada por la dirección de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de productos del Campo (ANEC) ([www.anec.org](http://www.anec.org)). Retoma los temas esenciales del movimiento anterior, aunque centrada en la agricultura familiar en torno al cultivo de la milpa (url: <http://sinmaiznohaypais.org/>) y adopta un perfil del tipo de las organizaciones de activismo como Greenpeace.

La Campaña ha establecido vínculos con otros movimientos y organizaciones, como la *vía campesina*, el Grupo de Estudios Ambientales, *El Poder del Consumidor* y el Frente por el Derecho a la Alimentación, por mencionar algunos. En coalición con la UCCS - Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (<http://www.uccs.mx/>), ha sido uno de los principales promotores de la lucha en contra de la liberación de permisos de siembra de semillas transgénicas.

El Grupo de Estudios Ambientales ([www.geaac.org](http://www.geaac.org)) es uno de los organismos civiles con mayor antigüedad en México, siempre orientado hacia el desarrollo de las comunidades campesinas, el rescate de la cultura vernácula, el desarrollo tecnológico apropiado, así como temas urbanos, con un énfasis en los procesos participativos (Marielle, 2012). Ha jugado un papel importante en el movimiento *sin maíz no hay país* y ha llevado a cabo numerosos proyectos y trabajos de campo en torno al manejo sustentable de los recursos naturales, la agricultura y el manejo forestal comunitario.

La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS; <http://www.uccs.mx/>) es una organización formada por científicos de campos diversos de las ciencias naturales, sociales y las humanidades, con una actitud crítica frente a la sociedad y el ambiente. Atienden temas de agricultura, sustentabilidad, cambio climático, bosques y selvas, entre otros. Está cercanamente relacionada con la Union of Concerned Scientists, de los Estados Unidos (<http://www.ucsusa.org>) y otras organizaciones nacionales e internacionales (Vandame, 2012).

### **Vinculación Academia – Productores**

Son diversos los grupos interdisciplinarios que han colaborado en la transición a la agroecología, desde la década de los 1970s, hasta la actualidad. Algunos han hecho aportes en la parte conceptual y metodológica (ver Gliessman, 2013), en tanto que otros han tomado la acción como su forma de contribuir a la difusión del pensamiento agroecológico. Un factor que ha facilitado la interacción academia – productores es la tradición de estudios sobre la diversidad socio-ambiental del país y la persistencia de conocimientos sobre la agricultura tradicional.

### **TAT – CSAT – Grupo de estudios sobre Tecnología Agrícola Tradicional del CSAT**

Los estudios en Tecnología Agrícola Tradicional (TAT), que tienen como referencia a Efraím Hernández Xolocotzi, fueron la base y escuela para el desarrollo de la agroecología en México. En marzo de 1978, el seminario celebrado en el Colegio Superior de Agricultura Tropical en Cárdenas, Tabasco (CSAT), puso al día el estado de esos estudios en las memorias que, con el título “Los Agroecosistemas con atención especial al estudio de la Tecnología Agrícola Tradicional (TAT)” (Gliessman, 1978), han sido referencia para esta corriente.



El grupo de trabajo del CSAT, dentro del programa de *Ecología* de ese centro académico, estaba estrechamente vinculado, además de con Hernández X., con D.H. Jansen, uno de los autores que formularon el concepto de agroecosistema (Jansen, 1973). En 1985 el CSAT fue clausurado, pero persisten los trabajos de investigación y la formación de investigadores que posteriormente han contribuido en el desarrollo y práctica de la agroecología en México.

**GIRA, AC. – Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropriada** <http://www.gira.org.mx/>

Es una ONG conformada por profesionistas comprometidos con la misión de difundir las tecnologías apropiadas para comunidades rurales. En especial difunden tecnologías agroecológicas y ecotecnologías como las estufas ahorradoras de leña. Desde ese grupo se ha diseñado y mejorado el Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo utilizando Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS), el cual es utilizado ampliamente en diversos países (Maserá, et al, 1999). Su trabajo va desde la compilación y análisis de bases de datos hasta el impulso y participación en movimientos académicos y sociales en torno a la agroecología y el manejo de los recursos naturales con énfasis en comunidades rurales, tanto en México como en otros países. Algunos de los fundadores son discípulos de reconocidos agroecólogos como Miguel Altieri y otros.

**Red de tianguis orgánicos** (<http://tianguisorganicos.org.mx/>)

Esta red incluye una cincuentena de mercados de productos orgánicos en varias ciudades del país, basados principalmente en esquemas de vinculación directa de los productores con los consumidores y certificación participativa.

Con una diversidad de enfoques, la red se vincula con iniciativas organizativas, de mejora productiva, intercambio de conocimientos y tiene un papel y potencial para ser vía de difusión de producción agroecológica, más allá de la producción orgánica.

### Centros demostrativos no gubernamentales en agroecología y Eco-tecnologías

En favor del fomento de la agroecología y la producción orgánica, en México se han desarrollado diversas organizaciones que realizan su trabajo a través de demostraciones, capacitación y acompañamiento en proceso organizativos, como Las Cañadas – Bosque de niebla (Huatusco, Veracruz)<sup>109</sup>; Alternare, AC (Áporo, Michoacán)<sup>110</sup>; Alternativas y Procesos de Participación Social, A. C.<sup>111</sup> y muchos otros.

Estos organismos frecuentemente comparten perfiles de acción, como el método de enseñanza es “aprender haciendo” o la difusión y capacitación de “campesino a campesino”. En el desarrollo de estos centros se nota una influencia regional de América central y del sur, así como el enfoque de permacultura de Europa. Todos son parte de la construcción de la parte práctica de la agroecología y hasta el momento han tenido gran aceptación de los productores y de público en general. Algunas de estas experiencias están ligadas a procesos organizativos campesinos, como la Sociedad de Solidaridad Social Zanzekan Tineme, de la región de la Montaña, en Guerrero, la cooperativa Tosepan Titataniske, en la Sierra Norte de Puebla, entre muchos otros casos.

Se puede mencionar también la existencia de centros demostrativos y de capacitación de carácter gubernamental, como el de Villadiego, ubicado en el estado de Guanajuato y auspiciado por el Fondo de Garantía y Fomento a la Agricultura (FIRA), o el Centro Nacional de Productividad, CENAPROS, orientados a la promoción de prácticas agrícolas sustentables, especialmente la labranza de conservación, controvertibles como modelo monocultural intensivo en uso de maquinaria y agroquímicos (Cervantes, 2017).

---

<sup>109</sup> <http://www.bosquedeniebla.com.mx/quicooint.htm>

<sup>110</sup> <http://www.alternare.org/>

<sup>111</sup> [www.alternativas.org.mx/hacemos\\_agua.html](http://www.alternativas.org.mx/hacemos_agua.html)



En México la pérdida de la Suficiencia alimentaria ha marcado un derrotero de dependencia alimentaria creciente que se ha decantado al ritmo de la aplicación de modelos tecnológicos también dependientes de insumos y equipos; este proceso agudiza la polarización entre la producción agrícola de corte industrial y las agriculturas familiares. La coyuntura actual de México frente a Estados Unidos coloca a México en una perspectiva que combina la reducción de exportaciones a ese país con el que se ha alcanzado un 80% del flujo de exportaciones y de donde proviene una de las fuentes más importantes de divisas, generadas por una enorme población migrante; ambos flujos vitales están amenazadas por las políticas que se ya se instrumentan.

Otro aspecto importante de mencionar y considerar es el creciente deterioro de los recursos naturales, tanto en su composición como en su funcionamiento. La cobertura vegetal, los suelos y las aguas continentales han sufrido desde décadas un fuerte impacto y han reducido su capacidad de proveer los servicios ecosistémicos.

La agricultura agroecológica tiene potencial para proveer una vía de intensificación con alta composición de mano de obra ávida de oportunidades y con una dependencia mínima de factores productivos externos a las parcelas, especialmente si se toman medidas para el desarrollo de mercados regionales.

No obstante lo anterior, son prácticamente inexistentes las políticas públicas para el fomento de la producción agroecológica, que es mayormente desconocida, tanto en el mercado de productos como en el mundo de los productores y de los agentes abocados a la formulación y ejecución de las políticas públicas y es casi insignificante la superficie bajo producción en esta modalidad, cuando aún la producción orgánica alcanza solamente un 1,9% de la superficie agrícola del país, aunque está creciendo y se espera lo siga haciendo en los próximos años (Gómez-Tovar *et al.*, 2015).

Se puede advertir inconsistencia en el desarrollo de instrumentos de política, que se muestra en la orientación contradictoria de leyes, programas, composición del presupuesto y diseño institucional.

No obstante, sí se debe señalar que van permeando elementos de sensibilidad ambiental y algunos incipientes elementos de avance hacia una producción sustentable en el discurso y los contenidos de las políticas públicas, así como en información y preferencias de los consumidores en el mercado, especialmente entre clases medias y altas.

González (1981), en las conclusiones de un análisis a la Ley de Fomento Agropecuario, hizo referencia a la necesidad de integrar los subsectores agrícola, pecuario y forestal en un sistema agroecológico para fomentar la producción, es decir, tenía la visión de la agricultura como un sistema complejo que debía ser abordado así y no de manera sectorizada como normalmente se ha hecho (UNAM, 1981). Años después, se pueden observar algunas iniciativas, no siempre marginales, para la instrumentación de este tipo de aproximación a la producción, como son la recuperación de la milpa maya (Terán y Rabasa, 2016) o las acciones tempranas de producción sustentable de bajas emisiones promovidas por la Alianza M-REDD+ (Cepeda y Amoroso, 2016).

Se puede considerar que, desde la Cumbre de la Tierra (1992) se ha logrado el desarrollo de toda una generación de políticas, instrumentos e instituciones que van mucho más adelante de su instrumentación, a la vez que su puesta en práctica ya muestra la necesidad de revisarlas y reformarlas profundamente, lo que es un desafío general en un contexto de profundo descrédito de las instituciones públicas, tanto en el campo del poder Ejecutivo como el legislativo, mientras que apenas es incipiente el papel de los órganos jurisdiccionales y los procesos judiciales en la gestión del desarrollo y la resolución de controversias.

El marco jurídico mexicano es robusto y con abundantes contenidos orientados a la protección del capital natural; uno de los filones más interesantes por aprovechar es la mejora del marco de derechos humanos y, a contrapelo, una de las amenazas más fuertes para la agroecología y los agroecosistemas, es la reforma energética y el

fortalecimiento de la minería como aspectos prioritarios del interés y utilidad pública, que se van orientando hacia el despojo de comunidades y destrucción de la base productiva natural.

Por otro lado, la circunstancia económica que se sigue manteniendo en un estado de crisis o semi crisis crónica desde 2008, la baja de precios petroleros, la desincorporación y desinversión pública en el sector energético y la corrupción sistémica han conducido a una situación de quiebra financiera que se refleja en una reducción presupuestaria drástica, por ejemplo, de 60% a la Comisión Nacional Forestal o 45% a la Secretaría de Agricultura (Presupuesto de Egresos de la Federación 2017; DOF 2016c). En estas condiciones, ha tenido lugar el desmantelamiento de áreas completas de la estructura gubernamental, la cancelación de proyectos y programas, lo que hace muy difícil la instalación de una nueva política como la agroecológica: no queda a la vista quién podría llevar adelante una posible conversión agroecológica ni con cuáles recursos lo haría.

Un reto que persiste es la inercia en el paradigma de la agricultura industrial, con sus problemas de dependencia, expulsión de mano de obra y daños al capital natural. Reconociendo la existencia de resquicios ambientales y socialmente sensibles, la corriente abrumadoramente dominante es la de las corporaciones del agronegocio, cada día más abiertamente presentes y beligerantes hasta el grado de que el gobierno se encuentre litigando en tribunales en contra de comunidades de Yucatán que han frenado judicialmente la siembra de soya transgénica (Demanda Colectiva, 2016).

Programas con asignaciones sustanciales de presupuesto se orientan principalmente a la producción empresarial con perfil de revolución verde e incluyen coberturas de precios, agricultura por contrato y otras formas de subsidios captados en su inmensa mayoría por los productores comerciales medianos y grandes. Mientras, programas como el MasAgro atiende a productores pequeños con una versión barata de las opciones tecnológicas de la agricultura comercial industrializada, con el uso de semillas que los productores no pueden controlar, y paquetes homogéneos de monocultivo con uso de agroquímicos. Para Turrent *et al.* (2014), la mayor debilidad de MasAgro es “la estrategia de sustituir entre 25 y 50%, de la superficie ocupada por los maíces nativos y las variedades acriolladas, lo cual se considera inadecuada para México” ya que con ello tratan de estandarizar con variedades homogéneas en ambientes que por naturaleza son diversos y es ahí donde se han generado y adaptado las variedades nativas.

El CEMDA (2016), además, cuestiona que el Masagro (i) omite la consulta, -conforme al derecho internacional (Convenio 169 de la OIT)- a los pueblos indígenas; (ii) Los datos de rendimientos no incluyen las condiciones de sitio donde se desarrollaron los ensayos de campo; (iii) El programa puede desplazar a los maíces nativos; (iv) incurre en conflicto de interés al promover las semillas de las corporaciones y; (v) genera un traslape entre las plataformas experimentales de MasAgro y las regiones indígenas.

La agricultura orgánica, con aspectos afines a la agroecología, tiende a incrementarse tanto en superficie como su importancia económica. Sin embargo es importante notar que la certificación se aplica principalmente para productos de exportación y no para la seguridad alimentaria y, además, los sistemas de producción orgánica no necesariamente son sistemas agroecológicos, ya que en algunos casos se trata de sustitución de insumos. En el contexto mencionado de dominación de los agronegocios, la agricultura orgánica está siendo absorbida por las grandes corporaciones como una más de sus opciones comerciales (Zamilpa *et al.*, 2016). Sólo con una definición muy clara de las condiciones para el desarrollo de una agroecología que responda a las exigencias de un campo urgido de oportunidades de empleo y, consecuentemente, de opciones productivas diferentes de las de la agricultura industrial, así sea de tipo orgánico.

Adicionalmente a lo anterior, un obstáculo para el desarrollo de la agricultura orgánica y la agroecología en el corto plazo, puede seguir siendo el alto precio de los productos orgánicos que por tanto no están al alcance de la mayoría de la población. A pesar de ello, existe la oportunidad de contribuir a la adopción de una cultura alimentaria sana sobre todo en las comunidades tradicionales del medio rural y de un sector informado en el sector urbano. El desarrollo de mercados regionales y la agricultura periurbana, con posibilidad de contacto

directo a través de mercados como los que está generando la Red de Tianguis Orgánicos puede ser una vía principal para enfrentar este desafío.

La agroecología se ha desarrollado muy ligada con el quehacer académico y éste es determinante para la transición agroecológica, sin embargo, también en este ámbito se resiente la presencia del modelo dominante de agricultura, en el número de publicaciones, investigadores, estudiantes o presupuesto, lo cual está a la vez relacionado con la lógica del financiamiento a la investigación y la de las remuneraciones a los investigadores que, en el esquema del Sistema Nacional de Investigadores, dependen del financiamiento para el desarrollo de su actividad. En la medida que las compañías financian la actividad académica, la investigación, divulgación y formación de profesionistas reproduce el desequilibrio de resultados en contra de opciones como la agroecología.

## Referencias bibliográficas

- Acevedo-Gasman, F., et al. 2009. La bioseguridad en México y los organismos genéticamente modificados: cómo enfrentar un nuevo desafío, en *Capital natural de México*, vol. II: Estado de conservación y tendencias de cambio. Conabio, México, pp. 319-353.
- AgroBio Mexico. 2012. Marco regulatorio de los organismos genéticamente modificados destinados a la agricultura. url: [http://www.agrobiomexico.org.mx/publicaciones/Marco\\_Regulatorio.pdf](http://www.agrobiomexico.org.mx/publicaciones/Marco_Regulatorio.pdf)
- Altieri, M.A. 1995. *Agroecology: the science of sustainable agriculture*. Westview Press, Boulder, CO.
- Anta Fonseca, S., J. Carabias, A. Díaz de León, C. Illsley, C. López, D. Robinson, E. Escamilla, F. Edouard, F. Ramírez, L. Merino, M. Chauvet, O. Ramírez, P. Álvarez, R. Obregón, S. Madrid, S. Purata, S. Ávila. et al. 2008. Consecuencias de las políticas públicas en el uso de los ecosistemas y la biodiversidad, en *Capital natural de México*, vol. III: Políticas públicas y perspectivas de sustentabilidad. CONABIO, México, pp. 87-153.
- Argenis, Javier, Daniel Reyes y Christian Mireles, 2012. *Café orgánico en México*. UNAM. México.
- Asturias, Miguel Ángel, 1949 (edit 2002). *Hombres de Maíz*. Editorial Planeta, México.
- Balvanera, P., H. Cotler et al. 2009. Estado y tendencias de los servicios ecosistémicos, en *Capital Natural de México*, vol. II: Estado de conservación y tendencias de cambio. CONABIO, México, pp. 185-245.
- Barquera, S., J. A. Rivera-Dommarco y A. Gasca-García. 2001. Políticas y programas de alimentación y nutrición en México. *Salud Pública Mex.* 43 (5):464-477. url: <http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v43n5/6726.pdf>
- Bellón, M.R., et al. 2009. Diversidad y conservación de recursos genéticos en plantas cultivadas, en *Capital natural de México*, vol. II: Estado de conservación y tendencias de cambio. CONABIO, México, pp. 355-382.
- Boege, E. 2008. El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México (México: INAH, CONACULTA, CDI). 344 p.: fotos, mapas, il.; 28 cm. Primera edición 2008. ISBN: 978-968-03-0385-4 Disponible en < [http://www.cdi.gob.mx/biodiversidad/biodiversidad\\_0\\_preliminares\\_1-31\\_eckart\\_boege.pdf](http://www.cdi.gob.mx/biodiversidad/biodiversidad_0_preliminares_1-31_eckart_boege.pdf) > acceso 04 de enero de 2017.
- Bollo M., M., J. R. Hernández S. y A. P. Méndez L. 2014. The state of the environment in Mexico. *Cent. Eur. J. Geosci.* 6(2): 219-228, DOI: 10.2478/s13533-012-0172-1
- Brading, D., 1980. *Los Orígenes del Nacionalismo Mexicano*. Editorial Era. México.
- Cámara de Diputados, 2005. *Iniciativa de Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional*. Comisión de Agricultura y Ganadería. Subcomisión para crear la Iniciativa de Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional. México
- Cámara de Senadores, 2016. *Iniciativa por proyecto de Ley General de Biodiversidad*. Gaceta, Cámara de Senadores, octubre 26 de 2016. México.
- Carmona, L.M.C. 1990. Análisis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. *Boletín de Derecho Comparado*. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 67:232-243. DOI: <http://dx.doi.org/10.22201/ijj.24484873e.1990.67>
- Casas C. R., T. Martínez S., F. V. González C., y E. García M. 2007. Limitaciones y Perspectivas del Desarrollo Rural Sustentable en México. *Textual* 40: 67-100.
- CEMDA, Centro Mexicano de Derecho Ambiental. 2016. Informe sobre la pertinencia biocultural de la legislación mexicana y su política pública para el campo. El caso del programa de “Modernización Sustentable de la

Agricultura Tradicional” (MasAgro). Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C., México. url: <http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2016/12/InformeMasAgro.pdf>

CMDRS, 2016. Programa Especial Concurrente y Reglas de Operación. Mimeo. México.

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2001. El Mercado del Café en México. H. Cámara de Diputados. México.

Cepeda, Carolina y Ariel Amoroso, 2016. Experiencias de Desarrollo Rural Sustentable y Conservación en la Península de Yucatán. The Nature Conservancy. México.

Cervantes, Claudia, 2017. Transferencia Tecnológica: implicaciones ambientales y económicas: estudio de caso sobre los efectos del programa de agricultura sostenible en productores de maíz en el municipio de Queréndaro, Michoacán, México. Tesis. Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional. Universidad Autónoma Chapingo.

Challenger, A. y J. Soberón. 2008. Los ecosistemas terrestres de México., en Capital Natural de México, vol. I: Conocimiento actual de la biodiversidad. CONABIO, México, pp: 87-108.

Chapela, Gonzalo, Carlos Menéndez y Héctor Robles, 2015. AGRICULTURA FAMILIAR DE MÉXICO. Un marco de referencia. En: Savourin, E., M. Samper y O. Sotomayor (eds). Políticas Públicas y Agriculturas Familiares en América Latina y el Caribe: nuevas perspectivas. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. San José, C.R.

Chapela, Gonzalo, 1998. La Organización de los Campesinos Forestales en el Cambio Liberal Mexicano (1982-1994). Tesis de doctorado. Facultad de Filosofía y Letras – Instituto de Investigaciones antropológicas, UNAM. México.

Chapela, Gonzalo, 2017. La Reforma de la Ley Forestal. Seminario Universitario Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones. Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. México.

Chapela, Gonzalo y Margarita Álvarez, 2007. Armonización de Programas de Desarrollo y Manejo Sustentable de Tierras. Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Cámara de Diputados. México.

CONABIO, 2016-Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y su Plan de Acción. México

CICC. 2013. Estrategia Nacional de Cambio Climático visión 10-20-40. Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC). Gobierno de la República. México. url: [http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/Documents/06\\_otras/ENCC.pdf](http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/Documents/06_otras/ENCC.pdf)

CIMMYT. 2015. Resultados MasAgro 2014. Enlace Año VI. Número 25: 14-17. url: [http://conservacion.cimmyt.org/index.php/es/component/docman/doc\\_view/1409-enlace-no-25](http://conservacion.cimmyt.org/index.php/es/component/docman/doc_view/1409-enlace-no-25)

CMDRS. 2016. Propuesta de acuerdo para integrar a MASAGRO como proyecto estratégico de la SAGARPA (Presentación PPT). Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS). url: [http://www.cmdrs.gob.mx/comisiones/COPSP/Documents/2016/4a\\_ordinaria/masagro.pdf](http://www.cmdrs.gob.mx/comisiones/COPSP/Documents/2016/4a_ordinaria/masagro.pdf)

Cocks, M. 2006. Biocultural diversity: moving beyond the realm of “indigenous” and “local” people. *Human Ecology* **34**:185–200.

CONABIO, 2009. Capital Natural de México. Conocimiento actual, evaluación y perspectivas de sustentabilidad. México

CONABIO, 2016. Estrategia Nacional sobre Biodiversidad en México y su Plan de Acción. México.

CONAFOR-UACH. 2013. Línea base nacional de degradación de tierras y desertificación. Informe final. Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y Universidad Autónoma Chapingo (UACH). Zapopan, Jalisco, México. url: <http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/fomento/documentos/degradacion-tierras-desertificacion2.pdf>

CONAZA. 2016. Programa integral de desarrollo rural. Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) 2013-2015. “Obras de infraestructura que construye la CONAZA”. Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA). url: <http://www.conaza.gob.mx/transparencia/Documents/2016/transparencia%20focalizada/1.%20COUSSA.pdf>

Demanda Colectiva, 2016. Quinto informe semestral demanda colectiva maíz 5 de enero de 2016 <http://demandacolectivamaiz.mx/wp/>

De Schutter, Oliver, 2011. Mandato del Relator especial sobre el derecho a la Alimentación. Misión a México. Declaración final de la misión. Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Ginebra

Deschamps, Paulina, Beatriz Zavariz e Iván Zúñiga, 2015. Revisión de la Implementación de REDD+en México. Análisis de los programas especiales en áreas de acción temprana REDD+. CCMSS, Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible. México.

De Vengoechea, A. 2012. Las Cumbres de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Pp. 1-6 En: Proyecto Energía y Clima de la Fundación Friedrich Ebert-FES. url: <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-energiayclima/09155.pdf>

DOF, Diario Oficial de la Federación, 1981. Ley de Fomento Agropecuario. Publicado Diario Oficial de la Federación (DOF) 02/01/1981. - url: <http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1981&month=01&day=02>

DOF. 1946. Ley de Conservación de Suelo y Agua. Diario Oficial de la Federación. de julio de 1946. México.url: [http://www.iaconsma.com/oficina\\_virtual/normatividad/1946.pdf](http://www.iaconsma.com/oficina_virtual/normatividad/1946.pdf)

DOF. 1981. Reglamento de la Ley de Fomento Agropecuario. Publicado Diario Oficial de la Federación (DOF) 23/11/1981. url: <http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1981&month=11&day=23>

DOF. 1988. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

DOF. 1995. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 2da versión

DOF. 2001. Ley de Desarrollo Rural Sustentable

DOF. 2003. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la Federación del 25 de febrero del 2003. url: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgdfs/LGDFS\\_orig\\_25feb03.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgdfs/LGDFS_orig_25feb03.pdf)

DOF. 2005a. Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Diario Oficial de la Federación (DOF), México. Nueva Ley del 18-03-2005. url: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LBOGM.pdf>

DOF. 2006. Ley de Productos Orgánicos.

DOF. 2010 Reglamento de la LPO url: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg\\_LPO.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LPO.pdf)

DOF. 2012b. Ley General de Cambio Climático. Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012. México. (Última Reforma DOF 01-06-2016). url: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC\\_010616.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_010616.pdf)

DOF. 2013. Estrategia Nacional de Cambio Climático. url: [http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5301093&fecha=03/06/2013](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301093&fecha=03/06/2013) y [http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/Documents/06\\_otras/ENCC.pdf](http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/Documents/06_otras/ENCC.pdf)

DOF. 2013a. Distintivo Nacional de Productos Orgánicos (DOF, 29-Oct-13)

DOF. 2013b. Lineamientos para la Operación Orgánica de las actividades agropecuarias (DOF, 29---oct---13)

DOF. 2016a. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. url (Última reforma publicada DOF 10-05-2016): [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/259\\_100516.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/259_100516.pdf)

DOF 2016c Presupuesto de Egresos de la Federación 2017

Durand-Alcántara, C. H. 2009. Desarrollo rural sustentable: enclave de la estrategia neoliberal. Alegatos, UAM-Azcapotzalco, México, núm. 72, mayo/agosto, pp. 177-205, en [www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/65/72-09.pdf](http://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/65/72-09.pdf).

FAO-SAGARPA. 2016. Metodología PESA México: Manual para agentes de desarrollo rural: Implementación de estrategias y proyectos para la pequeña agricultura en zonas rurales marginadas. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Ciudad de México. url: <http://www.fao.org/3/a-i5507s.pdf>

Fox J, L Haight (2010) La política agrícola mexicana: metas múltiples e intereses en conflicto”. In: Subsidios para la Desigualdad. Las Políticas Públicas del Maíz en México a Partir del Libre Comercio. J Fox, L Haight (coords). Ed. CIDE y Woodrow Wilson International Center for Scholars. Santa Cruz y Distrito Federal.

Gliessman, S. R. 2013. Agroecología: plantando las raíces de la resistencia. Agroecología 8 (2): 19-26.

Gliessman, S. R. (ed). 1978. Seminarios regionales sobre agroecosistemas con énfasis en el estudio de tecnología agrícola tradicional. H. Cárdenas, Tabasco, México: Colegio Superior de Agricultura Tropical.

Gobierno mexicano – organizaciones campesinas, 2003. Acuerdo Nacional para el Campo. Mim. México.

Gómez-Cruz, M. A., Schwentesius, R. R., Ortigoza, R. J., y Gómez, T. L. (2010a). Situación y desafíos del sector orgánico de México. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. México, Vol.1 Núm. 4. 1 de octubre - 31 de diciembre, 2010. pp: 593-608.

Gómez-Tovar, L., M. A. Gómez-Cruz y R. Schwentesius. 2015. Los aportes de la agricultura orgánica en México en el contexto actual. Conferencia en extenso. Asociación Mexicana de Estudios Rurales (AMER). Toluca, Estado de México. 36 pp.

González, F., J. 1981. Síntesis de los aspectos jurídicos del Seminario de Evaluación de la Ley de Fomento Agropecuario. P. 422-423 EN UNAM, *Memorias del seminario de evaluación de la ley de fomento agropecuario*. url: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1024/21.pdf>

Gordillo, Gustavo, 1988. Campesinos al Asalto del Cielo. Organización con autonomía. Editorial Siglo XXI. México.

Guzmán-Luna, S. 2012. La importancia de la nueva Ley de Cambio Climático en México, en *Foro sobre cambio climático*, 22 de mayo de 2012 [de disponible en: <http://www.ambienteycomericio.org/la-importancia-de-la-nueva-ley-de-cambio-climatico-en-mexico/> ].

Hernández, M. G. 2014. La crisis ambiental y sus repercusiones en la agricultura campesina: aproximaciones a la resistencia en la Sierra Norte de Puebla, Pacarina del Sur [En línea], año 5, núm. 20, Dossier 12: Presente y futuro de las guardias comunitarias en América Latina. ISSN: 2007-2309.(Consultado 07-ene-2017). url: [www.pacarinadelsur.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=976&catid=48&Itemid=226](http://www.pacarinadelsur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=976&catid=48&Itemid=226)

Hernández, H.M., C Gómez-Hinostrosa, y B. Barbara Goettsch. 2004. Checklist of Chihuahan Desert Cactaceae. *Harvard Papers in Botany* 9: 51-68.

Hernández-X., E. 1988. La agricultura tradicional en México. *Comercio Exterior*. 38 (9): 673-678. url: <http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/189/2/RCE2.pdf>

Herrera, F. 2013. Enfoques y políticas de desarrollo rural en México -Una revisión de su construcción institucional. *Gestión y Política Pública*, XXII(1), pp. 131-159.

INECC-SEMARNAT. 2014. Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 2013. México.

INEGI, 2013. Conjunto de datos vectoriales de Uso de Suelo y Vegetación, Escala 1:250 000- Serie V.

INEGI, 2014. Carta DE Uso Actual del Suelo y Vegetación, Serie V. Escala 1:250,000

INEGI-CONABIO-INE. 2007. Ecorregiones de México nivel IV, escala 1:1,000,000. Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad e Instituto Nacional de Ecología, México

Jansen, D. H. The Tropical Agroecosystems. *Science* 182:1212-1219.

León, Oscar, 2007. Las Tiendas de Autoservicio y la Pugna por el Mercado. *Comercio Exterior*, No 57 pp 1046 - 1067

Limón, Mauricio, 2003. La Nueva Ley Forestal. Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales: [http://www.ceja.org.mx/articulo.php?id\\_rubrique=29&id\\_article=127](http://www.ceja.org.mx/articulo.php?id_rubrique=29&id_article=127)

López- Barreto, M. 2015. Resistencias agroecológicas en Yucatán, México. *Ecología Política*, cuadernos de debate internacional: 116-118. url: <http://www.ecologiapolitica.info/?p=2272>

Maldonado H., B., M. M. Trujillo F. y L. A. Rivas T. 2013. La certificación de productos orgánicos en México. Documento presentado en: XVIII Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática. UNAM, Ciudad Universitaria, México D.F. 2-4 de octubre. 15 p.

Marielle, Catalina, 2012. Agroecología y Soberanía Alimentaria. Grupo de Estudios Ambientales, A. C., México.

Martínez-Meyer, E., J. Sosa-Escalante y F. Álvarez. 2014. El estudio de la biodiversidad en México: ¿una ruta con dirección? *Revista Mexicana de Biodiversidad* 85:S1-S9.

Masera, Omar; Astier , M; L , M; López - Ridaura, S, 1999. Sustentabilidad y Manejo de Recursos Naturales. El marco de evaluación MESMIS. GIRA – Mundi prensa, México.

Massieu-Trigo, Y. 2009. Cultivos y alimentos transgénicos en México. El debate, los actores y las fuerzas sociopolíticas. *Argumentos (Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco)* 58, año 22: 217-246. url: <http://www.scielo.org.mx/pdf/argu/v22n59/v22n59a8.pdf>

Meadows, Donella, 1972. Los Límites del Crecimiento. Informe al Club de Roma. 1972 - Los Límites del crecimiento: informe al Club de Roma. Fondo de Cultura Económica. México.

México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Murgueitio Restrepo, Enrique y Muhamad Ibrahim, 2009. Ganadería y Medio Ambiente en América Latina. En: Murgueitio, Enrique, César Cuartas y J Fernando Naranjo (eds.). *Ganadería del Futuro. Investigación para el Desarrollo* segunda edición. Fundación CIPAV. Cali, Colombia.



Organización de las Naciones Unidas, 1992. Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Organización de las Naciones Unidas, 2010. Convenio sobre la Diversidad Biológica. Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica. Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Montreal.

Organización de las Naciones Unidas, 1994. Convención de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en particular en África. Nueva York.

Ortigoza R., J., L. Gómez-Tovar, M. A. Gómez-Cruz y R. Schwentesius. 2012. Propuesta de acciones prioritarias para el fomento de la agricultura orgánica. Revista Cultura Orgánica.p. 28-30.

Perales, H.R., y J.R. Aguirre. 2008. Biodiversidad humanizada, en Capital natural de México, vol. I: Conocimiento actual de la biodiversidad. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México, pp. 565-603.

PNUMA, 2013. Plan estratégico para la Biodiversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi. Nairobi.

Ponce-Nava, D. 2013. La LGEEPA, 25 años después. Derecho Ambiental y Ecología. Número 53, año 9: 49-50. url: [http://www.ceja.org.mx/revista.php?id\\_rubrique=502](http://www.ceja.org.mx/revista.php?id_rubrique=502)

Power. A.G. 2010. Ecosystem services and Agriculture: tradeoffs and synergies. Philosophical Transactions of the Royal society 365: 2959-2971.

Rabalais N.N., R.E. Turner, y W.J. Wiseman Jr. 2002. Gulf of Mexico Hypoxia, a.k.a. "The Dead Zone". Annual Review of Ecology and Systematics 33: 235-263.

Red de Tianguis Orgánicos, 2016. Certificación Orgánica Certificación participativa url: <http://tianguisorganicos.org.mx/mercadoslocales/>

Registro Agrario Nacional, 2012. Base de datos del Padrón de Histórico de núcleos agrarios (PHINA) con los núcleos agrarios certificados al corte al 31 de diciembre de 2011. Registro Agrario Nacional, Secretaría de la Reforma Agraria.

SAGARPA. 2013a. Memoria documental del componente COUSSA 2008-2012 SAGARPA. México.

SAGARPA. 2013b. Memoria documental MASAGRO 2010-2012. SAGARPA. México. url: <http://masagro.mx/index.php/es/>

SAGARPA. 2013c. Memoria documental PESA 2007-2012. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), México. url:<http://www.sagarpa.gob.mx/irc/Memorias%20Documentales/MEMORIA%20DOCUMENTAL%20PESA.pdf>

SAGARPA, 2015. Atlas Agroalimentario. Sistema Nacional de Información Agrícola y Pecuaria, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. México

SAGARPA, 2015 a. Reglas de Operación de los Programas. DOF. Reglas de Operación Para el Ejercicio Fiscal de 2016. Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2015. México

SAGARPA. 2016. Proyecto estratégico para la seguridad alimentaria (PESA). Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), México. url: <http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/MICROSITIO%20PESA/Que%20es%20el%20PESA.pdf>

SAGARPA, 2016 a. Reglas de Operación de los Programas. DOF. Reglas de Operación Para el Ejercicio Fiscal de 2017. Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2016. México

SAGARPA-FAO. 2014. Experiencias de PESA en México. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), México. 38 pp. url: <http://sistemas.pesamexico.org/descargas/2.pdf>

SAGARPA-INEGI. 2015. Encuesta Nacional Agropecuaria, ENA 2014. Conociendo el campo de México. Resultados. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México, DF. Disponible en [www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015\\_08\\_8.pdf](http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_08_8.pdf)

SAGARPA – Organizaciones campesinas, 2003. Acuerdo Nacional para el Campo. Mimeo. México.

Sarukhán, J., et al. 2009. Capital natural de México. Síntesis: conocimiento actual, evaluación y perspectivas de sustentabilidad. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México. url: [http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Capital%20Natural%20de%20Mexico\\_Sintesis.pdf](http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Capital%20Natural%20de%20Mexico_Sintesis.pdf)

Schwentesius, R., M. A. Gómez-Cruz y L- Gómez-Tovar. 2016. Agricultura Orgánica en México, 2016. Datos Básicos. IFOAM-AL, Lima, Perú, 1 de septiembre de 2016. (Presentación en PPT). url:

[https://www.researchgate.net/profile/Rita\\_Rindermann/publication/307578567\\_Agricultura\\_Organica\\_en\\_Mexico\\_2016/links/57c9f3da08ae89cd1e81eeb3.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Rita_Rindermann/publication/307578567_Agricultura_Organica_en_Mexico_2016/links/57c9f3da08ae89cd1e81eeb3.pdf)

SEMARNAP, 1995. Programa Sectorial Forestal y de Suelos 1995-2000. México

SEMARNAT, 2010. Estrategia Nacional para el Manejo Sustentable de las Tierras. México.

SEMARNAT. 2014. Programa Especial de Cambio Climático. Movilidad Sustentable. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. México. url: [http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/SEMARNAT\\_DOT\\_05082014.pdf](http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/SEMARNAT_DOT_05082014.pdf)

SEMARNAT., 2015. Programa Nacional Manejo Sustentable de Tierras Para combatir Degradación de Tierras y Desertificación en México. url: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31167/pnacdd.pdf>

SEMARNAT-Colegio de Postgraduados, 2002. Degradación de los Suelos causada por el Hombre en la República Mexicana escala 1:250,000. México

SIAP Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2013. Fertilizantes: Alimentos de nuestros alimentos.

SIAP informa No 26 SAGARPA. México

SIAP, 2016. Atlas Agroalimentario de México. México

Simonian, L. 1999. La defensa de la tierra del jaguar. Una historia de la conservación en México, México, D. F., Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad - Instituto Nacional de Ecología. Traducción al español por E. Beltrán del título original: Defending the Land of the Jaguar. A history of conservation in Mexico. 1995. University of Texas Press. url: [http://centro.paot.org.mx/documentos/semarnat/defensa\\_jaguar.pdf](http://centro.paot.org.mx/documentos/semarnat/defensa_jaguar.pdf)

Spalding R. 1985. El Sistema Alimentario Mexicano (SAM): ascenso y decadencia. Estudios Sociológicos 3(8):315-349. url: <http://aleph.org.mx/jspui/bitstream/56789/23684/1/03-008-1985-0315.pdf>

Suárez, Victor, 2005. ¿Tiene Futuro la Agricultura Campesina en México? Grupo parlamentario del PRD. LIX legislatura. Congreso de la Unión. México.

Terán, Silvia y Manuel Rabasa, 2016. Propuesta para que la Milpa Maya Peninsular sea Reconocida como Sistema Inteligente del Patrimonio Agrícola Mundial. Mérida, Secretaría de medio Ambiente, Gobierno del Estado de Yucatán.

Toledo, V. M. y N. Barrera-Bassols, 2008. La memoria biocultural. La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales. Icaria Editorial, Barcelona, 230 pp. ISBN: 978-84-9888-001.

Torres-Carral, G. 2008. La ley de Desarrollo Rural Sustentable y el campo mexicano. Revista de Geografía Agrícola, Núm. 40. Enero-Julio. Pp. 55-72. Universidad Autónoma Chapingo, México.

Turrent-Fernández, A., A. Espinosa C., J. I. Cortés F. y H. Mejía Andrade. 2014. Análisis de la estrategia MasAgro-maíz. Rev. Mex. Cienc. Agríc. 5(8): 1531-1547. url: <http://cienciasagricolas.inifap.gob.mx/editorial/index.php/agricolas/article/view/533/508>

UNAM. 1981. Memorias del seminario de evaluación de la ley de fomento agropecuario Instituto de Investigaciones Jurídicas y Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. México. url: <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/1024-seminario-de-evaluacion-de-la-ley-de-fomento-agropecuaria#40634>

Vandame, R. 2012. Responsabilidad social académica: El caso de los transgénicos y la apicultura. *Ecofronteras* Núm. 45, mayo/agosto. url: <http://revistas.ecosur.mx/filesco/31.pdf>

Wellhausen, E.J., L Roberts y Efraím Hernández X., 1951. Razas de Maíz en México, su Origen, Características y Distribución. Programa de agricultura Cooperativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de México y la Fundación Rockefeller. México.

Zamilpa, J., R. Schwentesius y D. A. Ayala-Ortiz, D. A. 2016. Estado de la cuestión sobre las críticas a la agricultura orgánica. Acta Universitaria, 26(2), 20-29. doi: 10.15174/au.2016.854. url:



## Capítulo 9. Agroecología y Agricultura Orgánica en Nicaragua. Génesis, institucionalización y desafíos

Fréguin-Gresh, Sandrine<sup>112</sup>

### Introducción

A nivel internacional, la agroecología tiene dos ámbitos. Por un lado, la ciencia de la agroecología se desarrolla a partir de los años 1970' por investigadores de varios países, en particular de los EEUU que la definen como una ciencia que busca incorporar la ecología en la agricultura. Esta ciencia se desarrolla en reacción a la primera "revolución verde" en los países en desarrollo, en particular en América Latina. Por el otro lado, la sociedad también se apropia la noción de agroecología desde inicios de los años 1980', en particular desde movimientos sociales de América Latina en los cuales dos modelos sociales y económicos de producción agropecuaria se enfrentan: la agricultura campesina y familiar, que mayormente (pero no únicamente) se dedica a la producción alimenticia en base al trabajo familiar y la intensificación de la tierra y/o del trabajo y la agroindustria que mayormente se dedica a la producción de rubros para la exportación en base al asalariado y la intensificación en capital financiero.

Nicaragua no se diferencia de esta dinámica global. En un país marcado por la diversidad de sus condiciones biofísicas y el mantenimiento de una fuerte bipolarización de su estructura agraria, resultado de una historia compleja y conflictiva traducida en una fuerte concentración de la tierra y de los recursos en mano de pocas, pero poderosas, empresas agroindustriales en ciertas regiones del país. Estas empresas se dedican a la producción de café, caña de azúcar, bananos, maní, ajonjolí, palma africana y ganadería bovina para la exportación, mientras una multitud de pequeñas y medianas fincas campesinas y familiares combinan producciones de cultivos y animales pero con un objetivo más centrado en la producción alimenticia: granos básicos (maíz, frijoles, sorgo) y ganadería (mayor y menor), y en una menor medida de rubros de exportación también.

Las bases de las prácticas agroecológicas surgen en el campesinado en los años 1980', a contra corriente del modelo de producción propuesto después del triunfo de la revolución sandinista y como respuesta ante el fracaso (ecológico, económico y social) del desarrollo agroindustrial del algodón en los años 1960-70'. En los años 1990', los promotores de la agroecología van a diferenciarse de la dinámica entorno a la agricultura orgánica que surge en un contexto de liberalización y de posconflicto y reconstrucción del sector agropecuario, pero más bien en los sectores socio-económicos de mayores recursos (incluso agroindustriales) que buscan nuevas alternativas para mercadear sus rubros en estas nuevas nichos de un mercado mundial muy competitivo y volátil. Después de una década de crecimiento "a escondidas", la agroecología se refuerza después de la catástrofe provocada por el huracán Mitch (1998) y llega a ser considerada como una "solución milagro" de resiliencia de los productores a las presiones del medio ambiente. Es a partir de 2007, y a pesar de que Nicaragua es un país con políticas públicas que no tienen una trayectoria rectilínea, que los conceptos de agroecología y agricultura orgánica van a institucionalizarse, y que las dos nociones se juntan otra vez en la agenda política.

Este proceso de institucionalización inicia con la promulgación de una Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense (NTON 11 010-07) que abarca los dos conceptos en una noción única de agricultura ecológica (Comité Técnico de Normalización et al. 2007) y define por primera vez a nivel nacional la agricultura ecológica como "*una sistema de producción agropecuaria de alimentos sanos, que se basa en la salud, nutrición, conservación y mejoramiento del suelo, en el uso apropiado de la energía, el agua, la diversidad vegetal y animal, y en la aplicación de técnicas e*

---

<sup>112</sup> Este capítulo beneficio de aportes y comentarios de varios colegas, entre los cuales: Luis Orlando Valverde (Movimiento de Agricultura Orgánica de Nicaragua MAONIC), Dennis Salazar y Francisco Salmeron (Universidad Nacional Agraria de Nicaragua UNA), María Mercedes Patrouilleau (INTA, Argentina), Muriel Bonin, Eric Sabourin, Bruno Rapidel (CIRAD) así como de Henri Hocdé (consultor independiente).

*ingredientes que benefician al ambiente y contribuyen al desarrollo sostenible, prescindiendo del uso de insumos de síntesis química, transgénicas y sus derivados”, agregando que “son sinónimos agricultura biológica o agricultura orgánica”. Luego, y con la emergencia de un proceso multi-actor llevado adelante por las ONG y los gremios militantes de la agroecología y de defensa del campesinado, se reconocen la agricultura orgánica y la agroecología a nivel nacional como necesidad y formas alternativas de impulsar la intensificación sostenible en el sector agropecuario (es decir a través de la tecnificación y de mejores prácticas). Es así que el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH 2012-2016) refiere directamente a la producción orgánica y agroecológica (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 2012). De la misma forma, el Plan sectorial PRORURAL Incluyente (2010-2014) refiere a la producción agropecuaria sostenible y a sus procesos de intensificación habilitados por la Ley de fomento de la agroecología y de la agricultura orgánica, y promueve con un “enfoque de equidad de género, el desarrollo y consolidación de la producción y comercialización orgánica y ecológica nacionales a través de apoyo a los procesos de control interno, la consolidación de la institucionalidad y el diálogo público-privado con el movimiento orgánico nacional y su mesa orgánica” (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 2009).*

El análisis presentado en este capítulo se basa en un estudio *in itinere* de un proceso emergente en cuanto a la institucionalización de la agricultura orgánica y de la agroecología en Nicaragua. Se basa en una revisión de literatura, que ha sido completada con entrevistas con una selección de actores clave que han participado en el proceso de elaboración de la política de fomento de la agroecología y de la agricultura orgánica. Los hallazgos destacados no son ni fijos, ni tampoco definitivos, ya que el proceso está en marcha e incierto en su porvenir, como en sus formas de reapropiación política y social. Sin embargo, aportan elementos en el debate tanto a nivel nacional que a nivel global, ya que la génesis de la agroecología (sobre todo) y su introducción en el proceso político en Nicaragua ilustran una dinámica y una tendencia importante en los países de América Latina y del Caribe: este debate se ubica en la discusión más amplia sobre no solamente las vías de intensificación en el sector agropecuario, sino también los modelos de desarrollo y los cambios en las estructuras de producción en estos países, en los cuales la agricultura campesina y familiar sigue teniendo un rol social y económico clave a nivel nacional. Cabe mencionar que la realización del estudio se enfrentó a una dificultad para distinguir los discursos “sabios”, militantes, y técnicos refiriéndose a la agroecología, ya que además en muchas ocasiones se combinan. Además, hay que destacar que no pretendemos plantear ni aportar una definición de lo que es (o debería de ser) la agroecología y la agricultura orgánica en Nicaragua: utilizamos los conceptos como lo manejan la literatura y los entrevistados seleccionados, tratando de reubicarlos en el proceso socio-histórico de las políticas públicas rurales en Nicaragua. Por esta razón, el capítulo debe leerse con modestia y prudencia en las conclusiones destacadas.

En una primera parte, trataremos de presentar la trayectoria socio-histórica de la introducción y difusión de la agricultura orgánica y de la agroecología en las políticas públicas de Nicaragua. Después de presentar el contexto socio-productivo del país, focalizaremos en la diversidad del entorno de la producción agropecuaria, así como en la estructura agraria, en particular en cuanto al acceso y la distribución de la tierra. Presentaremos después una periodización de la historia agraria nacional, tratando de enfatizar sobre la agricultura orgánica y la agroecología. En una última parte, discutiremos de las razones por las cuales la política de fomento no se aplica hoy en día en el país, y de los desafíos existentes para la expansión de estos tipos de agricultura en el país.

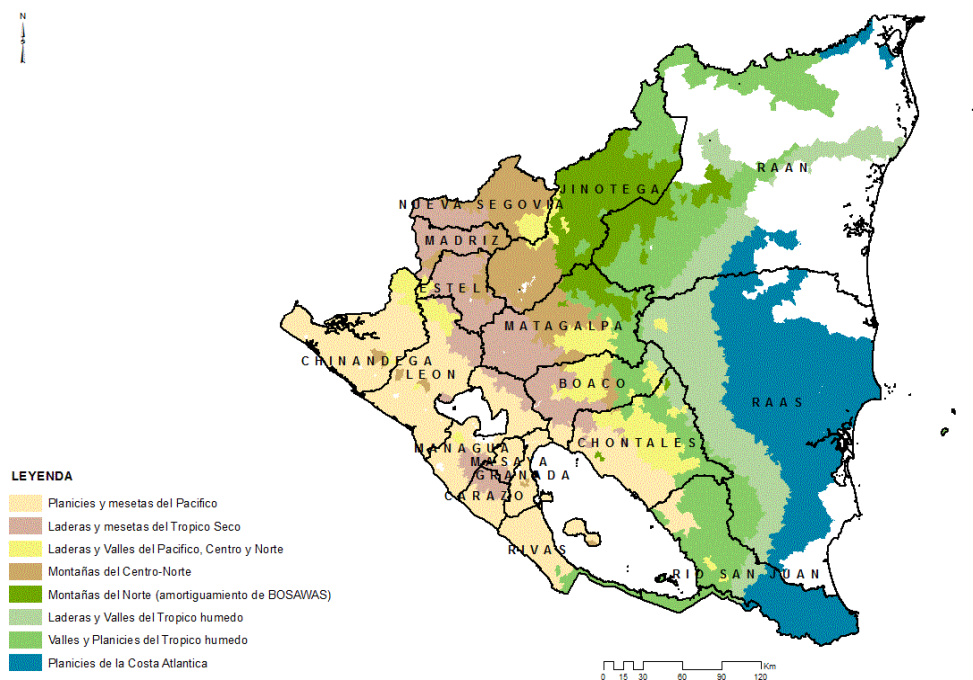
## **Introducción y difusión de la agricultura orgánica y de la agroecología en las políticas públicas en Nicaragua**

### **El contexto socio-productivo de Nicaragua: una agricultura marcada por la diversidad de su entorno y una bipolarización de la producción**

En Nicaragua, el sector agropecuario es bastante diverso, en primera instancia dado a las condiciones biofísicas que varían mucho en el territorio nacional en cuanto a la altitud, la fertilidad de los suelos, los pendientes, al clima (tanto temperaturas como lluvia), a los riesgos naturales, etc. (véase la Figura 1). Así, a nivel nacional, se pueden

distinguir siete macro-regiones biofísicas diferentes, que dan lugar a combinaciones diferentes de cultivos y crianza de animales, así como a tipos de productores diferentes.

Figura 30—Propuesta de zonificación biofísica de Nicaragua



Fuente: Fréguin-Gresh y Razafimahefa (2016)

Tabla 1 – Caracterización de las macro regiones biofísicas de Nicaragua

ZONA BIOFISICA	Descripción
Planicies de la Costa Atlántica	Zona plana a ligeramente ondulada (pendientes <15%) de baja altitud (<200m) con clima tropical húmedo (2800-3200 mm, 25-26°C) y suelos limitados por su fertilidad posiblemente con otra limitación
Laderas y Valles del Trópico húmedo	Zona de laderas, poco a fuertemente ondulada (pendientes <30%), de altitud baja (<200m) a mediana (200-400), con clima tropical subhúmedo (2400-2800 mm, 25,5-26°C) y suelos limitados por fertilidad
Valles y Planicies del Trópico húmedo	Zona plana a ligeramente ondulada (pendientes<15%) de baja altitud (200-400m) con clima tropical subhúmedo a húmedo (1600-2400 mm, 25,5-26°C), con suelos de fertilidad limitada posiblemente con otra limitación
Montañas del Norte (amortiguamiento de BOSAWAS)	Zona montañosa quebrada (pendientes > 50%) de altitud mediana a alta (200-1000m) con clima tropical subhúmedo (<1200mm, 25,5-26°C) y suelos limitados por su fertilidad agravado por otra limitación
Montañas del Centro-Norte	Zona montañosa ondulada a quebrada (pendientes >30%) de altitud mediana a alta (400 a >1000m), clima tropical húmedo de altura (1200-1600mm, 22-22,5°C) con suelos sin limitación
Laderas y Valles del Pacífico, Centro y Norte	Zona de laderas, ondulada a quebrada (pendientes >30%) de altitud mediana (200-600m), clima tropical subhúmedo (1200-2000mm, 23-25°C) con riesgos de canícula acentuada y suelos sin limitación
Laderas y mesetas del Trópico Seco	Zona hasta fuertemente ondulada (pendientes 30-50%) de altitud mediana (400 à >1000m),clima tropical subhúmedo de altura (<1200, 22,5-23°C) con riesgos de canícula benigna a severa y suelos sin limitación o limitados por otro factor que la fertilidad
Planicies y mesetas del Pacífico	Zona de planicie (pendientes <15%) de baja altitud (<200m) con riesgos de inundación, clima tropical subhúmedo (1200-1600 mm, 23-25°C), riesgos de canícula definida hasta severa, con suelos sin limitación

Fuente: Fréguin-Gresh & Razafimahefa (2016)

Históricamente, la producción agropecuaria se ha desarrollado asentada en las Planicies y Mesetas del Pacífico y luego en las montañas del Centro Norte. Es en estas regiones, que se han desarrollado en particular los principales rubros de exportación (caña de azúcar, ajonjolí, ganadería bovina y café) y también una producción de granos básicos y de ganadería mayor y menor (véase Tabla 2).

**Tabla 2: Los principales tipos de explotaciones agropecuarias y sus producciones<sup>113</sup>**

ZONA BIOFISICA	Principales sistemas de producción agropecuaria
Planicies de la Costa Atlántica	Ganaderos lecheros con SAF en base de café (52% fincas de la zona) Medianos ganaderos lecheros con otros animales y frutales (13%), Productores de granos, raíces y tubérculos + tacotales y boques + otros cultivos (26%) Productores de raíces y tubérculos, arroz, plátano y frutales + otros cultivos (7%)
Laderas y Valles del Trópico húmedo	Ganaderos lecheros con otros animales (50% de las fincas de la zona) Productores de SAF en base cacao, musáceas + piña + raíces y tubérculos y frutales + otros cultivos menores (26%) Gano-basiqueros con café y cacao + gallos y otros cultivos menores (13%) Medianos ganaderos lecheros con otros animales + gallinas (8%)
Valles y Planicies del Trópico húmedo	Pequeños ganaderos lecheros con aves (35% de las fincas de la zona) Productores de SAF en base de cacao con bananos de exportación + bosque y tacotales (26%) Medianos ganaderos lecheros con aves, bosque y tacotales + frutales (24%) Grano-basiqueros con cultivos yuca, musáceas, palma y frutales (7%) Grandes ganaderos lecheros con otros animales + SAF café, + musáceas y frutales (5%)
Montañas del Norte (amortiguamiento de BOSAWAS)	Productores de SAF en base de cacao y musáceas + frutales + cultivo de arroz, raíces y tubérculos + frutas y vegetales (32% de las fincas de la zona) Pequeños ganaderos lecheros con otros animales, frutales, caña, achiote y bosque (31%) Gano-basiqueros con pollos (23%) Cafetaleros con SAF cacao + musáceas y frutales + gallinas (12%)
Montañas del Centro-Norte	Gano-basiqueros con frutales y aves (28% de las fincas de la zona) Cafetaleros en SAF con musáceas y frutales + gallinas (24%) Ganaderos con cultivo de arroz, raíces y tubérculos, frutales y otros cultivos diversos (24%)
Laderas y Valles del Pacífico, Centro y Norte	Cafetaleros en SAF con musáceas y frutales + bosque y tacotales + cultivos diversificados (35%) Pequeños ganaderos con otros animales + frutales (27%) Grano-basiqueros (maíz + frijol rojo) + aves industriales y bananos de exportación (23%) Pequeños ganaderos lecheros con bosque, otros animales y cultivo de arroz (18%) Pequeños ganaderos lecheros con otros animales + frutales (12%)
Laderas y mesetas del Trópico Seco	Ganaderos con tacotales y bosque + plantaciones de cítricos, cultivo de frijol negro + otros cultivos diversificados y frutales (40% de las fincas de la zona) Grano-basiqueros con frutas (35%) Pequeños ganaderos con bosque y tacotales + otros animales y cultivos diversos + frutales (19%) Cafetaleros en SAF con musáceas y frutales + aves y cultivos diversos (5%)
Planicies y mesetas del Pacífico	Productores de granos (maíz, sorgo millón, y frijol negro) + hortalizas + tacotales y bosque (59% de las fincas de la zona) Pequeños ganaderos con otros animales y frutales (22%) Medianos ganaderos lecheros con otros animales y frutales (7%) Plataneros con frutales diversos, piña y jengibre (6%)

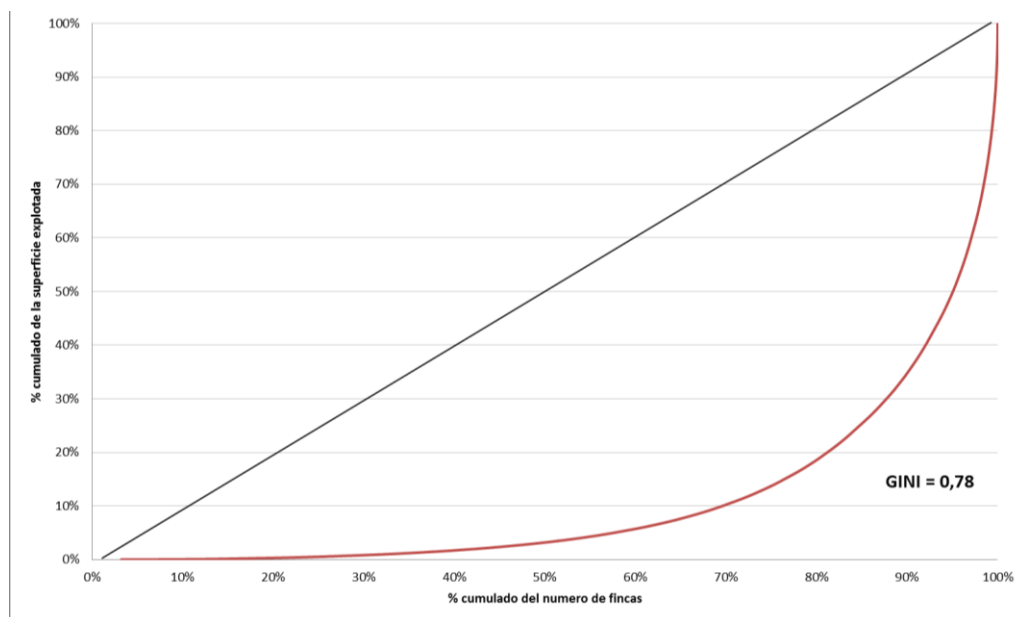
Fuente – (Fréguin-Gresh and Razafimahefa 2016)

Sin embargo, es interesante destacar la bipolarización en las estructuras socio-productivas en el país que surge al analizar las características de estos sistemas de producción agropecuarios. En Nicaragua, la gran mayoría de las fincas son de tamaño pequeño a mediano: más de la mitad de ellas son de menos de 7 ha y  $\frac{3}{4}$  de ellas tienen menos de 35 ha, una situación que no ha evolucionado mucho en el tiempo. Al lado de estas pequeñas estructuras de producción, que funcionan en base a su mano de obra familiar y ocasionalmente con jornaleros agropecuarios, existen unidades de producción de más de 35 ha (lo que es ya relativamente grande para una finca en Nicaragua), que a pesar de representar únicamente el 15% de las explotaciones agropecuarias, controlan 74.5% de la tierra del país. En este contexto, los pequeños y medianos productores campesinos y familiares son los más numerosos en términos absolutos, pero se enfrentan a una fuerte desigualdad en la distribución de la tierra. De ser así, de acuerdo a la curva de Lorenz (véase la Figura 2), 10% de las explotaciones agropecuarias más grandes del país (generalmente empresas agroindustriales) accede al 63.5 % de la tierra, mientras el 70 % de las estructuras de

<sup>113</sup> La metodología establecida para elaborar esta tipología se basa en análisis estadísticos (

producción más pequeñas solo acceden al 10 % de la tierra. Esta situación no es ajena a las trayectorias histórico-sociales de las políticas rurales que han marginado el campesinado durante siglos (Pérez and Freguin-Gresh 2015).

Figura 31– Concentración de la tierra agropecuaria según el IV CENAGRO (Curva de Lorentz y GINI Index)



Fuente: elaboración propia en base al IV CENAGRO

### El peso de la agricultura orgánica y de la agroecología en Nicaragua

Como en la mayoría de los países de América Latina y del Caribe, no existen datos oficiales que permiten hacer una estimación exacta del número de productores involucrados en la agroecología, aunque en las estadísticas nacionales, se puede estimar el número de productores certificados como orgánicos. Sin embargo, podemos tratar de hacer una estimación básica de la cantidad de productores agroecológicos dado que el cuarto Censo General Agropecuario o IV CENAGRO (INIDE and MAGFOR 2011). El V CENAGRO aborda el tema de las prácticas agrícolas de las fincas censadas. De ser así, se puede construir un proxy combinando el número de prácticas que, según las entrevistas conducidas para el estudio, son consideradas por los entrevistados como prácticas agroecológicas (por ejemplo la realización de curvas a nivel, de barreras de retención, la siembra de cultivos de cobertura, la realización de cercas vivas, la práctica de cero labranza, la realización de barreras rompe vientos, las prácticas post cosecha, la práctica de no quema, la elaboración de abono orgánico, la rotación de cultivos, la ronda contra incendio, etc. Presentamos los resultados en la Tabla 3 a continuación, según la cantidad y la combinación de prácticas agroecológicas. Los entrevistados por su lado estiman el número de productores agroecológicos entre 20,000 y 30,000 en Nicaragua (en un total censado de cerca de 260,000). En cuanto a la agricultura orgánica, el IV CENAGRO menciona la certificación orgánica<sup>114</sup> y se recopila que 12,160 fincas declaran ser certificadas. Por su lado, MAONIC identifica en los sectores de café, cacao, ajonjolí, miel, marañón, hortalizas, frutales, más de 7,400 productores orgánicos (Comisión Nacional de Coordinación y Gestión del MAONIC 2011). Una posible razón en cuanto a la diferencia en las estimaciones puede referirse al hecho de que ciertos productores que no usan productos agroquímicos en sus cultivos por diferentes razones (entre los cuales económicas) se consideran orgánicos, sin ser certificados y han podido declararse de esta manera en el Censo.

<sup>114</sup> Hay que destacar en esta ocasión que a menudo hay una confusión ya que en la declaración del informante, la certificación refiere a una producción vendida y que la producción de un mismo rubro puede ser y no ser orgánica (peor todavía a nivel de finca donde hay una combinación de rubros).

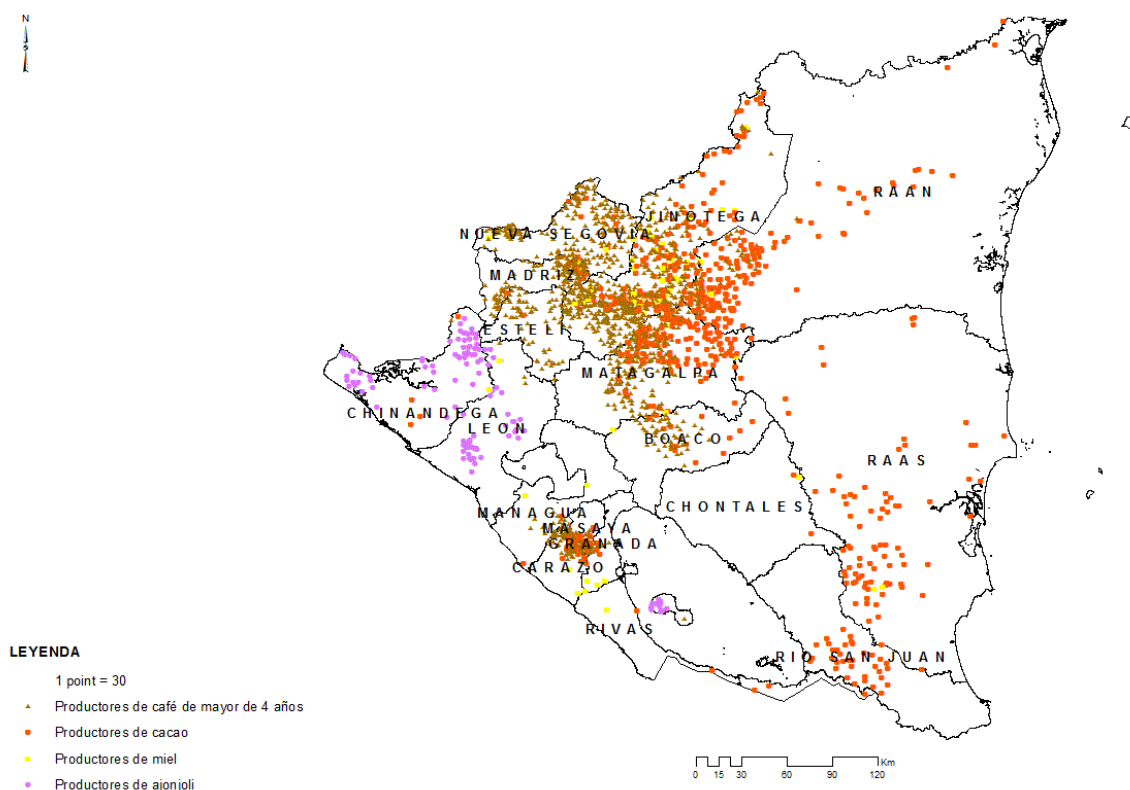
Tabla 3 – Distribución de las fincas con prácticas agroecológicas a nivel nacional

# de prácticas agroecológicas implementadas en las fincas	# de fincas	% de fincas en el V CENAGRO
Sin ninguna practicas agroecológicas	89 400	34%
1	65 426	25%
2	54 233	21%
3	29 591	11%
4	13 111	5%
5	6 025	2%
6	2 581	1%
7	1 184	0,5%
8	560	0,2%
Más de 9	435	>0,2%

Fuente: elaboración propia en base al IV CENAGRO

El IV CENAGRO no provee información sobre los rubros relacionados con las prácticas agroecológicas ni tampoco relacionados con la certificación orgánica. Sin embargo, un informe de MAONIC (MAONIC 2009) permite hacer un balance a nivel nacional sobre la producción orgánica (únicamente): según este informe, la agricultura orgánica y en transición en Nicaragua consta de aproximadamente 39 rubros registrados en las fincas certificadas (aunque no todos se exporten), pero pocos rubros, y en particular para la exportación, dominan: el café corresponde a más del 77 % del área certificada (9,733 ha), seguido por el cacao con el 11% (1,222 ha), luego el ajonjolí, con el 9% (918 ha), y en cuarto lugar el marañón, el cual en pocos años alcanzó el 2% (1,435 ha) del total de la superficie orgánica y certificada. Sin embargo, otras superficies/rubros son declaradas como certificadas debido a que ciertas agencias certificadoras aplican un esquema que contempla toda la finca o el sistema de producción, y no sólo el cultivo meta o con mercado. La distribución geográfica de los rubros certificados refleja las zonas biofísicas con mayor importancia productiva para los rubros certificados: las montañas del Centro-Norte (Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia); las Laderas, Valles y Planicies del Trópico húmedo (RAAS y Rio San Juan) así como Planicies de la Costa Atlántica (RAAN) donde más se producen sistemas agroforestales en base de café y de cacao (véase Figura 3).

Figura 32 – Distribución de los productores de rubros potencialmente certificables orgánicos



Fuente: Elaboración propia en base al IV CENAGRO

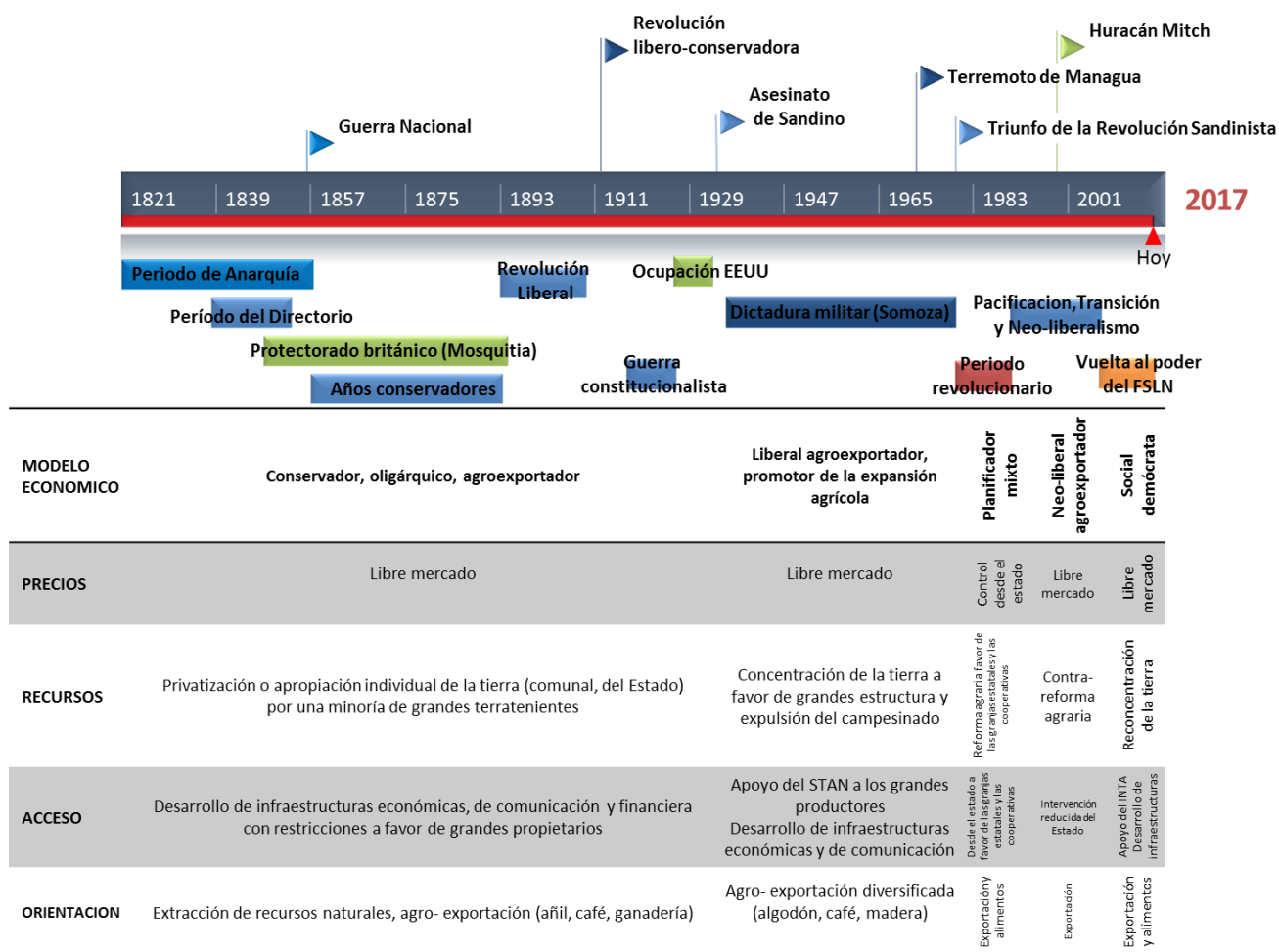
Después de haber presentado la situación actual de la agricultura orgánica y de la agroecología en el contexto socio-productivo nacional, trataremos de analizar la trayectoria socio-histórica de la introducción, difusión e institucionalización de estos conceptos en las políticas públicas de Nicaragua. Primeramente, es necesario recordar que las políticas públicas en este país no han seguido una trayectoria rectilínea. Esta situación no es ajena a la historia nacional, que es bastante compleja. Para poder simplificar el análisis, hemos tratado a continuación de periodizar la evolución del contexto agrario y de las políticas asociadas, en particular a partir del siglo XIX, aunque el énfasis de este capítulo se hace sobre todo en el siglo XX y más recientemente.

Primero, a pesar de la inestabilidad política durante el siglo XIX y hasta inicios del siglo XX, con guerra civil, golpes de Estado e intervenciones extranjeras (Estados Unidos o EEUU en sus siglas en español), el periodo que va de la Independencia de Nicaragua hasta la derrota del movimiento armado de Augusto Sandino (1821-1934) es clave para comprender la situación agraria en la actualidad (Merlet 1990). Por un lado, se observa la transformación de las clases dominantes conformadas por unos hacendados heredados del periodo colonial y una oligarquía de terratenientes y comerciantes que crean una nueva burguesía agraria, la cual una vez consolidada se convierte en una elite política y económica (Paige 1985) y la profundización de su carácter capitalista; por el otro lado, se mantiene y se desarrolla una gran masa de “mestizos” que van a expender la pequeña y mediana agricultura en los intersticios de las grandes propiedades (Merlet 1990, 2002; IRAM 2000). En este periodo, las políticas públicas agrarias establecen las condiciones para el desarrollo de haciendas y plantaciones en paralelo de la introducción de la agroexportación a favor de grandes terratenientes productores de café y ganadería bovina (sobre todo), y a veces con inversión extranjera en enclaves productivos. Se pueden resumir el contenido de las políticas agrarias de la época de la forma siguiente. De manera general, la estrategia macro-económica se basa en una política conservadora basada que buscan desarrollar de los cultivos de exportación y garantizar el bajo costo de la mano de obra con importaciones elevadas de productos básicos (textiles, alimentos, etc.). Esta situación tiene como consecuencia la marginalización de la producción de alimentos para el mercado interno, y el desarrollo de una



gran masa de pequeños productores en las márgenes de las grandes unidades de producción, esencialmente en el Pacífico y en la menor medida entrado en el interior. Se promulgan leyes para favorecer la privatización (apropiación individual) de la tierra, en particular entre 1821 y 1934: i) leyes que buscan acelerar el proceso de privatización de las tierras del Estado con la “denuncia de las tierras baldías” con requisitos cada vez más exclusivos a favor de las clases dominantes; ii) leyes que buscan privatizar las tierras comunales en comunidades indígenas (en particular en la Costa Atlántica) para asegurar el acceso de grandes terratenientes a ellas; iii) leyes que buscan a privatizar de los ejidos municipales por medio de su venta o de su alquiler. Además, se promulgan leyes de regulación y control de la mano de obra (a partir de 1841) justificadas por la voluntad de luchar contra la vagancia, el ocio con estructuras policíacas de represión, que tienen como finalidad de asegurar mano de obra para las grandes estructuras de producción. En fin, se implementa una política de desarrollo de infraestructuras económicas y comunicación (ferrocarril en el Pacífico, puertos, carreteras, telégrafo, etc.) y financieras (sistema de habilitaciones o préstamos usureros para instalar plantaciones de rubros de exportación).

Figura 33 – Síntesis de la trayectoria de las políticas agrarias en Nicaragua



### El “modelo” agroexportador liberal y su colapso llega a una concientización en cuanto al uso y abuso de agroquímicos (hasta los años 1970’)

El período que va de 1935 a 1979, después de larga época de estancamiento iniciada en la crisis de los 1930’, se caracteriza por el acceso, después de un golpe de estado, y la permanencia en el poder de una familia, los Somoza, que va a controlar el aparato estatal nicaragüense durante una dictadura militar de varias décadas. Durante este periodo, se consolida el carácter agroexportador de la economía nicaragüense, que ha crecido en paralelo a la dependencia al mercado mundial, hecho posible en particular por el respaldo de los gobiernos de Estados Unidos (EEUU) a los diferentes gobiernos sucesivos de los Somoza.



En esta época, mientras la economía es estrechamente vinculada con las inversiones de EEUU que se concentran en la explotación de los recursos naturales del país (minería y madera)<sup>115</sup> y que resultan en importaciones masivas (incluso de alimentos), se crea en 1952 un Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para promover el desarrollo de los rubros estratégicos de exportación (algodón, café y carne sobre todo) con el fin de dinamizar la balanza comercial del país. Esta dinámica se acompaña del apoyo de fondos y asistencia técnica de EEUU, y en este contexto, se crea un Servicio Técnico Agrícola Nacional (STAN), directamente relacionado con el Departamento estadounidense de Desarrollo Agropecuario (USDA, en sus siglas en inglés) que se dirige a la difusión de innovaciones agropecuarias. El STAN acompaña la expansión del sector agro-exportador que, en este momento, se opera en las tierras más fértiles del país en donde, según la macro-región biofísica considerada, prosperan grandes unidades socio-productivas en algodón, café, ganadería, y en menor medida caña, y tabaco<sup>116</sup>. También se crean varios institutos en el sector bancario (Banco Central) como productivo, tales como el Instituto Nicaragüense del Café (INCAFE)<sup>117</sup> para promover la producción y la exportación de café y ocuparse de que las empresas exportadoras -que a menudo son cercanas al poder y/o directamente relacionado con los intereses de EEUU-, las cuales fijan los precios, respeten los acuerdos internacionales del café (Craipeau 1992). En el sector cafetalero, se crea instituciones y políticas para promover el incremento de la productividad de café mediante la creación del INCAFE y del Programa Nacional del Café, este último impulsado por el Banco Nacional de Nicaragua, en particular para la renovación de los cafetales con programas de créditos a largo plazos.

Lo más ilustrativo de esta dinámica es la expansión del algodón en las planicies del Pacífico Noroeste<sup>118</sup> (Chinandega, León), en donde se concentran tierras de las más fértiles de Centro América por ser suelos derivados de cenizas volcánicas y con un potencial de cultivos alimenticios importante. A partir de los 1950', el algodón se coloca como el principal monocultivo del país y por esta razón, en muchas ocasiones se refiere a esta época como al periodo del "boom algodonero". Este "boom" se mantiene hasta los 1970', y el algodón llega a representar el 50% de las exportaciones nacionales en ese período. El factor fundamental que permite esa bonanza productiva es una coyuntura favorable de los precios y de la demanda. Con precios promedio de 25,37 dólares-quintal en 1960-65, el algodón recupera y sobrepasa sus áreas sembradas de la primera mitad de los 1950', cuando su expansión abre una nueva era en la historia económica del país. Así, la superficie dedicada a la cosecha del rubro aumenta vertiginosamente de 16.000 ha a 181.500 ha entre 1950 y 1973. Según datos de la Comisión Nacional del Algodón y de la Dirección General de Aduana para el año de 1974, el área sembrada de algodón significa más del 50% del área de productos dedicados a la exportación, proporción que aumenta a medida que avanzaba la década de los 1970', donde el algodón ronda más de 300.000 ha cultivadas. En la década siguiente el cultivo se mantiene, pero ya no con la supremacía pues empieza a ser desplazado por el café.

El algodón moderniza la economía agropecuaria nicaragüense en cuanto a ciertos indicadores: la relación salarial con los trabajadores, la obtención de plusvalía, la mecanización de la agricultura, etc. y sobre todo la intensificación de la producción con el uso de agroquímicos. A través de un acuerdo entre Somoza, la banca nacional e internacional y los fabricantes de agroquímicos, la producción algodonera se desarrolla junto con un "paquete tecnológico" completo que incluye créditos para la compra de maquinaria, equipos y agroquímicos (Larson 1989), mientras en estos tiempos, los otros rubros no se cultivan con agroquímicos (Gonzalvez 1999). A título de ejemplo se importan para la producción algodonera en 1973 2,030 quintales de DDT; 1,300 quintales de Metil Paration; 5,890 de Toxafeno, pesticidas que actualmente su comercialización a nivel mundial está prohibida (Pratt and Pérez 1997) y en aquella época son utilizados para combatir las plagas del algodón (entrevistas). Para

---

<sup>115</sup> Después del ataque de Pearl Harbor en 1941, los EEUU buscan garantizar sus abastecimientos en productos tropicales estratégicos

<sup>116</sup> En la década de los 1960' adquieren también importancia como rubros de exportación, la carne refrigerada alrededor de la cual se genera una ganadería bovina intensiva y el azúcar producido en plantaciones e ingenios con altos niveles de eficiencia y racionalidad.

<sup>117</sup> Como muchos otros organismos creados durante la dictadura, el INACFE ve a desaparecer en los años 1980'.

<sup>118</sup> El ecosistema predominante en esta zona es el de Llanura Tropical Seca y algo de Sabana Tropical, fue en sus inicios Bosque Tropical Seco pero la deforestación se dio mucho antes del inicio del cultivo del algodón

ello, el Estado interviene en la producción a finales de los años cincuenta, impulsando uso de agroquímicos e tecnificación de la producción para aumentar los rendimientos y así contrarrestar los efectos desfavorables del clima y de los precios internacionales. Se ofrecen asesores técnicos (con el apoyo del STAN y de cooperación externa) a disposición de los productores y el financiamiento se condiciona a la adopción de las prácticas “modernas” de producción. Mediante el uso de fertilizantes e insecticidas se elevan los rendimientos del algodón en un promedio de un 45% por encima entre los años 1950 y 1960’ (Pratt and Pérez 1997).

El crecimiento del sector agroindustrial, y en particular el sector algodonero, es en parte responsable del desplazamiento forzado de los productores campesinos y familiares grano-basiqueros hacia tierras menos productivas del interior, del aumento del número de sin tierra y de la perpetuación de la pobreza rural (Maldidier and Marchetti 1996). En paralelo al auge agroexportador, crece el número de campesinos pobres y jornaleros agrícolas, ambos con poca o sin tierra (IRAM 2000). En este contexto de acentuación de la bipolarización de la estructura agraria del país y del descontento popular, se crea en respuesta a la demanda de los EEUU<sup>119</sup> un Instituto Agrario de Nicaragua (IAN) que organiza desde el Estado la apertura de la frontera agrícola a la colonización de tierras con programas de construcción de infraestructura a partir de 1963. Sin embargo, esto permite sobre todo asegurar la disponibilidad de la mano de obra barata para la agroindustria (IRAM 2000).

En 1972, un terremoto de gran amplitud deja la ciudad de Managua destruida. Con el deterioro de las estructuras económicas y sociales de Nicaragua durante la dictadura de los Somoza y el aprovechamiento de los dirigentes de la situación para hacer “negocios en el desastre” (Rueda Estrada 2013), se genera una deuda que provoca el colapso de la economía y de las instituciones públicas. A finales de los 1970’, el endeudamiento del país es mayor y el “modelo agroexportador liberal” muestra señales de crisis (IRAM 2000): la estructura socio-productiva del país es más que nunca bipolarizada con un pequeño (pero poderoso) grupo de terratenientes y agro-empresarios que controla la producción para la exportación y una gran masa de productores campesinos y familiares pobres (Barroso Peña 2011). Además del mayor costo social y económico de la expansión de la agro-exportación, Nicaragua logra niveles muy elevados de productividad, pero en base al uso exagerado de insumos agroquímicos importados. Este modelo de producción intensivo en capital financiero genera una consecuente demanda de divisas que será una carga muy fuerte a la economía nacional. Por estas razones, el sector agroexportador entra en crisis de competitividad a partir de los años 1960’ en Nicaragua como (y por las mismas razones) en el resto de países centroamericanos<sup>120</sup> al momento en que los costos alcanzan y superan a los precios del mercado. Además, este modelo trae consigo un fuerte impacto en el medio ambiente.

### El surgimiento de prácticas productivas alternativas a contracorriente del nuevo modelo de economía planificada mixta (en los 1980’)

El período que va de 1979 a finales de los 1980’ empieza después de años de guerrilla que permiten al Frente Sandinista de tomar el poder por las armas, lo que trae cambios políticos, sociales y económicos radicales. La revolución nicaragüense llega en un momento de agotamiento de una manera de gobernar (la dictadura militar) y de una forma de acumular (el latifundismo agroexportador) en Nicaragua y de forma general en Centroamérica (Figuroa Ibarra 2005).

La nueva junta revolucionaria establece rápidamente un “modelo de economía planificada mixta” caracterizado por un fuerte protagonismo del Estado para impulsar un proceso de transformaciones de la economía y de la sociedad, paralelamente a la reactivación y estabilización de la economía y dando preferencia a la mejora de la situación de las clases populares (Ortega 1986). Siendo una sociedad agraria, el marco de política se orienta en la transformación de la tenencia de la tierra y de las condiciones de producción y de vida en el campo para

---

<sup>119</sup> En un periodo marcado por la crisis con Cuba después de la invasión de Playa Girón.

<sup>120</sup> Entre 78 y 83, la superficie y la producción algodonera de la región centroamericana se redujeron prácticamente en un 50%, tanto en Centroamérica como en Nicaragua, manteniendo el país el liderazgo y el peso mayor (50%), tanto en la década del 1970 como del 1980.

incrementar los niveles de producción y la productividad, diversificar y aumentar la producción y las exportaciones. Se inicia al mismo tiempo la organización desde el Estado de la provisión de crédito, asistencia técnica y servicios sociales al sector, privilegiándose las formas asociativas de producción, casi inexistentes antes de 1979. El Estado se convierte entonces en el principal dueño y empresario del agro nicaragüense, incluso con la comercialización a través de la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (ENABAS) que busca garantizar el abastecimiento alimentario básico (Rueda Estrada 2013).

En 1981, se crea un Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA), fusión del MAG y del IAN, que busca administrar desde el Estado las actividades productivas: las direcciones y los programas sectoriales se instalan en paralelo al desarrollo de granjas estatales y cooperativas. Así, por ejemplo, la institucionalidad en torno a la producción y comercialización del café se diseña en función de este modelo con planificación y centralización estatal: se concede la exclusividad de las compras y ventas de los productos de exportación al Instituto de Comercio Exterior e Interior (INCEI), bajo control del Ministerio de Comercio y se crea la Empresa Nicaragüense del Café (ENCAFE) que vuelve a ser la única exportadora e importadora de café a partir de 1979<sup>121</sup>. Rápidamente, el MIDINRA se impone como el ente gubernamental encargado del desarrollo agropecuario en todas sus dimensiones, y aunque existen otras organizaciones con competencia en la materia (Banco Nacional de Desarrollo, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Planificación y Presupuesto, etc.), es el MIDINRA que define los lineamientos de la política hacia el sector. El MIDINRA impulsa en primera instancia una reforma agraria, constituyendo en una primera fase un Área de Propiedad del Pueblo (APP) y un movimiento cooperativo (IRAM 2000). Mientras tanto, el Movimiento Ambientalista Nicaragüense (MAN), que surge a finales de los 1970' con el objetivo de crear un movimiento ecológico con una amplia base popular, logra poner en marcha la creación de un Instituto de REcursos NATurales (IRENA) que recibe fondos internacionales para operar. Esto permite introducir una agenda ambiental en las políticas dirigidas al sector agropecuario e iniciar una serie de programas ejemplares para proteger y restaurar el medio ambiente (ejemplo del Programa de Agricultura y Medio Ambiente PAMA).

La reforma agraria se realiza en dos fases. La primera fase comienza con la promulgación de la Ley de Reforma Agraria de 1981 (Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la Republica de Nicaragua 1981). Se caracteriza por el inicio de las confiscaciones y expropiaciones de la gran propiedad capitalista y por el acceso de los campesinos y trabajadores agropecuarios proletarios a la tierra reformada bajo el modelo de Cooperativas de Crédito y Servicios (CSS) y Cooperativas Agrícolas Sandinistas (CAS) de producción o de Unidades de producción Estatales. Sin embargo, esta primera fase de reforma agraria falta responder a la reivindicación histórica de tierras individuales del campesinado nicaragüense, lo que genera una fuerte oposición en el campo (IRAM 2000; Rueda Estrada 2013).

Esta primera fase de reforma agraria se acompaña de una voluntad de mantener y aumentar la producción, en particular para la exportación ya que es necesario buscar divisas para poder financiar las políticas públicas. Es así que, por ejemplo, en el sector cafetalero, se va a impulsar unos programas de “modernización” de la producción. Así, a inicios de los años 1980', se crea una Comisión Nacional de Renovación de Cafetales (CONARCA) en reacción a la epidemia de roya anaranjada que afecta los cafetales desde 1976<sup>122</sup>, para operar una renovación genética y modernización tecnológica a nivel nacional. Esto se traduce por el despale de las plantaciones de café “tradicional” que se caracterizan por una baja densidad de plantas de porte alto (900-1000 cafetos por mz con la variedad Borbón por ej.) y una gran diversidad y abundancia de sombra (200 árboles por mz) que incluye muchas variedades de frutales y maderables; que son substituidas por nuevas plantaciones con altas densidades de variedades de porte bajo (3500-4000 plantas por mz con las variedades de caturra y catuai) y alto rendimiento (1,6-2,3 toneladas de café pergamino/ha), con sombra regulada (20-30%) y en algunos casos con densidades de hasta 5000 plantas

---

<sup>121</sup> La ley No. 380 crea la Corporación Nicaragüense de Empresas de Comercio Exterior (CONIECE), a cuyos dominios es traspasada la ENCAFE en 1988

<sup>122</sup> Entonces, es a partir de este periodo y con las epidemias recurrentes que afectan los cafetales que se va a empezar a “convivir con la roya”, manteniéndola bajo control agroquímico.

por mz y sin sombra (Oficina Regional para Programas Centroamericanos 1991)<sup>123</sup>. Estas variedades aparecen en las grandes unidades productivas (privadas o estatales), las cuales luego permiten su acceso a los productores individuales más pequeños. Sin embargo, estos cambios introducen una mayor necesidad de agroquímicos<sup>124</sup> (herbicida, fungicida y nematocida y fertilizantes), lo que aumenta los costos de producción (Rocha 2003). Estos costos de producción son aun cubiertos en esta época por los subsidios con recursos en las unidades estatales y cooperativas, pero no a nivel de los productores individuales (en las haciendas como en las pequeñas unidades productivas). Sin embargo, aunque se ha introducido e incrementado el uso de agroquímicos, los rendimientos no han aumentado, sino que son ligeramente inferiores respecto de los niveles alcanzados al final de la dictadura somocista (Bertrand and Rapidel 1999).

En este contexto, dos fenómenos se observan. El primero enfatiza en el sector estatal y cooperativista que se combina con inversiones en proyectos agroindustriales, intensivos en capital, empleo de mano de obra asalariada, y uso de tecnologías para la intensificación de la producción. Para sostener los niveles de rentabilidad en un contexto de crisis (plagas, bajo precios internacionales), se mantiene un uso elevado de agroquímicos, comparable a lo que ha caracterizado el modelo anterior. Sin embargo, después de varios años, y sobre todo por escasez de divisas y compresión de las importaciones<sup>125</sup>, se acepta prestar más atención a nuevas prácticas alternativas de producción (Vilas 2005) menos costosas y más adaptadas a la conservación de los recursos naturales (tales como el manejo integrado de plagas y suelos, las fuentes alternativas de energía, etc.). En este sentido, cabe mencionar unos programas llevado a cabo desde las organizaciones del Estado por cooperantes ilustrativos de la dinámica de la época, tales como: el programa para el Control Integrado de Plagas (CIP) y la creación de un Centro Nacional de Protección Vegetal (CENAPROVE,) así como la investigación sobre el CIP, especialmente a través de la Universidad Autónoma de León y de organismos internacionales que financian programas para la producción de biogás (Escuela de Agricultura de Rivas) u otros programas para la elaboración de abonos orgánicos. Sin embargo, es más bien la acción de los organismos no gubernamentales (ONG) que van a catalizar este cambio de paradigma. Sin embargo, al mismo tiempo, programas del Estado siguen dirigidos a la promoción de modelos de producción intensivos en agroquímicos: en 1991, el Consejo Nacional del Café CONCAFE impulsa un nuevo programa para la renovación de los cafetales en la región interior en donde los cafetales han sufrido de poco mantenimiento durante la década de los 1980'. Otra vez, el plan de renovación se basa en un paquete tecnológico intensivo en capital financiero. Sin embargo, el programa de renovación de cafetales encuentra dificultades en su ejecución ya que el acceso al crédito está condicionado a la rígida adopción de un único tipo de paquete tecnológico, propio de plantaciones de gran escala que margina de hecho a los medianos y pequeños productores de café, cuyo manejo técnico es diferente porque tienen recursos de tierra y mano de obra diferentes. Esta rigidez en la política tecnológica hizo fracasar los programas de renovación de cafetales del gobierno sandinista.

Por el otro lado, ONG (nacionales e internacionales<sup>126</sup>) apoyadas por la cooperación técnica externa, promueven prácticas alternativas para el campesinado y los productores familiares, experimentando con ellos nuevas técnicas agronómicas. Entre otras, cabe mencionar el Programa Campesino a Campesino (PCAC) (Holt Giménez 2008) que es la iniciativa más conocida y reconocida, que nace como unos intercambios de aprendizaje entre pequeños productores en Guatemala, en México, y en Nicaragua. En particular, los productores mexicanos conocedores de

---

<sup>123</sup> En una valoración sobre ese plan, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sentenció: "el programa no alcanzó su objetivo y produjo una serie de alteraciones agroecológicas y edafoclimáticas que agravan las restricciones tradicionales al cultivo del café. (Rocha, 2003)

<sup>124</sup> También se generaliza el control agroquímico de malezas, plagas y enfermedades, en el contexto de una agresiva expansión de la industria agroquímica europea y norteamericana en la posguerra (Bertrand y Rapidel, 1999).

<sup>125</sup> La falta de recursos y la importancia económica de las divisas que generan los productos que agroexportación han impedido que el gobierno sandinista pueda formular con libertad política coherentes sobre la producción agroindustrial y el uso de los plaguicidas. Aún después del triunfo de la revolución, la importación de agroquímicos ha representado entre 70 y 80 millones de dólares anuales, nada menos que el 10% de producto interno bruto y el 25% del ingreso que por exportaciones percibe Nicaragua (Larson, 1989).

<sup>126</sup> A fines de 1989 existían más de 70 ONG extranjeras en Nicaragua, y algo menos de 20 nacionales; el número de ambas se incrementó después de 1979.

prácticas agronómicas alternativas más respetuosas del medio ambiente y las metodologías de campesino a campesino visitan los campos nicaragüenses en un contexto revolucionario y de solidaridad política (Holt Giménez 2008). Se dirigen hacia la UNAG Unión de Agricultores y Ganaderos (UNAG), uno de los gremios recién creado y más importantes en el país que mayormente representa el campesinado y los pequeños productores. La UNAG decide implementar este nuevo programa PCAC el cual se apoya en la experimentación campesina y en la transmisión de conocimientos horizontales para promover la conservación de los recursos, en particular el suelo (abonos verdes, compost) pero también la diversificación de cultivos y las semillas criollas con un objetivo de seguridad alimentaria (maíz, frijol, arroz, sorgo y frutales) (entrevistas). El PCAC surge en varias macro-regiones del país, en particular en las laderas del Pacífico y en el interior, con productores individuales no atendidos por el gobierno (entrevistas). Sin ninguna política pública de apoyo, el PCAC se convierte en un catalizador del cambio productivo (y social) en el campo. Sin embargo, y a pesar de los resultados en la conservación del suelo y del agua, la agro-biodiversidad etc., los promotores del PCAC son muy cuestionados por quienes defienden la agricultura convencional, que siguen imponiéndose como modelo de producción dominante a nivel nacional (Holt Giménez 2008).

A mediados de los 1980', los conflictos internos y el progreso de una guerra contra revolucionaria provocan tensiones sociales, políticas y económicas que afectan fuertemente la actividad productiva, tanto por las pérdidas materiales como por la incorporación de miles de productores y jornaleros agrícolas a la defensa (Ortega 1986). Los desajustes económicos para pagar la deuda heredada de la dictadura, el desajuste entre los precios y los salarios como efectos de una crisis interna, el intento de paliar a las dificultades en base a subsidios y la excesiva concentración del gasto público en cuestiones de defensa son cada vez más difíciles de soportar y eso impide que la economía se reactive. En síntesis, el contexto del fin de los años 1980' es muy adverso: además de la guerra de baja intensidad a la que Nicaragua es sometida por EEUU a partir de 1982', la revolución sandinista decide reforzar el modelo de acumulación tradicional basado en grandes unidades de producción (estatales como cooperativas) es fuertemente cuestionado (Figueroa Ibarra 2005) y tiene cierto temor hacia el sector productivo individual en el cual no se presta suficiente atención a las unidades productivas individuales de pequeño y mediano tamaño en las cuales se opera lentamente pero seguramente un cambio substancial en una vía alternativa de intensificación agropecuaria para su subsistencia.

### El fortalecimiento de la agroecología y de la agricultura orgánica, con lógicas diferentes según el grupo socio-productivo (década de los 1990' hasta 2006)

Un tercer período se inicia con el regreso de gobiernos liberales al poder<sup>127</sup> y es caracterizado por un proceso de pacificación y reconciliación nacional que se da después que el país ha sufrido los efectos de conflictos armados durante varias décadas (IRAM 2000). Esta época es marcada por un cambio radical en la estrategia política hacia un "modelo de economía de libre mercado". El cambio de gobierno trae consigo el final de la guerra y el levantamiento del embargo de EEUU, y permite que el país se reinserte en el mercado mundial. En este contexto, las nuevas administraciones continúan con las políticas estabilizadoras iniciadas por régimen anterior a finales de su mandato, al mismo tiempo que lanzan nuevos programas de liberalización de la economía<sup>128</sup>. De hecho, los esfuerzos se centran en liberalizar el comercio exterior e interno, privatizar las empresas estatales, reconstruir, en una base privada, una red de comerciantes y unas cadenas de distribución de bienes y servicios, reducir el déficit fiscal y la inflación.

Sin embargo, la situación del país es muy difícil: una economía desarticulada, una infraestructura casi destruida y una sociedad todavía bipolarizada en varios aspectos (partidarios, socio-económicos, etc.). Si el crecimiento

---

<sup>127</sup> Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, sucesivamente entre 1990 y 2006

<sup>128</sup> La política económica se subordina a la ejecución de los programas financieros con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM). El país firmó: i) el Programa Stand By 1991-1993; ii) el Servicio Reforzado de Ajuste Estructural (ESAF) 1994-1997 y 1997-2000, iii) el Programa Reducción de Pobreza y Crecimiento Económico (PRGF) 1999-2001 y 2002-2005; y iv) el Servicio para el Crecimiento y Lucha contra la Pobreza (SCLP) 2007-2010.

económico logra recuperar a partir de la mitad de los 1990' y si la firma de los acuerdos de paz con desmovilizados y ex combatientes logra establecer una estabilidad socio-política, Nicaragua sigue marcado por la extrema pobreza, en particular en el campo. A partir de mediados de los 1990' la producción agropecuaria comienza a levantarse, después de media década de recesión. Muchas familias rurales regresen a sus fincas en un campo pacificado (IRAM 2000) o se instalan en el interior con la reapertura de la frontera agrícola que, al mismo tiempo, genera deforestación de gran amplitud en el interior del país y la costa caribe. Sin embargo, el crecimiento del sector agropecuario es más bien vinculado a la recuperación de las pérdidas sufridas en los 1980' (NITLAPAN 2001). Las tensiones en el campo son fuertes y agravadas por la austeridad, así como por la contra-reforma agraria, que afectan fuertemente al campesinado y a los más pobres. A pesar de la retractación del Estado y del contexto anti-intervencionista, el Estado sigue interviniendo con inversiones en la ampliación de la red de caminos, pero estas mejoras no disminuyen la vulnerabilidad del campesinado que sufre tan solo de las fluctuaciones de los precios tanto como de la falta de crédito (Marin and Pauwels 2001). Cabe mencionar también que los nuevos gobiernos eliminan los subsidios a los agroquímicos y reducen drásticamente el crédito rural. Esta situación caótica para los productores, los obliga a buscar otras alternativas de producción (Salazar 2003).

En este contexto, un Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) se vuelve a crear en 1990 con un personal y unos recursos muy restringidos, y con una reorientación de sus actividades en la regulación y el establecimiento de normas nacionales. En 1994, el IRENA se convierte en Ministerio del Ambiente y los REcursos NATurales (MARENA), lo que marca un punto de inflexión notable en la gestión y el manejo de los recursos naturales que va a deber de ser "*racional, descentralizada, participativa, responsable y socialmente equitativa*" (Barahona 2001; Jarquín 2003). En 1998, el MAG toma bajo su tutela el Instituto NAcional FORestal (INAFOR), cambiando de nombre en Ministerio de Agricultura, Ganadería y FORestal (MAGFOR).

Por otro lado, la cooperación internacional se hace garante de los programas públicos en virtud de condicionalidades de democratización, de descentralización, y de conservación de la naturaleza en las cuales Nicaragua se tiene acordar en muchas ocasiones como requisito para acceder a fondos para el desarrollo de proyectos. Es por esa razón que Nicaragua va a actualizar su marco de políticas en particular en cuanto a los aspectos ambientales, y que se desarrolla el Plan de Acción Ambiental para Nicaragua (PAA-NIC)<sup>129</sup> una serie de recomendaciones que permiten llenar los vacíos del marco regulatorio en los temas ambientales. A partir del mismo, se promulga la Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley No.217, 1996) que establece el marco de política para la protección ambiental en varios de sus usos. La política busca promover un modelo de desarrollo sostenible balanceado entre el crecimiento económico y la protección de los recursos naturales, según una gestión que se pretende más eficaz, descentralizada y participativa (Urbina 2005). Mientras hasta los años 1980', la dimensión ambiental del desarrollo agropecuario es marginal y a menudo declarativa en la formulación de políticas, el giro se opera con el planteamiento de esta Ley y de la Política Sectorial Agropecuaria y Forestal que plantea un objetivo de tener una agricultura que armonice con el medio ambiente (Urbina 2005). Sin embargo, al terminar este periodo, y con la promulgación del Plan Nacional de Desarrollo y del primer Plan Sectorial de Desarrollo Rural Productivo (PRORURAL 2005-2007), la atención se vuelve a centrar en la recuperación del sector agropecuario que se ha deteriorado mucho, pero que sigue siendo clave para la economía nacional tanto para generar divisas como para estimular el crecimiento económico nacional. Esto hace que los aspectos ambientales (y sociales) vuelven a ser en gran parte descuidados. Además, de hecho, hay muy poca presencia de los organismos del Estado (MAG, INTA, MARENA, etc.) en el campo, que sufren de la baja drástica de su personal y de sus presupuestos.

Sin embargo, es en este contexto que se va estimular el debate sobre la agroecología en el país a partir de una reflexión sobre el deterioro ambiental y salud ligada a la producción algodónera (entrevistas). Al mismo tiempo, el huracán Mitch, una catástrofe que golpea Centroamérica en 1998 y que provoca un daño de US\$6.7 billones equivalente al 13% del PIB de la región, abre la discusión sobre el rol de las prácticas ecológicas en la agricultura

---

<sup>129</sup> El Plan es oficializado en 1993 y que hasta la fecha se considera prioritario en la elaboración de la planificación ambiental en el país

en la mitigación de los daños sufridos por los productores por el huracán (Holt Giménez 2008). Además, el sector campesino y de los pequeños productores se va a beneficiar de proyectos de asistencia técnica de ONG y gremios con financiamiento externo, basado en la filosofía de la agroecología<sup>130</sup> (promoción de la conservación de suelos, manejo integrado de plagas, combinada con otras áreas de trabajo tales como la diversificación de cultivos, la transformación, la comercialización, la organización de productores, los derechos humanos, etc.). Cabe mencionar que la dinámica asociada al surgimiento de la agroecología se basa en la preocupación de organizaciones e individuos, a menudo militantes y defensores del legado de la revolución sandinista y del campesinado, que va más allá de lo ambiental e incluye dimensiones sociales (de género en particular) y de promoción del bienestar campesino (entrevistas). Hay que señalar también que introduce en este momento en la currícula de los centros de educación superior los conocimientos agro-ecológicos y empresariales, así como las tecnologías apropiadas que requiere este tipo de producción<sup>131</sup> (Salazar 2003).

Por el otro lado, iniciativas de promoción de la agricultura orgánica que han surgido de forma limitada en los 1980' empiezan a difundirse en el país, en particular con intervenciones de certificadoras internacionales. En paralelo o a veces vinculado al movimiento orgánico, aparece en Nicaragua la certificación en comercio justo. Y paradójicamente, es sobre todo el sector agroexportador que se va a beneficiar de esta dinámica. Es preciso mencionar que en esta época, la estructura agraria de Nicaragua es la de un "capitalismo disforme" (Rueda Estrada 2013): en el interior y en particular en la región centro-norte, existe un importante grupo de pequeños y medianos productores, a veces con lógica empresarial, establecidos a nivel nacional, conectados al mercado internacional ya que se dedican en la agro-exportación en particular de café (entrevistas). Y justamente, la certificación orgánica se centra en estos años en varios rubros de exportación (entre los cuales el café, pero también cacao, miel, marañón, ajonjolí, carne, para mencionar los principales) en respuesta a la demanda europea y de EEUU y en menor medida para el mercado nacional<sup>132</sup>. En este contexto, el café es el primer rubro que ha sido certificado como orgánico. Así, la producción orgánica surge como una alternativa para relevar el sector cafetalero en un nuevo contexto político y económico (entrevistas), este sector había sufrido un gran deterioro durante la guerra, ya que en la región centro-norte se encuentra con mayor intensidad la actividad contrarrevolucionaria como consecuencia de las políticas de los 1980' (Rueda Estrada 2013).

En este momento entonces, se expende la certificación orgánica, pero con una óptica muy diferente de la visión de la agroecología en varios aspectos: con la disminución de la ayuda solidaria vinculada a la década de la revolución de los 1980', la agricultura orgánica es vista por los defensores de la agroecología como una oportunidad mercantil, para vender mejor únicamente, pero sin los compromisos de la filosofía de la agroecología. Sin embargo, cabe mencionar que una gran parte de los nuevos productores certificados orgánicos van a ser pequeños y medianos productores que han sido "olvidados" de las acciones gubernamentales de la década anterior (entrevista). Además, cabe señalar que los primeros certificadores que operan en Nicaragua son marcados por sus alianzas partidarias (a los revolucionarios o al contrario, a los contra-revolucionarios) (entrevistas).

Es así que una gran parte del movimiento de desarrollo de la agricultura orgánica responde más bien tanto a una lógica mercantil y a veces política, que a una lógica de conservación ambiental, aunque una necesidad de realizar

---

<sup>130</sup> Los enfoques son los siguientes: la promoción de una transición gradual hacia una agricultura de bajos insumos en combinación con tecnologías regenerativas; la promoción de una combinación de prácticas ecológicas y convencionales en un mismo cultivo; y la promoción de un manejo integrado de plagas.

<sup>131</sup> A finales de los 1990' se inicia la carrera de agroecología en la Universidad Nacional Autónoma de León (UNAN-León) y la reforma curricular en la Universidad Nacional Agraria (UNA), incluyendo en su diseño curricular aspectos que son fundamentales para impulsar la agricultura orgánica.

<sup>132</sup> Asimismo ha dado inicio la comercialización de productos orgánicos en supermercados a nivel nacional, incluso con acciones del gobierno que promueve la agricultura orgánica como una alternativa para incrementar los ingresos a los productores (Salazar, 2003).

cambios en las prácticas productivas, al menos de una forma parcial, acompaña la certificación orgánica<sup>133</sup> (entrevistas). En muchos casos empresas agro-exportadoras (haciendas cafetaleras en particular<sup>134</sup>) y cooperativas<sup>135</sup> que van a poderse beneficiar de los sellos a nivel colectivo de la certificación orgánica, observando las oportunidades de rentabilidad se incorporan en la dinámica (con costos de transacción inferiores al coste de incorporación de productores dispersos y con niveles de producción reducidos. Además, y como en todos los países centroamericanos, a excepción de Costa Rica donde se brinda mayor apoyo a la investigación en la agricultura orgánica, el gobierno brinda un apoyo limitado a la producción orgánica y su crecimiento se ha basado en los recursos de los productores, respaldados por financiamiento de agencias para el desarrollo de Europa y EEUU (Salazar 2003).

A manera de conclusión, la toma en consideración a nivel nacional en la década de los 1990' de la agroecología y de la agricultura orgánica en esta década, con lógicas diferentes, se opera en paralelo. Sin embargo, y sobre todo después de Mitch, estas dinámicas van a coincidir en una agenda política única que va a ser llevada adelante por equipos nicaragüenses de varias naturalezas (ONG, gremios, academia, productores y cooperativas), con respaldo de la cooperación externa. Estos grupos permiten el reconocimiento y el fortalecimiento de la agroecología y de la agricultura orgánica, y logran a organizarse hacia un solo proceso de institucionalización. Así, se crean:

- el Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible (SIMAS, 1992) que: disemina experiencias exitosas de agricultura alternativa; propicia intercambios de experiencias entre organizaciones; conforma comisiones de trabajo en varios temas.
- un Grupo de Promoción de la Agricultura Ecológica (GPAE, 1994) como instancia de coordinación (MAONIC 2009).
- un Comité Nacional de Manejo Integrado de Plagas (CN-MIP), que se fortalece mediante un acuerdo ministerial, y promueve el manejo integral de plagas a nivel nacional con un enfoque agroecológico.
- una Comisión Nacional de Agricultura Orgánica, de la Red Nacional de Agricultura Orgánica (RENOTA).

En 2003, se promulga una primera Norma Técnica para la producción orgánica (NTON, 2003) que trae como corolario la fiscalización y registro de organismos de certificación internacionales para miel, café ajonjolí, cacao y maní principalmente. Sin embargo, la academia y el grupo de organizaciones defensores de la agroecología se demarcan de esta iniciativa que, para ellos, solo propone listas de requisitos, y no la filosofía y la promoción de las prácticas ecológicas (entrevistas). Luego, en 2004, se inicia un proceso de institucionalización por primera vez con la firma entre varias organizaciones de defensa de la agroecología y de la agricultura orgánica con la Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA)<sup>136</sup>. En esta lógica, se inicia un proyecto (2005-07) en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en el marco del cual se desarrolla un proceso de consulta amplia y a nivel territorial que tiene como objetivo crear la estrategia nacional de la producción orgánica en Nicaragua, centrado en particular en siete rubros (ajonjolí, miel, hortalizas, marañón, ganadería, cacao). Sin embargo, los entrevistados del estudio lamentan la falta de socialización de los resultados de este proyecto, que, marca un punto de inflexión importante para el periodo siguiente.

---

<sup>133</sup> Varios entrevistados han mencionado esta diferencia, considerando que a contrario del movimiento agroecológico, la agricultura orgánica constituye “solo una sustitución de insumo por una botella verde, con una certificadora que solo averigua la lista de los requisitos, sin mucho ética ni equidad” (entrevista)

<sup>134</sup> A título de ilustración se puede mencionar el proyecto de producción de café orgánico en haciendas del Mombacho (Granada), que luego se extiende a otras fincas de café de tamaño más reducido (entrevistas)

<sup>135</sup> Varias cooperativas tales como CECOFAFE, PRODECOOP, SOPEXXA en Jinotega COSATIN en Boaco se conforman en esta época y benefician de certificación (entrevista)

<sup>136</sup> RUTA surge en los 1980' como una iniciativa inter-gubernamental y multi-agencial con el objetivo de brindar asistencia técnica a los gobiernos –a través de los ministerios de agricultura- de los países centroamericanos en temas relevantes para el logro de un desarrollo rural sostenible en la región.



## La introducción de la agroecología y de la agricultura orgánica en la agenda política, llevado adelante por ONG y gremios (2006-2011)

Un cuarto periodo (después de la elecciones de 2006) comienza con el regreso de los sandinistas al poder. Otra vez, se da un nuevo giro radical en la estrategia política del país. La promulgación de un Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 2012) pone las bases de una política dirigida hacia el desarrollo sostenible (Le Coq et al. 2016). Con el PNDH, el Estado vuelve a involucrarse en una gestión centralizada de la economía (y en particular del sector agropecuario), dando las prioridades a programas sociales para los marginados, pero manteniendo programas productivos dirigidos tanto a la agricultura familiar (se crea en el 2012 un Ministerio de Economía Familiar, Cooperativa, Comunitaria y Asociativa MEFCCA) como a la agroindustria, que sigue dinamizando la exportación como pilar central del crecimiento económico. La preocupación ante el deterioro del bosque también se inscribe en la agenda política con la reubicación del INAFOR bajo la Presidencia, la reducción de los mandatos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que retoma su nombre en 2015, y el rol creciente del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la planificación de las prioridades del sector agropecuario.

Justo después de las elecciones del 2006, y “tomando en cuenta el avance de la producción orgánica y agroecológica en el país, varias organizaciones de defensa de estos enfoques así como líderes de organizaciones de pequeños productores plantean al MAGFOR la necesidad e importancia de poner este tema en la agenda política del país” (MAONIC 2011). El proceso es permitido por la estrecha comunicación entre estos grupos militantes y el ministro del MAGFOR para que debajo de su liderazgo, se empiece un proceso de incorporación de un componente de agricultura orgánica y de agroecología en la nueva política nacional sectorial (entrevistas).

Así, se va a avanzar en un proceso de concertación y de alianza entre varias organizaciones, pero con liderazgo de los promotores de la agroecología en una Mesa Orgánica. El primer objetivo de la Mesa es el de analizar el marco existente de política sectorial y analizar la problemática en la producción, transformación y comercialización de los productos orgánicos, y sus causas. Estos análisis logran establecer que la prioridad es de dar los primeros pasos para la organización del sector alrededor de una política y ley que fomente y desarrolle la agricultura orgánica y la agroecología. Sin embargo, la reflexión se va a orientar en base al establecimiento de programas de promoción de siete rubros (café, cacao, ajonjolí, carne, marañón, hortalizas, apicultura, rubros que habían sido priorizado en el proyecto de consulta del IICA en 2005) y con una lógica sectorial (y de promoción de monocultivos) que va a tener consecuencias y dividir el movimiento entre los promotores de la agroecología y los de la agricultura orgánica. Sin embargo, el proceso es valioso y logra catalizar las sinergias en términos de esfuerzos, recursos y capacidades entre organizaciones del Estado, organizaciones de base, productores y otros actores, entre los cuales se encuentran: MAGFOR, INTA, GPAE, SIMAS, PCAC-UNAG, Universidad Nacional Agraria, IICA, así como cooperativas de productores y ONG (MAONIC 2011).

Este proceso a través de la Mesa Orgánica durante 2007-2008 permite elaborar dos propuestas nacionales: 1) un documento de políticas públicas que recoge enfoques y tareas para establecer un programa de apoyos concretos al fomento de la agroecología y de la agricultura orgánica, y 2) un proyecto de Ley de Fomento *“cuya intención es ir más allá de la voluntad política expresada para lograr el establecimiento del marco jurídico que determine una obligación del Estado Nicaragüense con el fomento permanente y protección de la producción agroecológica y orgánica”* (MAONIC 2011).

### **Resumen del contenido de la Ley de Fomento**

**Autoridad de aplicación:** Ministerio Agropecuario y Forestal (MAG)

#### **Objetivos:**

- Celebrar convenios con los Gobiernos municipales, Consejos Regionales, instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, para el fomento y desarrollo de la producción agroecológica u orgánica
- Formular políticas y programas enfocados al fomento y promoción de la producción agroecológica u orgánica; en las que deberá incorporarse el enfoque de género de conformidad con la Ley No. 648
- Promover el desarrollo de innovación de tecnología apropiada y gestión del conocimiento, incorporando la investigación y validación de materiales y prácticas de producción agroecológica u orgánica en los laboratorios, centros de investigación y proyectos
- Fomentar el uso de tecnologías limpias bajo un enfoque de sistema de producción sostenible y responsable
- Promover la preservación del patrimonio genético, propiciando el derecho de las y los productores al acceso, uso, intercambio, multiplicación y resguardo de los genes y germoplasmas nativos
- Contribuir a la competitividad de los productos agroecológicos u orgánicos mediante el diagnóstico, la vigilancia, certificación y aseguramiento de la calidad e inocuidad de los insumos y el producto final
- Coordinar con las instancias pertinentes para mantener la equivalencia internacional para el reconocimiento y acreditación de los sistemas de control nacional
- Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de capacidades y conocimientos técnicos de las y los productores para la implementación de la producción agroecológica u orgánica Elaborar y proponer normas jurídicas y técnicas a la instancia correspondiente para la regulación y control de la producción agroecológica u orgánica Establecer las normas técnicas específicas para la certificación de los Sistemas de Producción Agroecológica u Orgánica
- Certificar los Sistemas de Producción Agroecológica u Orgánica en base a las normas específicas de certificación que se establecieron;
- Ejecutar acciones para el rescate y validación de los sistemas de producción integrados y diversificados campesinos e indígenas;
- Coordinar con las instancias correspondientes la promoción de la capacitación y formación a todos los niveles en materia de producción agroecológica u orgánica;
- Reconocer y rescatar la práctica de los pueblos indígenas que abarque sus aspectos culturales y su conocimiento tradicional mediante la participación de sus comunidades y el apoyo a sus actividades productivas

**Fuente de financiamiento:** presupuesto público en teoría, pero en la práctica, no se puede identificar fuentes de financiamiento

**Población atendida en prioridad:** productoras y los productores cuyos sistemas de producción estén encaminados a la restauración de bosques, regeneración de suelos, reservorios de aguas y conservación de la biodiversidad

**Cobertura geográfica en el país:** nacional, pero con una voluntad (y obligación por Ley) de descentralización al menos con convenios a nivel municipal / regional en el caso de las regiones autónomas del Atlántico

**Mecanismos de implementación:** inexistentes

En 2009, varias organizaciones gremiales y cooperativas de nivel nacional, departamental y de base, con el acompañamiento del SIMAS y con el apoyo financiero de la cooperación externa (austríaca) inician un proceso de organización a nivel nacional y territorial, mediante la realización de 16 foros donde se discuten el documento de política y el proyecto de ley de fomento. Cabe subrayar que el proceso se ha llevado a cabo partiendo de una participación activa de los productores, pero también de actores públicos y privados de varias cadenas de valor (Comisión Nacional de Coordinación y Gestión del MAONIC 2011).

### **Evolución militante e introducción de nuevos objetivos para la agroecología (desde el 2011)**

El año 2011 es marcado por la promulgación de la Ley de fomento a la producción agroecológica y orgánica en Nicaragua (Comisión Nacional de Coordinación y Gestión del MAONIC 2011). Sin embargo, el documento final que es promulgado y sobre todo los términos de su aplicación a través del reglamento de la ley, van a generar una distanciamiento de los promotores iniciales de la agroecología que reprochan al gobierno el haber excluido a los representantes de la sociedad civil de la dinámica en la toma de decisión. Además, y a pesar de la existencia de

un reglamento, la Ley no se aplica. Los entrevistados explican la no aplicación de la ley por varias razones. La primera razón es la falta de un presupuesto dedicado que permita el desarrollo y la aplicación de programas específicos, incluso de investigaciones públicas para el desarrollo de tecnologías adecuadas (semillas en particular). La segunda razón es que el haber tratado de abarcar en el mismo proceso y al final en la misma ley, movimientos socio-productivos muy diferentes (de agroecología y de agricultura orgánica), que tienen trayectorias socio-históricas paralelas pero que sólo han coincidido en la agenda política, no permite tener una visión y una estrategia clara en cuanto al modelo socio-productivo que la ley busca de promover. Agregado a esta dificultad, los entrevistados reconocen la falta de un consenso sobre la misma definición y comprensión de lo que sería la agroecología: una filosofía de producción, con prácticas que excluyen firmemente el uso de agroquímico sintéticos (a contrario de la agricultura orgánica que autoriza – en la certificación al menos – una lista de productos identificados). En fin, se menciona una fuerte contradicción entre las expectativas de un gobierno que demanda un aumento rápido de la productividad y un proceso de cambio y de restauración del agro-ecosistema que es lento, que requiere mucho trabajo y no da resultados en el corto plazo (entrevistas).

En este contexto, en 2014, se crea la Alianza por la Agroecología que agrupa a los promotores más militantes de la agroecología en Nicaragua: PCAC, SIMAS, GPAE, MAONIC, Mesa Nacional para la Gestión del Riesgo y Centro Humboldt, a las cuales se agregan otras organizaciones de Guatemala, Paraguay, Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador. Rápidamente, la Alianza formula una declaratoria para fortalecer el marco legal de promoción de la agroecología con respeto a la preservación y rescate del medio ambiente, de semillas criollas y acriollas y la no introducción de transgénicos. En 2015, el Congreso de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC) en Managua, dirigido al tema sobre el cambio climático y la productividad en el sector agropecuario en Nicaragua permite a la Alianza por la Agroecología reafirmar su posición sobre el no uso de los transgénicos, mientras el sector de la agro exportación<sup>137</sup>, respaldado por UPANIC, se interesa cada vez más por los transgénicos para “modernizar” y aumentar la productividad, disminuyendo el uso de agroquímicos.

---

***El rol de la Universidad Nacional Agraria: una incubadora de redes profesionales y de ideas***

*Es interesante destacar que la mayoría de los promotores ‘militantes’ de la agroecología en Nicaragua han participado del proceso a título individual, y al mismo tiempo como representantes de organizaciones (incluso circulando en varias organizaciones en el tiempo). Las entrevistas han mostrado que estas personas tienen vínculos personales que se han creado durante los años 1970-1980’, generalmente en el marco y en apoyo a la revolución sandinista. La fuerza de este movimiento se basa en consecuencia en amistades y una fuerte confianza interpersonal. Además, el estudio ha revelado que las trayectorias individuales de varios de estos promotores tienen un mismo punto de referencia: la mayoría de ellos se formaron en el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias (ISCA que se convierte en Universidad Nacional Agraria) en los años 1980’, un periodo durante el cual la UNA recibió/contrató muchos profesores de EEUU y de Europea, con enfoque de sistemas agrarios y conocimientos de los principios de la agroecología. Fue en este momento que se dio una apertura en la currícula en la Agraria y que se introdujeron conceptos nuevos hacia una gestión más integral de plagas, etc. Hoy en día, varios de los entrevistados consideran por esta razón la a UNA (al menos en los 1980’) como una incubadora de ideas y relaciones profesionales durables (entrevistas).*

Además, por el otro lado, MAONIC sigue tratando de incidir en la promoción de la agroecología, en particular hacia el INTA. De hecho ha solicitado la asistencia técnica externa de la FAO para ver cómo el INTA podía promover mejor la agroecología. Esta situación permite reconocer que hay un esfuerzo para entender la agroecología y una cierta voluntad del gobierno (INTA) para promover la agroecología. Sin embargo, siguen muchas limitaciones: la mayoría de los técnicos agropecuarios son formados para atender a la agricultura convencional (entrevista) y sobre todo, el gobierno sigue incentivando al uso de agroquímicos (ausencia de tasación a la importación de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos).

---

<sup>137</sup> Según el periódico nacional la Prensa: solicitaron al gobierno un cambio en la ley 705, Ley sobre prevención de riesgos provenientes de organismos vivos modificados por medio de biotecnología molecular, para producir transgénicos de maíz y soya.

El análisis de la trayectoria socio-histórica de la institucionalización de la agroecología y de la agricultura orgánica en Nicaragua muestra que los conceptos se han desarrollado como respuesta “en contra de” otros modelos de desarrollo.

El capítulo pone en relieve la diversidad de organizaciones y de factores que han condicionado la construcción de los mecanismos y políticas públicas que han permitido inscribir estas dos formas de producción agropecuaria en la agenda nacional: la sociedad civil (en particular las ONG), la cooperación externa (por ejemplo el IICA, entre otras agencias), el mercado (en particular de café, de cacao o de otros rubros de los que se han desarrollado cadenas de valor en agricultura orgánica certificada e particular). Sin embargo, el análisis también muestra como unos de los desafíos es de especificar en las políticas las implicaciones y las diferencias en la conceptualización de la agroecología y de la agricultura orgánica. De ser así, el capítulo muestra que no solo es complejo el proceso multi-actores de llevar en la agenda política formas alternativas de producción, sino también, de asociar en una misma agenda estrategias que al final, no responden a las mismas lógicas ni a la misma conceptualización. Este proceso de institucionalización de la agroecología y de la agricultura orgánica en Nicaragua llega relativamente tarde (2000-2010), pero llega en un contexto internacional que lo permite. Sin embargo, la aceptación de lo que serían las prácticas de la agroecología o no, que varía fuertemente según los rubros y el lugar donde se ubican: en el Corredor seco grano basiquero, unos de los desafíos refiere al uso de semillas criollas, de cobertura del suelo durante la época seca o a uso alternativo de abonos que nos son químicos; en la Región Central Norte cafetalera, refieren a sistemas integrales y complejos de agroforestería para la producción de café (y recientemente cacao) con sellos de calidad y certificación; en la Región Caribe, refieren a sistemas de policultivos indígenas (con tumba y quema) o agro-silvo-pastoralismo mestizo, etc. siempre con desafíos diferentes.

En la actualidad, la posición del gobierno surge como dual, al ver las orientaciones de los diferentes programas públicos. Si unas de las prioridades es aumentar la productividad, en particular facilitando el acceso al crédito de productores que a menudo lo usan para comprar agroquímicos, es preciso mencionar que hay iniciativas que tratan de incorporar plenamente el concepto de agroecología en las prácticas de apoyo a los productores. Al final, en Nicaragua, hay una formulación de política a favor de la agroecología y de la agricultura orgánica, en comparación con otros países que ni si quiera hay algo que se enuncie de este modo. Es llamativo que lo haya y seguramente tiene que ver con la complejidad y particularidades del proceso político, aun con muchas limitaciones: del mismo proceso político, de la dificultad de hacer converger visiones y objetivos distintos y de la dependencia de las exportaciones. Sin embargo, una señal de compromiso del estado a favor de la agroecología sería la dedicación de un presupuesto para la aplicación de la Ley de Fomento (y no solo usar financiamiento externo para aplicar programas en la materia). De no hacerlo, una pregunta queda: ¿Hace falta voluntad política para llevar la política adelante? También hay que recordar que los desafíos en el desarrollo agropecuario y rural son importantes: pobreza, seguridad alimentaria, contaminación de agua, deforestación, minería a cielo abierto etc. que, tal vez, son prioritarios en la agenda política.

## Referencias

---

- Barahona, T. 2001. Áreas protegidas, recursos naturales: ¿con la gente o sin la gente? . *Revista Envío* **Número 234**.
- Barroso Peña, G. 2011. Reforma Agraria en Nicaragua bajo el Sandinismo. *Historia Digital* **XI:1-29**.
- Bertrand, B. and B. Rapidel. 1999. Desafios de la caficultura en Centroamérica, 496. San José: PROMECAFE-CIRAD-IRD-CCCR.
- Comisión Nacional de Coordinación y Gestión del MAONIC. 2011. LEY 765: Ley de Fomento a la Producción Agroecológica y Orgánica ed. M.S. VECOMA-EED: Publicado en La Gaceta, Diario Oficial Año CXV, 5 de Julio de 2011, No.124.
- Comité Técnico de Normalización; MAG-FOR; INTA; IICA; and MIFIC. 2007. NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA. In *11 010-07*. Managua: La Gaceta

- Craipeau, C. 1992. El café en Nicaragua. Anuarios de Estudios Centroamericano. Universidad de Costa Rica **18:41-49**.
- Figueroa Ibarra, C. 2005. La revolución sandinista y los contratiempos de la utopía centroamericana. *Bajo el Volcán* **5:67-85**.
- Fréguin-Gresh, S. and L. Razafimahefa. 2016. Establecimiento de una tipología de fincas para un mejor diseño de intervenciones de desarrollo. Managua, Nicaragua: CIRAD. Université Paul Valéry.
- Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. 2009. Plan sectorial PRORURAL Incluyente. 2010-2014, 89. Managua, Nicaragua: Gobierno de Nicaragua, MAGFOR.
- . 2012. Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016, 203.
- Gonzalez, V. 1999. La agricultura orgánica en Nicaragua. In *Simposio centroamericano sobre agricultura orgánica*, 25-38.
- Holt Giménez, E. 2008. Campesino a campesino : Voces de Latinoamérica Movimiento Campesino para la Agricultura Sustentable, 294. Managua: Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible (SIMAS).
- INIDE and MAGFOR. 2011. Informe final IV Censo Nacional Agropecuario, 64. Managua, Nicaragua: INIDE. MAGFOR
- IRAM. 2000. Estudio sobre la tenencia de la tierra. Parte I. Marco Legal institucional. In *Contrato de consultoría No. OPA-001-2000*: IRAM.
- Jarquín, M.J. 2003. Reforma institucional en Nicaragua: un reto permanente. In *VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública*. Panama city, Panama.
- Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua. 1981. Ley de Reforma Agraria.
- Larson, A.M. 1989. Nicaragua. Ecología y política: los problemas "verdes". *Envío* **97**.
- Le Coq, J.-F.; S. Fréguin-Gresh; F. Saenz Segura; F.J. Pérez; and H. Hocde. 2016. Intégration de la notion de développement durable dans les politiques publiques rurales au Costa Rica et au Nicaragua. In *Production et circulation de normes pour l'action territoriale*, ed. P.C. Philippe Bonnal, Marc Dedeire, Jean-Michel Sourisseau (sous la direction de) 193-209: Presses Universitaires de la Méditerranée.
- Maldidier, C. and R.P. Marchetti. 1996. *El campesino-finquero y el potencial económico del campesinado nicaraguense*. Managua: Nitlapan,. Universidad Centroamericana.
- MAONIC. 2009. Estado de la producción orgánica en Nicaragua, 264. Managua, Nicaragua: MAONIC.
- . 2011. Ley de Fomento a la Producción Agroecológica y Orgánica ed. MAGFOR. Managua: Publicado en La Gaceta, Diario Oficial-Año CXV, 5 de Julio de 2011, No.124.
- Marin, Y. and S. Pauwels. 2001. El Campesino Finquero. Vol II Hacia una modernización de la Región Central. Managua, Nicaragua: UCA, Nitlapan.
- Merlet, M. 1990. El siglo diecinueve en Nicaragua. Auge y derrota de la vía campesina. (1821-1934). In *Simposio Las sociedades agrarias centroamericanas*. Costa Rica: Escuela de Historia de la Universidad Nacional.
- . 2002. Fragilidad y límites de las reformas agrarias en América Central. Las enseñanzas de dos países: Honduras y Nicaragua. In *Módulo 3.El análisis actual en los mecanismos de distribución de la tenencia de la tierra*. Paris, France: IRAM.
- NITLAPAN. 2001. Tipología Nacional de Productores y Zonificación Socio-económica, 2001, ed. N. UCA, 177. Managua.
- Oficina Regional para Programas Centroamericanos. 1991. Diagnóstico de la agricultura en Nicaragua, 42. Managua: IICA - USAID, Nicaragua.
- Ortega, M. 1986. La Reforma Agraria Sandinista. *Nueva Sociedad* **83:17-23**.
- Paige, J.M. 1985. Coffee and Politics in Central America. In *Ninth Annual Conference of the Political Economy of the World System*. Tulane University.
- Pérez, F.J. and S. Fréguin-Gresh. 2015. Nicaragua: evoluciones y perspectivas de las políticas agrarias y la agricultura familiar. In *Políticas públicas y agriculturas familiares en América Latina y el Caribe: nuevas perspectivas*, ed. E. Sabourin; M. Samper; and O. Sotomayor, 261-291. San José: IICA.
- Pratt, L. and J.M. Pérez. 1997. Análisis De Sostenibilidad De La Industria Del Algodón En Nicaragua: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, CLACDS.

- Rocha, J.L. 2003. La Década de Los Años 80: Revolución En Nicaragua, Revolución En La Caficultura Nicaragüense. *Anuario de Estudios Centroamericanos, Universidad de Costa Rica* **29:69-99**.
- Rueda Estrada, V. 2013. El campesinado migrante. Políticas agrarias, colonizaciones internas y movimientos de frontera agrícola en Nicaragua, 1960-2012. *Revista de estudios históricos* **57:155-198**.
- Salazar, D.J. 2003. La agricultura organica en Nicaragua: contexto, evolucion y vision. Conferencia presentada en el Primer Foro Nacional de la Agricultura Ecológica en Nicaragua, 13. Managua: Universidad Nacional Agraria UNA.
- Urbina, R. 2005. Inventario de políticas agroambientales en Nicaragua, 37. Managua, Nicaragua: IICA.
- Vilas, C.M. 2005. La Revolución Sandinista: El legado de una década, ed. G.E. Lea. Managua.

## Capítulo 10. Análisis comparativo en escala regional

*Sabourin Eric; Niederle Paulo, Le Coq Jean François, Vasques Luis, Patrouilleau Maria Mercedes*

### Introducción

---

Como indicado en el capítulo conceptual y metodológico, no todos los elementos o criterios de la guía común se prestan a un análisis comparativo. Algunos elementos a escala de país están siendo tratados en este capítulo como tendencias transversales en la escala regional.

El análisis comparativo está concentrado en cuatro aspectos:

1. Los **“conceptos”** usados en los diferentes países y con qué convergencia o diferencia según los diferentes actores
2. Las características de los **procesos** que conllevan a las políticas a favor de la agroecología y producción orgánica
3. Las características de las principales políticas actuales a favor de la agroecología en términos de **contenidos** y su **gobernanza**
4. Los **efectos** de las políticas en términos de transición y desarrollo para la agro-ecología y sus limitaciones e dificultades.

### Los conceptos movilizados

---

En la mayoría de los países estudiados (6/8) existen al mínimo dos concepciones bien diferenciadas: la producción **orgánica y la agroecología**, que según los países o los momentos de su trayectoria se definen en tensión o hasta en oposición una a otra y en otros casos en complementariedad.

La producción orgánica es una propuesta más antigua y más fácil de reglamentar y certificar porque corresponde principalmente a la sustitución de insumos convencionales por insumos orgánicos y está ligada en general a sistemas certificados para la exportación de los productos (mercado europeo, Estados Unidos, otros países). Por su vez, la agroecología aparece como una propuesta más radical, más global y politizada y ligada a los movimientos sociales de la agricultura alternativa en la medida que no es pensada como un sistema técnico de producción sin insumos químicos, más como un proyecto de vida y de calidad de vida alternativo, con otro tipo de relación entre sociedad y naturaleza. Además, no hace foco en la certificación de la producción (si bien puede presentar modos de certificación participativos) sino más bien en el desarrollo de mercados de proximidad y de venta directa por ejemplo en ferias.

En México (al igual que en Bolivia, Guatemala, Ecuador y Perú que no son objeto de este estudio) la agroecología está además asociada a la revitalización de la agricultura campesina ligada a la tradición indígena y a la continuidad y permanencia de ciertas de sus técnicas (la milpa) pero también de sus formas sociales de producir (ayuda mutua, *minka*, etc) y de vivir (Buen vivir).

En Argentina existe una sub categoría “moderna” de la agroecología llamada *agroecología extensiva*, la cual corresponde a la Región Pampeana con énfasis en el fortalecimiento de la fertilidad y estructura del suelo, en la eficiencia en el uso de insumos y energía no convencionales locales o producidos en la finca, en bajar costos y estabilizar rendimientos para vender tanto en el mercado interno como externo. Esa forma de agroecología con uso

de superficies medias a grandes se diferencia de la agroecología familiar focalizada en el autoconsumo y mercado interno que es de naturaleza más urbana y periurbana. (Patrouilleau et al, 2017).

En Cuba, la agroecología surgió y se impulsó por la crisis de la agricultura convencional desde principios de los años noventa, primero como una simple sustitución de insumos antes de integrar las practicas agroecológicas y ganar otras dimensiones, en particular de seguridad y soberanía alimentaria, nutricional y de salud, promovida por un grupo de investigadores y profesores y adoptada por los campesinos y el movimiento de la agricultura urbana y de condiciones históricas muy específicas a la isla caribeña (Vázquez *et al*, 2017).

Por lo tanto, más que las diferencias técnicas entre las dos concepciones que en ciertos países y territorios llegan a ser mínimas, lo que importa es considerar los grupos de actores, las bases sociales, los movimientos, los mercados de destino y las referenciales globales que están atrás de cada concepción. En Chile, donde la política agrícola usa principalmente el concepto de "agricultura sostenible" existe una cierta respuesta política común que incluye también en el mismo arcabuz de política pública las medidas agro-ambientales (Martinez et al, 2017). En Brasil y en Nicaragua una misma política pública unificadora (PLANAPO en Brasil y Ley de agroecología en Nicaragua) reúne y redefine de manera política las dos concepciones, llevando a una cierta aproximación pragmática.

En otros dos países aparece una tercera categoría de agricultura ecológica o sostenible que nos es intermediaria entre agroecología y producción orgánica, pero ligada a otra trayectoria histórica. En Costa Rica y en menor grado en Chile, la propuesta agro-ambiental para una agricultura sostenible corresponde a la construcción por la política pública de una categoría técnica de apoyo al reconocimiento y la promoción de servicios ambientales o eco sistémicos producidos por la agricultura (Saenz et al, 2017).

Por supuesto, más que las definiciones de las categorías, cabe verificar si existe una gran diferencia entre los conceptos originales movilizados por la sociedad civil (básicamente academia y movimientos sociales) y su traducción en los textos de las políticas públicas que a ella se refieren. Aunque hay una tendencia a la simplificación y homogeneización tanto en el documento de la Ley de Nicaragua, como en el texto de la PLANAPO de Brasil, las principales diferencias de las dos concepciones son respetadas.

Por supuesto permanecen controversias. Ellas tienen a ver con las bases sociales y grupos de interés atrás de cada categoría y con la manera como las políticas públicas pueden favorecer uno u otro. Por ejemplo, en Argentina y Brasil la tensión que permanece viva es entre el carácter empresarial y exportador de ciertas formas de producción orgánica y la agroecología familiar y campesina que, desde luego, tiende a aproximarse a la producción orgánica familiar en pequeña escala.

A priori en la propuesta de agroecología existe una crítica radical del modelo del agro negocio que sí es compatible con la concepción de la producción orgánica. La misma controversia existe en Costa Rica entre las bases de la agroecología y de la producción orgánica, marcadas por movimientos separados y opuestos. El gobierno, de cierto modo, para no decidir entre una forma y otra, ha escogido apoyar la agricultura familiar mayoritaria y defender su estrategia económico-turística de país verde, fomentando mediante el RBA (Reconocimiento de Beneficios Ambientales) una política pública complementaria y aplicable a una mayoría del sector familiar, horticultura, floresta, pecuaria y pesca incluidas.



## Los procesos de construcción de políticas a favor de la agroecología

Sólo Brasil y Nicaragua benefician de la creación de una política pública específica nominalmente focalizada en la agroecología y producción orgánica. Eso no quiere decir que, en otros países, como lo muestran los estudios de caso, no haya una serie de instrumentos aislados o de políticas sectoriales que contribuyen para una transición agroecológica, en particular en los ministerios de medio ambiente, agricultura y desarrollo social.

Los caminos y procesos son muy diversos entre los países como lo muestran los estudios de caso, aun así, podemos identificar tres tipos de procesos dominantes, que tampoco son excluyentes uno del otro. En primer lugar, está la constancia de la movilización de la sociedad civil organizada: la gran mayoría de esos instrumentos fueron criados a partir de propuestas, presiones y reivindicaciones en particular de las organizaciones de agricultores y de las ONG ecologistas. En segundo lugar, las prácticas agro-ecológicas son motivadas a raíz de crisis y en tercer lugar a partir de iniciativas de políticas públicas del gobierno o parlamento.

### El fruto de las propuestas y reivindicaciones de los movimientos sociales

Precisamente, y a pesar de sus dificultades o falta de recursos, si hubo la creación de una política nacional específica en Brasil y Nicaragua o tal vez mañana en El Salvador, es porque la presión de los movimientos sociales a favor de la agroecología ha sido histórica y determinante, inclusive en términos de propuestas y contenidos.

En Brasil, a partir de los 2000, hubo una convergencia entre los movimientos a favor de la agricultura familiar y reforma agraria y el movimiento agroecológico, para crear una amplia red a favor de la agroecología (incluyendo sindicatos de trabajadores rurales, Iglesias, ONGs...). Además, se ha creado una institucionalidad participativa entre gobierno y sociedad civil, con espacios de diálogo entre movimientos, gestores y académicos como los Encuentros Nacionales de Agroecología (ENAs), el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible y Agricultura Familiar (CONDRAF), el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA) entre otros. El trabajo político de esa red durante los dos gobiernos del presidente Lula, y el rol determinante de las marchas de las mujeres rurales en Brasilia durante la primera administración de la Presidente Dilma Rosset, han permitido la formulación de la política pública nacional de Agroecología y Producción Orgánica (PNAPO) en 2012. En Nicaragua hubo más de 10 años de lucha de una coalición amplia de ONG y gremios “militantes” de la agroecología, de la agricultura orgánica y de defensa del campesinado, juntos con la academia, sectores del gobierno y de la cooperación internacional. Esa coalición ha logrado imponer la agricultura orgánica y la agroecología en la agenda política y la promulgación de la Ley. Sin embargo, queda una tensión con otros modelos de intensificación (semillas transgénicas, uso de agroquímicos) promovidos por la agroindustria y los gremios que sostienen el capitalismo agrario y con las políticas de exoneración de impuestos sobre la importación de agroquímicos. La ley no se aplica a falta de un presupuesto dedicado y por haber tratado abarcar movimientos socio-productivos muy diferentes (de agroecología y de agricultura orgánica) que no permiten una visión y una estrategia clara y definida. Esa tensión ha llevado a la falta de un consenso sobre la agroecología que así tiende a desaparecer atrás de la contradicción entre las expectativas del gobierno para un aumento rápido de la productividad y un proceso de restauración del agro-ecosistema que no posibilita resultados en el corto plazo (Schmitt et al, 2017).

En El Salvador, después del acuerdo de paz y con contribución de la cooperación internacional a través de ONG's, se generó apoyo a los pequeños productores con un modelo de producción de bajo a nulo uso de insumos externos. Estas organizaciones también apoyaron a pequeños y medianos productores con visión empresarial tratando de asociarlos para incursionar en mercados internacionales. En el año 2004, gracias a esas ONG se oficializó el “Reglamento para la Producción, Procesamiento y Certificación de Productos Orgánicos” y, a partir de eso, se creó un marco de apoyo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería con la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica

(CNAO), la Unidad de Registro, Control y Acreditación de la Agricultura Orgánica. En 2006 fue creado el Movimiento de Agricultura Orgánica de El Salvador (MAOES) y en 2008 se estableció la Política de Agricultura Orgánica de El Salvador. Una coalición menor de la agroecología, el Grupo de Diálogo Rural (GDR) y el Comité Nacional de Agricultura Familiar (CNAF) se moviliza para formular de forma participativa una propuesta de “Lineamientos de Política para Fomentar la Agroecología”, presentada al gobierno en 2016 y que será discutida en el marco del Consejo Nacional Agropecuario. (Moran et al, 2017)

### Procesos generados por las crisis

Aun si el fomento y apoyo a la agroecología nació generalmente dentro de sectores de la agricultura familiar y campesina, no fue siempre natural y unilateral. Hubo casos emblemáticos en que la transición para las practicas agroecológicas fue brutal y drástica a raíz de crisis que limitaron o impidieron la reproducción del modelo convencional anterior, generalmente por falta de insumos químicos.

Este es el caso de Cuba, donde el bloqueo económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, asociado a la caída de la URSS y de su apoyo mediante el suministro de insumos, fueron un factor decisivo para la autoimplementación de prácticas agroecológicas por los pequeños agricultores y por el naciente movimiento de la agricultura urbana. Luego la agroecología fue promovida en el sector campesino (ANAP-Asociación Nacional de Agricultores Pequeños) por el movimiento agroecológico de campesino a campesino (MACaC) y por el Programa de Agricultura Urbana, así como por profesionales agrónomos, veterinarios, sociólogos que trabajan directamente con los agricultores, aglutinados en organizaciones como ACTAF y ACPA y algunos proyectos de innovación. Se reconoce como pioneros en la promulgación del enfoque agroecológico en el país, a un grupo de profesores e investigadores de diferentes instituciones, quienes en el entonces Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana (ISCAH), hoy Universidad Agraria de La Habana (UNAH) convocan al Primer Encuentro Nacional de Agricultura Orgánica, el cual se celebró en mayo de 1993 (Funes, 2001).

En Argentina, son las condiciones de vulnerabilidad social desde fines de los años ochenta, la crisis de hiperinflación, luego la crisis del modelo neoliberal que motivaron políticas de apoyo a la población rural, periurbana y urbana empobrecida. Una de estas políticas importante por su continuidad en el tiempo desde 1990 y por su cobertura territorial en casi todo el país es el programa ProHuerta fundada en un enfoque participativo para incluir y difundir propuestas de producción de hortalizas para el autoconsumo, y también facilitando el acceso a insumos como semillas y componentes de granja (animales y frutales) y proyectos específicos de acceso al agua y desarrollo de ferias. La agroecología, así como la economía solidaria (trueque, monedas sociales) han sido motivadas entre los más pobres a raíz de la crisis monetaria y económica de 2001. El formato de las huertas comunitarias de ProHuerta se difunde ampliamente al calor de esta crisis. Más estable se mantiene el número de huertas familiares y escolares, que siguen contribuyendo a la seguridad alimentaria de la población. El enfoque agroecológico se fortalece también en otras políticas del Ministerio de Agricultura y del INTA de la mano de las políticas para la agricultura familiar (Programa Social Agropecuario durante los años noventa, un nuevo enfoque para el programa Cambio Rural en

2013, la creación e la Secretaria de la Agricultura Familiar y otras políticas como la Ley de Reparación histórica de la Agricultura familiar que aún no llegan a reglamentarse y por lo tanto a implementarse.

Hoy en día, las prácticas agroecológicas en unidades de producción medianas a grandes e insertas en mercados competitivos pasan a ser movilizadas como alternativas al modelo de la agricultura industrial intensiva en el uso de insumos, ante la elevación de los costos productivos del modelo de paquetes tecnológicos y la visualización de límites como pérdida de fertilidad de los suelos o resistencia a las malezas. Más allá del signo político de los gobiernos, la principal dificultad para desarrollar una política integral de agroecología reside en un sistema institucional agropecuario con deficiencias para la integración de políticas: falta de consensos entre los actores e impermeabilidad

del sistema institucional a nuevos enfoques de las políticas tradicionales de promoción de la agricultura industrial de exportación (Patrouilleau et al, 2017).

Nicaragua es también un país donde la crisis del algodón sumada a la falta de investigación y extensión en los años del liberalismo (y a la emergencia de iniciativas de gestión compartida de conocimientos por los agricultores familiares como Campesino a Campesino) han provocado un fortalecimiento de prácticas agroecológicas. El huracán Mitch en 1998 que aisló varias regiones de toda comunicación o frete terrestre, llevó también a la movilización de la agroecología por falta de insumos convencionales (Freguin-Gresh et al, 2017).

### Procesos confortados por iniciativas de los gobiernos y parlamentos

En tres de los ocho países estudiados, aun si fue en respuesta a expectativas o demandas de la sociedad civil en su conjunto, la promulgación de políticas a favor de una agricultura más ecológica fue concretada con el impulso de los gobiernos nacionales.

En México, gran país federal, la sociedad civil se movilizó mediante los partidos y sindicatos para obtener en 2001 la promulgación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), aunque ya estaba lista a ser votada desde 1997. La LDRS procura un enfoque integral del desarrollo, constreñido tradicionalmente a la producción agropecuaria y, a la vez, incorpora la perspectiva ambiental. Además, proyecta un marco programático, así como un diseño institucional para operarlo (Pulido et al, 2017).

En Chile, la política pública de los gobiernos democráticos mostró esfuerzos para añadir al abordaje exclusivamente agroambiental un enfoque multisectorial a las políticas y la inclusión de cuestiones relacionadas con el patrimonio cultural y territorial de las comunidades rurales, integrando la promoción de la agroecología. El principal ejemplo es la forma en que el INDAP, en el contexto de la promoción de una "agricultura sostenible", empieza de manera transversal y progresiva a incorporar prácticas y conceptos de la agroecología en sus programas de asistencia técnica y de subsidio a la inversión. Otro avance fue la incorporación de propuestas de la sociedad civil con el cambio de la Ley de Agricultura Orgánica en 2015, que permitió a los pequeños agricultores orgánicos con sistemas de certificación alternativos a comercializar sus productos orgánicos en cualquier punto de venta (Martinez et al, 2017).

En Costa Rica la ley de fomento de agricultura orgánica fue impulsado por actores de agricultura orgánica (MAOCO) con el apoyo de ciertos actores dentro del MAG, usando una ventana abierta por un diputado. Por otra parte, herramientas para el fomento de las practicas agro-ambientales (RBA) fueron facilitadas por la iniciativa de los funcionarios del MAG, con consultación (pero no protagonismo) de las organizaciones de productores.

La institucionalización de la agro-ecología en sí, está bloqueada por falta de interés del MAG que piensa medidas agro-ambientales (sentido amplio) o la agricultura orgánica. De otra parte, falta capacidad de impulso de los defensores de la agro-ecología, los cuales no son parte de los sindicatos de peso en la agricultura familiar y campesina de Costa Rica (Saenz et al, 2017).

---

### Instrumentos y contenidos de políticas públicas a favor de la agroecología

Además de Brasil y Nicaragua que disponen de una institucionalización de apoyo público a la agroecología y producción orgánica mediante una política nacional, la mayoría de los países del continente cuenta con sistemas

oficiales de reglamentación y certificación de los productos orgánicos y de algunas medidas agro-ambientales, más o menos desarrolladas y difundidas.

Esa realidad institucional, aunque fragmentada y con dificultad de coordinación no debe ser despreciada en términos de impactos. El riesgo de la creación de una política nacional específica es de quedar solamente en el papel, como la Ley de Agroecología en Nicaragua, y nunca ser aplicada por falta de presupuesto dedicado y de mecanismos de reglamentación.

El mismo riesgo no está descartado en Brasil. De hecho, la primera fase de la PLANAPO incluyendo un total de 125 acciones dentro de cuatro objetivos estratégicos: producción, uso e conservación de los recursos naturales, conocimientos, comercio e consumo, ha mostrado límites de aplicación por sus problemas de coordinación. El Plano PLANAPO I consistió básicamente en la coordinación de programas anteriores repartidos en 10 ministerios.

En Brasil, la principal innovación de la política Nacional de Agroecología y Producción Orgánica (PANAPO) ha sido institucional, con la creación de la Cámara Interministerial de Agroecología y Producción Orgánica (CIAPO) que reúne representantes de 10 ministerios, y de la Comisión Nacional de Agroecología e Producción Orgánica (CNAPO) que reúne representantes de gobierno y sociedad civil. Sin embargo, existe una serie de instrumentos y dispositivos públicos en diversos ministerios, que, sin ser formulados específicamente para la agroecología o la producción orgánica, contribuyen de alguna manera para la transición hacia una agricultura más ecológica (Schmitt et al, 2017). A seguir proponemos, con el riesgo de simplificación, una tipología de grupos de instrumentos y políticas que asumen esa función en los diferentes países estudiados.

### Los instrumentos de gestión de la innovación y del conocimiento agroecológico

En esta categoría están instrumentos de integración progresiva, aunque minoritaria, de la agroecología en las políticas de investigación, extensión y capacitación agropecuaria.

Varios países, a la imagen del Programa Campesino a Campesino en Nicaragua promueven el rescate experimento e intercambio de tecnologías tradicionales (Freguin-Gresh et al, 2017).

En Chile, el INDAP promueve la valorización de los sistemas de producción campesinos y los productos tradicionales por intermedio de tres instrumentos que se incluyen en los que promueven la agroecología: Sello Manos Campesinas, Valorización del Patrimonio Agrario (FIA) y el Fondo de Desarrollo Indígena (CONADI) (Martinez et al, 2017).

Este es el mismo objetivo en México del programa MASAGRO - Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional en 2010 (Pulido y Chapela, 2017)

A su vez, en Brasil esa función beneficia hace algunos años del apoyo público mediante los Núcleos de Estudios de Agroecología en las Universidades y escuelas técnicas federales (NEAs), de la promoción de la ATER agroecológica por el ex Ministerio de Desarrollo Agrario y en algunas empresas de ATER estadual, o finalmente con el programa Ecoforte promovido a partir de la creación de la PNAPO (Schmitt et al, 2017).

En Argentina, dentro del instituto de innovación agropecuaria, el INTA, también hay líneas de investigación y extensión que fomentan la agroecología, con impulso desde el año 2005, con estudios de caso puntuales, que generan conocimiento sobre las ventajas de la producción agroecológica en comparación con la convencional, pero en territorios específicos, de producciones mixtas (ganadería y cultivos) y condiciones no fácilmente reproducibles en otros contextos (Patrouilleau et al, 2017).

En Cuba, desde principios de los años setenta se creó una red de institutos de investigaciones en ciencias agrarias en los Ministerio de la Agricultura (MINAG) y de Educación Superior (MES), quienes desde entonces habían iniciado algunas investigaciones para un enfoque de agricultura diferente a la convencional, las que sirvieron de base para el movimiento de innovación que se inició desde principios de los años noventa, conducidos por proyectos de investigación pertenecientes a Programas Científicos y por ONG, quienes acompañaron a los agricultores en el desarrollo de la agroecología. (Vázquez *et al*, 2017).

### El fomento del acceso a tierra y agua

En Brasil, a pesar de la reducción de sus recursos, todavía existen dos políticas de reforma agraria, una por redistribución y la otra por compra mediante crédito, así que un instrumento de titulación de tierras de pueblos y comunidades tradicionales. En este país, cabe además notar la consolidación de la problemática del agua, sobre todo los esfuerzos en la zona semiárida con programas de construcción de cisternas y de pequeños reservorios (Programa "Una tierra dúas aguas") (Schmitt et al, 2017)..

En Cuba, con posterioridad a las leyes de reforma agraria (1959 y 1963), se realizaron diferentes procesos de distribución de tierras estatales a cooperativas y usufructuarios, mayormente agricultores campesinos y familiares. Las políticas de descentralización de la administración de las tierras y diversificación de las producciones, conducidas por el MINAG desde principios de los 90, han favorecido la autonomía de los agricultores de cooperativas y familiares para una opción más agroecológica (Vázquez *et al*, 2017).

### Los instrumentos de inserción en los mercados

Instrumentos de promoción, de regulación o de facilitación al acceso de productos agro- ecológicos o orgánicos constituyen otro tipo de herramienta presente en todos los países latino-americano para promover la agro-ecología. Esas herramientas son generalmente vinculadas a políticas más específicas cuyos objetivos principales giran o alrededor de la seguridad y calidad alimentaria y nutricional o del fomento de la agricultura familiar.

### Regulación y normativas

Todos los países estudiados disponen de un dispositivo legal de Certificación de orgánicos (Ley, reglamento, normativa etc). El sistema brasileiro de Evaluación de conformidad orgánica (SISORG) y el de Costa Rica, reflejan la ambivalencia de los conceptos de agroecología: incluyen la certificación de tercera parte por firmas y herramientas alternativas (certificación participativa y por Organismos de Control Social). Estas herramientas son en la mayoría de los casos principalmente orientado para la exportación de productos (agricultura orgánica) para cumplir con las normativas internacionales o de países compradores (USA, EU, Japón). Algunas experiencias fomentan regulaciones para productos en el mercado nacional (Brasil).

En Cuba, el Programa Nacional de Acción para la Nutrición (PNAN-1990) y varias resoluciones del MINSAP que regulan la comercialización de alimentos el Registro Sanitario (1997), la calidad de la producción (2005) y la producción orgánica (Norma cubana y Sistema Participativo de garantías en 2010).

### La comercialización y el fomento de los circuitos cortos

Los instrumentos de compras públicas de alimentos a agricultores familiares (PAA y PNAE), en Brasil ofrecen un aumento de precio de 20 a 30% a productos agroecológicos y orgánicos, lo que ha representado un importante incentivo en los municipios aislados. La propuesta ha sido difundida en la región con apoyo de la FAO, REAF y del PNUD, pero demuestra una regresión en los dos últimos gobiernos en Brasil por cuenta de la hostilidad del agro negocio, que promueve una criminalización de las organizaciones de agricultores familiares, con el apoyo de

algunos sectores del Estado. Eso generó una reducción drástica del presupuesto, dificultando aún más la participación de los agricultores menos organizados e lleva a una proporción reducida de compra de productos agroecológicos, hasta ahora, las estimativas apuntan para menos de 2% de todo el presupuesto de estos programas (Schmitt, et al, 2017).

La promoción de la comercialización de los productos agro-ecológicos u orgánicos es otra herramienta presente en muchos países de la región que contribuye a promover la producción agro-ecológica y orgánica. Se basan sobre el fomento de los circuitos cortos entre los cuales las compras públicas preferenciales a los agricultores familiares con un precio mejorado para productos agro-ecológicos u orgánicos.

### **La seguridad y calidad alimentaria y nutricional y la relación con los consumidores**

En ese campo, Brasil ha sido pionero con el programa Hambre Cero, el CONSEA y los programas de compras públicas a los agricultores familiares, en relación con las organizaciones de productores agroecológicos.

ProHuertas en Argentina es otra política histórica focalizada en el mejoramiento de la dieta familiar urbana y peri-urbana que llegó a tener un impacto en medio rural e hizo aportes a la difusión y el desarrollo de las visiones agroecológicas.

En Chile la “Mesa Público Privada sobre Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura” tiene por objetivo identificar las acciones prioritarias a impulsar y desarrollar la protección y valoración del patrimonio agrícola.

A su vez, Cuba tiene el Programa Nacional de Acción para la Nutrición (PNAN-1990) y varias resoluciones del MINSAP que regulan la comercialización de alimentos por medio del Registro Sanitario (1997), la calidad de la producción (2005) y la producción orgánica (Norma cubana y Sistema Participativo de garantías en 2010). El Programa Nacional de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar del MINAG, tiene el propósito de contribuir al autoabastecimiento en alimentos frescos e inocuos en todas las ciudades y pueblos del país.

En México, vale mencionar el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria, a partir de 2008), la Legislación para la soberanía alimentaria y la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional (2005).

### **Los instrumentos de incentivos agro-ambientales**

Primero hay legislaciones y regulaciones de corte ambientales que, de forma directa o indirecta, son herramienta a favor de la agro-ecología. Podemos citar por ejemplos en Costa Rica, la Ley de suelos quien regula ciertos usos de las tierras et las regulaciones sobre el uso de químicos o en Cuba el Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (1990), la Ley No 81. Nueva Ley de Medio Ambiente (1997) y la Estrategia Ambiental Nacional (1997), que disponen de presupuestos anuales para realizar inversiones, así como para el pago a los agricultores que realizan prácticas de conservación de suelos y de bosques.

Luego, muchos países desarrollaron incentivos económicos para la protección del medio ambiente y recursos naturales, los cuales contribuyen directamente o indirectamente a promover la agroecología. Los programas de Pago por Servicio Ambiental (PSA) bolsas verdes para protección de la biodiversidad (o eficiencia energética en Chile) fueron desarrollados primero en México para protección del agua y luego en Brasil con los programas PDA e Proambiente en Amazonia. En Costa Rica la gama de políticas agro- ambientales es una de las más desarrolladas a favor de la agricultura familiar por medio de herramientas incitativas para adopción de prácticas favorable al medio ambiente (RBA). Son pagos parciales en monetario (20-30% de inversión adicional), ex post, por adopción de ciertas prácticas (barreras vivas, etc...)

Finalmente, en el marco de las políticas para enfrentar el cambio climático, se desarrollaron medidas a favor de la agroecología. Es el caso en los planes de Cambio Climático (CC) como el Plano ABC de Brasil por ejemplo. En Chile el “Comité Técnico Ministerial de Cambio Climático” que reúne a los distintos servicios del Ministerio, y coordina las líneas de trabajo en mitigación, adaptación, y posición para negociaciones internacionales. En Costa Rica, hay mecanismos de apoyo a ciertos sistemas como sistema agro-forestal (silvo pastoril) en el marco de NAMAs (mitigación CC en agricultura) o otros mecanismos como el de reconocimiento vía galardón: del programa bandera azul ecológica.

### **Instrumentos transversales: las políticas de apoyo a la agricultura familiar**

Una serie de instrumentos que tampoco mencionan la agroecología o la producción orgánica se revelan de suma importancia y tienen un impacto intersectorial y transversal a favor de prácticas agrícolas más ecológicas.

#### ***Instrumentos de regulación***

Las más importantes para los productores agroecológicos y campesinos han sido las políticas específicas focalizadas en la categoría de la agricultura familiar vigentes en Chile, Cuba, Brasil, Argentina históricamente y luego en El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y México. Generalmente, esas políticas garantizan acceso a asistencia técnica e instrumentos de presupuestos condicionados y de crédito, los cuales han involucrado espacios de negociación y de participación de los agricultores familiares. En Cuba existe un protagonismo del Movimiento Agroecológico Campesino a Campesino (MACaC) de la ANAP desde 1997 y del Programa de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, conducido por el INIFAT desde 1994.

En Chile el “Comité de Agroecología” coordinado por INDAP y que reúne a organizaciones campesinas de representación nacional, para generar un espacio de discusión y análisis conjunto que apunte a promover y desarrollar la agroecología en la agricultura familiar campesina de Chile, mediante proyectos y/o programas específicos.

En Argentina, otras políticas que toman algunos principios agroecológicos en sus intervenciones, se revelan instrumentos con dificultades de implementación (Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental del bosque nativo y la Ley de Reparación histórica de la Agricultura Familiar que no fue reglamentada ni implementada).

#### ***Los instrumentos de reducción de uso de pesticidas***

Las políticas nacionales (Chile, Brasil) de limitación de uso de pesticidas sufren una violenta resistencia del sector empresarial y aun si en sus objetivos e impactos son las que tendrían más efectos en la salud y preservación del medio ambiente, son las más difíciles de hacer votar y luego de implementar. En Argentina existen reglamentaciones municipales de prohibición del uso de agroquímicos en los perímetros de localidades rurales que sugieren formas de producción agroecológica, existen también distintas normativas provinciales pero no existe una norma nacional integral que ordene la situación actual sobre el tema, la misma se encuentra en discusión hace unos años en el Congreso, con dificultades para alcanzar consensos.

En México existe la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, 2005 contribuye a la agroecología en la medida que incluye precauciones para evitar la pérdida de agro biodiversidad y efectos sobre la diversidad silvestre. Es de interés por la presunción de riesgo para la biodiversidad y la salud humana (DOF 2005a). Cuenta con su reglamento publicado en 2008 y un protocolo denominado Régimen de Protección Especial del Maíz. ENMST - Estrategia y Programa Nacional para el manejo Sustentable de Tierras 2010 – 2015 ENBIO, Estrategia Nacional de Biodiversidad (2016).

En Cuba existe el Decreto-Ley 153 de 1994 (Regulaciones de la sanidad vegetal), que es aplicado por la red de unidades del servicio de sanidad vegetal del MINAG, quienes asignan, asesoran y controlan el uso de plaguicidas por los diferentes tipos de agricultores, así como monitorean sus efectos y residuos en cultivos y medio ambiente. También existe el Centro Nacional de Seguridad Biológica (Resolución 67/96 del CITMA), órgano regulador de la seguridad biológica, que concede autorizaciones o licencias para el uso confinado y las liberaciones al medio ambiente de organismos vivos modificados (Vázquez *et al.*, 2017).

### Los obstáculos e frenos a las políticas más ecológicas

Las limitaciones y los factores y actores contrarios a la agroecología son comunes a varios países estudiados. Fuera de la hostilidad y lobby parlamentario del sector del agro negocio y de la agroindustria, la mayor dificultad es la coordinación tanto entre políticas sectoriales como entre movimientos sociales agroecológicos. Hemos mencionado el caso de Brasil donde después del golpe jurídico parlamentario hubo la extinción del Ministerio de Desarrollo Agrario dedicado a reforma agraria y agricultura familiar y el corte de los recursos para las compras públicas y la agroecología.

En Argentina la Secretaría de Agricultura Familiar creada en 2014, con la llegada del nuevo gobierno a fines de 2015 ha quedado paralizada (sin autoridad ni presupuesto), y detenido el proceso de reglamentación de la Ley para la Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. Sí en cambio tiene continuidad la política de estímulo a la producción orgánica con escaso financiamiento, pero con mucha vinculación con los actores del sector de productores orgánicos. Como la producción orgánica está orientada a los productos de exportación, el público de esta política es totalmente diferente del de las líneas de ProHuerta y de algunas de las de INTA, por lo cual hay una dispersión en las políticas institucionales, con poca integración.

### Principales efectos de las políticas públicas a favor de la agroecología

---

Este último capítulo presenta una síntesis no exhaustiva de resultados y avances de las políticas a favor de la agroecología en América Latina y el Caribe y las principales categorías de limitaciones y obstáculos que encuentran hoy día.

En la mayoría de los países estudiados no existen estadísticas confiables sobre los productores orgánicos y agroecológicos ni evaluaciones de las primeras políticas a favor de la agroecología por ser muy recientes. Sin embargo, los estudios por país han permitido destacar resultados notables de algunos instrumentos y programas históricos y emblemáticos, que fueron o son objeto de difusión regional mediante las agencias de cooperación. Otros efectos son los observables en la escala de los primeros territorios que muestran una densidad de redes de agricultores agroecológicos como en Brasil.

### Instrumentos históricos y emblemáticos

#### *ProHuertas Argentina*

ProHuerta ha sido un canal de difusión de la agroecología entre los sectores populares urbanos, periurbanos y rurales. Siendo una política para mejorar la seguridad alimentaria de la población vulnerable, la adopción de la huerta orgánica/agroecológica como componente principal del programa se dio por varios factores:

- Por la ubicación de las huertas en zonas urbanas y periurbanas.
- Por la imposibilidad de controlar el uso de productos agroquímicos
- Por los limitados recursos monetarios de la población para costear insumos.
- Por la baja calidad productiva de los suelos y su necesidad de mejora.



El programa está presente en todo el país. En 2016 se contabilizaron 464.527 huertas en funcionamiento asistidas por el programa, se realizaron 676 ferias en todo el país, con 8562 productores. El mismo año el programa ejecutó alrededor de 103 millones de pesos (alrededor de 6,5 millones de USD), además de los recursos institucionales que involucra de la estructura de extensión de INTA. También ha sido una plataforma de experimentación de la agroecología aplicada a pequeñas unidades productivas (huertas familiares y comunitarias), con aprendizajes comunitarios e institucionales.

El Programa creció a partir de la obtención de un presupuesto específico aportado por el Ministerio de Desarrollo Social (por entonces Secretaría) y con la adhesión que iban haciendo los distintos Centros Regionales de INTA, también se extendió por medio de convenios con los municipios, que aportaban técnicos municipales trabajando junto con los de ProHuerta, infraestructura (alguna oficina) y movilidad y a partir del trabajo con organizaciones barriales y sociales (parroquias, organizaciones de trabajadores desocupados, todo tipo de instituciones locales).

La posibilidad de abastecer el set de semillas hortícolas que necesitó el Programa para cumplir con sus objetivos estuvo dada por el desarrollo paralelo en INTA de un proyecto Minifundio vinculado a la producción de semillas en organizaciones cooperativas de la Provincia de San Juan. A partir de esta experiencia es que se funda la Cooperativa FECOAGRO que se ocupa de proveer las semillas al Programa. Fue la forma organizativa que se encontró para abastecer en escala con semillas hortícolas. Aunque la producción de semillas no dejó de ser un tema de recurrente reflexión y revisión por parte de los ejecutores del Programa. Y se desarrollaron proyectos complementarios en INTA para promover la autoproducción de semillas y el rescate y valorización de especies locales. En su desarrollo el Programa fue sumando componentes (como el de granja) y proyectos complementarios (de acceso al agua, de comercialización).

### *Compras públicas en Brasil*

El Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), creado en 2003 y el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), alterado en 2009 para garantizar mercado a los agricultores familiares, han sido promotores de la producción orgánica y agroecología en Brasil. Por medio del PAA el Gobierno Federal adquiere alimentos de agricultores familiares a través de mecanismos simplificados, que son fornecidos para: personas en situación de vulnerabilidad social, redes de equipamientos públicos de alimentación y nutrición, instituciones asistenciales y escuelas de la red pública o filantrópica o para la formación de estoques públicos de alimentos. A su vez, el PNAE tiene por objetivo garantizar la alimentación de estudiantes de la red pública durante el período escolar. Tanto en el PAA como en PNAE son priorizados productos orgánicos o agroecológicos (con 15 a 30% de aumento del precio de compra), como también los producidos en municipios o regiones donde se localizan las instituciones demandantes. La garantía de comercialización ofrecida contribuyó para la diversificación de los sistemas productivos ampliando, así posibilidades de aplicación de principios e prácticas agroecológicas.

Las principales críticas dirigidas por el movimiento agroecológico al PAA y al PNAE no eran sobre el referencial que orienta ambos programas. Focalizaran las condiciones de gobernanza e operación. Esos programas pasarán a exigir de los agricultores y de sus organizaciones condiciones de infraestructuras imposibles de reunir, dificultando sobretodo la participación de los menos capitalizados y/o organizados. Esto ha contribuido para que la proporción de productos agroecológicos no alcance más do que 2% del valor total invertido (Porto, 2016).

Además, la creciente “burocratización”, por la presión de los órganos de control del Estado, hicieron de los “mercados institucionales” verdaderas “prisiones” para algunos agricultores familiares, investigados e presos por supuestos desvíos de recursos que, muchas veces, eran ligadas a la inflexibilidad de la política pública, por dificultar, en función de procedimientos burocráticos, la sustitución de alimentos en caso de indisponibilidad de un ítem específico previsto en el contrato.

### *Rescate de tecnologías tradicionales en Chile*

El estudio estima un 1.500 usuarios/as del INDAP que se reconocen agroecológicos o tienen certificación orgánica. Esta cifra representa alrededor del 1% del universo total de usuarios del Instituto.

Las principales prácticas utilizadas por estos agricultores/as y que los hacen considerarse agroecológicos, son: (a) elaboración y/o aplicación de bio-insumos; (b) no aplican agroquímicos; (c) incorporan rastrojos al suelo; (d), hacen rotación de cultivos (leguminosas); (e) utilizan menos maquinaria que la agricultura convencional; (f) conservan sus propias semillas y hacen intercambios de ellas con otros agricultores.

### *El control biológico integrado a la producción agropecuaria en Cuba*

Uno de los programas pioneros en la conservación de la biodiversidad fue el de control biológico del bórer de la caña de azúcar, principal cultivo agrícola del país, establecido desde principios de los años cincuenta, que fue reforzado en 1982 por el Ministerio del Azúcar y que en 1988 el Ministerio de la Agricultura abrió para la producción agropecuaria, este último también reforzado en 1993 como una necesidad de la crisis económica, programas que concebían la sustitución de los plaguicidas químicos por agentes de control biológico. Estos programas, actualmente integrados, poseen una red de Centros de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos (CREE) y varias plantas industriales para la producción de bioplaguicidas, todos ubicados en las áreas de producción agrícolas, con la misión de producir (o reproducir) organismos (bacterias, hongos, nematodos, insectos) para su utilización por los agricultores localmente (Vázquez et al., 2017).

Otras políticas sobre biodiversidad, que han sido generalizadas se relacionan con las variedades, razas y especies productivas, las áreas forestales y protegidas, así como relativas a la salud de las plantas y los animales productivos, en las cuales se ha evidenciado la preocupación por la conservación y una utilización racional.

### *El Programa Campesino a Campesino en Nicaragua*

ONG nacionales e internacionales apoyadas por la cooperación técnica externa, promovieron prácticas alternativas para el campesinado y los productores familiares, experimentando con ellos nuevas técnicas agronómicas. Cabe mencionar la experimentación de prácticas de agro-forestaría (1982-83) y, sobre todo, el Programa Campesino a Campesino (PCAC) (Holt Giménez, 2008).

La iniciativa más conocida y reconocida es el PCAC, que nace como unos intercambios de aprendizaje entre pequeños productores en Guatemala, en Chiapas, México, y en Nicaragua. En particular, los productores mexicanos conocedores de la agroecología y las metodologías de campesino a campesino visitan los campos nicaragüenses en un contexto revolucionario y de solidaridad política. Los primeros productores nicaragüenses beneficiándose del PCAC son organizados en la Unión de Agricultores y Ganaderos (UNAG), unos de los gremios más importantes en el país que mayormente representa el campesinado y los pequeños productores. El PCAC busca experimentar la transmisión de conocimientos horizontales para promover la conservación de los recursos, en particular el suelo (abonos verdes, compost) pero también la diversificación de cultivos y las semillas criollas con un objetivo de seguridad alimentaria (maíz, frijol, arroz, sorgo y frutales). El PCAC surge en varias macro-regiones del país, en particular en las laderas y mesetas del Pacífico donde el cultivo intensivo del algodón ha impactado fuertemente el medio ambiente y en el interior, con productores individuales no atendidos por el gobierno, los “campesinos de la guerra”. Sin ninguna asistencia técnica, el PCAC se convierte en un catalizador del cambio productivo y social en el campo. Sin embargo, y a pesar de los impresionantes resultados en la conservación del suelo y del agua, la agrobiodiversidad etc., los promotores del Movimiento CAC son muy cuestionados por quienes defienden la agricultura convencional, que siguen imponiéndose como modelo de producción dominante a nivel nacional (Holt Giménez, 2008).

## Ejemplo de territorios agroecológicos

En Brasil la promoción local de la agroecología por la sociedad civil organizada tuvo un papel extremadamente activo en la formulación, implantación, traducción o articulación de políticas públicas al ejemplo del territorio de la Borborema en la región Agreste del Estado de la Paraíba, en el Nordeste semiárido. La acción colectiva fue un factor decisivo para el acceso a las políticas públicas, para su adaptación a los contextos locales e la articulación, en diferentes coyunturas, de los instrumentos de acción gubernamental. El apoyo de la cooperación internacional fue también importante como en muchos países o regiones más pobres del sub-continente.

La relación establecida por la red de agroecología de la Borborema con las políticas públicas paso por una larga trayectoria e importantes modificaciones en los 20 últimos años, pudiendo ser dividida en tres momentos: un movimiento inicial de crítica a las políticas públicas destinadas al territorio; un segundo período marcado por un esfuerzo de construcción de propuestas y de movilización social; una fase más reciente caracterizada por un proceso permanente (no sin tensiones) de participación en la formulación y gestión de políticas públicas y que corresponde, al nivel federal, a la fase final del gobierno Fernando Henrique Cardoso y a los gobiernos Lula e Dilma Rousseff. Una de las primeras acciones emblemáticas en la Borborema fue la lucha para el reconocimiento público de las semillas locales producidas y conservadas por los agricultores. La iniciativa partió de las bases comunicarais con el apoyo de la ONG ASPTA y de los Sindicatos de Trabajadores Rurales municipales a fundos rotativos para acceso a diversos recursos: estercos para la papa, palma forrajera, cisternas para estoque de agua y entre otras, semillas locales de frijol y maíz principalmente. La revitalización por las Ong de los Bancos de Semillas Comunitarios (BSC) y su constitución en una red de intercambios locales ha ofrecido una alternativa a la distribución pública de semillas híbridas sin interés para los consumidores como para los productores. Progresivamente por medio de la Articulación del Semiárido Paraibano, el movimiento hizo votar una Ley de Semillas del Estado de la Paraíba en 1999, que reconoce el valor de semilla a los granos producidos por los BSC y autoriza su distribución por la propia red como por los servicios del Estado. Esa conquista ha sido posible porque el movimiento organizó una articulación amplia con apoyo de la iglesia, de partidos políticos, pero también de la universidad y de la investigación agropecuaria, inaugurando una colaboración fructífera. Fue una cooperación agricultores/investigación que ha invertido la lógica: los agricultores pidieron a los investigadores temas de estudio y ofrecieron sus parcelas como experimento en condición real. La ASA Paraíba y el ASPTA han así constituido a partir de los sindicatos rurales municipales, una red de agricultores experimentadores (A-E) que, durante diez años experimento, difundió prácticas agroecológicas a partir del rescate de recursos y referencias locales, de la producción de insumos agroecológicos locales y ha asegurado la capacitación de millares de agricultores para entrar en un proceso de transición agroecológica.

Así, en 2016 la Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuarias – Embrapa lanzó el *Comunicado Técnico*, resultado de una investigación participativa realizada en los municipios de Remigio y Areial, con un diagnóstico de 67 variedades de frejol en seis comunidades. Fueron realizados ensayos comparativos con 10 variedades de semillas frejol, siendo siete de semillas criollas y tres comerciales. Esas variedades comerciales son las distribuidas por medio de política pública en el semiárido. El experimento comprobó la superioridad de las semillas locales cuando sometidas a condiciones climáticas desfavorables. Todas las variedades criollas de los bancos comunitarios se comportaron mejor que las comerciales.

Otra colaboración de mucho impacto entre el movimiento agroecológico y el gobierno federal fue la gestión local y territorial en la Borborema del Programa Un Millón de Cisternas Rurales (P1MC), creado en 2003, y el Programa Una Tierra e Dos Aguas (P1+2), creado en

2007. Son ejemplos de interlocución entre sociedad civil organizada y Estado para la construcción y operación de políticas públicas. Son dos resultados emblemáticos de la consolidación de la propuesta de Convivencia con el

Semiárido, negociada por la sociedad civil nordestina agregada en la Articulación del Semiárido Brasileiro (ASA). El P1MC visa garantizar el acceso a agua de calidad para el consumo familiar por medio de la construcción de cisternas de placas de cemento con capacidad de estoque de 16 mil litros de agua de lluvia recuperada de los techos. El P 1+2 busca fortalecer los efectos del P1MC, adicionando una “segunda agua (+2)”, que es destinada a la producción agrícola y animal. Son instrumentos que han permitido a las familias de aumentar, diversificar y estabilizar su producción a partir de un enfoque agroecológico, a ejemplo de los bancos de semillas, sistemas agro-forestales e de los quintales productivos (frutas, hortalizas y plantas medicinales).

### Limitaciones y dificultades

#### *Problemas de publicidad, agenda y coordinación*

En varios países aparece como primera dificultad la fragmentación y dispersión de los instrumentos de política pública que podrían ser movilizados a favor de la agroecología, eso es una observación común a todos los países inclusive los que disponen de una política pública específica para la agroecología o la producción orgánica (Brasil, Costa Rica, Nicaragua, Cuba).

La falta de coordinación y dispersión o contradicción aparece entre los movimientos sociales (Argentina, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica) y perjudiquen a un puesto en la agenda política de políticas de agro-ecología o de un implementación coordinada y efectiva de las políticas existentes.

Así, muchos instrumentos y presupuestos aprobados no fueron ejecutados por falta de institucionalidad (desaparición de las instituciones *ad hoc* en los ministerios) de un lado y por cuenta de la desorganización o desmovilización del movimiento (Costa Rica, ...)

En Cuba a pesar de los antecedentes históricos en la región, se siente la necesidad de una mayor articulación y coordinación inter sectorial y multi-niveles con la descentralización en la administración de las tierras y el sistema de mercados de alimentos.

#### *Políticas públicas adversas*

El segundo problema viene de la dominación de políticas públicas contrarias hasta en los mismos órganos o ministerios que se traduce por visiones y proyectos concurrentes:

- Producción orgánica y agroecología son vistas como más un rubro y no como un modelo de desarrollo de la agricultura en el sentido amplio.
- Existen programas de entrega masiva de fertilizantes y semillas mejoradas e incidencia de las empresas transnacionales que comercializan agroquímicos (Brasil, Nicaragua, El Salvador, Argentina, México). En Nicaragua existen subsidios a la compra de insumos químicos importados.
- El paradigma de la agricultura convencional está muy establecido el currículo de escuelas técnicas y universidades como en los sistemas de asistencia técnica e investigación tecnológica; hay una gran resistencia al cambio.
- En la medida que las compañías financian la actividad académica, la investigación, divulgación y formación de profesionistas, se reproduce el desequilibrio de resultados en contra de opciones como la agroecología.
- Aun en Cuba existe el riesgo de recuperación y expansión de la agricultura convencional, establecida para las producciones especiales en polos productivos (importación de equipos, implementos e insumos), que puede ser estimulada por el fortalecimiento de las empresas estatales.

### *Carencia de informaciones y estadísticas*

En todos los países estudiados no existen estadísticas confiables sobre productores orgánicos salvo los que son registrados por los organismos de certificación en general por la exportación. No hay como contar los agroecológicos que no son certificados a no ser por medio de sus propias organizaciones que no están suficientemente coordinadas. Finalmente hay muchas más dificultades para identificar el número de agricultores que, aunque no se clasifican como productores de alimentos agro-ecológicos u orgánicos, a partir de los programas de políticas públicas incorporaran prácticas más sostenibles que apuntan en dirección a la transición agroecológica. Incluso en algunos países hay falta de censos actualizados sobre la producción y la estructura social agraria.

En el caso de políticas ya bien implantadas no existen evaluaciones, sino muy parciales, sea de la PANAPO 1 en Brasil o del programa de reconocimiento de beneficio ambiental en Costa Rica. De un modo general, la investigación sobre agroecología es aún bastante incipiente, o muy académica y fraccionada y poco volteada para responder a demandas sociales de los productores.

---

### **Consideraciones finales**

#### **Principales aportes**

En la mayoría de los países estudiados los principales resultados y avances de las políticas han sido la difusión de principios y conceptos agroecológicos, la innovación tecnológica, la demostración científica de su validez y eficiencia.

Estos aportes generales pueden ser declinados en avances específicos según los países, apenas indicamos a seguir algunos ejemplos notables:

- La consolidación progresiva del tejido organizativo de productores, ONG's de apoyo, academia y funcionarios con interés para una nueva forma de agricultura orgánica o ecológica (todos los países).
- El reconocimiento de los actores de los movimientos de agroecología y producción orgánica y la apertura de espacios de participación, consulta o negociación institucionalizados (Brasil, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica)
- El entendimiento de que la agroecología y la producción orgánica ayudan a la adaptación y mitigación del CC
- La contribución a la transición agroecológica de las políticas de soberanía y seguridad alimentaria asociadas con el apoyo a la agricultura familiar, dado el alto costo de los insumos agroquímicos sintéticos y del efecto dañino de los plaguicidas en la sociedad y en zonas de cultivo intensivo con alto uso de agroquímicos.
- La agroecología se ha desarrollado muy ligada con el quehacer académico en Cuba, México, Brasil y El Salvador, pero con insuficiente divulgación hacia las ciudadanías y los actores (económicos) dominantes de los sectores agro-pecuarios.

#### **Tendencias regionales**

##### **Factores favorables**

- Existe una demanda del mercado urbana creciente pero generalmente indiferente a la distinción entre productos orgánicos o agroecológicos
- Hay muchas demandas locales: ferias e restaurantes, circuitos cortos e compras públicas
- Esa demanda depende también del mejoramiento de la educación, información e higiene alimentaria

- Existe cada día más sensibilización sobre los problemas de salud y calidad de alimentos
- Los productores procuran soluciones a sus crecientes problemas de conservación de sus suelos;
- Se nota una organización progresiva de los actores de la producción orgánica y agroecología

### Dificultades y obstáculos

- Existe una enorme asimetría con el agro negocio y su poder de convencer los actores políticos con su poder de exportación y aporte de divisas
- El sector permanece en la invisibilidad en las estadísticas
- Hay demasiada división y dificultad de coordinación de los movimientos sociales y de productores
- Falta de investigación y extensión adecuada y competente, y de un cambio de paradigma en la formación de técnicos agropecuarios
- Hay de hecho un cambio de generación ya que existen capacitaciones profesional y académica que promueven el enfoque agro-ecológico pero son recientes y los cuadros (en general más viejos) en la institucionalidad agro-pecuaria siguen siendo formateados con paradigma productivista basado sobre intensificación de insumos químicos, según el modelo de la revolución verde.

### Lecciones y recomendaciones a partir del estudio regional

---

1. La importancia de las crisis (financieras, geo-políticas, climáticas) en la adopción de prácticas agro-ecológicas es muy notable. Sin hacer política ficción, deja pensar que es una alternativa muy sostenible y resistente (o resiliente) para enfrentar las consecuencias de las futuras crisis del planeta o de la humanidad
2. Aun si la agroecología y la producción orgánica no son sub rubros o sub categorías del segmento de la agricultura familiar e campesina, tienen mucha aproximación. Eso resalta el rol esencial de las políticas públicas de apoyo a la agricultura familiar en la consolidación de bases e instrumentos favorables a una transición agroecológica.
3. Las propuestas de apoyo para el desarrollo de la agricultura agroecológica deben ser pensadas a la escala territorial y no del sistema técnico de la unidad de producción o aún menos en la escala de la parcela cultivada;
4. El territorio o terruño es la escala del manejo de los recursos naturales y de los paisajes, de la vida social, de las redes de gestión del conocimiento y de los mercados locales, regionales y nacionales. Se ha evidenciado el papel esencial para el desarrollo de la agroecología, de las redes de gestión del conocimiento agroecológico y de las redes de circuitos cortos
5. esfuerzos en coordinar agendas entre movimientos sociales pro agroecología y agricultura orgánica frente al sector muy organizado y poderoso del agro-negocio “verde” o aún más del sector corporativo de la grande agricultura productivista convencional
6. necesidad de visibilizar los aportes de la agricultura agro-ecológica y orgánica a nivel continental integrando los criterios económicos, sociales, ambiental y de salud (y no solo estudios de casos locales de experiencias).

### Perspectivas

---

La perspectiva de formulación y implementación de políticas públicas a favor de la agroecología en la escala regional latinoamericana no es diferente de lo que ocurrió a nivel nacional en algunos de los países estudiados. El proceso pasa, antes de todo, por la constitución de coaliciones de causa amplias pero lideradas por las organizaciones de agricultores.

Se puede mencionar varias iniciativas regionales

- El Movimiento Agroecológico Latinoamericano y del Caribe (MAELA) <https://maelac.wordpress.com>
- Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur, COPROFAM [www.coprofam.org](http://www.coprofam.org)
- La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo - CLOC-Vía Campesina [www.cloc-viacampesina.net](http://www.cloc-viacampesina.net)
- Esas organizaciones regionales y otros movimientos nacionales se han federado en 2013 en la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe <http://alianzasoberaniaalimentaria.org> .
- La Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar del Mercosur REAF [www.reafmercosul.g](http://www.reafmercosul.g) .

Últimamente y con más vigor desde 2014, la FAO viene a nivel mundial como regional fomentando informaciones, coordinaciones e intercambios entre los gobiernos y los movimientos de productores agroecológicos en dirección a la formulación y adopción de recomendaciones y directrices a favor de una transición agroecológica. Un eje temático de las acciones de la FAO regional es la agroecología como se refleja en la página de la plataforma de conocimientos sobre agricultura familiar (<http://www.fao.org> ).

Ya se llevaron a cabo a iniciativa de la FAO dos seminarios sobre agroecología en América Latina en Brasilia (junio de 2015 [www.fao.org](http://www.fao.org)

Entre las perspectivas de apoyo a políticas públicas a favor de la agroecología debe-se mencionar el trabajo de formulación y actualización de las directrices sobre agricultura familiar en el GT AF de la CELAC donde la agroecología pasa a ser un tema cada día mas fuerte asociado al de la seguridad y soberanía alimentar (<http://www.fao.org> **Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.**).

Al nivel de la investigación, a pesar de los incentivos regionales mediante la SOCLA ([https:// https://www.socla.co](https://www.socla.co) ).

Una iniciativa de la sociedad civil en la escala regional, el Proyecto de la Alianza por la Agroecología en América Latina financiado por la Comisión Europea durante 4 años reunió los esfuerzos de 9 ONG especializadas en estudio y apoyo a los agricultores para la transición agroecológica. El proyecto aplicado en siete países procuro sistematizar las dinámicas de agroecología a nivel local y territorial, así como los avances en las políticas de agricultura familiar de instrumentos más favorables a la transición agro-ecológica.

Precisamente, al igual que el presente trabajo, una de las conclusiones del estudio del Proyecto Alianza es que el apoyo a la agroecología debe ser pensado y adoptado en la escala del territorio y no en el de la parcela o del sistema técnico de la unidad de producción.

### Referencias bibliograficas

---

Fréguin-Gresh, S. (2017) Agroecología y Agricultura Orgánica en Nicaragua. Génesis, institucionalización y desafíos in Red PP-AL Políticas públicas a favor de la agroecología en América Latina y El Caribe, Brasilia, FAO, Red PP-AL, en ese volumen

Funes, F. (2001) El movimiento cubano de agricultura orgánica. Pp.15-38. En: Transformando el campo cubano. Avances de la agricultura sostenible. Editores: F. Funes, L. García, M. Bourque, Nilda Pérez y P. Rosset. Ed. ACTAF. La Habana, Cuba.

Le Coq J.F.; Sabourin E.; Sachet E.; Vázquez L.; Schmitt C. J. (2017) Conceptos de agroecología y marco analítico in Red PP-AL Políticas públicas a favor de la agroecología en América Latina y El Caribe, Brasilia, FAO, Red PP-AL, en ese volumen

Martínez Torres H. Namdar-Iraní M.; Saa Isamit C. (2017) Las Políticas de Fomento a la Agroecología en Chile in Red PP-AL Políticas públicas a favor de la agroecología en América Latina y El Caribe, Brasilia, FAO, Red PP-AL, en ese volumen

Moran W. (2017) Políticas a favor de la producción orgánica y agroecología en El Salvador in Red PP-AL Políticas públicas a favor de la agroecología en América Latina y El Caribe, Brasilia, FAO, Red PP-AL, en ese volumen

Patrouilleau M.M.; Martínez L.E., Cittadini E.; Cittadini R. (2017) Políticas públicas y desarrollo de la agroecología en Argentina in Red PP-AL Políticas públicas a favor de la agroecología en América Latina y El Caribe, Brasilia, FAO, Red PP-AL, en ese volumen

Pulido Secundino J.; Chapela y Mendoza G. (2017) Agroecología en México. Marco de políticas públicas in Red PP-AL Políticas públicas a favor de la agroecología en América Latina y El Caribe, Brasilia, FAO, Red PP-AL, en ese volumen

Sáenz-Segura F.; Le Coq J.F.; Bonin M. (2017) Políticas de apoyo a la agroecología en Costa Rica in Red PP-AL Políticas públicas a favor de la agroecología en América Latina y El Caribe, Brasilia, FAO, Red PP-AL en ese volumen

Schmitt C. J.; Niederle P.; Avila, M.; Sabourin E.; Palm J.; Petersen P.; Silveira L. M. Assis W. (2017) La experiencia brasileña de construcción de políticas públicas a favor de la agroecología in Red PP-AL Políticas públicas a favor de la agroecología en América Latina y El Caribe, Brasilia, FAO, Red PP-AL, en ese volumen

Vázquez L. L.; González N.; Marzin J. (2017) Políticas públicas y transición hacia la agricultura sostenible sobre bases agroecológicas en Cuba in Red PP-AL Políticas públicas a favor de la agroecología en América Latina y El Caribe, Brasilia, FAO, Red PP-AL en ese volumen